

**PENSANDO
LA
POLÍTICA**

Jeffrey M. Puryear

PENSANDO

Intelectuales y
democracia en Chile

1973-1988

LA

POLÍTICA

CIEPLAN
CORPORACION DE ESTUDIOS PARA LATINOAMERICA

PENSANDO LA POLÍTICA
Intelectuales y democracia en Chile, 1973-1988

© The Johns Hopkins University Press, 1994

Traducción a cargo de: Patricio Mason

Producción a cargo de Uqbar Editores, 2016

Carlos Antúnez 2441 - Providencia

Teléfono (56) 2 2224 7239

Santiago de Chile

www.uqbareditores.cl

ISBN: 978-956-9171-97-0

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Dirijase a la Sociedad de Derechos Literarios - Sadel (<http://www.sadel.cl>), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Para Miri, Mile y Manchi

Índice

El porqué de esta publicación xi

Prólogo a la versión en español xiii

Prólogo xv

Agradecimientos xxi

Principales centros privados de investigación de Chile xxiii

1. Introducción 1
2. Contexto histórico 15
3. Reinstitutionalización y autocrítica: 1973-1982 47
4. Convergencia y mirada de futuro: 1983-1986 97
5. La modernización de la política: 1987-1988 163
6. Conclusión 211

Índice onomástico 227

El porqué de esta publicación

En CIEPLAN hemos decidido republicar este libro traducido al español porque es un excelente análisis sobre el aporte que hicieron los intelectuales al mundo político durante la transición a la democracia. En el marco de los procesos que se vivían en América Latina, el libro plantea que un elemento distintivo de la transición chilena fue el importante rol que jugaron los *think tanks* en la construcción de un país democrático.

Por otro lado, esta investigación propone lecciones a partir de esa experiencia que –más allá del contexto histórico específico– siguen siendo útiles y están plenamente vigentes en la actualidad. El texto destaca la importancia del desarrollo de un pensamiento intelectual que permita crear una infraestructura estratégica para influir en las decisiones de los políticos y aportar a un modelo de desarrollo anclado en valores como la democracia, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

Estamos republicando esta obra en el marco de la celebración de los 40 años de CIEPLAN porque, además de su valor intrínseco, queremos agradecer el apoyo incondicional de la Fundación Ford a los *think tanks* en su trabajo por recuperar la democracia. Sin su apoyo los centros de pensamiento no habrían podido llevar adelante sus proyectos de investigación y quizás no habrían logrado subsistir en aquellos tiempos tan difíciles.

Especialmente queremos hacer un reconocimiento a personas como Peter Bell, Peter Hakim y Jeffrey Puryear, autor de este libro, quienes personalmente se comprometieron con un apoyo incansable al desarrollo de *think tanks* de excelencia en Chile y otros países de América Latina.

ALEJANDRO FOXLEY

Prólogo a la versión en español

Después de releer el libro, que escribí hace más de dos décadas, sigo creyendo que el texto captura las extraordinarias condiciones que prevalecieron durante un periodo clave en la historia de Chile, y documenta la respuesta de un grupo de intelectuales (la mayoría de ellos científicos sociales). Además, extrae una serie de lecciones de la experiencia chilena que continúan siendo razonables e incluso útiles. Entre ellas se destacan dos:

- En tiempos de cambio social fundamental, el potencial de los intelectuales para influir en la política puede aumentar de manera significativa y rápida.
- Las redes de intelectuales modernos y autónomos pueden desempeñar muchas funciones positivas, pero es difícil saber de antemano cuáles serán estas funciones. Por lo tanto, es importante pensar en los intelectuales como una especie de infraestructura estratégica, como las modernas carreteras, aeropuertos o redes eléctricas, que deben establecerse y mantenerse antes de asignarles un uso específico. Tienen que estar a la mano y listos para cuando surja la necesidad.

Estoy feliz de que este libro haya sido publicado en español pues facilitará el acceso de este estudio a una audiencia más amplia. En primer lugar agradezco a Alejandro Foxley, que durante años me instó a traducirlo y se ofreció a publicarlo en colaboración con CIEPLAN. Sin su empuje y apoyo la versión en español no se habría realizado. Agradezco también a la Fundación Ford que, después de haber financiado el estudio original, decidió financiar su traducción al español.

Durante varias décadas, la Fundación Ford jugó un papel importante en Chile, apoyando el desarrollo de una ciencia social moderna, ayudando a preservar el pensamiento crítico e independiente durante un régimen represivo, y promoviendo una transición pacífica y exitosa hacia la democracia. Sospecho que hay pocos otros casos en los que la Fundación Ford haya invertido tantos recursos durante tanto tiempo con un impacto tan significativo. Agradezco a Patricio Mason, que tradujo el libro al español y respondió con paciencia y profesionalismo a más de los doscientos comentarios y preguntas que le formulé. Doy gracias también a mi esposa, Myriam Waiser, por la revisión de cada palabra de la traducción, y por sus valiosos comentarios y sugerencias. Finalmente, agradezco a CIEPLAN, y especialmente a su jefa de comunicaciones, Cecilia Barría, por convertir el texto traducido en una publicación acabada. Todos merecen reconocimiento por su contribución a la publicación de este libro.

JEFFREY M. PURYEAR

Prólogo

El presente estudio aborda la forma en que la intelectualidad contribuyó al diseño de la transición democrática chilena. El 5 de octubre de 1988, una coalición opositora derrotó al general Augusto Pinochet en un plebiscito en que se definía su prolongación en el poder, generando un antes y un después en la larga lucha que dieron los chilenos contra una de las dictaduras militares más represivas de América Latina. Tanto fue así, que las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas un año más tarde fueron casi un anticlímax. El tema decisivo –si Pinochet se mantendría en el poder sin elecciones libres hasta 1997, o si lo entregaría tras realizar elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas en 1989– había quedado zanjado en el plebiscito.

Hasta ese momento, Pinochet había parecido prácticamente invencible. Luego de hacerse con el poder en un cruento golpe de estado en 1973, el dictador había establecido un férreo régimen militar que transformó drásticamente la institucionalidad social y económica del país. El régimen había logrado superar la desastrosa crisis de la banca de 1982 y retomado la senda del crecimiento. Combinando hábilmente ardides y represión, Pinochet había logrado controlar las masivas protestas desatadas tras la crisis económica de 1983. Mantenía un apoyo casi unánime en el empresariado y las fuerzas armadas, y tenía partidarios en todos los estratos sociales. La oposición, a pesar de años de grandes expectativas y aun mayores esfuerzos, no lograba generar un movimiento amplio en su contra.

Muchos dudaban de que Pinochet fuera siquiera a permitir un plebiscito limpio sobre su prolongación en el poder hasta 1997, conforme lo preveía la Constitución que el régimen y sus partidarios habían impuesto en un polémico plebiscito realizado en 1980. Y aunque

así fuera, pocos creían que la díscola agrupación de partidos de centro e izquierda que se le oponían fuera a ser capaz de estructurar una alternativa y una campaña capaces de defenestrarlo. No obstante todo lo anterior, el régimen permitió el plebiscito, la oposición estructuró una alternativa, y Pinochet perdió.

En América Latina, especialmente a partir de 1980, hubo frecuentes transiciones a la democracia. Quince regímenes militares entregaron el poder a gobiernos civiles electos, dejando a Cuba como la única dictadura latinoamericana en el poder. Y pese a sus grandes diferencias en cuanto a ritmo y secuencia, ninguna de estas transiciones fue verdaderamente revolucionaria. Todas evolucionaron de forma pausada, en mayor o menor grado conforme a un cronograma fijado de antemano. Y en todas ellas, aunque por distintos motivos, medió una decisión de las fuerzas armadas de dejar el poder.

La transición chilena no fue la excepción. Tras el golpe de 1973, la Junta Militar no entregó el poder a los civiles, como muchos esperaban, sino que conformó una comisión para elaborar una nueva Constitución. En 1980 se promulgó una carta fundamental que mandataba un retorno gradual a la democracia: Pinochet seguiría siendo presidente hasta 1989, con la opción de prolongarse hasta 1997. La democracia que se contemplaba estaría cargada de elementos autoritarios, entre ellos la figura de los senadores vitalicios y la tutela militar permanente sobre la vida política.

Lo que distingue a la transición chilena fue el extraordinario papel que le cupo a la intelectualidad. En otros países, las transiciones fueron en general iniciativa de altos oficiales, cúpulas partidarias y élites económicas. El mundo intelectual, cuya crítica a veces inspiró o aceleró los procesos de cambio, rara vez participó de forma directa o extensa, tendiendo más bien a limitarse –con algunas notables excepciones– a la función académica tradicional. En un plano histórico más general, como señaló Lewis Coser: «El conocimiento puede dar poder, pero incluso así, los hombres de conocimiento rara vez han sido hombres de poder» (*Men of Ideas: A Sociologist's View* [New York: Free Press, 1965], 135).

Pero en Chile ocurrió algo distinto. Muchos observadores que visitaban el país durante la dictadura quedaban impresionados por la visibilidad y vigor de un amplio grupo de centros privados de investigación creados por destacados intelectuales formados en el extranjero,

la mayoría de científicos sociales dedicados casi exclusivamente a la investigación, la publicación, el debate y otras actividades académicas. Muchos no hacían más que tratar de mantenerse en su profesión después de haber sido exonerados de cargos universitarios o estatales, pero al mismo tiempo parecían estar en el centro mismo de la política opositora. Aunque en ese momento su impacto distaba mucho de ser claro, a la larga resultó extraordinario. La intelectualidad chilena puso a prueba los límites de su rol histórico y mostró que había nuevas formas de aportar a una transición democrática.

El caso chileno es también excepcional por otros motivos. Hasta 1973 Chile no tenía un historial reciente de gobiernos autoritarios o inestabilidad política. Era una de las democracias más antiguas del mundo, con un sistema político-partidista consolidado y competitivo, un poder legislativo independiente y fuerzas armadas que pocas veces habían intervenido en política. Aun así, el régimen militar que siguió al golpe de 1973 fue uno de los más férreos y prolongados de la América Latina de los años 60 y 70. Mucho más que otros, este régimen se propuso realizar cambios económicos, políticos y sociales de fondo. Así, hacia 1988 Chile era uno de los pocos países sudamericanos que no solo no habían vuelto a la democracia, sino que además había realizado la transformación económica más radical de cualquier país latinoamericano desde que Cuba se declaró comunista en los años 60.

Llegué a Chile enviado por la Fundación Ford en diciembre de 1973, poco después de que las fuerzas armadas se tomaran el poder. Desde ese entonces seguí los acontecimientos en Chile desde distintos cargos en la sede de la Fundación en Nueva York y como director de la oficina regional en Perú. He sido observador y donante, analizando las condiciones en Chile y financiando a intelectuales y otros con aportes de la Fundación. Mi trabajo me permitió visitar Chile periódicamente durante casi veinte años y desarrollar una estrecha relación con muchos de los intelectuales y políticos que tuvieron un papel gravitante en la transición a la democracia. Fue desde esta especial perspectiva que pude observar los acontecimientos que ocurrieron desde la represión post-golpe en 1973 hasta la asunción del presidente Patricio Aylwin en 1990.

Este libro rescata esas experiencias, complementadas por exhaustivas entrevistas de media a dos horas de duración con casi setenta intelectuales y líderes de la transición. En consulta con un conjunto

de intelectuales y dirigentes políticos, escogí a los entrevistados por su íntimo conocimiento de distintos aspectos de la transición. Todas las entrevistas las realicé personalmente, en idioma castellano, entre diciembre de 1990 y septiembre de 1992. Aunque ofrecí recoger testimonios bajo reserva de identidad, prácticamente nadie aceptó. Grabé cada entrevista y las cintas fueron posteriormente transcritas en Santiago por personas calificadas. Cada transcripción se verificó contra la cinta original. Mi análisis se sustenta, además, en un amplio repertorio de fuentes académicas y periodísticas, muchas de las cuales solo existen en castellano y varias de las cuales permanecen inéditas.

Este libro fue escrito por varias razones. Primero, dejar constancia clara y precisa del aporte hecho por un excepcional grupo de intelectuales a la política chilena en un momento de crisis extrema. Segundo, recapitular los acontecimientos a fin de determinar si la experiencia chilena deja lecciones de carácter más general sobre las transiciones a la democracia y el potencial aporte de la intelectualidad. Tercero, un interés más amplio sobre el rol de la intelectualidad en el desarrollo en el tercer mundo y la fundamentación para proporcionar asistencia desde el extranjero. Por último, presentar mi análisis y conclusiones en un estilo interesante y accesible tanto a académicos como a profesionales.

Una nota sobre el énfasis de este libro: mi objetivo fue conectar la actividad intelectual con el conjunto más amplio de los acontecimientos que determinaron el tránsito de Chile desde el autoritarismo a la democracia. Esto requirió hacer referencia, cuando procedía, a los aportes de otros actores, aunque sin el detalle y profundidad concedidas a lo aportado por la intelectualidad. Este énfasis es intencional: quise documentar el papel que jugó el mundo intelectual, un sector que ha recibido poca atención en el debate sobre transiciones democráticas. Por cierto, esto no quiere decir que otros hayan jugado un papel menor. Fueron muchos los actores –la dirigencia política opositora, la iglesia, activistas por los derechos humanos, diversos gobiernos extranjeros– que hicieron un gran aporte a que Chile recuperara su democracia. Por desgracia, analizar estos aportes en mayor detalle habría limitado mi capacidad para abordar adecuadamente el extraordinario papel que le cupo a la intelectualidad y excedido con creces la ventaja comparativa que puedo aportar a este estudio.

Este libro, en consecuencia, no es historiografía, sino sociología del conocimiento. No he intentado escribir la historia definitiva de la

transición chilena a la democracia. El ámbito central de este trabajo es la incidencia que tuvo un sector en particular, no la que tuvieron todos los actores. Lo que he intentado hacer es caracterizar un elemento entre muchos, y preguntarme si ese elemento tiene algún significado para otras circunstancias históricas. Espero que este esfuerzo aporte a enriquecer el registro más definitivo que eventualmente surgirá de la sumatoria de otros estudios.

Agradecimientos

Cientos de personas enriquecieron este trabajo con su tiempo y sus conocimientos. Dos de ellas –Abraham Lowenthal y Guillermo O’Donnell– hicieron un aporte especialmente importante durante la etapa de planificación, cuando aún batallaba con ciertos temas básicos de orientación y método. Su estímulo y crítica marcaron una gran diferencia en las preguntas que formulé a mis entrevistados. José Joaquín Brunner generosamente aportó ideas, crítica y motivación en cada etapa. Entre los muchos otros que también aportaron valiosos comentarios, críticas o sugerencias, agradezco muy especialmente a Alan Angell, Genaro Arriagada, Peter Bell, Sergio Bitar, Ángel Flisfisch, Alejandro Foxley, Edmundo Fuenzalida, Manuel Antonio Garretón, Óscar Godoy, Peter Hakim, Albert Hirschman, Carlos Huneeus, Terry Karl, Marta Lagos, Norbert Lechner, Dan Levy, María Teresa Lladser, Javier Martínez, Patricio Meller, Chris Mitchell, Óscar Muñoz, Joe Ramos, Michael Shifter, Gary Sick, Al Stepan, Eugenio Tironi, Ignacio Walker y Lawrence Weschler. Mil gracias también a los casi setenta intelectuales y políticos chilenos que accedieron a someterse a largas entrevistas y que arrojaron importantes luces sobre los complejos factores que explican la transición chilena a la democracia.

Agradezco también a la Fundación Ford, no solo por haber aportado el grueso del financiamiento necesario para realizar este estudio, sino especialmente por haberme destinado a Chile en 1973 y luego enviarme de vuelta cada cierto tiempo durante casi veinte años. Sin la excepcional continuidad que esta oportunidad otorgó a mi relación con la coyuntura chilena, este libro simplemente no se podría haber escrito. Agradezco, asimismo, al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Nueva York, donde me proporcionaron

oficina, infraestructura y fraternidad profesional durante mi trabajo en esa ciudad. Mis agradecimientos también a todo el personal de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), donde recibí idéntico aporte para mi trabajo en Chile. Haciendo gala de precisión y rapidez, Violeta Cuevas y Rosa Jaime transcribieron más de 100 horas de entrevistas grabadas. Solange Phillips demostró invariablemente una singular habilidad para ubicar rápidamente documentos difíciles de conseguir. El Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), tuvieron la amabilidad de darme acceso a su valiosa colección documental y bibliográfica. Por último, Bobbe Hughey, de Johns Hopkins University Press, mejoró considerablemente el manuscrito con su lápiz verde, enseñándome más de lo que podría haber esperado sobre mi forma de escribir.

Principales centros privados de investigación de Chile

AHC	Academia de Humanismo Cristiano
CED	Centro de Estudios del Desarrollo
CEP	Centro de Estudios Públicos
CERC	Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea
CIDE	Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación
CIEPLAN	Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica
CISEC	Centro de Investigaciones Socioeconómicas
CLACSO	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CLEPI	Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional
CPU	Corporación de Promoción Universitaria
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
GEA	Grupo de Estudios Agrorregionales
GIA	Grupo de Investigaciones Agrarias
ICHEH	Instituto Chileno de Estudios Humanísticos
IDEP	Instituto de Estudios Políticos
ILADES	Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales
ILET	Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales
PET	Programa de Economía del Trabajo
PIIE	Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación
PROSPEL	Programa de Seguimiento de las Políticas Exteriores Latinoamericanas
SUR	Centro de Estudios Sociales y Educación
VECTOR	Centro de Estudios Económicos y Sociales

Pensando la política

Introducción

En períodos marcados por estructuras sociales relativamente estables y una actividad política rutinaria, los asuntos de Estado demuestran ser impermeables a los intentos de los intelectuales por ganar ascendente político. Pero los períodos revolucionarios les conceden la oportunidad de ganar el poder del Estado.

—LEWIS COSER, *Men of Ideas*

En marzo de 1990, Ricardo Lagos, economista doctorado en la Universidad de Duke y profesor en la Universidad de Chile por casi veinte años, fue designado ministro de educación. Alejandro Foxley, doctorado en economía en la Universidad de Wisconsin y fundador de uno de los más prestigiosos institutos de investigación de América Latina, fue designado ministro de hacienda. Edgardo Boeninger, ex rector de la Universidad de Chile, pasó a ser ministro secretario general y principal estrategia político de la presidencia. Enrique Correa, ex profesor de filosofía en la Universidad Técnica del Estado, fue designado en otra importante cartera. René Cortázar, prolífico investigador doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), asumió como ministro del trabajo. Carlos Ominami, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y doctorado en la Universidad de París, pasó a ser ministro de economía. El sociólogo Germán Correa, formado en Berkeley, se convirtió en ministro de transportes. El abogado Francisco Cumplido, quien en los años 70 había dirigido un programa de sociología del derecho en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), pasó a ser ministro de justicia. José Antonio Viera-Gallo, ex profesor de teoría política de la Universidad Católica de Chile y director de un centro privado de investigación, asumió la presidencia de la Cámara de Diputados. Asumían altos cargos en el nuevo gobierno democrático numerosos otros intelectuales, muchos de ellos

formados en el extranjero y con una vasta trayectoria en investigación y docencia.

La ocasión era la investidura del demócratacristiano Patricio Aylwin como primer presidente libremente electo desde 1970. Representando a una coalición de diecisiete partidos, Aylwin había propinado una contundente derrota a dos candidatos conservadores en las elecciones presidenciales realizadas tres meses antes, en las que su sector obtuvo además mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. La elección de Aylwin había sido posible tras el plebiscito de octubre de 1988 en que el electorado rechazó la continuación en el poder del general Augusto Pinochet. Diecisiete años de dictadura tocaban a su fin.

En una recepción de gala realizada en el Palacio de la Moneda, la casa de gobierno, varios miles de invitados oficiales circulaban sonrientes y emocionados al punto de apenas probar el champán. Se les veía a un tiempo solemnes y jubilosos; les costaba creer que habían ganado, y les costaba imaginar cómo sería la democracia. Por primera vez en diecisiete años, tendrían algo que decir en la conducción del país.

Tres años antes las cosas no podían haber sido más desalentadoras. En la oposición, que desde 1983 venía intentando en vano defenestrar al gobierno a través de masivas protestas públicas, campeaban el desánimo y la frustración. La estrategia de movilización social no había logrado llevar a Pinochet a la mesa de negociaciones. El gobernante y sus seguidores habían cerrado filas y respondido con la fuerza, haciendo cundir la violencia y el número de víctimas. A fines de 1986, el descubrimiento de depósitos masivos de armas ingresadas desde Cuba por grupos terroristas de extrema izquierda, sumado a un fallido atentado contra Pinochet por parte de los mismos grupos, habían desacreditado la estrategia de movilización y llevado al gobierno a declarar el estado de sitio. En lugar de avanzar hacia la democracia, el país parecía encaminarse a la guerra civil.

De todos estos desafíos, Pinochet había salido casi triunfante. El régimen estaba cohesionado y tenía el apoyo de la derecha política, del empresariado y de unas fuerzas armadas de reconocida disciplina. Tras la crisis de 1982, la economía volvía a mostrar señales de crecimiento. La protesta social estaba disminuyendo. Pinochet tenía al frente una oposición desanimada y dispersa. Su gobierno proyectaba orden y determinación, en abierto contraste con las constantes rencillas sobre estrategia y liderazgo en que se enfrascaban los partidos de oposición.

Para muchos, Pinochet representaba el nuevo Chile, próspero y estable, mientras que la oposición era el caos del pasado.

¿Cómo se explica el cambio? ¿Cómo es que una oposición históricamente fragmentada, frente a un gobierno que restringía duramente la prensa y la actividad política, se dio cuenta de que a pesar de la fuerza de Pinochet, de su relativamente amplio respaldo y de la renaciente economía, existía la posibilidad de volver las reglas políticas en contra de su propio creador? ¿Cómo es que optó por abandonar la estrategia de movilización, aceptar la Constitución de Pinochet, formar una coalición y gestar una campaña capaz de ganar el plebiscito de 1988? ¿Y por qué tantos intelectuales emergieron como importantes figuras del nuevo régimen democrático?

Este libro intenta responder estas preguntas, enfocándose en un aspecto específico –el rol del mundo intelectual– para abordar la forma en que este marcó el proceso de transición, especialmente en cuanto a lograr que la oposición modificara su estrategia.

Aunque sobre transiciones democráticas existe una creciente literatura académica, es poco lo que dice sobre los intelectuales¹. Hay un claro énfasis en el rol de las élites y sus pactos en el giro de dictadura a democracia, pero estas élites tienden ser de carácter político, económico y militar; muy rara vez intelectuales. Asimismo, las normas y valores de las élites políticas se muestran como determinantes para el éxito o fracaso de las transiciones democráticas. Pocos estudios han intentado vincular la actividad intelectual con los cambios en la cultura

¹ Véase, por ejemplo, Dankwart A. Rustow, «Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model», *Comparative Politics* 2 (1970): pp. 337-6; Samuel P. Huntington, «Will More Countries Become Democratic?», *Political Science Quarterly* 99 (1984): pp. 193-218; Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, eds., *Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986); Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset, eds., *Democracy in Developing Countries*, vol. 4 (Boulder, Colo.: Rienner, 1989); Terry Lynn Karl y Philippe C. Schmitter, «Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe», *International Social Science Journal* 128 (1991): pp. 269-284; Adam Przeworski, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991); y John Higley y Richard Gunther, eds., *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992). En este contexto, cabe destacar un artículo escrito hace más de treinta años sobre el rol del intelectual en el desarrollo económico. Véase John Friedmann, «Intellectuals in Developing Societies», *Kyklos* 13 (1960): pp. 513-544.

política de la élite en casos concretos de transición a la democracia. Una excepción parcial la constituyen O'Donnell y Schmitter, quienes destacan el papel de los artistas e intelectuales en la «resurrección de la sociedad civil» que tiende a preceder las transiciones democráticas. Estos sectores, a través de su «capacidad para expresarse a través de metáforas oblicuas» y de su «pertenencia a un sistema mundial fáctico de intercambios culturales», tienden a ser «los primeros en manifestar públicamente su oposición al régimen autoritario, incluso antes de iniciarse la transición»². Pero estos autores tratan únicamente la capacidad expresiva de la intelectualidad; es decir, la facultad de transformar el descontento en actitud contestataria cuando los partidos no pueden actuar, y no abordan su potencial incidencia en la cultura política en general, en el pensamiento de las cúpulas partidarias o en las estrategias de transición, como tampoco la posibilidad de que los cuadros intelectuales constituyan un reservorio de liderazgo político durante períodos de transición.

Por cierto, lo limitado de las referencias al mundo intelectual en la literatura sobre transición democrática puede deberse a que la intelectualidad rara vez ha tenido en ellas un rol trascendental. La única parte del mundo sobre la cual se dice que la intelectualidad tuvo un rol protagónico es Europa Oriental, donde a György Konrád, Adam Michnik, Václav Havel y otros escritores contestatarios se les atribuye haber contribuido a acelerar la caída de los regímenes comunistas de Hungría, Polonia y Checoslovaquia, respectivamente. Por lo general, los comentaristas se refieren a la existencia de un ámbito político soterrado en el cual «muy gradualmente, de forma indirecta, de maneras

² Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), p. 49; O'Donnell y Schmitter hacen también un excelente resumen del papel de las élites, pp. 37-39. Véase también Michael Burton, Richard Gunther y John Higley, «Introduction: Elite Transformations and Democratic Regimes», en Higley y Gunther, *Elites and Democratic Consolidation*. Este énfasis se deriva en gran parte de Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971). Diamond y Linz dicen que «en América Latina, el intelectual juega un rol protagónico en sus sociedades y es bastante abierto al mundo de las ideas», análisis que sin embargo no desarrollan. Véase Diamond, Linz y Lipset, *Democracy in Developing Countries*, p. 11. Sobre cúpulas políticas, véase, por ejemplo, Francisco Delich, «La construcción social de la legitimidad política en procesos de transición a la democracia (I)», *Crítica y utopía* (1983): p. 9.

intrincadas y en gran medida imprevisibles, la presión de quienes viven en la verdad y la dignidad y que se asocian en estructuras informales de ‘auto-organización social’... eventualmente cambia la forma de gobernar la sociedad»³. Algunos de los más destacados integrantes de ese ámbito eran intelectuales –en especial novelistas y dramaturgos– que producían literatura clandestina («*samizdat*»), criticaban al autoritarismo, reafirmaban la libertad y la democracia y en general daban expresión a la disidencia que se extendía por la sociedad.

Pero tampoco se ha hecho una argumentación sistemática sobre el rol de la intelectualidad en estas transiciones democráticas, ni siquiera como articuladora de la disidencia. Al analizar el caso polaco, por ejemplo, Goodwin desestima la mayoría de los tópicos habituales por su «sobreidentificación periodística y académica con los diversos... roles que cumplió el mundo intelectual en la política de protesta» y su «total incapacidad» para «especificar una conexión probatoria entre idea y acción». También Laba relativiza el rol de la intelectualidad: «Las raíces de *Solidarność* estaban en la clase obrera del Báltico. El aporte intelectual fue necesario, pero no causal ni creativo». Existe además una amplia literatura que acusa a la intelectualidad de Europa Oriental de complicidad en prácticas autoritarias y de no haber sabido aprovechar su capacidad de pensamiento crítico e independiente⁴. De estos materiales se desprende que, si bien la intelectualidad de Europa Oriental efectivamente tuvo algún grado de incidencia en las transiciones democráticas, su magnitud y alcance están por demostrarse con mayor rigor.

Por su parte, un análisis de los estudios publicados en los últimos diez años en materia de transición democrática en América Latina muestra que la incidencia de los intelectuales ha sido a lo sumo menor,

³ Timothy Garton Ash, *The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe* (New York: Vintage, 1990), p. 199.

⁴ Lawrence Goodwin, *Breaking the Barrier: The Rise of Solidarity in Poland* (New York: Oxford University Press, 1991), xxiv; véase también 569-574. Roman Laba, *The Roots of Solidarity: A Political Sociology of Poland's Working-Class Democratization* (Princeton: Princeton University Press, 1991), p. 178. Sobre el fracaso de los intelectuales, véase, por ejemplo, Miklós Haraszti, *The Velvet Prison: Artists under State Socialism* (New York: Basic, 1987); y George Konrád e Ivan Szelényi, *The Intellectuals on the Road to Class Power* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979).

y en general insignificante⁵. Los relatos sobre la transición democrática en Brasil, por ejemplo, no hacen prácticamente mención alguna a la intelectualidad⁶. En el caso peruano, casi no se evidencia que la participación de intelectuales en el régimen de Juan Velasco Alvarado haya incidido en la decisión militar de restablecer la democracia a fines de los 70⁷. Al analizar Colombia, Hartlyn sostiene que, para la evolución de la democracia, fueron más determinantes los actos concretos de las cúpulas políticas que una cultura política democrática o el mundo intelectual⁸. En cuanto a Argentina, si bien el gobierno de Raúl Alfonsín designó a varios intelectuales en altos cargos, la literatura no estima que hayan marcado la transición democrática de 1983⁹. En otras palabras, en la literatura sobre transiciones latinoamericanas, la intelectualidad es prácticamente un conjunto vacío. Puede que en estas dictaduras la

⁵ Véase, por ejemplo, O'Donnell, Schmitter y Whitehead, *Transitions from Authoritarian Rule*; Diamond, Linz y Lipset, *Democracy in Developing Countries*; Robert A. Pastor, ed., *Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum* (New York: Holmes and Meier, 1989); James M. Malloy y Mitchell A. Seligson, eds., *Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1987); y Higley y Gunther, *Elites and Democratic Consolidation*.

⁶ Véase Luciano Martins, «The Liberalization of Authoritarian Rule in Brazil», en O'Donnell, Schmitter y Whitehead, *Transitions from Authoritarian Rule*; y Thomas Bruneau, «Brazil's Political Transition», en Higley y Gunther, *Elites and Democratic Consolidation*. La Mounier sugiere la existencia de una relación, antes de 1945, entre socialización a nivel de élites y escuelas de derecho en el país, y menciona de paso el impacto, en época más reciente, de una «importante y cosmopolita comunidad académica». Estas ideas, sin embargo, no se desarrollan. Véase Bolívar La Mounier, «Brazil: Inequality against Democracy», en Diamond, Linz y Lipset, *Democracy in Developing Countries*, p. 142.

⁷ Véase Julio Cotler, «Military Interventions and Transfer of Power to Civilians in Peru», en O'Donnell, Schmitter y Whitehead, *Transitions from Authoritarian Rule*; Luis A. Abugattás, «Populism and After: The Peruvian Experience», en Malloy y Seligson, *Authoritarians and Democrats*; Cynthia McClintock, «Peru: Precarious Regimes, Authoritarian and Democratic», en Diamond, Linz y Lipset, *Democracy in Developing Countries*; y Henry Dietz, «Elites in an Unconsolidated Bureaucracy: Peru during the 1980s», en Higley y Gunther, *Elites and Democratic Consolidation*.

⁸ Jonathan Hartlyn, «Colombia: The Politics of Violence and Accommodation», en Diamond, Linz y Lipset, *Democracy in Developing Countries*, p. 65.

⁹ Véase Marcelo Cavarozzi, «Patterns of Elite Negotiation and Confrontation in Argentina and Chile» en Higley y Gunther, *Elites and Democratic Consolidation*; Carlos Waisman, «Argentina: Autarkic Industrialization and Illegitimacy», en Diamond, Linz y Lipset, *Democracy in Developing Countries*; y Adolfo Canitrot, Marcelo Cavarozzi, Roberto Frenkel y Óscar Landi, «Intelectuales y política en Argentina», *Debat 4* (1985): pp. 4-8.

intelectualidad haya sido particularmente débil o que los obstáculos a su participación en política hayan sido especialmente poderosos¹⁰, pero lo que está claro es que la mayoría de esas transiciones fueron manejadas por cúpulas militares, políticas y económicas.

En Chile, sin embargo, los acontecimientos tomaron un rumbo diferente. A diferencia del resto de América Latina, en la transición chilena la intelectualidad tuvo un rol protagónico y una influencia que se prolongó desde poco después del golpe de 1973 hasta el restablecimiento de la democracia diecisiete años después. Aunque sus aportes adoptaron distintas formas según la coyuntura, en general el mundo intelectual contribuyó a moderar el pensamiento político opositor, repensar la estrategia de transición, modernizar la política, gestar la campaña del No y, en algunos casos, dirigir partidos políticos. Estos aportes no han sido analizados con la misma detención que los de líderes políticos y militares y otros actores de la transición. De hecho, aunque la mayoría de los analistas da por hecho que la transición chilena ocurrió casi totalmente a instancias de las cúpulas políticas y militares¹¹, en realidad uno de sus aspectos más sobresalientes fue

¹⁰ Entre las referencias a la mucha –o poca– incidencia de la intelectualidad latinoamericana en la política cabe destacar: Sol Serrano, en «América Latina y el mundo moderno en algunos ensayistas latinoamericanos», *Opciones* 4 (1984): pp. 56-100, resume los intentos, a fines del siglo XIX y principios del XX, de intelectuales como Rodó, Martí, Vasconcelos, Zea, Paz y Mariátegui por interpretar la identidad latinoamericana a la luz de la «modernidad» europea y norteamericana. En *Democracia y socialismo en Chile* (Santiago: FLACSO, 1983), pp. 9-19, Tomás Moulián esboza cómo, a fines de los años 60 y principios de los 70, la «fascinación con el marxismo» y una «visión religiosa de la política» llevó a la intelectualidad de izquierda a subestimar la democracia y a someterse a los dictados de los partidos. Robert Barros, en «The Left and Democracy: Recent Debates in Latin America», *Telos* 68 (1986): pp. 49-70, resume la literatura reciente sobre la «reevaluación» de la democracia hecha en la izquierda latinoamericana. Roderick A. Camp, en *Intellectuals and the State in Twentieth-Century Mexico* (Austin: University of Texas Press, 1985), analiza el rol de los intelectuales en la política mexicana, pero dice poco acerca de sus nexos con la democratización. José Joaquín Brunner, en «La intelligentsia: Escenarios institucionales y universos ideológicos», *Proposiciones* 18 (1990): pp. 180-191, analiza las «transformaciones culturales» que sufrió la intelectualidad chilena bajo la dictadura de Pinochet, destacando que de la experiencia autoritaria surgieron nuevas intelectualidades de izquierda, centro y derecha. En «Intelectuales y política», Canitrot et al. abordan la –relativamente– limitada influencia política de la intelectualidad argentina.

¹¹ Véase, por ejemplo, Pamela Constable y Arturo Valenzuela, *A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet* (New York: Norton, 1991); Paul W. Drake e Iván Jaksic, eds., *The Struggle for Democracy in Chile, 1982-1990* (Lincoln: University of Nebraska Press, 1991);

precisamente el rol de la intelectualidad; rol cuya significación este libro pretende documentar, explicar y evaluar.

En ese empeño, reconozco la importancia del contexto político, social e histórico –especialmente de los parámetros fijados por el régimen militar– como condicionante de las decisiones de la oposición. El cambio político es un proceso complejo, impulsado por grandes fuerzas históricas, y que en contadas ocasiones depende de un solo factor. En el caso chileno, en 1980 el gobierno de Pinochet decretó una suerte de transición –pensada como un lento tránsito a una democracia repleta de enclaves autoritarios– en base a una nueva Constitución que contemplaba, entre otras características absolutistas, un número importante de senadores vitalicios designados por el régimen y un rol tutelar permanente en la vida política para las fuerzas armadas. Según la Constitución, esta transición gradual hacia la nueva democracia partiría en 1988 con un plebiscito sobre la continuación de Pinochet en el poder y culminaría con elecciones presidenciales y parlamentarias en 1989 o 1997, dependiendo del resultado. Para garantizar el cumplimiento del cronograma, el régimen se preocupó de que la Constitución fuera prácticamente imposible de modificar.

El plebiscito era pieza fundamental en los planes de Pinochet, quien daba por sentado ganarlo. Este plebiscito estaba pensado para, a ocho años de realizado el referéndum constitucional, dar al régimen un barniz de legitimidad y asegurarle ocho años más para consolidar su propuesta de democracia cuasi-autoritaria. Fue en ese marco que, a principios de 1988, la dirigencia opositora tomó las tres difíciles decisiones que más tarde le permitirían derrotar a Pinochet. Primero, participar en el plebiscito, cuestión que venía rechazando enfáticamente desde 1980. Segundo, superando divergencias históricas, conformar una alianza de catorce partidos –la Concertación de Partidos por la Democracia– con vistas a participar como fuerza única. Y tercero, confiar la campaña al Comité Técnico por el No, un ente multipartidario compuesto por destacados científicos sociales.

Estas decisiones fueron determinantes para la victoria de octubre de 1988. Significaron aceptar el marco político fijado por Pinochet en

Joseph S. Tulchin y Augusto Varas, eds., *From Dictatorship to Democracy: Rebuilding Political Consensus in Chile* (Boulder, Colo.: Rienner, 1991); y Ascanio Cavallo, *Los hombres de la transición* (Santiago: Andrés Bello, 1992).

lugar de seguir insistiendo en reformas, y posiblemente restarse del plebiscito. Significaron ofrecer un frente unido que daba un mentís al espectro de una oposición sumida en el conflicto y el caos de que con tanta eficacia se valía el régimen para justificar su permanencia en el poder. Y significaron pensar una estrategia de campaña única y coherente en lugar de múltiples estrategias a la medida de cada partido. De no haberse procedido de esta forma, Pinochet bien podría haber ganado el plebiscito y la democracia haberse visto postergada por ocho años más.

Los resultados del plebiscito obligaron a adelantar las elecciones presidenciales abiertas de 1997 a 1989 y convencieron al régimen de negociar un paquete de 54 reformas que morigerarían notoriamente los aspectos más autoritarios de la Constitución. La transición se produciría en 1990 en lugar de 1997, y tendría menos rasgos autoritarios que los propuestos por el régimen. Fue así que en 1989 la oposición venció en los comicios presidenciales con el 55,2% del voto, y además ganó la mayoría de los escaños en disputa en el Senado y la Cámara de Diputados. Chile había vuelto a la democracia.

El presente análisis supone que la coyuntura chilena de mediados de los 80 bien pudo haber tenido distintas salidas y considera los acontecimientos como resultado no solo de grandes procesos históricos, sino también de decisiones tomadas a conciencia por las élites políticas opositoras. Plantea que el mundo intelectual tuvo un rol protagónico, y muchas veces decisivo, en determinar esas decisiones—lo que no parece haber ocurrido en otras transiciones recientes— y documenta el papel de la ayuda exterior en generar las condiciones que permitieron al mundo intelectual influir en el proceso político.

Y dado que la base de este trabajo es la relación del intelectual con la política, empezaremos por definir lo que entendemos por *intelectual*, término especialmente complejo y controvertido y que ha sido objeto de extenso debate por parte de distinguidos académicos¹². Las

¹² Véase, por ejemplo, Lewis A. Coser, *Men of Ideas: A Sociologist's View* (New York: Free Press, 1965); Edward Shils, *International Encyclopedia of the Social Sciences 7* (New York: Macmillan and Free Press, 1968); Antonio Gramsci, *Prison Notes* (New York: Simon and Schuster, 1971); Hans Gerth y C. Wright Mills, eds., *From Max Weber: Essays in Sociology* (New York: Oxford University Press, 1965); Alvin W. Gouldner, *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class* (New York: Oxford University Press, 1979); y Seymour M. Lipset, *Political Man* (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1960).

definiciones van desde lo relativamente amplio («aquellos que crean, distribuyen y aplican la cultura») a lo relativamente acotado («expertos que operan en el seno o la periferia del gobierno y que asesoran, aconsejan, cumplen distintas funciones públicas y opinan incansablemente sobre la temática pública»). Para Michels, son aquellos que «por vocación se ocupan de los asuntos del intelecto». Merton los define como «personas dedicadas a formular y cultivar el conocimiento». Unos resaltan su relación con la cultura, otros su relación con el poder¹³. Ninguna de estas definiciones tiene nada de especial, de modo que quizás lo mejor sea escoger la más adecuada al tema y realidad en cuestión. En consecuencia, he optado por lo más práctico: dejar que la definición surja de la realidad que nos ocupa, y luego tomar nota de su relevancia y sus límites.

Una mirada al Chile contemporáneo arroja algunos datos inmediatos: prácticamente todos los intelectuales con un papel de primera línea en la transición eran científicos sociales con posgrados en el exterior y que iniciaron su carrera como académicos, si bien muchos dejaron luego el ámbito académico, al menos por un tiempo. La mayor parte había publicado al menos un libro y muchos habían publicado varios. Eran en su mayoría economistas o sociólogos, lo que refleja los extraordinarios avances que había logrado Chile en ambas disciplinas en los treinta años anteriores. El resto eran en su mayoría científicos políticos o historiadores, más algunos que estudiaron Derecho antes de emigrar a las ciencias sociales. Unos pocos eran abogados que siguieron una carrera académica. Y si bien es cierto que algunos intelectuales provenientes de las artes o las ciencias naturales tuvieron roles simbólicos en el movimiento por las elecciones libres de 1987, su figuración no fue la misma. Es decir, hablamos en su mayoría de científicos sociales con posgrados en Europa o Estados Unidos, casi todos de sexo masculino.

¹³ Sobre «los que crean», véase Lipset, *Political Man*, p. 333; sobre «los expertos», véanse James A. Smith, *The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite* (New York: Free Press, p. 1991), xiii; Robert Michels, «Intellectual Socialists», en *Encyclopedia of the Social Sciences* 8 (1932), p. 118; y Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), p. 263; sobre su relación con la cultura, véase Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1978); sobre su relación con el poder, véase Gouldner, *The Future of Intellectuals*.

Las entrevistas hechas para este libro confirman este perfil y agregan dos dimensiones. Primero, muchos entrevistados se refirieron a la zona gris que separa a intelectuales de políticos, destacando que Chile se caracteriza por una tradicional interpenetración entre élites intelectuales y políticas, fenómeno en que los académicos devienen en dirigentes partidarios y los políticos mantienen distintos nexos con la academia. Señala un economista e intelectual y a la vez activo militante: «Aquí todos los partidos y dirigentes políticos alentaban esa relación y valoraban el aporte intelectual en la vida política»¹⁴.

Dos casos arrojan luz sobre estas observaciones: Genaro Arriagada, abogado de profesión, vicepresidente de la Democracia Cristiana (DC) y quizás si el mejor estratega político del país, es además autor de sólidos libros académicos sobre el gobierno de Salvador Allende, teoría política y relaciones cívico-militares. A pesar de no tener un posgrado y de nunca haber ejercido la docencia, a Arriagada normalmente se le consideró un intelectual. Y Ángel Flisfish, cientista político formado en la Universidad de Michigan y uno de los politólogos más prolíficos y respetados del país, integró el Comité Central del Partido Socialista (PS) por casi veinte años antes de aceptar un alto cargo en el gobierno de Aylwin. Los entrevistados manifestaron reiteradamente que en Chile la relación entre políticos e intelectuales es estrecha, y hasta metamórfica.

Segundo, los entrevistados tuvieron opiniones encontradas en cuanto a incluir a tecnócratas en la categoría de intelectual. Una leve mayoría tendió a enfatizar el rol reflexivo y crítico general de los intelectuales por sobre el papel de «expertos» en temas concretos. Así, por ejemplo, aunque contaran con una distinguida carrera académica, la tendencia fue a excluir a los especialistas en comercio internacional o relaciones industriales, salvo que también tuvieran una reflexión más amplia sobre temas sociales. Otro tanto ocurrió con los abogados, salvo aquellos que además habían estudiado alguna disciplina de las ciencias sociales. De hecho, de las entrevistas surge una definición común de *intelectual* basada fuertemente en la investigación, la reflexión y la crítica social; es decir, en funciones que generalmente cumplen solo algunos académicos.

¹⁴ Entrevista con Sergio Bitar, 16 de enero de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

José Joaquín Brunner, posiblemente el más distinguido especialista chileno en sociología del conocimiento, expresa esta idea con especial claridad: «Hablo básicamente del intelectual como el principal productor en la esfera ideológica de la sociedad donde la razón, y por ende la argumentación razonada, se encuentran con los intereses, pasiones, deseos, anhelos y sueños de una sociedad»¹⁵. Brunner ve al intelectual como alguien que combina el mundo de la razón y la ciencia con el de los valores y aspiraciones para interpretar la realidad y orientar la acción. Esta definición, generalmente más implícita que explícita, es común entre los entrevistados. Se trata claramente de un subconjunto de las definiciones anteriormente citadas que excluye las funciones generalmente denominadas tecnocráticas.

Los tecnócratas, por su parte, fueron incluidos para dejar constancia de un tema más general: la profesionalización del diseño de políticas públicas a nivel de gobierno. Aquí el énfasis estuvo puesto en la forma en que expertos altamente calificados lograron, en ciertos ámbitos concretos, disputarles autoridad a los políticos. La clase política chilena, se plantea, dejó de ser la única dueña del ámbito político y tuvo que compartir con los expertos el poder de formular políticas públicas¹⁶. En las entrevistas encontramos reiteradamente la idea de que había surgido una clase profesional moderna y altamente calificada, en pugna por el poder con la clase política tradicional en los ámbitos tanto político como de diseño de políticas. En este caso, la definición de *intelectual* incluyó a profesionales con posgrados recientes, en general obtenidos en el extranjero, pero solo en referencia a científicos sociales, especialmente economistas.

¹⁵ Entrevista con José Joaquín Brunner, 28 de febrero de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

¹⁶ Distinción que desarrolla Patricio Silva en «Intellectuals, Technocrats, and Social Change in Chile: Past, Present, and Future Perspectives», en Alan Angell y Benny Pollack, eds., *The Legacy of Dictatorship: Political, Economic and Social Change in Pinochet's Chile* (Liverpool: Institute of Latin American Studies, University of Liverpool, 1993). El autor contrasta a los intelectuales humanistas (cientistas sociales que producen símbolos e ideas de relevancia social y que tienden a criticar el *statu quo*) con los tecnócratas (economistas e ingenieros de alta calificación que estiman que los problemas sociales se resuelven con métodos científicos y técnicos antes que por medios políticos o la politización). Véase también Verónica Montecinos, «Economics and Power: Chilean Economists in Government, 1958-1985», tesis doctoral, University of Pennsylvania, 1988.

Así, la definición de *intelectual* que surge de este estudio está acotada de diversas maneras. En los hechos, se limita a científicos sociales con posgrado en el extranjero y que iniciaron sus carreras como académicos. Destaca a los que producen ideologías y traen a su entorno una actitud crítica y el gran mundo de las ideas. Esto permite, de forma un tanto ambigua, una segunda dimensión: el experto moderno y calificado que aplica el conocimiento a un ámbito estrechamente acotado. Esta distinción, como se verá, es importante, dado que puede marcar la diferencia entre las dos funciones que la intelectualidad cumplió en la transición chilena (y quizás entre dos períodos históricos).

¿A qué se debe, en la transición chilena, que los científicos sociales parezcan haber tenido un rol más central que sus pares de las artes y las ciencias naturales? Quizás a que los científicos sociales se ocupan justamente de temas fundamentales, como los cambios políticos, económicos y sociales. Difícilmente se podría esperar que los científicos compitan con éxito en campos en los cuales están en desventaja comparativa; es probable, por tanto, que se trate de una categoría autoselectiva.

Pero con toda seguridad hay otro factor de por medio: la gran inversión de los treinta años anteriores en la modernización de las ciencias sociales en Chile. En efecto, a partir de aproximadamente 1960, el gobierno chileno y distintos donantes extranjeros públicos y privados destinaron millones de dólares a enviar alumnos a hacer posgrados en el extranjero, primero en economía y sociología y luego en ciencias políticas, así como a establecer departamentos académicos modernos y bien equipados en las principales universidades del país. Luego, los fondos aportados por la cooperación extranjera durante casi veinte años después del golpe, permitieron mantener a muchos de esos calificados científicos sociales a mano y trabajando en centros privados de investigación, a pesar de la represión. Esa inversión rindió enormes dividendos políticos en un momento decisivo para la historia de Chile, permitiendo establecer y mantener a un núcleo de profesionales modernos y comprometidos que tuvieron un rol determinante en el retorno a la democracia en su país.

Contexto histórico

Según el pensamiento social se convierte rápidamente en intentos de ingeniería social, un alto índice de experimentos fallidos es el precio que a veces se paga por la influencia que despliegan los intelectuales.

–ALBERT HIRSCHMAN, *Essays in Trespassing*

País de letrados e ideólogos, de juristas y comunicadores, de legisladores e intelectuales que soñamos con imponer, cada grupo o partido, cada escuela o secta, su propio «modelo de país». País de escasa materialidad, bautizado mil veces por la palabra más que transformado por la mano y la máquina, país sacramental antes que productivo, de gestos y rituales más que de empresas e instrumentos.

–JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER, *Un espejo trizado*

La educación

El dramático derrumbe de la democracia chilena el 11 de septiembre de 1973 fue tanto más sorprendente por haber ocurrido en uno de los países de mayor nivel educativo y desarrollo político de América Latina. Ya en los años 60 la literatura del desarrollo invariablemente situaba a Chile a la cabeza de América Latina, superado en la mayoría de los indicadores solo por Argentina, Uruguay y Costa Rica. Tras la independencia se había desarrollado en Chile un estado fuerte y centralizado que tuvo un papel fundamental en la política social. En efecto, Chile fue uno de los primeros países de América Latina en crear un servicio nacional de salud y un sistema de seguridad social. Era de los países más urbanizados de la región y exhibía una de las mayores tasas de participación política. Era, además, de los países de mayor estabilidad política, y había vivido en democracia la mayor parte de su historia. Según prácticamente todos los

indicadores de desarrollo, estaba entre los países más avanzados del tercer mundo¹.

Chile era, además, un receptor especialmente importante de ayuda para el desarrollo. En efecto, la conjugación de régimen democrático, estado fuerte y eficaz y apertura a nuevas ideas, captó el interés particular de Estados Unidos. La creciente preocupación por los países «subdesarrollados» que surgió en Estados Unidos a fines de los años 50 y que llevó en 1961 a la creación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Alianza para el Progreso encontró terreno fértil en las élites políticas y económicas chilenas. En las altas esferas estadounidenses, el modelo reformista-capitalista chileno pareció un interesante contrapeso al comunismo revolucionario que surgía en la Cuba de Fidel Castro. Fue en ese marco que durante los años 60 la asistencia económica estadounidense aumentó más del triple. Según una fuente, Chile recibió el 14% de la ayuda económica y el 16% de los créditos otorgados por el Eximbank a América Latina durante el gobierno de Kennedy, y el 11% y 21%, respectivamente, durante el gobierno de Johnson². Dado que la población chilena constituía menos del 4% del total para América Latina y el Caribe, el trato que recibió de parte de Estados Unidos fue realmente extraordinario.

Por su parte, el sistema educativo chileno había sido por largos años uno de los mejores de América Latina. En efecto, en Chile el Estado hacía una inversión pública relativamente alta y sostenida en educación que logró elevar la matrícula y reducir el analfabetismo. En 1960 la tasa de alfabetización alcanzaba el 84%, muy superior a la de la mayoría de la región, en tanto que el contacto regular con educadores

¹ Paul E. Sigmund, *The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964-1976* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1977), pp. 21-22; Mark Falcoff, *Modern Chile, 1970-1989: A Critical History* (New Brunswick, N.J.: Transaction, 1991), p. 4.

² La asistencia económica norteamericana (donaciones más créditos) aumentó de \$112 millones durante los ocho años del gobierno de Eisenhower a \$750 millones durante los gobiernos de Kennedy y Johnson, en tanto que los créditos del Eximbank subieron de \$95 a \$340 millones. Véase Herald Muñoz y Carlos Portales, *Una amistad esquiva: Las relaciones de Estados Unidos y Chile* (Santiago: Pehuén, 1987), pp. 48-74. Lo anterior no incluye los \$3 millones de dólares aportados clandestinamente a la campaña de Eduardo Frei en 1964, «más de lo gastado per cápita en cualquier elección norteamericana», según Abraham F. Lowenthal, *Partners in Conflict: The United States and Latin America in the 1990s* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990), p. 32.

Europeos y norteamericanos había traído a las salas de clase muchos adelantos pedagógicos. El sistema secundario chileno, modelado en el *lycée* francés, era uno de los de mayor calidad de América Latina. A principios de siglo, la matrícula alcanzaba a aproximadamente un tercio de los niños en edad escolar; hacia 1950, la cifra se había elevado a casi dos tercios³.

Schiefelbein y Farrell resumen así los primeros pasos del sistema:

Ciñéndose a una disposición de la Constitución de 1833 que declaraba la educación pública como responsabilidad del Estado, en 1842 Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en establecer un sistema de instrucción pública. Al promediar el siglo se fundaron la primera escuela normal y la Universidad de Chile, y el liceo que preparaba jóvenes para la universidad agregó al plan de estudios clásico-humanista la ciencia experimental. En 1860 una ley orgánica declaró la gratuidad de la educación primaria y creó nuevos liceos y escuelas normales. A fines del siglo XIX Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en permitir el ingreso de mujeres a la universidad y en autorizarlas a ejercer una profesión liberal. La educación secundaria abrió las puertas a la mujer y se invitó a profesores europeos a enseñar en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde marcaron profundamente la formación del magisterio y el desarrollo del sistema educativo⁴.

El sistema de educación superior se amplió y se hizo más cosmopolita. Hacia 1970, y con fuertes subsidios del Estado, ocho universidades públicas y privadas atendían a más del 9% del grupo etario correspondiente, y aunque no hay indicadores precisos, la calidad parece haber sido de las mejores de la región. El ingreso estaba determinado por una prueba de aptitud académica administrada por un

³ Sobre escolaridad, véase C. L. Taylor y M. C. Hudson, eds., *World Handbook of Political and Social Indicators*, 2ª ed. (New Haven, Conn., 1972), p. 205. Véase también U.S. Government Printing Office, *Area Handbook for Chile* (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1969), pp. 123-150. Sobre sistema escolar, véase Joseph P. Farrell, *The National Unified School in Allende's Chile: The Role of Education in the Destruction of a Revolution* (Vancouver: University of British Columbia Press, 1986), p. 31.

⁴ Ernesto Schiefelbein y Joseph P. Farrell, *Eight Years of Their Lives: Through Schooling to the Labour Market in Chile* (Ottawa: Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional, 1982), p. 26.

órgano central. La planta académica de jornada completa con formación de posgrado, crecía gradualmente y los docentes retornaban al país después de estudiar en el extranjero. Desde hacía años que los programas y planes de estudio seguían los pasos de las innovaciones que se producían en los sistemas de educación superior europeo y norteamericano. Varias universidades hacían un esfuerzo concertado por fomentar la investigación científica, muchas veces con ayuda de la cooperación extranjera⁵. Hubo en esa época una serie de programas de ayuda exterior que hicieron sustantivos aportes en dinero, personal y capacitación para fortalecer el sistema universitario y financiar nuevas ideas⁶.

La gran reforma universitaria que se inició en 1967 durante el gobierno reformista demócratacristiano y que continuó en la administración de Salvador Allende modernizó y amplió significativamente el sistema. Como porcentaje del PIB, durante el período, los aportes estatales se duplicaron ampliamente. La matrícula creció de 56.000 en 1967 a 77.000 en 1969, cifra que en 1973 se duplicó a 147.000 luego de que el gobierno de Allende incrementara fuertemente el financiamiento universitario. La planta docente de jornada completa aumentó considerablemente, y otro tanto ocurrió con los investigadores. Se hizo un esfuerzo concertado por fortalecer las ciencias y se introdujeron nuevas formas organizativas, como el modelo departamental y los centros de investigación descentralizados. La gestión universitaria

⁵ Sobre el sistema de educación superior, véase Daniel C. Levy, *Higher Education and the State in Latin America: Private Challenges to Public Dominance* (Chicago: University of Chicago Press, 1986), p. 78. Una excelente fuente de información es el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), p. ej., *Las transformaciones educacionales bajo el régimen militar* (Santiago: PIIE, 1984). Un ejemplo de influencia extranjera lo proporciona la fundación en 1931 de la Universidad Técnica Federico Santa María, institución privada de Valparaíso inspirada en la escuela técnica alemana y cuyo cuerpo docente debía estar compuesto exclusivamente por extranjeros durante los primeros diez años; véase Levy, *Higher Education*, p. 73. Sobre el fomento a la investigación científica, véase José Joaquín Brunner, *Informe sobre la educación superior en Chile* (Santiago: FLACSO, 1986), p. 26.

⁶ Un espectacular ejemplo fueron los \$10 millones de dólares aportados por la Fundación Ford en la década de los 60 para dotar a la Universidad de Chile de un programa de intercambio con universidades de California; véase Edmundo Fuenzalida, «Institutionalization of Research in Chile's Universities: 1953-1967», en Roger M. Garrett, ed., *Education and Development* (New York: St. Martin's, 1984), pp. 95-111.

se democratizó notablemente con la elección de autoridades y mayor representación en las decisiones⁷.

Según el *Area Handbook* del Departamento de Estado de Estados Unidos, hacia los años 70 Chile era «uno de los países latinoamericanos de mayor nivel educativo»⁸. La educación primaria y secundaria tenía una cobertura amplia y de calidad. Las universidades del país se contaban entre las mejores de la región y cumplían un papel fundamental en educar a las élites contemporáneas y en dar forma a las ideas que dominaban el debate público. La educación, especialmente la terciaria, se había convertido en una potente fuerza en la sociedad chilena.

Las ciencias sociales

Entre 1955 y 1970, y como parte de un proyecto mayor que apuntaba a institucionalizar la investigación científica en la universidad, Chile logró avances muy notables en el ámbito de las ciencias sociales. Hasta mediados de los años 50 las universidades habían tenido una orientación eminentemente profesional que descansaba casi totalmente en profesores de jornada parcial, y que poco o nada incentivaba o se ocupaba de la investigación. Eran, en palabras de un analista, «una alianza informal de escuelas profesionales cuyo principal fin era formar a los abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, profesores secundarios, agrónomos y demás profesionales que necesitaba una sociedad moderna y compleja en constante interacción con el resto del mundo, especialmente Europa, y más adelante, Estados Unidos»⁹. Aunque antes de 1955 las universidades chilenas hacían investigación ocasional, ello no formaba parte de los objetivos institucionales.

Esta situación empezó a cambiar a principios de los años 50 con la elección de Juan Gómez Millas como rector de la Universidad de Chile. Gómez Millas, historiador y ex decano de la Facultad de Educación

⁷ Brunner, *Informe sobre la educación superior*, pp. 31-40. Entre los ejemplos de nuevas formas de organización se destacan el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) de la Universidad Católica y el Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO) de la Universidad de Chile.

⁸ U.S. Government Printing Office, *Area Handbook for Chile*, p. 48.

⁹ Fuenzalida, «Institutionalization of Research», p. 63.

y Filosofía, era un convencido de que la investigación científica tenía valor social y de que debía ser un aspecto central del quehacer universitario, como queda en claro en su discurso de inauguración del año académico 1956: «No pocos repiten una frase común en algunos círculos, ‘Que otros hagan ciencia, nosotros aprovechemos sus resultados y sus aplicaciones’, frase que revela una postura de las más inmorales que conozco porque representa la renuncia prematura a la vida del espíritu... ¿Por qué no renunciar al arte también, o al Estado, o a la religión, o a cualquiera de las formas superiores de existencia de lo humano en el hombre?» (70–71). Gómez Millas expresaba un punto de vista que ganaba fuerza en Chile y que dio pie a un esfuerzo considerable y sistemático por institucionalizar la investigación científica en la universidad.

Esta labor tuvo un éxito notable. El gobierno respondió inmediatamente, creando un fondo nacional de financiamiento de la investigación científica. Hacia 1965 la Universidad de Chile había creado una Facultad de Ciencias orientada a la investigación. Las demás grandes universidades del país, en especial la Católica y de Concepción, también emprendieron la integración de la investigación científica con reformas estructurales y fuertes aportes económicos. En las élites políticas y académicas se gestaba un consenso en cuanto a que la investigación científica en general era decisiva para el desarrollo económico y social. Este consenso era compartido por los grandes donantes extranjeros, en especial las fundaciones Ford y Rockefeller y el gobierno de Estados Unidos, todos los cuales hicieron importantes aportes al desarrollo de la investigación en las universidades chilenas. El resultado fue un esfuerzo sostenido de casi veinte años para formar docentes en el extranjero, crear una infraestructura adecuada y fomentar la investigación en múltiples disciplinas¹⁰.

La envergadura y extensión de estas iniciativas fue notable. En 1954 el gobierno promulgó una ley que destinaba el 0,5% de los impuestos fiscales directos e indirectos y de los derechos aduaneros y de

¹⁰ Fuenzalida (ibíd.) documenta y analiza exhaustivamente la institucionalización de la investigación científica en Chile. El gobierno chileno, las fundaciones Rockefeller y Ford, la Alianza para el Progreso y varios gobiernos europeos financiaron el desarrollo de la investigación en medicina, sismología, astronomía, física, biología, ingeniería, agronomía, medicina veterinaria y otras especialidades.

exportación a la creación de un Fondo de Construcción e Investigaciones Universitarias, y establecía un Comité Científico Tecnológico asesor de la política nacional (72). Las universidades de Chile, Católica y de Concepción abrieron un extenso debate sobre el papel de la investigación que las llevó a introducir cambios fundamentales en la estructura universitaria. Durante los años 60 la USAID y las fundaciones Ford y Rockefeller dieron prioridad al desarrollo universitario en el tercer mundo, muy especialmente en Chile¹¹. Había consenso y presupuesto: en la universidad chilena había llegado la hora de la investigación científica.

Entre 1955 y 1965 la Fundación Rockefeller, que venía apoyando a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile desde 1942, entregó a universidades chilenas más de un millón de dólares para investigación y docencia en ciencias médicas y biológicas. A mediados de los años 60 la USAID otorgó un crédito de \$3 millones de dólares a cuarenta años plazo (al 0,75% de interés) para financiar estudios en ingeniería y economía y formar a alumnos chilenos en técnicas de planificación moderna, complementado por un crédito de \$10 millones de dólares a cuarenta años plazo (al 1% de interés los primeros diez años y al 2,5% después) para fortalecer el sector educación. Por su parte, la Fundación Ford hizo en 1965 un aporte de \$10 millones de dólares a diez años plazo para financiar un programa de intercambio entre la Universidad de Chile y las universidades públicas de California. Esta iniciativa tuvo resultados especialmente notables en materia de agricultura y medicina veterinaria y permitió que entre 1965 y 1978 un total de 125 docentes chilenos recibieran posgrados de la Universidad de California, así como la publicación de cerca de mil libros, artículos, monografías, tesis y películas. Complementando una donación de un millón de dólares hecha por Naciones Unidas, la Fundación aportó además \$800.000 dólares a los Institutos Centrales de Ciencias Básicas de la Universidad de Concepción¹².

¹¹ Francis X. Sutton, en «Foundations and Higher Education at Home and Abroad», *Center for the Study of Philanthropy Working Papers* (New York: Graduate School and University Center, City University of New York, 1986), analiza la extraordinaria labor de las fundaciones privadas estadounidenses en el fomento de la educación superior en Estados Unidos y el extranjero.

¹² Extractado en su mayoría de Fuenzalida, «Institutionalization of Research».

Estos proyectos abarcaron no solo las ciencias duras sino también las sociales, en especial sociología y economía. Chile poseía una larga tradición de estudios sociales que abarcaba historia, filosofía, crítica social y literatura¹³, tradición que sin embargo no estaba institucionalizada a nivel universitario y mantenía solo un tenue nexo con los avances en sociología académica que se producían en Europa y Estados Unidos.

La sociología científica llegó a fines de la década del 50, al regresar de un posgrado en Estados Unidos el ex estudiante de derecho Eduardo Hamuy. Hamuy se interesó en complementar la tradición sociológica «especulativa» con una ciencia con bases empíricas que incorporase escalas, encuestas y otros avances metodológicos recogidos en Estados Unidos. Con la venia del rector Gómez Millas y financiamiento nacional, Hamuy fundó el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad de Chile¹⁴. En 1958 se inscribieron en la carrera de sociología los primeros veintidós alumnos y se envió a ayudantes de investigación a recibir capacitación en Estados Unidos y Europa¹⁵.

Por esa época se estableció en Santiago la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), iniciativa de la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) orientada a formar científicos sociales en la región, evitando las estadías en Europa o Estados Unidos. FLACSO atrajo a Santiago a profesores europeos y alumnos de distintos países latinoamericanos, lo que le dio un importante carácter multinacional. La Escuela Latinoamericana de Sociología (ELAS), su principal programa, tuvo dos destacados directores extranjeros: el español José Medina Echavarría y el suizo Peter Heintz. A fines de los años 60 la ELAS era el principal posgrado en

¹³ Edmundo Fuenzalida, «The Reception of ‘Scientific Sociology’ in Chile», *Latin American Research Review* 18,2 (1983): pp. 95-97.

¹⁴ Hamuy estudió en la Universidad de Columbia y fue investigador en el City College of New York y en la Universidad de Wisconsin. El proyecto fue financiado en su totalidad por la universidad o el gobierno central; véase *ibíd.*, pp. 98-99. Entre otras excelentes fuentes de información se destacan José Joaquín Brunner, *El caso de la sociología en Chile* (Santiago: FLACSO, 1988) y Hernán Godoy Urzúa, «El desarrollo de la sociología en Chile», *Estudios Sociales* 12 (1977): pp. 33-56.

¹⁵ José Joaquín Brunner y Alicia Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía: Ciencias sociales y autoritarismo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay* (Santiago: FLACSO, 1987), p. 77; véase también Brunner, *La sociología en Chile*, pp. 220-232.

sociología de América Latina y convocaba a alumnos de primer nivel de toda la región¹⁶.

En 1958, Roger Vekemans Van Cauwelaert, carismático jesuita belga con una especial habilidad para captar recursos, fundó la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Chile. Vekemans había llegado a Chile el año anterior como parte de un plan de fortalecimiento de la Iglesia ante la posibilidad de que Salvador Allende, marxista y por añadidura masón, llegara a la presidencia de la república. La Escuela contrató a profesores visitantes europeos y envió a profesores jóvenes a hacer posgrados en Estados Unidos (en 1964 la Fundación Ford aportó \$380.000 para infraestructura académica y financiamiento de posgrados). Por cuerda separada, Vekemans fundó el Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL), instituto privado que rápidamente recibió extraordinarios niveles de financiamiento exterior y que en la siguiente década tendría gran influencia en muchos de los mejores científicos sociales jóvenes del país¹⁷.

Así, en el lapso de dos años, se crearon en Chile tres sólidos programas de docencia e investigación, cada uno de ellos dirigido por sociólogos modernos, comprometidos y formados en el extranjero. Cada uno tuvo fuerte apoyo y legitimidad; cada uno mantuvo una relación estrecha y regular con sociólogos europeos y estadounidenses, y cada uno recibió fuerte apoyo económico de entes norteamericanos, especialmente de las fundaciones Ford y Rockefeller, con aportes menores de UNESCO, la OEA (Organización de Estados Americanos) y algunos organismos europeos. En ninguna otra parte de América Latina podía la disciplina haberse establecido en mejores condiciones.

Hacia 1967, los dos programas universitarios captaban a un centenar de alumnos nuevos al año y en 1969 la Universidad de Concepción fundó la tercera escuela de sociología. En 1970 las universidades chilenas tenían en total unos 700 alumnos de sociología y la Universidad Católica creaba el primer instituto de ciencias políticas del país.

¹⁶ Véase Brunner, *La sociología en Chile*, pp. 226-232; y Fuenzalida, «Scientific Sociology in Chile», pp. 98-99.

¹⁷ Para un detallado recuento sobre la interacción de Vekemans con la jerarquía eclesial y la evolución de DESAL, véase David Mutchler, *The Church as a Political Factor in Latin America: With Particular Reference to Colombia and Chile* (New York: Praeger, 1971), parte 3; véase también Fuenzalida, «Scientific Sociology in Chile», pp. 102-105; y Brunner, *La sociología en Chile*, pp. 232-236.

Las ciencias sociales estaban establecidas y crecían con rapidez. Según una fuente, la proporción de egresados subió de 8% en 1960 a 18% en 1970¹⁸.

El rápido desarrollo de la sociología moderna se vio complementado por avances en materia económica. Desde mediados de los años 50 que la Universidad de Chile contaba con un excelente programa docente en economía, quizás el mejor de América Latina. Este programa tenía fuerte influencia de la Cepal (Comisión Económica para América Latina), varios de cuyos principales funcionarios –entre ellos el economista argentino Raúl Prebisch– hacían clases en la Escuela de Economía. En 1955 el decano Luis Escobar reorganizó completamente el programa, entregando la dirección del instituto de investigación al economista norteamericano Joseph Grunwald. En 1957 el programa creó ESCOLATINA, primer posgrado en economía de América Latina. Durante los siguientes ocho años, la Universidad de Chile sería el centro neurálgico de la investigación en economía de la región¹⁹.

Como en el caso de la sociología, la Universidad Católica tampoco se quedó a la zaga. En 1956 suscribió un convenio con el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago para crear un moderno programa de docencia e investigación en la Escuela de Economía y Administración que en los siguientes diez años enviaría a formarse en Chicago a unos cuarenta alumnos de economía. A mediados de la década del 60 la Universidad Católica había desarrollado un sólido programa con académicos de alta calificación, un plan de estudios moderno y una creciente actividad en materia de investigación. La relación continuó durante al menos treinta años y fue el origen de los «Chicago Boys», grupo de economistas neoconservadores que en los años 70 revolucionaron la política económica del régimen militar y posteriormente transformaron el pensamiento económico en toda América Latina²⁰.

¹⁸ Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, pp. 77-78; véase también Norbert Lechner, «Las condiciones políticas de la ciencia política en Chile», *Documento de Trabajo No. 453* (Santiago: FLACSO, 1990). Sobre el aumento de la matrícula en las ciencias sociales, véase Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, p. 21.

¹⁹ Ronald G. Hellman, en «The Impact of the Ford Foundation on the Economic Sciences in Chile» (roneo), entrega interesantes detalles sobre este programa.

²⁰ Juan Gabriel Valdés, en *La Escuela de Chicago: Operación Chile* (Buenos Aires: Editorial Zeta, 1989), aporta un extraordinario nivel de detalle y análisis sobre la relación entre

Los programas de las universidades de Chile y Católica recibieron importantes aportes de la USAID, de las fundaciones Ford y Rockefeller y de la OEA. La Fundación Ford, por ejemplo, aportó entre 1961 y 1971 unos \$2 millones de dólares para programas de economía. A 1964 la USAID había invertido \$812.000 dólares en la Universidad Católica. A fines de los 50, la Fundación Rockefeller aportó más de \$40.000 al programa de la Universidad Católica y más de \$200.000 al de la Universidad de Chile²¹. Gran parte de estos aportes se destinaron a financiar posgrados en Estados Unidos para alumnos que luego retornaron a hacer docencia e investigación. Con otros aportes se pagaron profesores visitantes extranjeros, investigación en terreno y gastos de infraestructura.

Estas iniciativas convirtieron a Chile en el mayor centro de docencia e investigación en economía de la región. Según una estimación, entre 1960 y 1970 la cantidad de economistas calificados se sextuplicó, pasando de 121 a 727. El número de economistas con posgrado en el extranjero pasó de unos cuantos en 1959 a 46 en 1971²². Se habían creado seis nuevas instituciones de investigación y docencia, entre ellas el Centro de Estudios de Planificación Nacional (CEPLAN) y el Departamento de Economía Agraria (Universidad Católica) y el Centro de Planeamiento (CEPLA) en la Universidad de Chile. También se creó la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), entidad estatal que inició la aplicación de los instrumentos del análisis económico contemporáneo a las políticas públicas. Al igual que la sociología moderna, la economía contemporánea había echado raíces en Chile.

Estos avances en materia de ciencias sociales se complementaron con la presencia en Santiago de destacados científicos sociales extranjeros. Su nivel educativo, larga tradición democrática y apertura a nuevas ideas habían convertido al país en el centro intelectual de la región, motivando a distintos organismos internacionales y regionales a fijar

el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile.

²¹ Sobre la Fundación Ford, véase Hellman, «Impact of the Ford Foundation» y otros documentos internos de la Fundación. Sobre la USAID, véase Valdés, *La Escuela de Chicago*, p. 194. Sobre la Fundación Rockefeller, véase Fuenzalida, «Institutionalization of Research», pp. 74-75.

²² Hellman, «Impact of the Ford Foundation»; economistas, ver tabla 1; posgrados en el extranjero, ver p. 13.

sede en Santiago. Además de la Cepal y la FLACSO, se establecieron allí el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y el Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presencia que facilitó una frecuente interacción con la comunidad académica chilena. También fijaron sus sedes regionales en Chile el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la UNESCO. Al producirse el golpe militar, había en Santiago más científicos sociales que en cualquier otra capital latinoamericana.

Hacia 1970 las ciencias sociales estaban sólidamente asentadas en la sociedad chilena, tenían en ella un rol protagónico, y la docencia e investigación en la disciplina eran tal vez las mejores de América Latina. Las políticas reformistas del gobierno de Eduardo Frei Montalva habían generado una gran demanda por «analistas sociales», al punto de que muchos altos funcionarios de gobierno habían salido del programa de economía de la Universidad de Chile. La crítica de los científicos sociales empezaba a penetrar los medios y los partidos políticos, y pronto el «socialismo revolucionario» del gobierno de Allende daría un ascendiente aún mayor en la política gubernamental. La oferta de científicos sociales y la demanda por sus servicios crecían a ojos vistas. Fue, según Brunner y Barrios, «el período de oro de los intelectuales progresistas»²³.

La intelectualidad chilena

Hacia principios de los años 70, la intelectualidad chilena tenía tanta solidez como prestigio. Como grupo, tendía a tener una alta calificación, gran sofisticación y amplios contactos con sus pares de Europa y Estados Unidos. Su presencia en los medios informativos, partidos políticos y colegios profesionales le daba acceso directo a las élites del país. La mayoría trabajaba en universidades; otros en organismos internacionales con sede en Santiago o en instituciones privadas de investigación. Un buen número estaba en tareas de gobierno, acorde con la demanda por analistas sociales que generaron las reformas de los

²³ Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, p. 80.

gobiernos de Frei y Allende. Esta excepcional mezcla de calificación y jerarquía social hizo que la intelectualidad chilena tuviera mayor incidencia en la vida política que en cualquier otro país latinoamericano.

Ahora bien, muchos observadores concuerdan en que este grupo humano estaba dominado por un cierto tipo de intelectual que veía la sociedad como un todo, más que como la suma de sus partes. La mayoría de los más destacados propugnaba visiones totalizantes que daban cuenta de problemas sociales cuya envergadura y causas estructurales básicas requerían de una solución integral. Cuestionaban y hasta desincentivaban el análisis parcial, tentativo o especializado. Su pretensión era «generar una imagen general sobre la sociedad, un diagnóstico de la totalidad, y proponer modelos alternativos para su reestructuración»²⁴.

Era un período en que la idea opuesta –la del intelectual como tecnócrata, ocupado de temas instrumentales y del detalle concreto del cambio social– claramente no era bien vista. Según Silva, ello habría sido una reacción ante los intentos del gobierno centroderechista de Jorge Alessandri (1958-1964) por expandir el libremercado y frenar el crecimiento del sector público. Las medidas de Alessandri, que muchos tacharon de forma tecnocrática de gobernar, encontraron oposición no solo en el movimiento sindical y los partidos de izquierda, sino también en los sectores empresariales que durante años habían medrado al amparo de políticas estatistas y proteccionistas. Así, hacia principios de los 60, la tecnocracia «tenía gran peso político y generaba polémica en la vida nacional»²⁵. Los métodos tecnocráticos se estimaban, por decir lo menos, cuestionables.

La intelectualidad chilena se orientaba más bien hacia la ideología. Buscaba, en palabras de Brunner, «reconocimiento en ese plano puramente discursivo, apartándola de las tareas instrumentales o especializadas o de una producción de conocimientos dirigida a objetivos específicos de gestión u organización». Su principal preocupación era

²⁴ Brunner, «La intelligentsia», p. 181.

²⁵ Silva, «Intellectuals, Technocrats, and Social Change», p. 201. Silva anota, como ejemplo del sesgo antitecnócrata que era común en Chile, que elementos radicales acusaban a Jacques Chonchol, ministro de agricultura de Allende, de ser «un tecnócrata». Véase Patricio Silva, «Technocrats and Politics in Chile: From the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks», *Journal of Latin American Studies* 23, 2 (1991): p. 389.

interpretar la historia en términos de los valores de la sociedad y elaborar la carta de navegación que conduciría al futuro. Se le pedía entregar una visión amplia de los acontecimientos, y principios científicos sobre cómo organizar la sociedad. La reflexión de Brunner y Barrios al respecto bien podría hacerse extensiva a todas las ciencias sociales: «Ser sociólogo es, por unos años, equivalente a ser partisano. El sociólogo está llamado, sobre todo, a ser un intelectual en la tradición del ‘gran intelectual’ ideólogo, aquel que tiene un saber de la totalidad, que conoce las claves secretas de la sociedad, sus leyes de desarrollo y sus niveles de conciencia falsa y verdadera. El especialista, por el contrario, aparece como un intelectual recortado, parcial, siempre expuesto a contaminarse con las ideologías dominantes; un empirista estrecho, en fin. Los intelectuales que la revolución ama son los puercoespines, no los zorros»²⁶. La ideología, en su sentido más épico, se convirtió en la principal moneda de cambio de la intelectualidad chilena.

La importancia que esta intelectualidad concedía a la ideología encajaba con otra idea predominante a la época: que el progreso social solo se lograría a través de la revolución y la refundación de la sociedad. Los intelectuales de raigambre izquierdista y socialcristiana acostumbraban a decir que en América Latina el modelo capitalista de desarrollo era inviable. En palabras del intelectual y político socialista José Antonio Viera-Gallo, «parecía que las formas institucionales del Estado de compromiso habían alcanzado su máxima expresión y que, en adelante, lejos de favorecer la incorporación de los sectores populares postergados, contribuirían a su exclusión». Un alto dirigente del Partido Socialdemócrata expresa una visión similar: «Todos coincidíamos de forma más o menos explícita en que la Constitución que teníamos no servía, que la economía necesitaba una revolución profunda, que las organizaciones sociales y políticas estaban en crisis... Todos coincidíamos, de una forma o de otra, en que había que transformar radicalmente las cosas»²⁷. Las medidas gradualistas y reformistas se

²⁶ Brunner, «La intelligentsia», p. 181; Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, p. 82. La referencia es a la distinción que hace Berlin, a su vez tomada del poeta griego Arquíloco, entre «el zorro que sabe muchas cosas» y «el puercoespín que sabe una sola gran cosa». Véase Isaiah Berlin, *Russian Thinkers* (New York: Viking, 1978), pp. 22-81.

²⁷ José Antonio Viera-Gallo, «Crisis y reafirmación del ideario democrático: Trayectoria de una generación», en CIEPLAN, *Democracia en Chile: Doce conferencias* (Santiago:

consideraban meros paliativos que reforzaban el *statu quo*. La sociedad necesitaba una reestructuración fundamental, y eso solo se podía lograr con un cambio radical.

Con el tiempo, el acento en la profunda crisis social y los cambios radicales estructuró el debate y el pensamiento en términos de una pugna entre modelos de sociedad fundamentalmente opuestos. América Latina, y Chile en particular, enfrentaban una disyuntiva histórica entre socialismo y fascismo. La revolución cubana se erigió en abierto contraste con las falencias del modelo gradualista de desarrollo chileno. El debate se centraba claramente en los modelos de desarrollo globales y en la «necesidad histórica» del cambio revolucionario²⁸. Desde el centro, incluso la Democracia Cristiana propuso una «Revolución en libertad».

Moulián describe con claridad meridiana la visión imperante en la izquierda: «Alimentamos una visión religiosa de la política, que nos llevaba a pensar el marxismo como ‘saber total’; ...hipnotizados por lo que creíamos leyes del desarrollo revolucionario: la rígida distinción entre reforma y revolución, la desconfianza en las reformas graduales y escalonadas, la exigencia de destruir el estado burgués, la imposibilidad del desarrollo capitalista en un país periférico, la necesidad de la subordinación política de las capas medias y de la hegemonía obrera en todos los momentos del tránsito al socialismo»²⁹. Los actores políticos se veían obligados a escoger entre modelos contrapuestos e intransables, exacerbando el debate y la polarización. Al enfatizar las diferencias por sobre las similitudes, la presión por tomar partido generaba desencuentros. Quienes no eran partidarios de una revolución, en especial la gente de derecha, empezaron a sentirse amenazados por el rumbo que tomaba la política.

Las más de las veces, el papel del intelectual en este debate fue agudizar las diferencias entre alternativas políticas, poniendo el acento en las contradicciones, trazando líneas divisorias y reduciendo a veces complejos problemas a una simple y única idea, en tonos rara vez

CIEPLAN, 1986), p. 46. Entrevista con Mario Papi, 7 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

²⁸ Norbert Lechner, *Los patios interiores de la democracia: Subjetividad y política* (Santiago: FLACSO, 1988), p. 23.

²⁹ Moulián, *Democracia y socialismo en Chile*, pp. 11, 13-14.

moderados o conciliadores. Alejandro Foxley, intelectual que luego pasó a la política, describe la interacción de la intelectualidad con el mundo político de la época: «El intelectual fue a menudo un reafirmador de ideologías y un agudizador de conflictos ideológicos entre las fuerzas políticas. Fue casi siempre un factor de rigidez, dogmatismo y a veces incluso de arrogancia y exclusión». Y sigue: «La moderación siempre se interpretó en Chile como signo de debilidad. A cualquiera que fuera moderado se le suponía algún tipo de complejo»³⁰. Los intelectuales no se preocupaban de salvar diferencias o buscar puntos de encuentro, sino más bien de alentar visiones absolutistas que acentuaban las diferencias intersectoriales por sobre visiones pluralistas que dieran cuenta de las coincidencias. Más que unificar, su papel era dividir.

Otro aspecto importante del pensamiento intelectual fue la tendencia a ver la política en términos eminentemente instrumentales. La política era vista, dice Brunner, como un medio para implementar ideologías y no «como un subsistema limitado que regula la competencia intrapartidista y permite la selección de los grupos que deben acceder periódica y alternativamente al poder». La intelectualidad percibía la política como «un vehículo de propuestas globalizantes de transformación de la sociedad» que «se cargó de promesas y se saturó de expectativas, ya que parecía la fuente de todas las energías de cambio en la sociedad». La sociedad no se producía a sí misma de forma gradual y desde abajo, «sino que ella debía ser producida por la política»³¹. La ideología era el fin; la política, el medio.

Tras expresar ideas parecidas, Silva agrega que la expectativa de incidir en la política indujo a la intelectualidad, al menos hasta el golpe militar, a subordinarse al sistema político. «Históricamente, el papel de apoyo de la intelectualidad hacia los partidos políticos y el Estado obedeció además a la convicción de tecnócratas e intelectuales de que estos (Estado y partidos) eran el principal mecanismo para llevar a la práctica sus planes de reforma social». La observación de Silva reitera lo señalado mucho antes por Tomás Moulián en cuanto a que el intelectual que durante los años 60 predominó en los partidos de izquierda

³⁰ Alejandro Foxley, «Reflexiones sobre los cambios en la democracia», en CIEPLAN, *Democracia en Chile*, pp. 260, 265.

³¹ Brunner, «La intelligentsia», pp. 181-182.

fue un actor «secundario» o «pasivo» que se limitaba a adaptar y distribuir un discurso cuyos principios básicos ya estaban formulados. En lugar de ser críticos o creativos, eran «meros 'aclimatadores' de una producción elaborada según cánones externos, o bien eran 'hombres de fe' que habían sustituido las hipótesis por las creencias»³².

La intelectualidad de ese período cedió sus capacidades críticas y creativas a las prioridades de la dirigencia política. De hecho, el cuadro de los años 60 que trazan distintos observadores muestra a la intelectualidad en total sintonía con la política y marchando al compás de una u otra ilustre e incontrovertible ideología. La distinción weberiana entre «vocación política» y «vocación académica» había dado paso al «intelectual comprometido» y a la «universidad comprometida». Como señala Lechner, «Entre 1964 y 1973 los estudios en ciencias sociales son progresivamente justificaciones más o menos sofisticadas de las posiciones políticas en pugna»³³.

La tendencia intelectual a ver la política como medio para imponer un determinado modelo ideológico adoptaba distintas formas. Brunner habla de la «supresión del pasado» para decir que la intelectualidad privilegió un futuro utópico, en desmedro de las tradiciones y las estructuras establecidas³⁴. La historia se veía como poco menos que un campo de batalla ideológica y el pasado como algo que debía ser superado.

Viera-Gallo abordó más directamente esta dimensión en términos de fines y medios: «En este anhelo no reparábamos en el problema del método o de los medios; nos interesaba el fin. Si bien nunca se propició una dictadura como el camino o instrumento adecuado para lograr la democratización real, de hecho, al insistir solo en los objetivos, dándoles un carácter absoluto, contribuíamos a debilitar las prácticas

³² Silva, «Intellectuals, Technocrats, and Social Change», p. 200. Moulián, *Democracia y socialismo en Chile*, pp. 94–99.

³³ Lechner, «Las condiciones políticas», p. 6. En *La sociología en Chile: Instituciones y practicantes* (Santiago: FLACSO, 1988), p. 50, Alicia Barrios y José Joaquín Brunner plantean que la ideologización de la sociología fue producto en parte de «la ausencia de una tradición cultural que garantizara diferenciar la práctica científica de la práctica política».

³⁴ Brunner, «La intelligentsia», p. 181. Exceptúa de esta postura a «un delgado segmento de la intelectualidad de derecha».

democráticas»³⁵. Su temor era que, cuando el compromiso con un fin utópico viene acompañado por un menosprecio de los medios para alcanzarlo, produce la destrucción de la democracia.

Quizás también estuvo en juego allí la desconfianza generalizada en la democracia formal o burguesa que ha acompañado históricamente a los movimientos socialistas. El argumento clásico es que, dado que la burguesía jamás permitiría que un gobierno socialista democráticamente electo concrete su agenda legislativa, las elecciones democráticas, más que como un fin en sí mismas, deben considerarse un medio para acceder al poder. Esta visión «instrumental» de la democracia fue un elemento común en la retórica de la izquierda chilena³⁶. Fue menos común en la intelectualidad, al menos de forma explícita, pero claramente la potenciaba un clima que valorizaba la transformación utópica y menospreciaba los valores, tradiciones y estructuras sociales.

Por último, la intelectualidad chilena tenía una notable afinidad con la política. En lugar de encerrarse en lo abstracto o esotérico, los más destacados intelectuales chilenos se ocupaban de las grandes problemáticas del momento. Les preocupaban la organización y rumbo de la sociedad y daban por sentada su incidencia en política. En este período, ser intelectual significó casi siempre un compromiso político. Anotan Brunner y Barrios: «No se espera que los sociólogos publiquen; se espera que transformen el mundo»³⁷.

Para la intelectualidad chilena, que por años había tenido una relación mucho más estrecha con la política que sus pares de América Latina, el extraordinario énfasis que se daba a la política no era enteramente nuevo. Edgardo Boeninger, el ex rector que a mediados de los 80 dirigió un centro privado de investigación y luego integró el primer gabinete del gobierno democrático, señaló que «...la relación entre política e intelectuales ha sido siempre más cercana y la gente se cambia de sombrero con mucha facilidad». A lo que Alejandro Foxley agrega:

³⁵ Viera-Gallo, «Crisis y reafirmación», p. 47.

³⁶ Véase el argumento clásico en Adam Przeworski, *Capitalism and Social Democracy*, 2ª ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), capítulo 1; véase el concepto general de la visión instrumental en el capítulo 9. El primero en desarrollar su aplicación en Chile fue Moulián en *Democracia y socialismo en Chile*, y luego Ignacio Walker en *Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada* (Santiago: CIEPLAN-Hachette, 1990), capítulo 4.

³⁷ Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, p. 81.

«en este país, la creación y elaboración de ideas siempre ocupó un lugar central. El papel de los intelectuales era fundamental»³⁸.

Los orígenes de esta especial relación no son claros y ameritan un análisis histórico más detallado de lo que es posible hacer en el marco de este trabajo³⁹. Los observadores estiman que los principales partidos chilenos –liberal, conservador, radical, demócratacristiano y socialista– han estado bajo fuerte influencia intelectual (con la excepción del Partido Comunista, históricamente uno de los más fuertes de Chile pero, según se dice, prácticamente impermeable a la intelectualidad). El Partido Demócrata Cristiano (PDC), por ejemplo, fue fundado por intelectuales⁴⁰. El Partido Socialista (PS), en sus distintas manifestaciones, ha estado ostensiblemente marcado por la intelectualidad. Los partidos de la centroderecha tradicional, por su parte, nunca han tenido la óptica anti-intelectual que ha caracterizado a sus homólogos de América Latina. Y a pesar de que la importancia del papel de la intelectualidad en los partidos de derecha es un hecho reciente, es habitual escuchar que *El Mercurio*, el principal diario chileno, tradicionalmente ha aportado una dimensión intelectual a la derecha política.

Una explicación para esta afinidad es que en Chile nunca prevalecieron los caudillos regionales que abundaron en otros países latinoamericanos, lo que dio como resultado la aparición de un político de diferente tipo. Eugenio Tironi –sociólogo formado en Francia que participó directamente en convencer a la oposición de la conveniencia de que la campaña del No utilizara sondeos de opinión política y entrevistas colectivas focalizadas– afirma que los políticos chilenos han sido históricamente diferentes: «Yo creo que la diferencia no está

³⁸ Entrevista con Edgardo Boeninger, 29 de enero de 1991; otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha. Foxley, «Reflexiones», p. 260. Véase en Canitrot et al., «Intelectuales y política», pp. 4-8, una discusión sobre el papel tradicionalmente marginal de los intelectuales argentinos en la política de su país.

³⁹ Iván Jaksić, en *Academic Rebels in Chile: The Role of Philosophy in Higher Education and Politics* (Albany: SUNY Press, 1989), p. 1, traza la influencia de los filósofos chilenos en la educación superior desde la independencia, afirmando que «el estrecho nexo entre filosofía y política constituye la base fundamental para entender la historia de la disciplina en Chile, y en muchos casos, algunos de los acontecimientos educativos y políticos más importantes del país».

⁴⁰ Véase Timothy R. Scully, *Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile* (Stanford: Stanford University Press, 1992) y Michael Fleet, *The Rise and Fall of Chilean Christian Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 1983).

en los intelectuales, sino en los políticos... El político chileno es muy distinto... básicamente no es populista, ni caudillo ni una clase o casta autónoma... [sino] más bien más intelectual, con una cierta formación profesional, con una relación muy cercana con la sociedad civil»⁴¹. Quizás, como da a entender el comentario de Tironi, la fortaleza histórica de los partidos chilenos hizo que el rol político se profesionalizara, abriéndolo a las inquietudes intelectuales.

Con una mirada algo diferente, Brunner afirma que el carácter históricamente indistinto de las élites chilenas ha generado una cierta superposición de roles: «[Hemos tenido] una tradición de élites no especializadas; una sociedad poco diferenciada en lo simbólico, lo que quiere decir que la política, la cultura y el arte se entrecruzan, haciendo que los intelectuales tengan un papel en la política y que la clase política, al mismo tiempo, tenga como criterio de legitimación el hecho de ser apreciada o no por la intelectualidad y su cercanía con ella; al igual que la intelectualidad, para legitimarse, ha utilizado históricamente, y utiliza todavía, la cercanía o no con la política y el ser reconocida o no por la clase política» (28 de febrero de 1991). A diferencia de las sociedades prósperas de Europa o América del Norte, que han articulado roles sociales más especializados, las élites chilenas han tenido mayores probabilidades de ser llamadas a cumplir una diversidad de roles sociales. Los académicos han tenido altas probabilidades de ostentar un cargo político en algún momento de su carrera, y los políticos de provenir de la academia.

En otra perspectiva, el sociólogo Javier Martínez, quien tuvo un papel central en la campaña plebiscitaria de 1988, especula que lo que podría explicar la participación de la intelectualidad en las tareas de Estado fue su fortaleza histórica: «Había aquí un Estado que atraía a los mejores talentos del país a su problemática y sus instituciones, no solo hacia los asuntos públicos [en general]... Debe haber una relación entre la fortaleza de este Estado que le dio al país instituciones estables y fuertes respecto de la sociedad, y el hecho de que la intelectualidad aquí no opera al margen de las instituciones, sino dentro de ellas y de la vida política». Resume Martínez: «Yo creo que el secreto está simplemente en que hay aquí una fuerza institucional que hace que estas

⁴¹ Entrevista con Eugenio Tironi, 20 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

dos especies de animales crezcan juntas y en ciertas ocasiones incidan la una sobre la otra»⁴². Según esta línea argumental, el extraordinario papel que tuvo el Estado chileno en la vida nacional lo hizo mucho más atrayente a la intelectualidad que en otros países latinoamericanos.

Otra posible explicación es que la polarización de la política chilena en los años 60 y el creciente énfasis en lo ideológico hizo que el sistema generase una mayor demanda por servicios que solo la intelectualidad podía prestar. Comparada con Estados Unidos o Brasil, donde imperan los grupos de interés, la cultura política chilena, desde al menos 1960, fue, según Brunner, «mucho más una verdadera política ideológica donde los grupos de interés enfrentan permanentemente la brutal necesidad de racionalizarse en términos ideológicos». La necesidad de dar una justificación de corte ideológico a las demandas de determinados sectores afianzó los modelos ideológicos globales. Continúa Brunner: «La Democracia Cristiana, como la Unidad Popular, como el régimen militar, cada uno con su gran proyecto para refundar totalmente la sociedad... Mientras la sociedad sea así, el papel de los intelectuales va a ser necesariamente fuerte, porque el intelectual, mucho más que el político, se especializa en la manipulación de grandes modelos ideológicos. Y puesto que la política chilena ha sido tan susceptible [a estos modelos], es evidente que los intelectuales siempre han tenido un papel muy decisivo» (28 de febrero de 1991). Lo que no está igual de claro es si fue el carácter históricamente ideológico de la política chilena lo que llevó a la intelectualidad a una mayor participación en política, o bien si ello fue justamente producto de dicha participación.

Como quiera, en Chile, poder e intelecto han tenido una larga y estrecha relación en que, históricamente, la política no fue solo un juego de intereses, sino además de ideas. Esa relación se fortaleció en los años 60, dando a la intelectualidad un mayor papel en política. Al asumir Frei Montalva en 1964, por ejemplo, llamó en calidad de asesores a un gran número de sociólogos y economistas académicos. En términos más amplios, el debate intelectual empezó a marcar paulatinamente la conducta política. Señala Foxley: «La política en esos años la hacía una poderosa 'clase política' que penetraba a las organizaciones sociales, movilizándolas en torno a objetivos reivindicativos para una eventual

⁴² Entrevista con Javier Martínez, 6 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

toma del poder. La intelectualidad ejercía una poderosa influencia [sobre este proceso], alimentándolo ideológicamente y definiendo con gran éxito la ‘agenda’ de problemas y soluciones que la clase política finalmente proponía al país»⁴³.

En 1970, la participación de los intelectuales en política alcanzó su máxima expresión tras la elección del gobierno de la Unidad Popular (UP) encabezado por Salvador Allende. El gobierno recurrió ampliamente a las competencias técnicas de los científicos sociales, contratando a muchos y acudiendo a otros como asesores. «El peso de estos intelectuales revolucionarios, ‘orgánicos’ la mayoría de sus respectivos partidos», señalan Brunner y Barrios, «se hace sentir en los medios de difusión y en los comités centrales de la revolución. Existe un Gobierno Popular, un proyecto de transición al socialismo y, por tanto, un amplio espacio para la función ideológica de los intelectuales y de los analistas sociales. Su palabra es escuchada, tomada en cuenta; en breve, valorizada dentro del mercado ideológico-político como nunca antes había ocurrido»⁴⁴.

El quiebre de la democracia

La democracia chilena no desapareció bruscamente bajo las balas del 11 de septiembre de 1973, día en que el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno de Salvador Allende, sino que se empezó a descomponer unos veinte años antes con la erosión de las normas y mecanismos tradicionales de alcanzar acuerdo en materia política. Hasta ese entonces, el sistema democrático chileno –una democracia formal ininterrumpida desde 1932 que, con solo dos breves paréntesis, se remontaba al año 1830– era la envidia de muchos países latinoamericanos. Según distintos indicadores, durante el siglo XIX Chile no tuvo nada que envidiar a Europa en materia de evolución democrática⁴⁵ y los casos de gobierno inconstitucional no eran recientes ni menos representativos.

⁴³ Alejandro Foxley, *Para una democracia estable* (Santiago: CIEPLAN, 1985), p. 102.

⁴⁴ Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, p. 80.

⁴⁵ Véase Arturo Valenzuela, «Chile: Origins, Consolidation, and Breakdown of a Democratic Regime», en Diamond, Linz y Lipset, *Democracy in Developing Countries*, pp. 160-161.

Hacia mediados del siglo XX, sin embargo, en la continuidad democrática chilena había mucho de espejismo. En efecto, detrás de la larga historia de constitucionalidad se escondían falencias que hacían entrever una desarticulación. Las reformas electorales y el aumento de las expectativas habían generado un incremento en la participación política –entre 1957 y 1973 el padrón electoral prácticamente se sextuplicó– que ponía en jaque al sistema. La progresiva polarización de las élites políticas empezó a erosionar paulatinamente la tradicional política de los acuerdos. El centro político se desdibujó y rigidizó, abandonando su papel histórico de mediador en un sistema político-partidista fragmentado y competitivo. Aunque la mayoría de los problemas estaban a la vista –y muchos tenían solución– el debate hizo en general abstracción de ellos. El carácter del sistema, seductor pero precario, llevaría más tarde a un distinguido historiador chileno a afirmar que «en Chile nunca ha existido una estabilidad democrática. Existió, eso sí, una democracia formal muy perfecta que el 11 de septiembre de 1973 cayó como un castillo de naipes y que desapareció súbitamente sin dejar rastros»⁴⁶.

Parte de los problemas que aquejaban a la democracia chilena eran de carácter estructural. La rigidez del sistema presidencialista hacía que su correcto funcionamiento dependiera de la flexibilidad de las élites políticas. Más adelante, las fuertes divisiones y el carácter crecientemente competitivo de la política llevaron a que los mandatarios chilenos rara vez representaran a más de un tercio del electorado. Según la Constitución, cuando ningún candidato obtenía simple mayoría, el Congreso debía escoger a uno de ellos, sin segunda vuelta que diera al ganador un claro mandato popular. De hecho, de los últimos cinco presidentes elegidos hasta 1970, Eduardo Frei Montalva fue el único en ganar por simple mayoría; los demás fueron investidos por el Congreso en base a la primera mayoría: Jorge Alessandri fue elegido en 1958 con solo el 31,2% del voto y Salvador Allende en 1970 con el 36,2%⁴⁷.

⁴⁶ Gonzalo Vial, «Algunas condiciones para una democracia estable en Chile», en CIEPLAN, *Democracia en Chile*, p. 93. Sobre las demandas al sistema y cifras de electores, véase Tomás Moulián, «Estabilidad democrática en Chile: Una mirada histórica», en *ibíd.*, p. 133. Scully, en *Rethinking the Center*, hace un exhaustivo análisis de la evolución del centro político chileno.

⁴⁷ Véase Genaro Arriagada, «De la república de 1925 a la Constitución de 1980: El sistema político chileno», en CIEPLAN, *Democracia en Chile*, pp. 146-147.

Los presidentes eran elegidos por un período sin reelección, lo que limitaba el control ciudadano y el respaldo legislativo, pero la norma constitucional les permitía actuar como si contaran con un amplio mandato. Con un tercio más uno del Congreso un presidente podía vetar proyectos de ley. Había pocos incentivos estructurales para negociar y transigir, lo que potenciaba el *impasse* y confrontación que tienden a caracterizar a la política cuando esta se fragmenta. Así las cosas, el sistema dependía mucho de la disposición de las élites políticas a buscar alianzas y acomodos. No hubo reformas estructurales –p. ej., para incentivar la conformación de coaliciones, o para instalar un sistema parlamentario– que pudieran haber permitido moderar posiciones extremas y fomentar el consenso que no se daba de forma natural⁴⁸.

Genaro Arriagada, uno de los más destacados intelectuales-políticos de Chile, afirma que de cierta forma la Constitución de 1925 «premiaba la intransigencia»⁴⁹. Los partidos podían aspirar a ganar la presidencia y gobernar con plenos poderes sin necesidad de conciliar posiciones ni de hacer alianzas, lo que llevó a las dirigencias partidarias a considerar las victorias electorales como una suerte de carta blanca para hacer de una vez por todas lo que había que hacer. Una vez en el poder –incluso sin mayoría absoluta, como fue el caso de la Unidad Popular– ponían en práctica su proyecto político, sin importar mayormente los acomodos con otros partidos. Así, en el gobierno de Frei Montalva, la Democracia Cristiana impulsó una «revolución en libertad» como «partido único», con total prescindencia de los demás sectores. El gobierno de la UP, por su parte, obvió la negociación legislativa, prefiriendo implementar «la vía chilena al socialismo» a través de decretos y resquicios legales.

Los partidos, si bien fuertes y representativos de toda la gama de opinión política, estaban escasamente regulados. La flexibilidad normativa en cuanto a su conformación, sumada al sistema de representación proporcional, hizo proliferar las pequeñas formaciones en desmedro de agrupaciones más grandes y estables. Los partidos carecían de democracia interna, lo que permitía a los dirigentes operar al

⁴⁸ Valenzuela analiza estos problemas en «Chile»; en *Overthrow of Allende*, Sigmund aborda además el aporte de los factores estructurales al quiebre democrático chileno. Véanse capítulos 1, 13.

⁴⁹ Arriagada, «De la república de 1925», p. 147.

margen de sus bases. La falta de regulación fue caldo de cultivo para manejos ilícitos, tales como el uso de recursos fiscales para fines partidarios y el ingreso oculto de cuantiosos fondos extranjeros. Cabe recordar que los partidos chilenos habían penetrado profundamente a las instituciones de la sociedad civil, en especial sectores estudiantiles, colegios profesionales, sindicatos y organismos de base. Los partidos se disputaban tenazmente el control de estos sectores, para luego manejarlos casi como sucursales. Fue así que las cúpulas partidarias pasaron a estructurar el debate y a incidir sobre las decisiones en todos los niveles de la sociedad⁵⁰.

Puede haber contribuido al quiebre democrático un ciclo de reformas dictadas a partir de 1958 con el fin de mejorar la eficacia gubernativa. Estas medidas, promulgadas a lo largo de doce años, limitaron los incentivos para alcanzar acuerdos preelectorales, fortalecieron el control del Ejecutivo sobre el proceso presupuestario y restringieron las facultades del Congreso para modificar leyes y controlar el clientelismo. Es posible que estas medidas hayan hecho al Estado más ágil y menos corrupto, pero estrecharon el marco para la negociación política y la conformación de alianzas y ampliaron las facultades de mandatarios que gobernaban en minoría⁵¹. En un contexto políticamente conflictivo y cada vez más polarizado, estos cambios dificultaron aún más los consensos.

Pero el mayor problema, como señala Moulián, «no era estructural sino cultural, de radicalización de las élites políticas». Entre 1950 y 1970, la política chilena se polarizó al punto de llevar al sistema en su conjunto a la crisis que causó más tarde su derrumbe. Las cúpulas, más comprometidas con sus respectivas ideologías que con el proceso democrático, promovían soluciones intransables y totalizantes a los problemas sociales –lo que el historiador Mario Góngora llamó *planificaciones globales*– que intentaban transformar la sociedad desde arriba, sin alianzas políticas⁵².

⁵⁰ Véase Vial, «Algunas condiciones», pp. 106-108.

⁵¹ Valenzuela, «Chile», pp. 182-183; véase también Scully, *Rethinking the Center*.

⁵² Moulián, «Estabilidad democrática en Chile», p. 141. Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción del Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, 3ª ed. (Santiago: Editorial Universitaria, 1986), pp. 246-271.

El surgimiento de una izquierda leninista en 1955, de un centro intransigente en 1965 y de una derecha antidemocrática en los años 70, acusó el advenimiento de una nueva forma de pensar en todo el espectro político, con líderes que privilegiaban la ortodoxia ideológica por encima de la tradicional política de los acuerdos, menoscabando con ello la confianza y el entendimiento que permitieron a la democracia chilena extenderse casi sin interrupción desde 1830.

Ello no obstante, no hay antecedentes que indiquen que la polarización haya surgido de forma espontánea a partir de profundas divisiones en la sociedad. A mediados del siglo pasado, Chile era un país relativamente homogéneo, sin grandes diferencias de tipo religioso, étnico ni geográfico. La distribución del ingreso era menos desigual que en la mayoría de América Latina, y en materia de salud y educación el país figuraba entre los más avanzados. Aunque ciertamente existían importantes diferencias de clase, las principales formaciones políticas –salvo el Partido Comunista– tenían apoyo transversal en toda la sociedad⁵³. De hecho, los pocos datos empíricos con que se cuenta dejan entrever que la radicalización no era común al electorado chileno⁵⁴.

Quienes sí parecen haber contribuido sobremedida a la polarización política fueron las cúpulas partidarias, un punto de vista común entre los analistas chilenos. Valenzuela, por ejemplo, afirma que la polarización provino en gran parte de «elites políticas ideologizadas que controlaban poderosas organizaciones partidarias y que estructuraron las opciones del electorado». Foxley agrega que los partidos privilegiaron lo ideológico hasta distanciarse de las reales demandas de la gente. El sociólogo Manuel Antonio Garretón habla de la tendencia de la clase política tradicional a «autonomizarse» de su base social, generando altos niveles de ideologización y polarización. El cientista político Juan Gabriel Valdés, en tanto, habla de una tendencia al «autismo

⁵³ Véase Arturo Valenzuela, «The Breakdown of Democratic Regimes: Chile», en Juan J. Linz y Alfred Stepan, eds., *The Breakdown of Democratic Regimes: Latin America* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), pp. 10-11.

⁵⁴ Falcoff, en *Modern Chile*, pp. 13-24, tras examinar una serie de estudios, concluye que el electorado chileno de la época en general no estaba radicalizado. Véase también Carlos Huneeus, *Los chilenos y la política: Cambio y continuidad en el autoritarismo* (Santiago: CERC/ICHEH, 1987), pp. 167-170; James Prothro y Patricio Chaparro, «Public Opinion and the Movement of the Chilean Government to the Left, 1952-1972», *Journal of Politics* 36 (1974): pp. 2-43.

partidista», en que la dirigencia confunde ideología con realidad, ve niveles de radicalización donde no los hay, y ofrece cambios para los cuales no hay mayor demanda⁵⁵.

Foxley compara el proceso con la figura hirschmaniana de la «escalada ideológica», en la cual una conjunción de competencia política, radicalización progresiva y un corto camino entre creación intelectual y propuesta política hace que esquemas concebidos a la rápida se conviertan en política fundamental de gobierno⁵⁶. Las cúpulas, resueltas a sacar partido del competitivo ámbito político chileno y llevadas por una creciente propensión a las soluciones doctrinarias globales, recurrieron a los esquemas utópicos de transformación social y económica elaborados por la intelectualidad. El carácter institucional del sistema partidista chileno les permitió transmitir a las masas, con relativo éxito, esquemas cada vez más exacerbados, los que una vez en el poder convirtieron en política de gobierno. Pero la dinámica parece haber sido jerárquica; las propuestas de cambios radicales que dominaron la política chilena durante los años 60 y 70 reflejaban fundamentalmente la polarización y los conflictos a nivel de élites; casi no hay datos que indiquen que hayan sido en respuesta a iniciativas provenientes desde la base.

La polarización surgió en grado importante en la izquierda, quizás exacerbada por su postura de acendrada ambigüedad en torno a la democracia política. Anota Moulián: «La izquierda chilena, en su historia ideológica reciente, ha pensado la democracia en una doble dimensión: como un hecho dado y como un obstáculo». Walker, por su parte, hace referencia a «la ausencia al interior de la izquierda, y muy en especial en el propio Partido Socialista, de un socialismo democrático claramente definido y articulado, que fuese consistente con

⁵⁵ Valenzuela, «The Breakdown of Democratic Regimes», p. 10. Foxley, *Para una democracia estable*, p. 70. Manuel Antonio Garretón, «La oposición política partidaria en el régimen militar chileno. Un proceso de aprendizaje para la transición», en Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón, eds., *Muerte y resurrección: Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones del Cono Sur* (Santiago: FLACSO, 1989), p. 403; véase también Garretón, *The Chilean Political Process* (Boston: Unwin Hyman, 1989), pp. 9-10. Juan Gabriel Valdés, «Cultura y política: una mirada desde la clase política», en CIEPLAN, *Democracia en Chile*, pp. 186-187.

⁵⁶ Alejandro Foxley, Michael S. McPherson y Guillermo O'Donnell, eds., *Development, Democracy and the Art of Trespassing: Essays in Honor of Albert O. Hirschman* (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1986), p. 194.

el proyecto allendista. El PS, que en sus orígenes había vivido una etapa marcadamente populista, caracterizada por una visión más bien instrumental de la democracia, había evolucionado hacia una postura declaradamente leninista, de franca y creciente oposición a las instituciones de la democracia representativa»⁵⁷.

La cuestión democrática había sido objeto de un amplio debate al interior del Partido Socialista. Eugenio González, uno de sus fundadores, había dado una gran batalla por un concepto democrático de socialismo, la que sin embargo se decidió a favor de una visión más leninista e insurreccional. Esta visión se hizo predominante a partir de 1955, luego de que el Partido Socialista Popular abandonara la estrategia conciliadora y pluriclasista que buscaba reformas graduales en alianza con la burguesía en favor del «frente de trabajadores», tesis que planteaba que solo la clase obrera y sus representantes avanzarían al socialismo. Según esta tesis, la burguesía y la pequeña burguesía estaban demasiado alineadas con el latifundio y el gran capital como para apoyar reformas de fondo. La alianza con sectores de centro quedó descartada, dejando la transformación de la sociedad únicamente a socialistas y comunistas. Esta visión antidemocrática tomó fuerza en el Congreso de Chillán realizado en 1967, donde el PS adoptó una línea revolucionaria que consideraba a la institucionalidad democrática como un obstáculo a la construcción del socialismo y se planteaba la destrucción del estado burgués y su reemplazo por el «Poder Popular»⁵⁸.

La argumentación clasista tuvo su correlato en el auge de la idea de que el cambio social debía ser revolucionario, no gradual, cuestión en que la revolución cubana jugó un papel fundamental. En efecto, desde hacía algún tiempo que en la izquierda chilena se venía produciendo un debate de ideas entre la vía pacífica (en general la vía electoral, tradicionalmente sustentada por el Partido Comunista) y el cambio revolucionario radical (la posición del Partido Socialista). El aparente éxito de la revolución cubana había incidido muy fuertemente en este

⁵⁷ Moulián, *Democracia y socialismo en Chile*, p. 165. Walker, *Socialismo y democracia*, p. 117.

⁵⁸ Moulián, *Democracia y socialismo en Chile*, pp. 86-87; véase también Walker, *Socialismo y democracia*, pp. 129-147; y J. Samuel Valenzuela y Arturo Valenzuela, eds., *Military Rule in Chile: Dictatorship and Oppositions* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), p. 210.

debate, inclinando la balanza a favor de la visión revolucionaria. El modelo cubano «demostraba que era posible ‘saltarse etapas’ y comenzar a construir el socialismo desde ya, teniendo como eje a la clase trabajadora y cuestionando así la tesis de la revolución por etapas»⁵⁹. El protagonismo del modelo revolucionario de transformación social salta a la vista en las palabras pronunciadas en 1961 por Salomón Corbalán, Secretario General del Partido Socialista, sobre lo que para Chile significaba la revolución cubana: «En nuestro país, de acuerdo a nuestra realidad, debemos buscar el enfrentamiento de la clase trabajadora con la clase enemiga sin propiciar el entendimiento o la vía pacífica» (139).

En la izquierda chilena de antes de 1973, el auge de la socialdemocracia europea no tuvo prácticamente ningún impacto. Dice Walker: «el socialismo chileno nunca prestó mayor atención a sus congéneres del viejo continente, como no fuera para denunciar, en tono claramente peyorativo, su carácter ‘socialdemócrata’» (127). El socialismo chileno miraba hacia América Latina, especialmente hacia movimientos populistas como el aprismo peruano, privilegiando la raigambre nacionalista, antiimperialista y antioligárquica, al tiempo de permanecer imparable –por decir algo– ante la cuestión de la democracia liberal. Y si bien intentó incorporar a las masas a la política, el socialismo soslayó el tema de la forma en que dicha incorporación podría ocurrir.

Por cierto, durante los años 60 y 70 subsistieron en la izquierda elementos demócratas moderados, entre ellos el propio Salvador Allende, que sin embargo no consiguieron contrarrestar el alza del leninismo⁶⁰. Por ejemplo, cuando en 1964 Allende logró temporalmente que el XX Congreso del Partido Socialista rechazara la vía insurreccional, un grupo de jóvenes contestatarios respondió conformando el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para «restaurar la pureza revolucionaria del marxismo frente a la traición abierta del revisionismo»⁶¹. La posición de Allende se hizo insostenible luego de que la alianza comunista-socialista que encabezaba perdiera la elección presidencial de 1964

⁵⁹ Walker, *Socialismo y democracia*, p. 138.

⁶⁰ Moulián, *Democracia y socialismo en Chile*, pp. 87-91; la leninización del Partido Socialista se documenta en Julio Faúndez, *Marxism and Democracy in Chile* (New Haven: Yale University Press, 1988), pp. 159-222; y en Paul W. Drake, *Socialism and Populism in Chile* (Urbana: University of Illinois Press, 1978).

⁶¹ Citado en Walker, *Socialismo y democracia*, p. 141.

ante la Democracia Cristiana. La sumatoria de deserción principista y derrota electoral fue decisiva. El socialismo rechazó sin más el «callejón sin salida del democratismo burgués» y adoptó oficialmente la ideología marxista-leninista (144), en un proceso que Walker resume así: «Mientras que la concepción socialista democrática contenida en la Vía Allendista aspiraba a crear las condiciones para una sociedad socialista a través de la transformación gradual del Estado y la profundización de la democracia existente, actuando dentro de los límites de la Constitución, la posición crecientemente leninista adoptada por el Partido Socialista lo llevó paulatina pero sostenidamente a plantear la destrucción del Estado burgués y su sustitución por el llamado Poder Popular» (169).

Contribuyó a la polarización de la izquierda el endurecimiento y exacerbación de las posturas del centro político. A principios de los años 60, la Democracia Cristiana desplazó al Partido Radical (PR) como principal fuerza de centro. La trayectoria del PR en materia de negociación y conciliación de posiciones le había otorgado el rol histórico de articulador del consenso que la democracia chilena necesitaba para funcionar⁶². Todo eso cambió tras el arribo de la Democracia Cristiana, cuyo enfoque ideologizado de la política la hacía rechazar el pragmatismo radical en materia de alianzas y acuerdos y privilegiar la coherencia de las posturas de principios. En lugar de fórmulas de compromiso, la DC ofreció una «auténtica política socialcristiana», calculando con ello atraer suficientes votos desde la izquierda y la derecha. Tras contundentes victorias en las presidenciales de 1964 y las parlamentarias de 1965, la DC emprendió su «camino propio» hacia la «Revolución en libertad», ocupándose de la oposición solo si era estrictamente necesario. El centro político chileno pasó desde la flexibilidad a la rigidez y la ideologización⁶³.

Ante el modelo revolucionario y principista de la izquierda, en cierto modo la DC reaccionaba ofreciendo su propio proyecto de cambios. Al socialismo de Estado y el «poder popular» oponía reformas

⁶² Arriagada, «De la república de 1925», p. 149.

⁶³ Analizan la postura demócratacristiana Moulián, en *Democracia y socialismo en Chile*, especialmente pp. 136-147; Valenzuela, en «The Breakdown of Democratic Regimes», pp. 33-39; Garretón, en *The Chilean Political Process*, 1ª parte; Scully, en *Rethinking the Center*; Javier Martínez y Eugenio Tironi, en *Las clases sociales en Chile: Cambio y estratificación, 1970-1980* (Santiago: Ediciones Sur, 1985); y Foxley, en *Para una democracia estable*, pp. 71-77.

económicas y autogestión obrera, tratando de mantenerse vigente en un mercado electoral cada vez más ajustado. Su propuesta constituyó un intento por operativizar la filosofía del «comunitarismo cristiano» que había marcado al partido desde su fundación, y formó parte además del giro hacia posturas ideológico-doctrinarias que fue la tónica general de las élites políticas chilenas⁶⁴.

Según Walker, la conducta democratacristiana contribuyó poderosamente al proceso de radicalización de la izquierda⁶⁵, la que vio a la DC como representante, en clave reformista, de las ambiciones de Estados Unidos y de los intereses de la derecha. La izquierda percibió, además, una peligrosa cercanía entre su propio programa y el proyecto populista encarnado en el comunitarismo democratacristiano, la reforma agraria y la «chilenización» del cobre. Terminaron de distanciarse a la izquierda la rigidez y negativa a negociar de la Democracia Cristiana.

Esto impulsó a la izquierda, y al socialismo en particular, a distanciarse de la Democracia Cristiana, radicalizando sus posturas. Los elementos reformistas y negociadores fueron cediendo terreno ante los partidarios de la revolución y la violencia, y la contradicción histórica entre principios marxista-leninistas y práctica liberal democrática se resolvió a favor de los primeros. Dos declaraciones de la época dejan meridianamente claro que la etapa de los acomodados había tocado a su fin: «Ni por un millón de votos cambiaría una coma de mi programa», dijo el entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano Eduardo Frei en 1964; «Les negaremos la sal y el agua», respondió el Secretario General del Partido Socialista Aniceto Rodríguez en 1965⁶⁶.

Pero la Democracia Cristiana nunca más volvió a atraer el apoyo que necesitaba para su estrategia de partido único. En las parlamentarias de 1969, recibió el 30% de los votos, una fuerte derrota en comparación con el 42% alcanzado en 1965. Así, al llegar las presidenciales de 1970, ni la izquierda ni la derecha estaban en disposición de aliarse con la Democracia Cristiana y ambos sectores prefirieron llevar candidato propio. El resultado fue una presidencia de minoría –Salvador Allende, candidato de la UP, triunfó con apenas el 36% del voto popular– con la

⁶⁴ Véase Foxley, McPherson y O'Donnell, eds., *Development, Democracy*, p. 196; y Valdés, «Cultura y política», pp. 178-180.

⁶⁵ Walker, *Socialismo y democracia*, pp. 142-143.

⁶⁶ Citado en Vial, «Algunas condiciones», p. 105.

Democracia Cristiana en último lugar. No se había logrado construir un centro político viable. Las preferencias siguieron distribuidas a todo lo ancho del espectro político, aumentó la polarización y el centro sacrificó su papel de intermediario entre izquierda y derecha. El conflicto y la intransigencia se habían apoderado de la política chilena⁶⁷.

El gobierno de Allende poco pudo hacer para resolver estas dificultades. Fue, como recuerda Valenzuela, «una coalición de minoría dominada por partidos marxistas volcados a una transformación fundamental de las estructuras económicas, sociales y políticas del país»⁶⁸. La UP no tuvo ni los votos para concretar su programa socialista ni la disposición a aceptar otra alternativa. Para complacer a la izquierda revolucionaria, adoptó audaces medidas económicas y sociales prescindiendo del debate parlamentario, lo que confirmó los temores de la oposición y la motivó a movilizarse y a abandonar su compromiso con el sistema democrático. Los intentos hechos en 1972 por dar una salida negociada a la crisis política fracasaron fundamentalmente por falta de disposición a transigir y de confianza entre gobierno y oposición. Las cúpulas partidarias fueron perdiendo el control de los acontecimientos, lo que dio paso al caos político que culminó en el golpe militar de 1973.

En suma, la polarización política fue un factor que contribuyó poderosamente al quiebre democrático. Las cúpulas de todo el espectro político transitaron hacia posturas que valoraban la pureza ideológica por encima de la tradicional política de los acuerdos. Es más, cayó en el descrédito la idea misma de la política como mecanismo de mediación de conflictos y alternancia en el poder, llegando a ser vista en términos instrumentales y utópicos como una herramienta para la toma del poder y la concreción de cambios sociales que se estimaban intransables.

⁶⁷ Véase Valenzuela, «The Breakdown of Democratic Regimes», pp. 37-38; y Moulián, *Democracia y socialismo en Chile*, pp. 143-147.

⁶⁸ Valenzuela, «The Breakdown of Democratic Regimes», p. 106.

Reinstitucionalización y autocrítica: 1973-1982

Había realmente dos mundos, dos Chiles superpuestos. Estos Chiles superpuestos tenían sus propias expresiones. La gente de oposición leía la revista Hoy, escuchaba Radio Cooperativa. Los otros leían El Mercurio, veían el canal de gobierno y frecuentaban los salones del Banco Central y los cócteles del Chile ceremonial. Y nosotros, bueno, nosotros frecuentábamos los cócteles de las embajadas más «abiertas», italianos, alemanes, holandeses. Cada cual tenía su lugar. Las grandes ocasiones para reunirse eran los eventos académicos, los lanzamientos de libros, las reuniones del CED, de CIEPLAN, del ICHEH. Eran las oportunidades para encontrarse.

– GENARO ARRIAGADA, 8 de marzo de 1991

Una época de cambios fundamentales

La toma del poder por parte de las fuerzas armadas marcó un punto de inflexión en la historia de Chile. En abierto contraste con el compromiso histórico del país con la democracia y el estado de derecho, el 11 de septiembre de 1973 se instauró lo que sería una de las dictaduras más prolongadas y autocráticas de América Latina. El régimen militar declaró el estado de sitio, suspendió la Constitución, disolvió el Congreso, proscribió los partidos políticos, destruyó el padrón electoral e impuso restricciones a los medios de comunicación. Puso, además, en marcha una política de violación de los derechos humanos que perduraría por más de diez años y que incluyó tortura, secuestros, golpizas, desapariciones y asesinatos. Pese a que no pocos creyeron que las fuerzas armadas devolverían el poder a la civilidad después del golpe, y pese a que el propio Pinochet había asegurado que se quedarían solo cinco años, debieron pasar diecisiete antes de que se vieran obligados a entregar el poder, y ello solo después de perder un plebiscito nacional.

El régimen tuvo varias características fundamentales. Primero, una orientación antipolítica desde el principio. En cruda respuesta al caos y la conflictividad del gobierno de Allende y a las querellas y la «politiquería» que habían caracterizado por años a la democracia chilena, el régimen se propuso desterrar la política –y a los políticos– del Estado. Para ello instituyó un sistema de gobierno en que la clase política no jugaba el más mínimo papel, reemplazando a la política con administración y a los políticos con tecnócratas. Las decisiones pasaron a tomarlas administradores bajo criterios técnico-profesionales. Como señaló el dos veces ministro de economía del régimen Pablo Baraona: «La nueva democracia debe ser tecnificada para que quien decida las cuestiones técnicas no sea el sistema político, pero la tecnocracia es responsable de usar procedimientos lógicos para resolver problemas y ofrecer soluciones alternativas». El rango de decisiones permitidas lo definía a su vez la Junta Militar. Según Óscar Godoy, uno de los más distinguidos científicos políticos de centroderecha del país, el resultado fue «una alianza tecnocrático-militar»¹.

Segundo, fue un régimen personalista que concentraba el poder en manos de Pinochet y un estrecho círculo de asesores, la mayoría uniformados. Pinochet no delegó grandes cuotas de poder ni creó un partido o movimiento político que sirviera de base de apoyo más permanente. Los intentos por compartir el poder con la centroderecha carecieron siempre de entusiasmo. Para garantizar el orden, el régimen prefería recurrir al miedo y los favores. Durante la mayor parte de la dictadura, la política no fue un tema². A diferencia de la Argentina y el Brasil de los años 60, el de Pinochet no fue un régimen burocrático-autoritario.

Tercero, sus objetivos pasaron rápidamente de provisorios a fundacionales. Rompiendo conscientemente con el pasado, el régimen se propuso no solo deponer a Allende y restablecer el orden, sino replantear

¹ Baraona es citado en Silva, «Technocrats and Politics in Chile», p. 393. Este enfoque se documenta y analiza en Pilar Vergara, *Auge y caída del neoliberalismo en Chile* (Santiago: FLACSO, 1985), pp. 71-156. Óscar Godoy, «Algunas claves de la transición política en Chile», *Estudios Públicos* 38 (1990): p. 144.

² Carlos Huneeus, «La política de la apertura y sus implicancias para la inauguración de la democracia en Chile», *Revista de Ciencias Políticas* 7 (1985): pp. 48-50. La excepción al carácter personalista del régimen de Pinochet fue la influencia de los Chicago Boys en la política económica.

de manera fundamental la relación ciudadanía-Estado. Fue así que creó, por medio de la Constitución de 1980, una democracia protegida que concentraba el poder en manos del Ejecutivo, disponía la tutela militar permanente sobre el Estado, proscribía los partidos que propugnaran ideologías «totalitarias» o la «lucha de clases» y, además, establecía la economía de libre mercado más extrema de la región. Era un tipo de régimen que Chile no había visto en más de un siglo³.

Cuarto, el golpe disoció al Estado de la sociedad civil y creó dos Chiles: a favor y en contra del régimen militar. Los primeros eran ciudadanos de primera clase, con acceso directo al Estado. Podían trabajar en el gobierno y las universidades, aparecer en televisión y escribir en los diarios. No corrían peligro de que les allanaran sus oficinas, de ser detenidos o torturados, o de que se les hiciera desaparecer. Los demás eran ciudadanos de segunda, desprovistos de los privilegios y la protección de que gozaban los partidarios del régimen. Explica con elocuencia Genaro Arriagada: «Había una dicotomía entre el país oficial –ordenado, eficiente en ciertos aspectos– en que la represión era muy eficiente, las paradas militares eran fantásticas, manejaban el Banco Central muy bien, ...tenían una hermosa economía que presentarle a la banca internacional. Y por otro lado, un mundo ‘subterráneo’ también muy espectacular, porque venían académicos extranjeros que se reunían con gente que hacía un trabajo fantástico pero que no tenía nada que ver con el Estado... Había realmente dos mundos, dos Chiles superpuestos»⁴. Esta disociación entre el Chile oficial y el Chile opositor excluyó a grandes sectores de las instituciones y roles que tradicional y legítimamente habían tenido en la sociedad.

Los primeros diez años de Pinochet fueron una época de gran temor y grandes cambios. La mayoría de los opositores sufrieron una represión constante que para unos se tradujo en exilio, detención, tortura e incluso muerte, y para otros en cesantía, exclusión o censura. Para la oposición toda, significó duda y desesperanza. Las instituciones de la

³ En una frase que irónicamente evocaba el llamado socialista a crear el «hombre nuevo», la Junta declaró su intención de «cambiar la mentalidad de los chilenos». Citado por Arriagada en Valenzuela y Valenzuela, *Military Rule in Chile*, p. 120. El carácter fundamental del régimen se aborda en detalle en Vergara, *Auge y caída*.

⁴ Entrevista con Genaro Arriagada, 8 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

sociedad civil fueron acalladas y sus dirigentes exiliados, encarcelados o relegados a remotas localidades. Los partidos fueron proscritos y los sindicatos desarticulados. Hacer oposición organizada era impensable; lo principal era sobrevivir.

Durante gran parte de este período, quedaron en escena solo dos instituciones: las fuerzas armadas y la Iglesia católica. Las primeras, a través de la Junta Militar, constituían el régimen y fueron quienes se propusieron reformular las instituciones económicas y políticas del país con ayuda de los «Chicago Boys» y de intelectuales conservadores como Jaime Guzmán. Eran quienes tomaban las decisiones políticas de fondo y controlaban el nombramiento de civiles en cargos de gobierno. Había una serie de grupos políticos y económicos que apoyaban con asesoría y personal, pero con ninguno compartían el poder. Las fuerzas armadas gobernaban por sí y ante sí.

En cuanto a la Iglesia católica, esta fue desde el principio la única capaz de hacer frente a la represión desatada por el régimen. Al responder ante el vendaval de violaciones a los derechos humanos, la Iglesia rápidamente se convirtió en el principal símbolo de la oposición activa. Su prestigio y fuerza institucional y moral la situaron casi fuera del alcance del régimen, al punto de que fue la única institución liberada de solicitar permiso para realizar asambleas y de someter sus publicaciones a censura previa. La Iglesia pudo mantener sus labores anteriores y emprender otras nuevas cuando las demás instituciones de la sociedad civil estaban disueltas o impedidas de funcionar de manera normal⁵.

Durante toda esta época, la Iglesia utilizó su estructura legal e institucional para proteger a personas expuestas a la represión y realizar actividades que a otros les estaban vedadas. Fue la primera en asumir la lucha por los derechos humanos a través del Comité Pro Paz, organismo ecuménico que defendió a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Cuando las presiones del régimen obligaron a disolver el Comité, creó la Vicaría de la Solidaridad, organización propia que permitió que las mismas personas siguieran cumpliendo esta función. Estableció, además, la Academia de Humanismo Cristiano para dar un espacio institucional a científicos sociales exonerados de las universidades. Durante años, la jesuita *Mensaje* fue la única revista con una visión

⁵ Véase Brian H. Smith, *The Church and Politics in Chile* (Princeton: Princeton University Press, 1982).

crítica de la realidad nacional que se podía encontrar en los quioscos. Posteriormente, la Academia lanzó la revista *Análisis*, semanario que habitualmente presentaba puntos de vista contrarios al régimen.

Para los partidarios del régimen, en cambio, fue una época de grandes desafíos y febril actividad en que la agenda «fundacional» generaba iniciativas en prácticamente todos los ámbitos. Tener un poder omnímodo significaba implementar reformas radicales rápidamente y sin transar con nadie. Fue en ese marco que el régimen lanzó un esfuerzo concertado por transformar la estructura económica y la política social del país⁶.

La mayor y más drástica de las transformaciones fue la económica. El régimen convocó a un grupo de jóvenes tecnócratas neoliberales apodados los «Chicago Boys» –por haberse formado en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago o seguir sus tesis– a «reconstruir» la economía tras años de control estatal, proteccionismo y desequilibrios macroeconómicos. Este grupo inmediatamente instauró una política económica que recortó drásticamente el gasto fiscal, abrió la economía a la competencia internacional, entregó fuertes incentivos a la empresa privada y modernizó el mercado de capitales. Por su carácter a veces experimental e incongruente, la política económica tuvo fuertes críticas de los detractores del régimen y un nivel de resistencia importante, si bien menos pública, de algunos de sus partidarios. Pero los Chicago Boys eventualmente dieron en el clavo: en 1976 el PIB empezó a remontar y durante los siguientes tres años creció a más del 8% anual⁷. Se empezó a hablar del «milagro económico» chileno.

En 1979 el régimen anunció que la reconstrucción había terminado y procedió a lanzar «siete modernizaciones» que buscaban refundar la relación ciudadano-Estado⁸. Estas «modernizaciones» se proponían

⁶ Véase Vergara, *Auge y caída*, y Garretón, «The Political Evolution of the Chilean Military Regime and Problems in the Transition to Democracy», en O'Donnell, Schmitter y Whitehead, *Transitions from Authoritarian Rule*, pp. 98-111.

⁷ Entre los análisis de mayor interés, véase Foxley, *Latin American Experiments in Neo-conservative Economics* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1983); Vergara, *Auge y caída*; Arturo Fontaine Aldunate, *Los economistas y el presidente Pinochet* (Santiago: Zig-Zag, 1988); y Valdés, *La Escuela de Chicago*. Sobre el PIB, véase Foxley, *Latin American Experiments*, p. 43.

⁸ Véase Vergara, *Auge y caída*, pp. 215-229; Foxley, *Latin American Experiments*, pp. 103-109; y Brian Loveman, *Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism*, 2ª ed. (New York: Oxford University Press, 1988), pp. 331-339.

terminar con el poder monopólico del movimiento sindical, privatizar los sistemas de salud y seguridad social, promover una agricultura exportadora moderna, «transformar» la judicatura y descentralizar diversas funciones estatales, en especial la educación primaria y secundaria, hacia el nivel municipal. Consecuente con los principios neoliberales, en todas estas modernizaciones quedaba de manifiesto la intención de traspasar las decisiones sobre servicios sociales desde el gobierno central a las personas y el mercado.

En 1980 el régimen decidió institucionalizar los cambios a través de la promulgación, tras un plebiscito de dudosa legalidad, de una nueva ley fundamental. Esta Constitución contemplaba una democracia protegida con las fuerzas armadas en un papel tutelar permanente, un Ejecutivo fuerte, un contingente de senadores designados para frenar los excesos legislativos, y una serie de otras medidas restrictivas. Se contemplaba, además, una transición gradual a una nueva democracia, proceso que comenzaría con un plebiscito en 1988 y terminaría, dependiendo del resultado, en 1989 o 1997.

Cualquiera que haya sido el resultado de estas transformaciones económicas y sociales –evaluarlas tomaría años– constituyeron un experimento radical fundado en un corpus sistemático de pensamiento neoliberal que era novedad en Chile. Para las autoridades del régimen, eran tiempos revolucionarios y de grandes cambios. El ministro del trabajo del régimen, José Piñera, de hecho, había tomado la idea directamente de las «cuatro modernizaciones» de Mao Tse-Tung⁹. A la Constitución del 80, por su parte, se le llamó «La Constitución de la libertad», emulando el título de una influyente obra del economista neoliberal, premio Nobel y ex profesor de Chicago Friedrich A. Hayek¹⁰. El régimen militar, nacido en violenta reacción contra la rigidez de las posturas utópicas que habían llevado la democracia chilena al despeñadero, mostró ser tanto o más revolucionario y absolutista que los partidos de izquierda y centro que reemplazó.

El golpe produjo, además, una grave y sostenida crisis política e intelectual. Se abolieron los procesos e instituciones históricas de la democracia, como el Congreso, las elecciones y la libre expresión. Se

⁹ Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, *La historia oculta del régimen militar: Chile, 1973-1988*, 3ª ed. (Santiago: Editorial Antártica, 1990), p. 273.

¹⁰ Loveman, *Chile*, p. 339.

proscribieron los partidos y se intimidó a sus dirigentes por medio del asesinato, el exilio y la cárcel; toda asamblea y manifestación fue prohibida. Imposibilitados los políticos de hacer política y sin un rol social legítimo, se generó un vacío político.

La izquierda se llevó desde un principio la peor parte de la represión, y fueron muchos los líderes asesinados o detenidos tras el golpe. La mayoría de quienes lograron sobrevivir fueron expulsados del país o partieron al exilio. El PS y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) fueron prácticamente aniquilados y muchos de sus dirigentes debieron pasar diez años o más en el exilio. El Partido Comunista se sumergió a tratar de sobrevivir en la clandestinidad.

La Democracia Cristiana, principal partido de centro del país, también entró en la clandestinidad y muchos de sus líderes debieron partir al exilio; las pocas actividades que realizó durante los siguientes diez años fueron clandestinas e ilegales. Los partidos de derecha se auto-disolvieron, optando por perseguir sus objetivos a través de gremios empresariales o del aparato de Estado. A múltiples instituciones de la sociedad civil, desde juntas de vecinos y clubes deportivos hasta colegios profesionales, se les prohibió reunirse y hacer elecciones. Los medios informativos fueron intervenidos, reestructurados y sometidos a estricto control. El ámbito político, amén de circunscrito y anti-competitivo, fue monopolizado por el Estado, quedando amplios sectores sin representación.

En las universidades se hicieron «depuraciones» que significaron la expulsión de muchos intelectuales de sus instituciones y roles históricos. Las ocho universidades del país fueron «intervenidas» por rectores militares y «depuradas» de elementos considerados contrarios a su correcto funcionamiento. Muchos fueron exonerados o desvinculados tras ser imputados en cacerías de brujas; otros, frustrados, optaron por renunciar. Muchos, quizás cientos, emigraron por temor o en busca de empleo. Algunos académicos jóvenes, especialmente en las ciencias sociales, se fueron a estudiar al extranjero, en muchos casos becados por universidades y donantes extranjeros¹¹.

¹¹ Véase Jeffrey Puryear, «Higher Education, Development Assistance and Repressive Regimes», *Studies in Comparative and International Development* 17, No. 2 (1982); reproducido por Fundación Ford, Nueva York, 1983.

El impacto en la intelectualidad opositora fue demoledor. Genaro Arriagada asimila estas medidas a una bomba de neutrones que «perdonó a los edificios pero mató el alma, al menos en las ciencias sociales». Y sigue: «Vivíamos una esquizofrenia brutal, porque frecuentábamos las mejores universidades del mundo... pero en Chile no podíamos pisar ni una sola» (8 de marzo de 1991). La academia dejó de ser la base de operaciones de gran parte de la intelectualidad, lo que dejó a muchos a la deriva y en busca de alternativas.

Las ciencias sociales fueron duramente castigadas. Como disciplinas, la sociología y las ciencias políticas fueron prácticamente barridas de las universidades. Se clausuraron reconocidos centros de análisis social interdisciplinario, entre ellos el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) y el Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO). Los programas que lograron mantenerse fueron purgados de todo contenido crítico, recibiendo una orientación puramente profesional y técnica. Se eliminó todo tipo de investigación sobre movimientos y conflictos sociales o con perspectiva estructuralista, y se clausuró o reorganizó a los centros de investigación interdisciplinaria¹².

Las ciencias económicas no fueron tan castigadas como las demás ciencias sociales, pero fueron reducidas a un solo punto de vista neoclásico. La economía y la economía política de raigambre marxista fueron proscritas y se empezaron a ver con malos ojos los enfoques estructuralistas, el análisis keynesiano y la historia de la economía. Los economistas identificados con la izquierda o la Democracia Cristiana fueron exonerados o marginados en favor de gente afín al régimen.

Para intelectuales y políticos opositores, hacer oposición activa al régimen era impensable: la primera prioridad era sobrevivir. Ambos sectores habían conocido el fracaso profesional, el repudio público y la represión oficialista. Se les había expulsado de sus instituciones y roles sociales tradicionales y se enfrentaban a un gobierno autoritario y un resurgimiento de la ideología neoliberal que los excluía por completo. Quedaron «en completa orfandad ocupacional e intelectual» (Arriagada, 8 de marzo de 1991).

¹² Véase Manuel Antonio Garretón, «Las ciencias sociales en Chile», *Documento de Trabajo* (Santiago: FLACSO, 1982); Puryear, «Higher Education»; Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, pp. 132-134.

Al rescate del pensamiento opositor: el nuevo marco institucional

Ahora bien, entre políticos e intelectuales había una gran diferencia: la política estaba proscrita de plano, mientras que la investigación académica, incluso con serias restricciones, seguía siendo generalmente legal. A diferencia de la crítica política, el análisis académico no era constitutivo de delito; los académicos exonerados podían seguir en su profesión, siempre y cuando tuvieran una institución que los acogiera y no llamaran mucho la atención. Esta diferencia, y el partido que los intelectuales lograron sacarle, tendrían importantes repercusiones en la política chilena de los siguientes quince años.

Los primeros exonerados encontraron acogida en instituciones fuera del control del gobierno militar. Los organismos internacionales y regionales con sede en Santiago, más algunas entidades independientes o de Iglesia dedicadas al estudio y la acción social, absorbieron temporalmente a muchos científicos sociales. Por ejemplo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) y el Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas (CELADE), se abrieron para acoger a los exonerados de las universidades. Algunas agencias donantes extranjeras dieron fondos para becas de investigación y programas especiales que facilitaron este proceso¹³.

En algunos de estos organismos, la transformación fue permanente. La FLACSO, por ejemplo, debió cerrar su reconocido programa docente –cuyo foco en la problemática regional atraía a alumnos de diversos países– y dedicarse exclusivamente a la investigación. Tras acoger a varios científicos sociales exonerados de la Universidad Católica, la FLACSO pasó a concentrarse casi exclusivamente en temas nacionales. El CIDE, que a 1973 era una entidad relativamente pequeña, amplió rápidamente sus programas, aprovechando la llegada de profesionales de alta calificación para conseguir recursos frescos desde el extranjero.

Esta modalidad, sin embargo, tenía límites naturales. Los organismos internacionales con sede en Chile no podían ampliarse indefinidamente y al momento del golpe el país contaba solamente con tres centros privados de investigación en ciencias sociales: el CIDE, el

¹³ Véase Puryear, «Higher Education».

Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES), y la Corporación de Promoción Universitaria (CPU)¹⁴. El marco institucional no daba abasto, lo que obligó a buscar nuevas instituciones y recursos.

Uno de los primeros intentos por articular una respuesta permanente provino de Claudio Orrego, talentoso intelectual y dirigente político que, al momento del golpe, dirigía el Instituto de Estudios Políticos (IDEP) de la Democracia Cristiana. Vislumbrando que las fuerzas armadas cerrarían el IDEP, en 1974, junto con un pequeño grupo de intelectuales, fundó el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), institución privada sin adscripción partidaria ni nombre controvertido. El objetivo fue «mantener vivo el pensamiento democrático y el espíritu crítico entre los sectores académicos y los dirigentes sociales» y «realizar actividades académicas que pudieran tener repercusión política»¹⁵. El ICHEH funcionaba casi enteramente con apoyo de la fundación alemana Konrad Adenauer. Aunque fue siempre un proyecto pequeño con no más de un funcionario de jornada completa, el ICHEH fue la primera respuesta institucional de intelectuales políticamente comprometidos a las drásticas restricciones al pensamiento y el debate crítico que imponía el régimen. Fue el precursor de los muchos centros privados de investigación que empezarían a aparecer a partir de mediados de los años 70.

En sus inicios, el ICHEH fue primordialmente una empresa editorial. Publicó un ciclo de monografías sobre pensadores democráticos, la doctrina social de la Iglesia y el humanismo cristiano, entre ellos el discurso de aceptación del Premio Nobel de Alexander Solzhenitsyn. Se le recuerda especialmente por una serie de seis publicaciones (conocidas como «los libros amarillos», por su portada) que Genaro Arriagada

¹⁴ El CIDE e ILADES eran jesuitas, en tanto la CPU se identificaba estrechamente con la DC. Dado que desde antes del golpe la FLACSO era una institución regional amparada por un tratado intergubernamental, generalmente se le consideraba un organismo internacional y no una institución privada nacional. Véanse Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, p. 133; y M^a Teresa Lladser, «Los centros independientes de investigación en ciencias sociales en Chile: 1973-1985» (1985, roneo), p. 6.

¹⁵ Entrevista con Mario Zañartu, 19 de diciembre de 1991; otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha. En la fundación del ICHEH participaron además Zañartu, economista jesuita, el analista DC Genaro Arriagada y el economista de la Universidad Católica Ramón Downey.

denominó el primer *samizdat* chileno (8 de marzo de 1991). En esta serie se abordaban temas que la estricta censura y violenta represión que caracterizaron el período impedían debatir abiertamente. Escribían allí –a veces con seudónimo– algunos de los más destacados intelectuales y políticos opositores del país, y circulaban en privado en tirajes de 2.000 ejemplares para evitar la censura gubernamental¹⁶. Quizás si el volumen más conocido sea el primero, publicado en 1976 bajo el título de *Seguridad nacional y bien común*, en que se analizaba la «doctrina de la seguridad nacional» que surgía en las fuerzas armadas de varios países latinoamericanos y que el régimen utilizaba para justificar sus prácticas represivas. Ese volumen tuvo un papel decisivo en alertar a las dirigencias sobre la magnitud de los cambios que se estaban produciendo y en poner de relieve, como señala Brunner (28 de febrero de 1991), algo que se había pasado por alto: el potencial de las fuerzas armadas para influir sobre las ideologías de gobierno en general.

Bajo el alero legal de la Iglesia y con fondos de la Fundación Adenauer, el ICHEH creó, además, el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISEC), entidad que dirigió el intelectual jesuita Mario Zañartu, doctor en economía por la Universidad de Columbia y reconocido buen gestor. Su objetivo principal era contrarrestar la manipulación informativa y las restricciones impuestas por el régimen a la libertad de prensa. Al generar un análisis independiente con datos confiables sobre temas de interés nacional, explica Zañartu, se intentó «mantener vivo el espíritu crítico en las élites sociales y políticas frente a los intentos del oficialismo por desviar la atención de la gente desde los asuntos políticos hacia ganar dinero» (19 de diciembre de 1991).

Para ello se invitó a un equipo de intelectuales y políticos de oposición a elaborar informes periódicos en veinticuatro áreas temáticas, entre ellas educación, salud, economía, agricultura, medios, legislación, comercio exterior, obras públicas y poder judicial. Entre 1975 y 1979 publicaron de quince a veinte informes anuales, cada uno en 600

¹⁶ Cada libro llevaba en la contraportada la inscripción *Ad instar manuscripti*, que distingue a los apuntes de las obras definitivas para fines de censura eclesiástica. Arriagada, sin embargo, dice que la inscripción provino de la teoría de Claudio Orrego –con algo de humor negro– en cuanto a que un latinajo haría que, si llegaba alguien del régimen a incautar ejemplares, lo pensara dos veces. Colaboraban Eduardo Frei, Patricio Aylwin, Manuel Sanhueza, Enzo Faletto, Tomás Moulián, Raúl Atria, Ignacio Balbontín, Francisco Orrego y Genaro Arriagada.

ejemplares impresos a roneo. Fue una operación de bajo perfil, hecha con cuidado y utilizando canales informales de distribución. A pesar de que decían expresamente que su sentido era colaborar con los programas pastorales de la Conferencia Episcopal, los informes además se hacían circular entre un conjunto de dirigentes políticos y profesionales de oposición (casi veinte años después, al retorno de la democracia, asumieron altas funciones varios integrantes de este equipo, entre ellos el propio Patricio Aylwin; Roberto Zahler, presidente del Banco Central; Alejandro Foxley, ministro de hacienda; Andrés Sanfuentes, presidente del Banco del Estado; René Cortázar, ministro del trabajo; José Pablo Arellano, director de presupuesto, y Francisco Cumplido, ministro de justicia).

Otra respuesta a las restricciones a la libertad de expresión que imponía el régimen fue el Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como Grupo de los 24. Conformado en 1978 por políticos y juristas demócratacristianos para debatir los planes del régimen de redactar una nueva constitución, el Grupo rápidamente se convirtió en la única expresión institucionalizada de oposición crítica aparte de la Iglesia. El Grupo se reunía periódicamente a discutir la forma que debería adoptar una nueva constitución y los textos constitucionales que elaboraba el régimen. También se trataban la conveniencia de un sistema parlamentario, de la reforma judicial y de limitar el rol del Estado en la economía, temas que serían álgidos tras el retorno a la democracia diez años después (por haber abordado estos temas de forma temprana, el abogado e intelectual Hugo Frühling califica al Grupo como «un importante paso adelante en lo intelectual»)¹⁷.

La importancia del Grupo de los 24 radica, además, en haber sido una de las primeras instancias de acercamiento entre la Democracia Cristiana y la izquierda. Frühling fue la única figura de izquierda que asistió a la sesión inaugural en el Hotel Las Acacias de Santiago, pero más adelante se integraron representantes de la Izquierda Cristiana, el PS y el MAPU, dándose así inicio al lento proceso de abrir un diálogo con la DC. Este diálogo conduciría a la conformación de la Alianza Democrática en 1983, del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena

¹⁷ Entrevista con Hugo Frühling, 15 de marzo de 1991.

Democracia en 1985 y de la Concertación de trece partidos que triunfó sobre Pinochet en el plebiscito de 1988.

El Grupo de los 24 tuvo otra ventaja: dio a la izquierda, el sector más golpeado por la represión, un foro público desde el cual hacer la crítica del régimen militar, en una época en que la prensa tenía prohibición incluso de citar las declaraciones personales de políticos de izquierda. El Grupo de los 24, en el marco de un debate constitucional formal, permitió a la izquierda recuperar algún grado de voz en los asuntos públicos.

Quizás si el aspecto más interesante del Grupo de los 24 es que constituyó, según Edgardo Boeninger, el primer caso en que figuras de la oposición se valieron de la investigación académica como pretexto para reunirse públicamente a tratar temas políticos (29 de enero de 1991). Pese a que el Grupo fue esencialmente una iniciativa de políticos demócratacristianos (el ex presidente DC Patricio Aylwin estuvo entre los principales gestores), su objetivo expreso era analizar y estudiar temas constitucionales. Mantenía un alto perfil público, emitía declaraciones y buscaba cobertura de prensa para su crítica a la Constitución propuesta por el régimen. Incluyó desde el inicio a intelectuales de centro como Boeninger –el único que no era abogado– y atrajo a destacados intelectuales de izquierda, como los sociólogos Eugenio Tironi y Manuel Antonio Garretón. El Grupo de los 24 fue el primer lugar donde quedó demostrado que políticos e intelectuales de oposición, incluso desde diferentes tradiciones y con distintos objetivos, podían trabajar juntos en el análisis y debate de los temas políticos. Esto sentó un gran precedente para la nueva y compleja relación entre intelectuales y políticos que sería tan habitual –y decisiva– en la estrategia opositora de los siguientes diez años.

El ICHEH, el CISEC y el Grupo de los 24 fueron los primeros en hacer frente a las graves restricciones que el régimen imponía a la libertad política e intelectual. Su labor fue un reflejo de la determinación opositora de hacer política activa, pese al grave riesgo personal que ello entrañaba. Estos centros fueron parte de una larga serie de experimentos –reconvertir algunas instituciones, crear otras, probar con nuevas actividades– que hizo la oposición después del golpe para neutralizar las restricciones impuestas por el régimen a la política, el pensamiento crítico y la libertad de expresión. Demostraron que la oposición interna a Pinochet era posible, al menos a nivel intelectual.

Ahora bien, ninguna de estas incipientes instancias se proponía reemplazar de forma permanente a las instituciones y actividades que el régimen militar había intervenido o proscrito. Fueron medidas provisionarias, pensadas para enfrentar problemas específicos durante un cierto tiempo. Ninguna de ellas podía dar empleo a jornada completa a la profusión de profesionales opositores exonerados de las universidades o del Estado, y ninguna contaba con la infraestructura institucional –seguridad, sueldos, espacio físico, secretarías, intercambio profesional, financiamiento, contactos internacionales– que se requería para mantenerse en el largo plazo. Aunque valientes y eficaces, en esencia fueron experimentos coyunturales que permitieron sentar las bases para lo que vendría después.

Solo los intelectuales opositores, en especial los científicos sociales, lograron generar una solución duradera a las nuevas condiciones. Resueltos a seguir activos en el país y la profesión, eventualmente crearon un nuevo marco institucional para la actividad intelectual: una completa red de centros privados de investigación. Al momento del golpe había en el país solo tres centros de este tipo; hacia 1988 había, según un observador, 49 que empleaban a 664 profesionales, 134 de ellos con posgrados en Europa o Estados Unidos. Estos centros publicaban más de veinte revistas o boletines y generaban cientos de publicaciones académicas. En abierto contraste, al año 1988 había apenas 200 científicos sociales haciendo investigación en las universidades chilenas¹⁸.

Más que un caso especial, estos centros formaron parte de un proceso más general de fundación de instituciones de investigación en ciencias sociales que en América del Sur tomó especial fuerza hacia fines de los años 70. Estas instituciones, escasas antes de 1965, hacia 1990 se habían convertido en el centro neurálgico de la investigación en ciencias sociales en la mayor parte de América Latina. Muchas las fundaron académicos exonerados de las universidades y del aparato de Estado por los gobiernos autoritarios que dominaron la región después de 1965; otras, en tanto, se crearon en respuesta a los obstáculos

¹⁸ María Teresa Lladser, «*The Emergence of Social Science Research Centers in Chile under Military Rule*», *UC/Berkeley Center for Studies in Higher Education Occasional Papers* No. 59 (Berkeley: Center for Studies in Higher Education, 1988), pp. 11, 20.

burocráticos que imponían las universidades y a la falta de capacidad para crear condiciones conducentes a la investigación de calidad¹⁹.

Dado que hasta el golpe militar la investigación chilena en ciencias sociales había estado firmemente ligada a la universidad, estas instituciones marcaron un quiebre radical con el pasado. La mayoría no tenía vínculo alguno con las instituciones intelectuales tradicionales –ni siquiera con las universidades privadas– y en primera instancia debieron conseguir personería jurídica a través de la Iglesia u otras instituciones. En sus inicios no se les tomaba en cuenta en los medios, se les excluía de las universidades y las librerías se negaban a vender sus publicaciones. La totalidad de su financiamiento provenía de agencias de cooperación y donantes extranjeros que buscaban aliviar de alguna forma la represión del régimen²⁰. Su condición de entidades de segunda categoría y la posibilidad de ser objeto de la persecución gubernamental las hizo mantener un muy bajo perfil.

La Iglesia católica jugó un rol protagónico en la conformación de estos centros. En efecto, a fines de 1975, y a instancias del arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva Henríquez, la Iglesia creó la Academia de Humanismo Cristiano con el objeto de dar cobertura institucional a los académicos exonerados de las instituciones tradicionales. El cardenal Silva Henríquez describió la labor de la Academia como «trabajo intelectual en fomento de la investigación, desarrollo y comunicación de las ciencias sociales y humanas»²¹ y designó un directorio pluralista en que figuraban ex rectores universitarios, destacados académicos y figuras eclesiásticas –entre ellas Edgardo Boeninger, Fernando Monckeberg, Enrique D’Etigny y el Pbro. Raúl Hasbún– que, por su evidente distancia con la izquierda, no causarían molestia en las autoridades militares²².

¹⁹ Brunner y Barrios, en *Inquisición, mercado y filantropía*, examinan el surgimiento de este tipo de centro en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Daniel Levy, en *Private Research Centers in Latin America* (en preparación), analiza la aparición de estos centros en toda América Latina.

²⁰ Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, p. 138.

²¹ María Teresa Lladser, «Breve historia de la Academia de Humanismo Cristiano, 1975-1988» (1988, roneo), p. 1.

²² Entrevista con Duncan Livingston, 14 de enero de 1992. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

El apoyo de la Iglesia fue decisivo. Permitió conseguir una personería jurídica que el gobierno de otra manera no habría concedido y disponer de la facultad de hacer reuniones y publicar documentos. Hacía ya varios años que las instituciones privadas del país no podían reunirse en público sin permiso estatal, a lo cual la Iglesia había respondido que, así como los diplomáticos no están sujetos a los dictados de la autoridad local, su vocación espiritual y rango jurídico la eximían de tal norma. Esto permitió que las instituciones vinculadas orgánicamente a la Iglesia, como la Academia, pudieran organizar actos públicos que a otras instituciones privadas les estaban vedados. El prestigio y autoridad de la Iglesia, y muy especialmente la del cardenal Silva Henríquez, aportaron además un grado importante de protección política.

El cardenal no intentó obligar a la Academia a ceñirse al dogma o los programas de la Iglesia. Duncan Livingston, secretario ejecutivo de la Academia de Humanismo Cristiano en sus primeros años, anota que la nueva institución no tenía el sentido de ser «un instrumento para promover objetivos propios [de la Iglesia], sino simplemente de ser un espacio donde los chilenos perseguidos o que habrían corrido peligro pudieran desarrollar actividades intelectuales que se estimaban valiosas en sí mismas» (14 de enero de 1992). Esta visión, coherente con el respeto histórico que existía en Chile por la actividad intelectual, hizo que la Iglesia se abstuviera de intervenir en los contenidos programáticos de la Academia y que tolerase la presencia de un abanico notablemente amplio de puntos de vista.

Aun así, los grupos integrados a la Academia entendían que había ciertos límites. Debido a las posibles represalias, en general se desaconsejaba hacer activismo político. Tampoco se podía atacar abiertamente los valores de la Iglesia, lo que podría restar apoyo entre los obispos a la postura del cardenal. La intelectualidad adoptó, entonces, un principio operativo que buscaba equilibrar la necesidad de protección con el temor al control: «Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre» (Livingston, 14 de enero de 1992). El resultado fue un acuerdo tácito en que la Iglesia respetaba la libertad intelectual y los intelectuales de la Academia respetaban los valores de la Iglesia²³.

²³ Una notable excepción fue el círculo de estudios de la mujer, suprimido en 1983 por Juan Francisco Fresno Larraín –sucesor del Cardenal Silva Henríquez– debido a sus posturas sobre aborto y sexualidad.

La Academia constituyó, además, otro paso en el acercamiento entre la Democracia Cristiana y la izquierda. El impulso inicial para su creación provino de dos sectores políticos diferentes: académicos de centro como Ricardo Jordán y el sacerdote jesuita Renato Poblete, encabezados por Edgardo Boeninger, ex rector de la Universidad de Chile; y académicos de centroizquierda como Humberto Vega y Manuel Antonio Garretón, encabezados por Duncan Livingston, ex vicerrector académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Ambos sectores valoraban por igual la investigación académica y la libertad intelectual, aunque tenían visiones políticas muy diferentes. Esto los convirtió a veces en colaboradores reticentes, especialmente a medida que la Academia crecía en tamaño e importancia. Esta alianza académica, sin embargo, abrió paso al diálogo político. Un ejemplo temprano fue un seminario semi-clandestino de dos meses de duración orientado expresamente a promover el debate entre líderes demócratacristianos y de izquierda, en especial del MAPU. Este seminario fue uno de los primeros debates sistemáticos post-golpe entre el centro y la izquierda y, según informes, habría permitido importantes avances en el entendimiento entre ambos sectores²⁴. De manera más general, los múltiples programas de la Academia de Humanismo Cristiano dieron a intelectuales opositores de muy distintas vertientes políticas la oportunidad de aprender a trabajar juntos.

La Academia partió con tres proyectos y seis investigadores financiados por la Fundación Ford y llegó a tener seis programas de investigación y dos instituciones semi-autónomas que empleaban a más de 300 personas, dos terceras partes investigadores. En estos programas se hacía investigación en derechos humanos, desarrollo agrario, economía del trabajo, educación, y actitudes y desarrollo político, generalmente a cargo de profesionales que por razones políticas tenían prohibida la docencia universitaria²⁵, a pesar de ser muchos de ellos los

²⁴ Participaron Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, Germán Correa, Manuel Antonio Garretón, Eduardo Palma, Claudio Orrego y Tomás Moulián (Livingston, 14 de enero de 1992). El MAPU era considerado el segmento más intelectual de la izquierda chilena; su dirigencia jugó posteriormente un papel fundamental en aportar un elemento explícitamente democrático al PS renovado que surgió a principios de los 80.

²⁵ María Teresa Lladser, «La investigación en las ciencias sociales en Chile: su desarrollo en los centros privados, 1973-1988», en Taller de Cooperación al Desarrollo, ed., *Una puerta que se abre: Los organismos no gubernamentales en la cooperación al desarrollo*

mejores especialistas del país en sus respectivas áreas. En 1979, cuando el régimen se retiró del tratado internacional que amparaba a la FLACSO, la Academia, tras un largo debate, le consiguió la personería jurídica que requería para seguir operando²⁶. Cuando retornaron del exilio en México, los chilenos que trabajaban en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), lo hicieron bajo el alero legal e institucional de la Academia. Hacia 1988 los afiliados a la Academia habían publicado casi 150 libros y constituían la mayor concentración de científicos sociales opositores del país²⁷. La Academia había pasado de ser un pequeño grupo de defensa de la libertad académica a constituir el eje del debate y discusión opositora en materia social.

Más aún, la Academia dio estímulo y contexto a la actividad pública en un momento en que la intelectualidad opositora estaba proscrita de la vida pública. «Ciencias sociales y realidad nacional», seminario realizado en octubre de 1977, constituyó la primera ocasión post-golpe en que académicos disidentes se reunían en público a tratar el acontecer nacional. A partir de 1978 la Academia organizó un ciclo de «círculos de estudio» sobre temas profesionales (salud, economía, periodismo, educación, filosofía, agricultura, etcétera), que convocaban periódicamente a muchos de los principales especialistas de oposición a realizar crítica y debate público en sus respectivas áreas. Dado que tendían a ser expresión de los principales grupos dedicados a los temas académicos y públicos del país²⁸, estos círculos aportaron un espacio

(Santiago: Taller de Cooperación al Desarrollo, 1989), p. 224. Participaban el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), el Grupo de Estudios Agrorregionales (GEA), el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA), el Programa de Economía del Trabajo (PET), el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), el Programa de Seguimiento de las Políticas Exteriores Latinoamericanas (PROSPEL), el Programa de Investigación en Derechos Humanos (PDH), el Círculo sobre la Condición de la Mujer, la FLACSO y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET).

²⁶ El Directorio de la Academia estaba dominado por la Iglesia y la Democracia Cristiana. Como reflejo de las fuertes divisiones que habían cruzado la política chilena durante décadas, algunos directores se resistieron a incorporar a la FLACSO, argumentando que eran ateos y la mayoría izquierdistas. La visión y el ecumenismo del cardenal Silva Henríquez parecen haber primado para convencer a los detractores de deponer sus objeciones.

²⁷ Lladser, «La investigación en las ciencias sociales», p. 225.

²⁸ Entre ellos la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), PET, PIIE, CIDE, FLACSO, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la

común y una voz pública que de otro modo no habrían existido, y a poco andar comenzaron a asumir las funciones que habían dejado de realizar los colegios profesionales, antes conocidos por su activismo. De hecho, de algunos de estos círculos de estudio (en medicina, educación, sociología y arquitectura, por ejemplo), surgió la dirigencia gremial que asumió después de que el gobierno militar levantara las restricciones que afectaban a los colegios profesionales²⁹. Al retorno de la democracia más de diez años después, muchos de los participantes asumieron altos cargos de gobierno.

La Iglesia no fue el único espacio que facilitó la aparición de centros privados de investigación. A pesar de que las cosas eran más difíciles fuera del alero institucional de la Iglesia, empezaron a surgir otras instancias completamente autónomas. Durante largos años, el gobierno se negó a conceder personería jurídica a instituciones creadas por académicos de oposición, obligándolas a operar de manera informal o a constituirse como sociedades comerciales en lugar de instituciones educativas (lo que afectó a la cooperación extranjera, la que tenía problemas para financiar a entidades sin existencia legal y prefería a los entes sin fines de lucro). Dado que los centros autónomos estaban sujetos a todas las restricciones impuestas por la dictadura y carecían de la protección política que podía otorgar la Iglesia, su aparición fue un proceso lento que recién tomó impulso en los años 80.

Uno de los primeros y más importantes fue la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), creada en 1976 por un grupo de brillantes economistas encabezados por Alejandro Foxley. Muchos de ellos habían trabajado juntos a partir de 1970 en el Centro de Estudios de Planificación Nacional (CEPLAN) de la Universidad Católica, donde tras el golpe fueron aislados y hostigados por las autoridades universitarias. Sin atraer la atención del régimen, primero se las ingenieron para conseguir personería jurídica como entidad sin fines de lucro; luego, con ayuda de la cooperación extranjera, establecieron CIEPLAN, centro de investigación económica que con el

Vicaría de la Solidaridad, parte del cuerpo docente de las escuelas de medicina de las universidades Católica y de Chile, el Grupo de los 24 y profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

²⁹ Lladser, «Breve Historia», p. 4.

tiempo se convertiría en uno de los principales de América Latina³⁰. Las precarias condiciones en que subsistían los centros opositores llevó a CIEPLAN a conformar un comité asesor internacional compuesto por figuras de prestigio que pudieran prestar algún grado de protección política. Por su parte, el ex ministro de hacienda colombiano Rodrigo Botero les ayudó a obtener personería jurídica en ese país, con la idea de tener donde refugiarse en caso de verse obligados a salir de Chile.

Otro de los pioneros fue el Centro de Estudios Económicos y Sociales VECTOR, fundado por elementos del Partido Socialista con el propósito explícito de analizar la problemática política y social y promover un diálogo amplio con todo el espectro opositor. VECTOR, más conocido por sus conferencias que por su trabajo de investigación, fue uno de los primeros esfuerzos sistemáticos por congregar a políticos y científicos sociales. Fue, además, el único centro académico en ser blanco de violencia grave por parte del régimen: en 1984 VECTOR fue allanado, sus directores detenidos y uno de sus investigadores relegado a un poblado del sur del país³¹.

Durante los años 80 se abrieron otros centros autónomos –entre ellos el Centro de Estudios Sociales y Educación (SUR) y el Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional (CLEPI)– que representaban a una nueva generación de académicos que volvía del exilio o de hacer posgrados en el extranjero. Algunos de ellos se desempeñaron temporalmente en centros establecidos mientras organizaban nuevas instituciones. Otro de los centros que más tarde tendría un papel trascendental en promover el diálogo al interior de la oposición fue el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), fundado en 1980 por el líder demócratacristiano y ex canciller Gabriel Valdés Subercaseaux. En suma, a mediados de los 80, los centros privados de investigación se habían convertido en un factor importante en la vida académica del país.

Comparados con los que surgían en el resto de América Latina, los centros privados chilenos tuvieron varias características distintivas. Como acotan Brunner y Barrios, fueron más numerosos y tendían a

³⁰ Con aportes iniciales de la Fundación Ford, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PRE-ALC) de la OIT.

³¹ Lladser, «La investigación en las ciencias sociales», p. 233.

centrarse, más que en una disciplina completa, en temáticas específicas –mujer, economía del trabajo, desarrollo campesino– con una clara perspectiva «político-cultural». Como reflejo del peso histórico de la ideología en las ciencias sociales y de la tendencia de las instituciones del país a organizarse en subculturas políticas, cada cual tendía además a representar a un determinado –y relativamente cohesionado– punto de vista político³². Los nuevos centros de estudio, tal como las facultades y programas universitarios antes del golpe, tendían más a representar posturas políticas únicas y relativamente cohesionadas que a integrar a todo el espectro político opositor.

Los centros chilenos tenían otras características destacables, en particular un estilo abierto de funcionamiento que facilitaba la relación con sectores no académicos, en especial los políticos. De hecho, es muy posible que precisamente el aislamiento y marginalización que afectaban a la oposición hayan fomentado esta apertura. Todos los sectores opositores compartían una sensación de fracaso y vulnerabilidad y la necesidad de entender las nuevas condiciones. Los partidos vieron a los centros de cierta forma como propios y les dieron credibilidad, lo que hizo desaparecer al menos una parte de la natural distancia entre académicos y actores sociales y posibilitó el establecimiento de nuevas relaciones. Como refiere Sergio Bitar, «No estamos hablando de ONGs en que diez investigadores se reunían a hablar entre ellos... [Había] una gran interacción con sectores más amplios, y especialmente con los partidos... Fueron catalizadores, convocantes» (16 de enero de 1991). Es decir, a pesar de su solvencia académica, los centros privados de investigación no eran torres de marfil.

La apertura fue resultado además de integrar a gente con experiencia e inquietudes políticas. Por ejemplo, cuando Salvador Allende fue electo presidente, el fundador de CIEPLAN, Alejandro Foxley, dejó la Oficina de Planificación Nacional y asumió como investigador en la Universidad Católica. Humberto Vega, antes de fundar el Programa de Economía del Trabajo (PET) en la Academia de Humanismo Cristiano, había dirigido la Oficina de Presupuesto del gobierno de Allende. Tomás Moulián, sociólogo de FLACSO, era uno de los fundadores del MAPU. Javier Martínez, investigador de SUR, había sido secretario

³² Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, pp. 136-137.

regional del MAPU en Valparaíso y director del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Católica de esa ciudad. La extraordinaria politización de los años 60 había agudizado la sensibilidad política de la mayoría de los académicos y llevó a muchos de ellos, especialmente a los científicos sociales, a militar de forma activa. Después del golpe, el que la oposición estuviera proscrita de toda actividad política y estatal obligó a muchos políticos con formación académica a buscar empleo en la academia. Así, los centros se convirtieron en una potente y excepcional amalgama de académicos con fuertes inquietudes políticas y de políticos con sólida formación académica.

Las características de sus integrantes llevaron a los centros a orientar su labor hacia los problemas del mundo real. Como temas de investigación se privilegiaron las causas del golpe, el carácter del estado autoritario y los cambios que el nuevo régimen inducía en la estructura y composición social. Se analizaron en gran detalle las políticas sectoriales, en especial el programa económico y social del gobierno, y se desarrollaron una serie de especialidades de investigación nuevas en el país, entre ellas relaciones internacionales, movimientos sociales urbanos, teoría política, relaciones cívico-militares, estructura social agraria, sociología de la cultura y situación de la mujer³³.

Con el tiempo, los centros dirigieron su atención hacia la democracia y el problema de la transición democrática. Este interés, como apuntó Lechner, no estuvo exento de ironía: «Paradojalmente, la ciencia política chilena, que se establece como ciencia empírica durante un régimen democrático, hace de la democracia el eje central de su reflexión recién bajo la dictadura». Hasta el golpe, la mayoría de los científicos sociales se ocupaba del desarrollo social, no del desarrollo político. Fue solo después de que la Junta Militar proscribió la política y los políticos que los científicos sociales chilenos empezaron a tomar la política en serio. El resultado fue un notable corpus de investigación que abarcó desde teoría democrática y partidos políticos a sistemas electorales y el papel de la sociedad civil en democracia. De hecho, la común preocupación por la democracia dio origen a una amplia red de analistas de dentro y fuera de América Latina que intercambiaban

³³ Brunner y Barrios, en *Inquisición, mercado y filantropía*, pp. 201-204, describen las problemáticas que concitaban la atención de los centros de cuatro países, entre ellos Chile. Véase también Lladser, «La investigación en las ciencias sociales», pp. 232-236.

información y análisis y se reunían con frecuencia a discutir experiencias y estrategias de transición. Hubo instituciones, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), organismo con sede en Buenos Aires, que promovieron expresamente este tipo de actividades; otras surgieron de los contactos que los científicos sociales chilenos desarrollaron durante sus estudios en el extranjero o de su participación en proyectos multinacionales de investigación. El extraordinario caudal de conocimiento y experiencias que surgió de estos intercambios se transmitió gradualmente a los actores políticos en conversaciones informales, reuniones y publicaciones³⁴.

A pesar de que todas estas instituciones fueron creadas por científicos sociales altamente calificados y de que los analistas tienden a referirse a ellas como «centros de pensamiento», en realidad tuvieron un carácter muy diverso. Algunas primordialmente académicas se dedicaron a la investigación básica y a publicar en prestigiosas revistas internacionales; con un enfoque más aplicado, otras se sirvieron de la investigación para indagar en temáticas específicas y difundir sus conclusiones de formas más accesibles a las instancias relevantes. Otras más entregaban información práctica, asistencia técnica y asesoría política al movimiento social. Hacia fines de los años 80, muchos de estos centros contaban con programas tanto de acción como de investigación.

Prácticamente todos desarrollaron además un amplio abanico de contactos con actores sociales. Impulsada por los grandes cambios que se estaban produciendo en la sociedad, a mediados de los años 70 la intelectualidad, muchas veces bajo el amparo de la Iglesia, se empezó a abrir hacia sectores universitarios, sindicales, profesionales y ciudadanos. En algunos casos esto tomó la forma de publicaciones y encuentros especialmente pensados para los actores sociales; en otros se emprendieron proyectos de investigación-acción para dar solución práctica a los problemas de la pobreza urbana. En otros más se hizo investigación participativa, movilizando a representantes de sectores de mujeres o campesinos a analizar sus problemas y proponer soluciones amplias³⁵.

³⁴ Lechner, «Las condiciones políticas», p. 3. Lechner, pp. 12-14, identifica las cuatro líneas de investigación (descriptiva, histórica, teórico-normativa y políticas públicas) que caracterizaron los trabajos sobre democracia en este período.

³⁵ Véase Lladser, «La investigación en las ciencias sociales», pp. 234-235.

Estos esfuerzos complementaban la labor de un conjunto mucho más amplio de organismos voluntarios no académicos que trabajaban con sectores populares³⁶. Así, aunque su génesis estuvo en la investigación, estos proyectos devinieron en canales de entrega de asistencia técnica, información y capacitación.

Además, se convirtieron en una red amplia de comunicación social. Pese a que es difícil dimensionar su impacto, los «diez años de trabajo invisible» que estos grupos llevaron a cabo fueron centrales en la revitalización de la sociedad civil chilena. Este trabajo se hizo, según relata Brunner, «de forma prácticamente silenciosa, invisible y nada de espectacular. Pero estableció la infraestructura comunicacional, ideológica, cultural y, en parte, política que después permitió que una sociedad civil completa se levantara de nuevo con relativa fuerza... Sin esos diez años de labor, el resurgimiento probablemente habría sido más débil, más acotado y más lento» (28 de febrero de 1991).

La intelectualidad opositora recibió, además, un fuerte apoyo de parte de académicos e instituciones extranjeras. Durante los años 70 y 80 periódicamente viajaban a Chile académicos de Europa, Canadá y Estados Unidos que traían información, ideas y estímulo. Desde universidades tan diversas como Stanford, Estocolmo, Notre Dame, Duke, California-San Diego y Oxford, se les ofrecían becas de posgrado, pasantías y oportunidades para publicar. Gracias a convenios con universidades y centros de investigación extranjeros, durante toda la dictadura siempre estuvieron llegando los últimos adelantos en ciencias sociales. Otras entidades fuera del ámbito universitario, como el Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos de Washington y el Centro para las Relaciones Interamericanas de Nueva York, organizaron conferencias y charlas que dieron a los académicos chilenos la oportunidad de viajar y departir con colegas extranjeros. Estas actividades –de magnitud y diversidad extraordinarias– fueron un catalizador y un refugio externo para la reflexión y el desarrollo de contactos que permitieron a la intelectualidad chilena desarrollar un nuevo proyecto y un nuevo *ethos*. Pese a estar marginada en su propio país, la intelectualidad opositora chilena siguió firmemente vinculada a las grandes corrientes

³⁶ Brian Loveman, «Private Development Organizations and International Cooperation: Chile 1973-1990» (1991, roneo).

académicas, gracias en parte a los decididos esfuerzos del mundo académico extranjero.

Es más, prácticamente todo su financiamiento provenía del extranjero: en efecto, durante los dieciséis años de dictadura militar, los centros de investigación chilenos recibieron aportes de un amplio espectro de donantes públicos y privados de Europa y América del Norte. Este proceso que comenzó con ayuda de emergencia para científicos sociales desplazados por el golpe militar, devino unos años después en el decisivo apoyo que se dio a los centros privados, y se convirtió en los años 80 en una formidable conjunción de asistencia programática e institucional. La cooperación extranjera permitió a los científicos sociales disidentes mantenerse en su profesión sin tener que abandonar sus intereses académicos o emigrar en busca de empleo. La cooperación financió, además, centenares de becas de magíster y doctorado en Europa y América del Norte y entregó los aportes iniciales que ayudaron a concretar proyectos que luego se convertirían en una vasta red de centros privados de investigación. Durante una década o más, período en que la intelectualidad opositora no contó con fuentes de financiamiento internas³⁷, fue la cooperación la que aportó la asistencia necesaria para crecer y producir³⁸. Es decir, sin los casi veinte años de activos aportes de la cooperación extranjera, es muy probable que estos centros de investigación no hubiesen existido.

Por cierto, cada donante tenía sus propias motivaciones. Algunos apuntaban simplemente a reforzar y mantener la investigación en las ciencias sociales, en el supuesto de que la investigación y formación de calidad serían más adelante la base de las políticas públicas, aunque no fuese posible predecir el momento y forma de su posible implementación. Con una visión más instrumental, otros optaron por financiar únicamente aquellos proyectos de investigación que –a su juicio–

³⁷ El gobierno militar, cada vez que pudo, intentó disuadir a las agencias de ayuda exterior de financiar a los centros independientes. Hay observadores que estiman que estas presiones explican por qué durante la dictadura el Banco Mundial financió investigación en la Universidad Católica, pero no en centros privados.

³⁸ La mejor reseña sobre la ayuda exterior a Chile después del golpe está en Alan Angell, «International Support for the Chilean Opposition, 1975-1989: Political Parties and the Role of Exiles», en Laurence Whitehead, *International Aspects of the Transition to Democracy* (en preparación). Véanse también Taller de Cooperación al Desarrollo, *Una puerta que se abre*; y Puryear, «Higher Education».

ayudaban a resolver problemas concretos e inmediatos. Otros, por su parte, tuvieron motivos políticos más amplios y apuntaron a mantener vivo el pensamiento crítico e independiente durante una época de dictadura y a crear capacidad técnica para un futuro régimen democrático. La mayoría estuvo motivada por una conjunción de estos factores. Convergió así un grupo amplio de donantes que, indignados por la represión que ejercía el régimen de Pinochet, se pusieron a disposición para apoyar la investigación crítica y de calidad que producían connotados científicos sociales chilenos.

Se destacaron entre ellos la Fundación Ford, el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC) de Canadá y la Agencia Sueca de Cooperación para la Investigación en Países en Desarrollo (SAREC). En los años 70 la Fundación Ford apoyó la puesta en marcha de CIEPLAN, la Academia de Humanismo Cristiano, el PET, el PIIE y varios otros centros, y siguió financiándolos entre 1980 y 1988 a razón de un promedio superior a US\$800.000 al año. Asimismo, durante parte de esta época, Chile fue el mayor receptor latinoamericano de la ayuda otorgada por IDRC y SAREC.

Entre los donantes que hicieron aportes de menor cuantía pero igualmente considerables, se cuentan la Fundación Interamericana, la Fundación Tinker, diversos gobiernos europeos y la Comunidad Económica Europea. Desde Francia, el gobierno de Mitterrand hizo un importante aporte al trabajo que hacía el CERC en la Academia de Humanismo Cristiano. El gobierno holandés apoyó a diversas ONGs chilenas, muchas de ellas dedicadas a la investigación. Las fundaciones políticas alemanas, en especial la Friedrich Ebert, la Friedrich Naumann y la Konrad Adenauer, ocasionalmente aportaron a proyectos de investigación como parte de sus programas en Chile³⁹. En suma, incluso un cálculo conservador indica que los centros privados chilenos recibieron fondos extranjeros con promedios anuales de US\$1 millón entre 1975 y 1980 y de \$3 millones entre 1980 y 1988.

El masivo apoyo extranjero recibido tras el golpe por los centros privados de investigación, no era nuevo; en cierto sentido fue la sucesión lógica de la ayuda concedida en los años 60, época en que un grupo amplio de donantes extranjeros había realizado un esfuerzo

³⁹ Michael Pinto-Duschinsky, «Foreign Political Aid: The German Political Foundations and Their U.S. Counterparts», *International Affairs* 67 (1991): p. 56.

concertado y sostenido por fortalecer la docencia y la investigación en ciencias sociales. Muchos de los científicos sociales que tras el golpe crearon y motorizaron estos centros adquirieron posgrados y experiencia en investigación gracias a estos programas. De hecho, a varios donantes que llevaban años en Chile les indignó ver cómo el régimen militar desmantelaba programas académicos justo cuando empezaban a rendir frutos. Es decir, los organismos donantes recurrieron a un capital humano que ya existía y con el que mantenían programas y relaciones previas. Este precedente histórico –un esfuerzo amplio y prolongado de la cooperación extranjera por modernizar las ciencias sociales en un país en desarrollo– facilitó la ayuda que a fines de los años 70 y durante los 80 recibieron los centros privados de investigación desde el exterior.

Para los centros de investigación emergentes, la necesidad de captar recursos en un mercado competitivo e internacional tuvo importantes implicancias. En general, la cooperación extranjera prefería la ciencia a la ideología y los temas tecnocráticos a la teoría, y además acostumbraba a condicionar el financiamiento a una evaluación del trabajo realizado. En consecuencia, había que justificar los proyectos en nuevos términos, hacerlos bien, terminarlos dentro de plazo y luego publicarlos, requisitos todos que dieron especial relevancia a las normas internacionales. Como dice Brunner, se vieron sometidos a «las tres fórmulas anglosajonas: ‘publicar o morir’, ‘seriedad’ y ‘rendir cuentas’»⁴⁰. La academia chilena, como la economía, se abrió de golpe a la competencia internacional.

Esto hizo que la calidad de la producción intelectual de los centros fuese en general de buena a muy buena, a veces lo mejor que se hacía en el país y en ocasiones en toda la región. Pero había una diferencia: el acento en la ideología y la revolución, tan habitual en las ciencias sociales chilenas de los años 60, disminuyó a medida que los académicos empezaron a reevaluar sus enfoques históricos y a reemplazarlos por otros más puramente científicos o directamente orientados a las políticas públicas. El análisis se hizo más desapasionado, especializado y empírico y hubo un retorno a los valores que en los años 60 acompañaron la institucionalización de la investigación científica en

⁴⁰ Brunner, «La intelligentsia», p. 186.

las universidades chilenas. El resultado fue un nuevo estilo de hacer ciencia social, más autónomo de la ideología política. Como reflexionó un observador: «Los intelectuales pasaron de ser ideólogos a ser analistas»⁴¹.

Parte de este giro se debió a que los centros dependían casi por entero de donantes que preferían los estudios empíricos y aplicados a las obras de teoría o ideología, pero más importante aún fue el trauma causado por el quiebre democrático y la represión del régimen militar. Anota Lechner: «El golpe de 1973 significa una experiencia existencial que trastoca la vida radicalmente. Habíamos pensado que nuestros debates no eran más que palabras, y descubrimos horrorizados que la gente es delatada, torturada, matada por sus ideas. Conocemos el miedo a la violencia y sufrimos la impotencia ante su arbitrariedad e impunidad. El conflicto político-ideológico ha sido reemplazado por la guerra y experimentamos la pérdida de seguridad; no solo de la seguridad física y económica, sino también la pérdida de certezas, de referentes simbólicos, de arraigo social y potencia colectiva, o sea, de todo aquel mundo vital, incluyendo el orden democrático, que tomábamos por natural»⁴². Enfrentada al dramático fracaso de los viejos puntos de vista, la intelectualidad opositora se dio a la tarea de buscar nuevas opciones.

La dinámica de los centros no era igual a la del Chile de antes del golpe. En palabras de Genaro Arriagada, se pasó de la universidad tradicional, «donde tú podías estar cuatro años escribiendo un libro o un año haciendo un trabajo de veinticinco páginas», a «la más cruel de las competencias de mercado por los proyectos... Tenías que tener un rigor implacable para producir, porque habían obligaciones que cumplir con la Konrad Adenauer, la Ford, la Cepal, la universidad de no sé cuánto, y eso hizo que el mundo intelectual chileno se hiciera brutalmente productivo, porque tenías que pasar cuatro meses haciendo el proyecto tal y certificarle a la fundación cual que lo habías hecho

⁴¹ Entrevista con Enrique Barros, 29 de febrero de 1991. El interés de la cooperación extranjera en la relevancia social e impacto inmediato casi no dejaba financiamiento para estudios teóricos serios, preservando así, según Lechner, «una división perversa entre producción teórica (en el norte) y aplicación empírica (en el sur)». Véase Lechner, «Las condiciones políticas», p. 18.

⁴² Lechner, «Las condiciones políticas», p. 9.

porque tenía que cuadrar con tal otra cosa, y después irte por tres meses a Canadá y después volver y después... y así sucesivamente» (8 de marzo de 1991). Esto hizo que empezaran a aparecer nuevos criterios de productividad.

Los aspectos administrativos eran también distintos a los vigentes antes del golpe. Obligados a maximizar fondos siempre escasos, los centros se hicieron más frugales y eficientes y experimentaron con nuevos métodos de organización, administración, recopilación de datos, computación y edición. La contratación pasó a depender de la capacidad, la calificación y la productividad; el sueldo y la estabilidad laboral de que hubiera financiamiento, y cobró mayor importancia la evaluación de resultados. Prosigue Arriagada: «A diferencia de lo que ocurría en la Universidad de Chile, donde si tú tenías un proyecto podías tomarte tres semanas, tres meses o tres años, porque la universidad, a final de cuentas, siempre te iba a pagar –tú siempre ibas a fin de mes y cobrabas tu cheque–, a diferencia de eso aquí te decían: ‘Mira, tenemos US\$4.000 para este proyecto y calculamos que te podemos dar US\$800 por cuatro meses y eso nos deja US\$800 para gastos fijos, ¿te interesan esos cuatro meses?’. Tú sabías que al final de esos cuatro meses la plata se acababa y si te atrasabas tenías dos opciones: no entregar el trabajo, en cuyo caso esa fuente de financiamiento se cerraría para siempre, o entregarlo, en cuyo caso estarían dispuestos a hacer otro proyecto. La productividad de los científicos sociales chilenos bajo estas leyes implacables aumentó a niveles increíbles» (8 de marzo de 1991).

Con el tiempo, los centros privados de investigación trascendieron sus orígenes en la purga de las grandes instituciones académicas que había hecho la Junta Militar, para convertirse en una infraestructura académica de nuevo tipo que, pese a estar fuera del circuito oficial, podía suplir las necesidades profesionales básicas de los intelectuales opositores: marco institucional, fondos, colegas, reconocimiento y acceso a organismos locales. También se convirtieron en el nexo con el mundo intelectual extranjero, muchos de cuyos integrantes no estaban dispuestos a colaborar con las universidades o el gobierno chileno. Los centros eran extraordinariamente productivos, generando un torrente de publicaciones académicas, seminarios, cursillos de formación y consultorías internacionales. Se convirtieron en el segmento más dinámico de las ciencias sociales del país; en definitiva, en una suerte de universidad informal.

Durante la década posterior al golpe militar, los centros pasaron a ser, además, el centro neurálgico del pensamiento crítico independiente chileno. Habitualmente se les denominaba, totalmente en serio, como «las catacumbas», evocando la imagen de lugares oscuros y secretos donde los perseguidos trataban de preservar sus convicciones⁴³. Eran «espacios de libertad» donde los intelectuales marginados de las universidades, del gobierno y de los medios informativos podían reunirse, trabajar e intercambiar ideas. Aquí se preservó la diversidad intelectual, se estimuló la crítica y se le dio trabajo a una generación entera de brillantes pensadores que de otra forma habrían tenido que emigrar o abandonar la academia. Desterrado del epicentro, el mundo intelectual opositor se lo echó al hombro y se lo llevó consigo.

La transformación del pensamiento disidente

Además de preservar el pensamiento opositor, la intelectualidad de los centros privados de investigación empezó a transformarlo. En la política chilena, el énfasis había estado históricamente puesto en la ideología, lo que hizo que el golpe desencadenara una crisis intelectual y política que representaba no solo el fracaso de los intereses, sino también de las ideas. Políticos e intelectuales necesitaban entender por qué sus ideas habían fracasado y lo que ello representaba para el futuro.

Los intelectuales estaban especialmente capacitados para responder estas preguntas. Disponían de las instituciones y los fondos necesarios para investigar, y su especialidad eran la ideología y el análisis político. El trauma del fracaso y la represión les había golpeado duramente, generando un sentido colectivo de responsabilidad y un profundo examen de conciencia. Impactados por el quiebre de la democracia y la represión que sobrevino, querían entender qué había pasado, por qué, y qué significaba para el futuro. Pero tampoco tenían muchas alternativas. La política era ilegal, la docencia universitaria impensable, y criticar al nuevo régimen peligroso. Una de las pocas opciones que les quedaban era hacer mutis por el foro y dedicarse a

⁴³ Brunner recuerda haber recibido a principios de los años 80 una carta de un obispo que comparaba el trabajo de la FLACSO con el de los primeros cristianos que defendían las ideas y valores que tenían por sagrados (28 de febrero de 1991).

investigar. Así fue que empezaron a examinar desde una perspectiva crítica el pensamiento opositor que estaban preservando.

Al evaluar el impacto de la intelectualidad, cabe recordar las restricciones a la actividad política que el régimen de Pinochet había impuesto. Los partidos fueron proscritos inmediatamente después del golpe, y luego disueltos sumariamente. Durante los siguientes diez años, todos los partidos –de izquierda, centro y derecha– estuvieron fuera de la ley. No podían reunirse, tener bienes, elegir dirigentes ni hacer declaraciones.

La respuesta de algunos partidos, en especial la DC y los comunistas, fue pasar a la clandestinidad. Pero era una estrategia peligrosa, considerando el fuerte aparato represivo y la determinación del régimen de reprimir la política tradicional. Los políticos opositores eran habitualmente sometidos a hostigamiento, detención y exilio. Para la gente de izquierda, la tortura, e incluso la muerte, eran una posibilidad cierta. Los políticos solo podían hacer actividades de forma ilegal y corriendo grandes riesgos. Así, durante el resto de la década de los 70, la actividad política formal quedó prácticamente paralizada. No había debate opositor sobre estrategia política; solo había disidencia⁴⁴.

Las condiciones que afrontaban los intelectuales disidentes eran considerablemente mejores. Su profesión no estaba declarada fuera de la ley y, gracias a la ayuda exterior, contaban con instituciones propias que les permitieron proseguir su labor profesional. Además, su función académica les permitía abocarse a temas que los políticos solo podían tratar ateniéndose a las consecuencias. Pese a verse obligados a mantener un bajo perfil, disponían de recursos para sobrevivir y producir. Si la política estaba fuera de la ley, en general, no ocurría lo mismo con las ciencias sociales.

Así, la intelectualidad empezó a analizar las causas de la derrota con estudios sobre el gobierno de la UP y su derrumbe que eran en gran parte un autoanálisis que cuestionaba posturas políticas y convicciones históricas. Fue un período de «autocrítica radical» y «diálogo extraordinariamente sincero». Al estar su existencia misma en juego,

⁴⁴ Garretón explora esta idea en «La oposición política partidaria», p. 398; y en «The Political Opposition and the Party System under the Military Regime», en Drake y Jaksic, *The Struggle for Democracy in Chile*, p. 214.

el trauma y la reflexión fueron mayores en la izquierda, la que se vio obligada a confrontar la contradicción histórica entre retórica revolucionaria y práctica reformista. El trauma era transversal a todo el espectro político y abarcaba a la intelectualidad democratacristiana que se había opuesto a Allende. En términos globales, la intelectualidad chilena emprendió un «proceso de aprendizaje» que duraría toda una década y que terminaría por replantear el pensamiento político y revitalizar a la sociedad civil⁴⁵.

En un principio, el análisis fue puramente académico; sobre el quiebre del gobierno de la UP y sus consecuencias inmediatas. La primera cuestión de fondo fue lo que había ocurrido y por qué, y más tarde el carácter del nuevo régimen y los cambios que se estaban produciendo en el país. Sin embargo, como señala Garretón, durante este período no hubo un debate político estratégico⁴⁶. El énfasis estuvo en entender el fracaso anterior y la realidad actual. La labor de los centros se limitó casi exclusivamente a la documentación, el análisis y la explicación; es decir, a las actividades académicas que la intelectualidad realiza en cualquier parte del mundo.

Al menos hasta 1978, los centros privados de investigación tampoco podían comunicar su trabajo al público en general. Los intelectuales disidentes estaban proscritos del Estado y de las universidades y no tenían prácticamente ningún acceso a los medios informativos. Sus publicaciones eran objeto de censura y se distribuían subrepticamente en redes informales de personas interesadas. Es más, tampoco había incentivos para salir al público: pasar desapercibido era la mejor forma de no meterse en problemas.

De hecho, durante casi diez años, prácticamente el único público fue la élite política y profesional. Como afirma Brunner, entre 1973 y 1983 «nadie, salvo la clase política, conocía o leía lo que la intelectualidad chilena producía, al menos dentro del país» (28 de febrero de

⁴⁵ Sobre las causas de la derrota, véanse Garretón, «La oposición política partidaria», p. 406; y Brunner y Barrios, *Inquisición, mercado y filantropía*, pp. 139–140. «Autocrítica radical» está tomado de Walker, *Socialismo y democracia*, p. 173. Sobre «diálogo extraordinariamente sincero», véase Lladser, «La investigación en las ciencias sociales», pp. 232–33. Sobre la reformulación del pensamiento de izquierda, véase Brunner, «La intelligentsia», p. 188. Sobre el «proceso de aprendizaje», véase Garretón, «La oposición política partidaria», p. 401.

⁴⁶ Garretón, «La oposición política partidaria», p. 408.

1991). Los únicos que habían puesto atención eran un reducido grupo de profesionales y cuadros políticos de oposición, principalmente por su relación histórica con la intelectualidad y su interés en los temas que trataba, pero además porque la intelectualidad ejercía un virtual monopolio sobre el análisis y la discusión política. Por estar haciendo un tipo de labor que no se podía hacer en ninguna otra parte, la intelectualidad dominaba uno de los pocos «espacios de libertad» abiertos a la disidencia.

Así, la intelectualidad disponía de las instituciones, financiamiento y libertad para funcionar que la clase política carecía. Explica Boeninger: «Los donantes no tenían discrecionalidad para financiar a cualquiera que, bajo la etiqueta de intelectual, hiciera trabajo político. La Fundación Ford fue un claro ejemplo. Tenía ciertos parámetros, tenía gran simpatía por la democracia, pero no podía financiar solo porque la gente tuviera una etiqueta política. Eso, desde el inicio, les dio a los intelectuales una importancia práctica, les dio presencia. Les ofrecieron refugio a los políticos, lo que generó una relación muy importante» (29 de enero de 1991). La actividad intelectual se había potenciado respecto de la política. Las restricciones que imponían la dictadura y la ayuda exterior se habían conjugado para acentuar la relación histórica entre intelectuales y políticos e inclinar la balanza a favor de los primeros.

Esto hizo que entre políticos e intelectualidad disidente se desarrollara una compleja y, en definitiva, importantísima relación que operaba en los centros privados de investigación. Durante los peores años de la represión, para la oposición los centros fueron una suerte de refugio; un lugar donde reunirse, analizar el fracaso y repensar la política. A través de invitaciones a seminarios y el envío de publicaciones, los centros impusieron un marco académico; en ocasiones, incluso, contrataron a políticos con calificación académica para hacer investigación. Los intelectuales que posteriormente ingresarían a la política también funcionaban en estos centros, investigando temas de relevancia política. Algunos incluso tenían cargos dirigentes en los partidos que se hallaban en la clandestinidad.

Fue así que surgió lo que sus protagonistas reiteradamente caracterizan como «una suerte de mezcla rara de intelectuales políticos» (Bitar, 16 de enero de 1991) compuesta por «intelectuales que se vinculan a la política y políticos que por primera vez reflexionan desde

una perspectiva más doctrinaria sobre los grandes temas de Estado»⁴⁷. Carentes de lugares de encuentro, los políticos convergieron gradualmente hacia los centros de investigación. Carentes de público, los intelectuales disidentes convergieron gradualmente hacia sus homólogos políticos. El proceso no fue formal, deliberado ni estructurado; simplemente ocurrió, impulsado por la tradición, el talento, las inquietudes comunes y las ventajas comparativas que gozaba la intelectualidad en dictadura. Así se forjó y empezó a madurar una nueva relación.

Varios ejemplos permiten ilustrar la gradual interpenetración de los roles políticos e intelectuales. Ricardo Lagos, doctor en economía por la Universidad de Duke y fundador en 1987 del Partido por la Democracia, presidió en los años 80 el directorio de VECTOR, centro privado de investigación. Ricardo Núñez, presidente a fines de los 80 del Partido Socialista renovado, trabajó como investigador en diversos centros tras retornar del exilio en 1981. Enrique Correa, uno de los fundadores del MAPU, trabajó durante los 80 en diversos centros vinculados a la Iglesia. Ricardo Solari, miembro del Comité Central del PS Almeyda, pasó la mayor parte de esos años dedicado a temas laborales en SUR. Ángel Flisfisch, cientista político formado en Michigan e investigador principal de la FLACSO, y su colega, el sociólogo Manuel Antonio Garretón, integraron el Comité Central del PS durante gran parte de los 80. En esa misma época fue figura clave de la DC Alejandro Foxley, fundador de CIEPLAN en 1976 y su presidente hasta 1989. Es decir, académicos y políticos empezaban gradualmente a compartir roles.

Una de las primeras manifestaciones de esta nueva relación fue la crítica técnica. Con rigurosos estudios empíricos, el PIIE, el PET y el Grupo de Investigaciones Agrarias, entre otros, fueron creando un sólido corpus de datos sobre los efectos de las políticas del régimen en la educación, la pobreza urbana, el desarrollo rural y otros ámbitos. Figuras de oposición, tanto políticas como intelectuales, se valieron de este corpus de análisis técnico para fundamentar una crítica certera y rigurosa de las políticas del régimen.

De hecho, hasta aproximadamente 1980 la oposición solo podía criticar al régimen en materias técnicas. La crítica política era peligrosa, e incluso de hacerse, lo más probable era que los medios no la

⁴⁷ Entrevista con Ricardo Núñez, 18 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

recogieran. Pero la crítica técnica, especialmente la económica, se toleraba de vez en cuando. Recuerda un economista de oposición: «Claramente, la crítica más aceptable era la económica. Eso rápidamente convirtió el debate político en un debate sobre política económica y eso nos transformó a muchos de nosotros en protagonistas, tanto porque nuestros comentarios tenían una base técnica como por los temas que escogíamos»⁴⁸.

El intelectual y político Ricardo Lagos describe de qué forma intelectuales y medios convirtieron el espacio para el análisis técnico en un debate político. «En dictadura, no todos pueden hablar... En consecuencia, el intelectual es alguien que puede hablar desde su propia perspectiva 'científica' de temas que le están vedados a la clase 'política'. En Chile el primer debate público se dio mucho más en el ámbito económico que en el político. La gente debatía la cosa económica... Recuerdo claramente la primera vez que me entrevistaron para la revista *Cosas*. Era ya 1981, pero fue como economista, en el sentido de alguien que es supuestamente entrevistado por lo que sabe. Pero había un elemento de complicidad, porque sabían que estaban entrevistando a alguien que estaba abiertamente en la oposición. Era claramente un juego en el que los intelectuales participaban, sabiendo que había ciertas cosas que no se podían decir. Este juego continuó»⁴⁹.

En 1978, por ejemplo, CIEPLAN se anotó un triunfo importante tras lograr que su exhaustiva y demoledora crítica al índice de precios al consumidor (IPC) fuera recogida en diarios y revistas. Ese primer debate público entre régimen y oposición fue un acontecimiento de la mayor trascendencia política. Restó credibilidad a un régimen militar-tecnocrático que había parecido invencible, y dejó establecido que la oposición no solo había sobrevivido sino que encaraba a los presuntuosos tecnócratas económicos del régimen, en lo que constituyó una importante victoria simbólica para una oposición que no tenía otra forma de hacer oír su voz. En palabras de Brunner: «El hecho de que un grupo de técnicos respetados pudiera demostrar técnicamente que se había manipulado el IPC, y que no hayan sido inmediatamente

⁴⁸ Entrevista con Óscar Muñoz, 27 de agosto de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

⁴⁹ Entrevista con Ricardo Lagos, 13 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

perseguidos por ello, ciertamente tuvo un efecto importante en los años siguientes» (28 de febrero de 1991). Pero era un debate limitado a cuestiones técnicas que llevaba años investigar y que solo un grupo de expertos entendía. La ciencia podía hablar donde la política no podía hacerlo⁵⁰.

Así, los centros de investigación se convirtieron en uno de los pocos lugares donde la oposición podía debatir la política. Según explica un destacado académico y político, «Los lugares o formas permitidas de tratar problemas políticos obligaban a ponerse el sombrero intelectual» (Boeninger, 29 de enero de 1991). Dado que los políticos no podían actuar, otro agrega: «la palabra se hizo parte de la acción» (Bitar, 16 de enero de 1991). Un tercero acota: «Inquietos y sin mayor capacidad de incidir en los acontecimientos, los dirigentes de partido vivían en un constante proceso de discusión, de reflexión... Así, muchos de ellos –el MAPU, los partidos de la UP, los partidos socialistas (especialmente los sectores no ortodoxos) y la Democracia Cristiana– dieron a los centros una posición de privilegio en la discusión y el intercambio de opiniones... No era coincidencia que Gabriel Valdés, por ejemplo, presidiera el Centro de Estudios del Desarrollo, o que Foxley presidiera CIEPLAN, o que el Instituto para el Nuevo Chile, de Amsterdam, lo encabezara Jorge Arrate, o que Heraldo Muñoz tuviera su propio centro, el PROSPEL [Programa de Seguimiento de las Políticas Exteriores Latinoamericanas]. No es coincidencia que la FLACSO tuviera a un Brunner o a un Flisfisch, etcétera. Se produjo una intermediación entre las instituciones académicas formales y los grupos políticos» (Núñez, 18 de marzo de 1991)⁵¹.

Entre 1973 y 1983, el principal y a veces único camino hacia la política de oposición pasó por la academia. Con los partidos proscritos y dispersos, solo los intelectuales tenían el financiamiento, las instituciones y la relativa libertad de abocarse seriamente al tema político más importante del momento: el quiebre de la democracia. Esta ventaja

⁵⁰ No obstante, debió pasar bastante tiempo antes de que los estudios críticos pudieran circular libremente. *Trayectoria de una crítica*, recopilación de críticas a la política económica hecha por CIEPLAN, estuvo retenida más de un año antes de ser autorizada en 1983.

⁵¹ Ilustrando el carácter intelectual del discurso político de la época, Núñez agrega: «Los socialistas empezamos a hablar en términos gramscianos de intelectuales orgánicos».

comparativa respecto de la clase política les permitió expandirse y llenar el vacío creado por el régimen militar. Poco a poco los centros de investigación se convirtieron en fuente de un nuevo pensamiento y discurso político. La política chilena se había intelectualizado.

La democratización de la izquierda

La más importante transformación del pensamiento político opositor que forjó la intelectualidad en este período fue, por lejos, la aparición dentro de la izquierda chilena de un socialismo explícitamente democrático. El socialismo chileno de antes de 1973 privilegiaba el cambio revolucionario y se caracterizaba, como señala Walker, por «una permanente ambigüedad, cuando no un franco cuestionamiento de las instituciones de la democracia representativa»⁵². Durante los años 60 y 70 la izquierda no se abrió a la democracia; aún no prosperaba en Chile el socialismo democrático de raíz europea.

El trauma del fracaso y la represión post-golpe hicieron cambiar esa realidad, desencadenando un largo y complejo proceso de renovación del pensamiento de izquierda. En palabras de un protagonista: «El golpe militar provocó, especialmente en la izquierda, un proceso de revisión de lo que se hizo bien y especialmente de lo que se hizo mal, porque en definitiva, eso fue lo que llevó al fracaso»⁵³. Este proceso, mediado por el exilio o los estudios en el extranjero, se alimentó del contacto con la socialdemocracia europea y con el fracaso cada vez más evidente de los países socialistas de Europa Central y Oriental. Con cada partido a su propio paso, el proceso consistió esencialmente en un cuestionamiento sistemático de la teoría y la práctica política por parte de una «nueva intelligentsia de izquierda» que dio nueva forma a las posturas de las cúpulas partidarias⁵⁴. Cuando alrededor de 1985 este proceso rindió frutos, produjo un cambio sustancial: la izquierda chilena, y el Partido Socialista en particular, pasaron a ser ampliamente democráticos. Esto permitió que a principios de 1988 surgiera una

⁵² Walker, *Socialismo y democracia*, p. 12.

⁵³ Entrevista con Heraldo Muñoz, 19 de agosto de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

⁵⁴ Brunner, «La intelligentsia», p. 188.

oposición unida y fue un aporte fundamental a la posterior derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre.

Este proceso consistió en un profundo examen de conciencia, que duró más de diez años, sobre principios políticos fundamentales. En primera instancia, dominaron el debate dos grandes temas: las «causas de la derrota» y el carácter de la dictadura. Una de las primeras explicaciones de los socialistas a ultranza fue que la izquierda no había sido «lo suficientemente leninista» y que debió haberse preparado militarmente para afrontar un conflicto que era «inevitable»⁵⁵. Esta postura, que reafirmaba la visión de la izquierda dura tradicional, desató una amplia discusión sobre principios partidarios básicos. Quienes criticaban esta posición no caracterizaban lo ocurrido como una derrota a manos de fuerzas armadas desleales, sino como la incapacidad del gobierno de la Unidad Popular de generar un apoyo mayoritario a su programa de gobierno, cuestionando el papel de la ideología, de los líderes carismáticos y del Estado, y especialmente la ortodoxia en materia de democracia y cambio social.

El proceso de renovación fue complejo y tortuoso. Como explica Walker, no partió por cuestiones de democracia sino por lo más urgente, es decir, los derechos humanos. La izquierda fue lejos el sector más perseguido, llevándose el grueso de las detenciones, golpizas, desapariciones y muertes. La experiencia directa con la violación brutal y sistemática de los derechos humanos sensibilizó a la izquierda respecto de su origen –el autoritarismo– y de la importancia de protegerlos y preservarlos. Ello la llevó gradualmente a ver la democracia bajo una óptica diferente –como garante de los derechos humanos– y a valorar la necesidad de rechazar toda forma de autoritarismo⁵⁶.

Pero el rechazo del autoritarismo planteó un problema más básico: la cuestión de las formas políticas. Importantes sectores de la izquierda chilena habían históricamente desestimado la democracia formal como un concepto burgués, diferente de la democracia profunda que una dictadura del proletariado podría instaurar. La experiencia de la

⁵⁵ Las principales fuentes de esta sección son Moulián, *Democracia y socialismo en Chile*; Walker, *Socialismo y democracia*, pp. 173-219; y Garretón, «La oposición política partidaria», pp. 444-451. Sobre los dos grandes temas, véase Garretón, p. 406; sobre «no lo suficientemente leninista», Walker, p. 178.

⁵⁶ Walker, *Socialismo y democracia*, p. 174.

represión hizo que esa posición se desperfilara paulatinamente y que se empezara a perfilar el potencial de las formas democráticas, y no solo sus deficiencias. Explica Walker: «En este sentido, la experiencia autoritaria ha hecho que el conjunto de normas y procedimientos comúnmente asociados a la democracia ‘formal’ (sufragio universal, alternancia en el poder, separación de poderes, habeas corpus, estado de derecho, entre otros), sean valorizados en toda su extensión» (176).

El cambio aquí fue fundamental: se pasó de una visión primordialmente instrumental, que veía la democracia como un medio para alcanzar el fin mayor del socialismo, a una visión que la valoraba como un fin en sí mismo, más allá de las consecuencias en materia social y económica. Significó cambiar la revolución por la reforma democrática como la vía hacia el cambio social; significó abandonar la clase como base principal de la organización política y reconocer los legítimos intereses de los distintos sectores sociales, y significó buscar «la creación de una cultura democrática nacional antes que un proyecto emancipador orientado a un determinado sector social»⁵⁷. El resultado fue un nuevo socialismo, más explícitamente democrático. Pese a que muchos aspectos quedaron sin aclarar y a que no todos estaban de acuerdo en todo, el mundo socialista se hizo inequívocamente más democrático.

Surgió así dentro del Partido Socialista una corriente de pensamiento radicalmente distinta, que se manifestó en 1979 en una división que generó una fugaz fracción reformista encabezada por el ex secretario general Carlos Altamirano. Esta nueva corriente planteó la «Convergencia Socialista», una confluencia de políticos e intelectuales de izquierda en torno a ideas antiautoritarias y prodemocráticas. La Convergencia se convirtió en el núcleo de una nueva postura socialista, generando en tres continentes un activo debate, nutrida documentación y una serie de acuerdos sobre principios políticos. La Convergencia planteaba una «triple ruptura» con posturas históricas: con el énfasis en lo ideológico, con el énfasis en la izquierda antes que en el país y, de modo muy importante, con la «ambigüedad sobre la democracia política»⁵⁸. A fines de 1983, importantes sectores de la corriente renovada levantaron formalmente un nuevo Partido Socialista.

⁵⁷ Eric Hirschberg, «Changing Interpretations of Democracy and Socialism: The Transformation of Socialist Thought in Spain and Chile» (1991, roneo), p. 15.

⁵⁸ Citado en Walker, *Socialismo y democracia*, pp. 180-181.

En 1984 se eligió a Carlos Briones como primer presidente, y en 1985 se incorporó la mayoría de los principales sectores renovados. Había nacido un nuevo partido y surgido una nueva izquierda explícitamente democrática.

En cada etapa de este proceso, la intelectualidad jugó un rol protagonista. Encabezó la crítica de las posturas ortodoxas; colaboró en la conformación de la Convergencia Socialista; produjo la mayor parte del análisis y documentación que alimentó el debate; convocó a las partes interesadas; participó directamente en los debates y ayudó a fundar el Partido Socialista renovado. Como señala Brunner, «Los intelectuales pusieron en marcha un proceso de renovación a través de las múltiples instancias en las que se empezaron a reunir, primero entre sí y después con políticos de izquierda que tenían más sintonía con los temas de la renovación y la crítica de la izquierda tradicional, y empezaron a desarrollar este tipo de reflexión y acción» (28 de febrero de 1991).

Por cierto, los intelectuales no fueron los únicos actores. También tuvo estrecha participación la dirigencia política, especialmente a nivel de debate, planificación y negociación, pero pocas veces con independencia de la intelectualidad. Muchos de ellos, de hecho, eran intelectuales. Al preguntársele por los intelectuales con ascendiente sobre la dirigencia socialista, un político –él mismo con formación en filosofía– respondió: «Son casi todos intelectuales»⁵⁹. Muchos ocuparon cargos formales en los partidos o cumplieron la función de asesores informales. Ricardo Lagos, Jorge Arrate, Ricardo Núñez y otros líderes socialistas habían sido académicos en Chile y tenían posgrados extranjeros en ciencias sociales⁶⁰. Heraldito Muñoz, intelectual de activa participación en la política socialista, observa: «Lo interesante es que en este movimiento aparecen muy fuertemente no los viejos dirigentes con base en el sindicalismo o en la orgánica partidaria, sino figuras intelectuales como Ricardo Lagos, Eugenio Tironi, Manuel Antonio Garretón, Ángel Flisfisch... También había políticos, pero la capacidad de creación y conducción se concentraba en los intelectuales» (19 de

⁵⁹ Entrevista con Enrique Correa, 8 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

⁶⁰ Lagos es doctor en economía por la Universidad de Duke, Núñez es doctor en geografía por la Universidad de Praga, y Arrate estudió un doctorado en economía en Harvard.

agosto de 1991). En la renovación socialista chilena, la distinción entre lo intelectual y lo político se hacía difusa; en lugar de segregarse, los ámbitos se confundían.

Ilustrando la extraordinaria centralidad del papel de la intelectualidad, el órgano más influyente en el debate sobre el proceso de renovación fue la revista *Chile-América*, fundada en Roma por un grupo de exiliados, entre ellos los destacados intelectuales José Antonio Viera-Gallo, Julio Silva, Jorge Arrate y José Miguel Insulza. En Holanda, Arrate participó además en la fundación del Instituto para el Nuevo Chile, instancia relevante en el proceso de renovación. En 1989 Arrate asumiría la secretaría general del PS renovado y Viera-Gallo la presidencia de la Cámara de Diputados en 1990.

En Chile, los ejes centrales del proceso de renovación fueron la FLACSO y SUR. En palabras del demócratacristiano Edgardo Boeninger, «Los líderes de la renovación socialista se inspiraron básicamente en ideas que salían de la FLACSO. Los intelectuales tuvieron una enorme influencia en la política» (29 de enero de 1991). De hecho, durante gran parte de este período, los investigadores de la FLACSO Ángel Flisfisch y Manuel Antonio Garretón integraron el Comité Central del Partido Socialista. Junto con Tomás Moulián y José Joaquín Brunner —también importantes investigadores de la FLACSO—, Flisfisch y Garretón elaboraron influyentes críticas a las posiciones tradicionales de la izquierda y argumentaron a favor del cambio. Los intelectuales de SUR, especialmente Eugenio Tironi y Javier Martínez, también hicieron grandes aportes al debate⁶¹.

Por su parte, varios fundadores de la Convergencia Socialista eran también destacados intelectuales. Además de los anteriores, estaban Ricardo Lagos (luego ministro de educación), Heraldo Muñoz (después embajador ante la OEA), Juan Gabriel Valdés (embajador en España), Jaime Estévez (diputado), Luis Maira (vicepresidente del Partido

⁶¹ Entre los escritos que mejor ilustran el proceso de renovación, cabe mencionar Flisfisch, *Hacia un realismo político distinto*; Arrate et al., *Siete ensayos sobre democracia y socialismo*; Moulián, *Democracia y socialismo en Chile*; Tironi, *La torre de Babel: Ensayos de crítica y renovación política*; Arrate, *La fuerza democrática de la idea socialista*; y Lagos, *Hacia la democracia*. Un primer grupo de ensayos sobre nuevas perspectivas políticas socialistas, surgido tras un seminario realizado por SUR en julio de 1981, se publicó en el segundo número de *Margen*, revista que tenía autorización previa para circular y, por tanto, podía ponerse en librerías. Se estimó que un libro no sería autorizado.

Socialista), Carlos Portales (director general de política exterior de la cancillería), Álvaro García (subsecretario de planificación) y Sergio Bitar (vicepresidente del PPD). A ellos se sumaban Enzo Faletto y Aníbal Pinto, dos de los más destacados científicos sociales de América Latina, y Carlos Ominami (ministro de economía) y Gonzalo Martner (subsecretario de desarrollo regional en el ministerio del interior), ambos procedentes del ultraizquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)⁶².

El proceso fue polémico y hasta desgarrador. Entre los tradicionales y los renovados, se desató una fuerte pugna sobre principios muy arraigados y con dimensiones no solo intelectuales, sino incluso emocionales. En esta pugna, el factor decisivo parece haber sido la pluralidad de intelectuales a favor del cambio. Prosigue Heraldo Muñoz: «Este sector renovado que era quizás minoría en términos de número de militantes en comparación con el otro sector, donde la presencia de intelectuales en la dirigencia era mínima, logró imponer las ideas [por] su capacidad de articular un nuevo pensamiento socialista, una nueva imagen socialista más pragmática, más realista, más a tono con el sentir popular... Creo que la presencia intelectual, esa capacidad de visión, nos permitió llegar a ser la fuerza principal» (19 de agosto de 1991).

El cambio fundamental consistió en trasladar el eje del pensamiento político desde la revolución, donde había estado desde los años 60, hacia la democracia, donde se instaló en los 80⁶³. Este proceso fue potenciado por la experiencia del exilio –en especial el contacto con la socialdemocracia europea– y por el pensamiento crítico dentro del país, pero siempre con una fuerte base intelectual. Dice Bitar: «La influencia político-intelectual del exilio y la reproducción de esas tesis en el interior por elementos intelectuales permeaban la dirigencia política» (16 de enero de 1991). Afirma Javier Martínez, otro destacado intelectual: «El Partido Socialista cambió completamente su discurso, porque un grupo de intelectuales –sociólogos, filósofos, historiadores– en parte haciéndose eco de la discusión europea, pero básicamente tomándose en serio el problema de la democracia, empezó a

⁶² Véase Walker, *Socialismo y democracia*, p. 207.

⁶³ Norbert Lechner examina este giro en la intelectualidad latinoamericana de forma más general en *Los patios interiores*, cap. 1.

cuestionar las bases del pensamiento marxista-leninista y a construir una nueva versión de la política de izquierda en el país» (6 de marzo de 1991).

La flexibilización del centro

Detrás de la transformación del pensamiento de izquierda, hubo cambios mayores que también interpelaban a los intelectuales de centro. Si bien es cierto que esa intelectualidad –en su mayoría de tendencia demócratacristiana– no tenía la misma sensación de derrota, se sentía igualmente impactada por las consecuencias represivas e impelida a examinar sus causas, proceso al que los ataques de la Junta la fueron arrastrando cada vez más. A medida que su carácter evolucionaba de temporal a fundacional, el régimen apuntó los fuegos hacia la democracia liberal en general y las formas históricas de hacer política en particular, proponiéndose eliminarla de la vida nacional, al menos temporalmente, y reemplazar a los políticos con administradores y tecnócratas. Para ello instauró una democracia protegida que limitaba ostensiblemente la autonomía legislativa y daba a las fuerzas armadas un rol de tutela permanente en la política. Así, el centro político chileno, que objetaba las violaciones a los derechos humanos y la entronización del régimen militar, pasó a ser también blanco de la represión, irradiando hacia el centro el trauma que tan profundamente afectaba a la izquierda intelectual.

El centro, sin embargo, difería fundamentalmente de la izquierda. Al tener un compromiso previo con la democracia, tenía menos que repensar. El fracaso del gobierno de Allende y el golpe militar tampoco suponían un cuestionamiento fundamental a sus principios básicos. Como indica Garretón: «Un demócratacristiano no tenía que cambiar su estructura metafísica. Un izquierdista, en cambio, tenía que abandonar el marxismo-leninismo»⁶⁴. Previo al golpe, el Partido Demócrata Cristiano había sido criticado más por su rigidez ideológica que por sus contenidos doctrinarios. Se le culpaba de haber abandonado el rol histórico del centro –de mediador en un fragmentado y

⁶⁴ Entrevista con Manuel Antonio Garretón, 8 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

competitivo sistema político-partidista– y por haber gobernado solo. Por ello, el centro enfrentaba una tarea diferente. Más que convicciones políticas de fondo, lo que tenía que repensar eran su estrategia y su conducta política.

El centro político era, además, más fuerte y coherente que la izquierda. El PDC, formación dominante de centro, seguía siendo una formidable fuerza política. Pese a las restricciones impuestas por el régimen, mantenía respetables niveles de unidad, organización y liderazgo y presentaba ante la intelectualidad un aparato partidario más vigoroso y menos desmoralizado. A diferencia de la izquierda, donde la intelectualidad tendría el virtual monopolio de las decisiones partidarias, la intelectualidad demócratacristiana era, según un observador, «una especie de nata encima de la leche» (Enrique Correa, 8 de marzo de 1991). En efecto, había un contexto institucional mucho más fuerte que no hacía fácil influir sobre los dirigentes demócratacristianos.

Aún así, la intelectualidad de centro inició un proceso propio de «repensar el país» que pasó por la crítica de las estrategias políticas y el examen de las necesidades nacionales. Tal como en la izquierda, fue un proceso arduo y complejo que abarcó desde la actuación de la DC durante los gobiernos de Frei y Allende hasta el carácter de la dictadura. La inquietud central era entender qué había salido mal y en qué consistía el nuevo régimen. Más adelante convertirían estas inquietudes en una crítica categórica de la conducta demócratacristiana antes del golpe y en una fundamentada denuncia del régimen militar.

Pero el hecho de que el PDC siguiera teniendo relativa fuerza hizo que los esfuerzos de la intelectualidad de centro tendieran más bien a formar parte de iniciativas partidarias de más largo aliento, como fue especialmente el caso hasta antes de la muerte del ex presidente Eduardo Frei a principios de 1982. Al parecer, en 1977 Frei empezó a trasladar sistemáticamente al partido desde la estrategia autárquica-hegemónica de los años 60 hacia un mayor énfasis en la flexibilidad y la conformación de alianzas⁶⁵. Uno de los resultados fue *Una patria*

⁶⁵ Timothy Scully, en «Reappraising the Role of the Center: The Case of the Chilean Party System», *Kellogg Institute Working Paper Series No. 143* (South Bend, Ind.: University of Notre Dame, 1990), p. 33, hace referencia al aparente cambio de postura de Frei. En entrevista personal (21 de marzo de 1991), el dirigente DC Mariano Fernández relata que, en reunión realizada en 1976 o 1977 con presencia de Raúl Troncoso, Claudio

para todos, influyente documento publicado ese año por Jaime Castillo Velasco, el ideólogo por antonomasia del partido. Dicho documento hablaba del drama que sufría el pueblo chileno («Estamos unidos en el sufrimiento, en el fracaso y también en la esperanza») y llamaba a forjar un «Movimiento Nacional de Restauración Democrática» que «respete los derechos de los partidos políticos» y «cultive el espíritu de reconciliación nacional». Fue, según el dirigente DC Mariano Fernández, «la cristalización del acuerdo demócratacristiano de promover la unidad»⁶⁶.

Esta nueva postura de la jerarquía partidaria parece haber sido el origen de las dos iniciativas intelectuales de mayor envergadura que el centro político adoptó durante los primeros diez años de dictadura⁶⁷. La primera fue el Grupo de los 24, creado en 1978 como respuesta crítica a la propuesta del régimen de introducir una nueva constitución. El Grupo de los 24 fue fundado casi exclusivamente por demócratacristianos y solo más tarde integraría a un abanico mayor de figuras intelectuales, como Eugenio Tironi y Manuel Antonio Garretón. La segunda fue el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), ente que más adelante tendría un papel protagónico en consensuar la estrategia de transición y la política post-transición. El CED fue fundado en 1980 no por académicos, sino por el ex canciller DC Gabriel Valdés Subercaseaux⁶⁸. Pensando en su retorno a Chile tras diez años en Naciones Unidas en Nueva York, Valdés se propuso firmemente concretar un proyecto «académico en la forma pero político en el contenido, que contemplara desde el inicio un claro acercamiento con sectores socialistas y afines... y entre políticos e intelectuales de distintas

Orrego y quizás Andrés Zaldívar (pero no Fernández), Frei planteó que para derrotar a la dictadura la DC debía trabajar en conjunto con otros sectores políticos.

⁶⁶ Jaime Castillo Velasco, «Una patria para todos» {1977, roneo). Entrevista con Mariano Fernández, 21 de marzo de 1991. «Si se observa lo que Castillo Velasco escribe», dice, «es lo que la Democracia Cristiana hace. Siempre». Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

⁶⁷ Una iniciativa anterior, el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, también había surgido de dirigentes DC con tendencias intelectuales, pero fue anterior al reposicionamiento del pensamiento partidario hacia la flexibilidad y la conformación de alianzas.

⁶⁸ Cabe destacar que Valdés Subercaseaux menciona que influyeron en su decisión de crear el CED varios intelectuales, entre ellos Kalman Silvert (Universidad de Nueva York) y Alain Touraine (Sorbona). Véase Francisco Castillo, *La fuerza del diálogo* (Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo, 1991), p. 18.

tradiciones»⁶⁹. Claramente, la cúpula demócratacristiana tomaba la iniciativa para traer a la intelectualidad al debate político.

Ocurrió, además, que la intelectualidad de centro empezó a laborar en estrecho contacto con sus pares de izquierda. Para personas que hasta el golpe se agrupaban en bandos muy polarizados, esto constituyó un cambio casi paradigmático. En dictadura, esta conducta cambió. Las primeras iniciativas de la Academia de Humanismo Cristiano, por ejemplo, apuntaron expresamente a convocar a académicos de todo el espectro opositor. Diversos seminarios que se hicieron en el exterior, como el realizado en 1980 en Bellagio (Italia) por el Programa de Asuntos Públicos del Centro para las Relaciones Interamericanas de Nueva York, organismo privado dedicado a las políticas públicas, convocaron a figuras intelectuales y políticas de toda la oposición. Los intelectuales de CIEPLAN y el CED desarrollaron fluidas relaciones con sus colegas de la FLACSO, SUR e ILET. Surgió una nueva forma de operar, caracterizada por el contacto y el debate entre intelectuales de izquierda y centro, que más tarde se transmitió al ámbito político. Según Brunner, el creciente diálogo entre intelectuales posibilitó el posterior diálogo político entre la DC y el socialismo al crear «un sentido de convergencia y acercamiento entre corrientes de pensamiento que habían estado muy distanciadas antes de 1973» (28 de febrero de 1991). El camino único demócratacristiano daba paso a la concertación.

En el centro, otro aspecto emblemático del impacto político de la intelectualidad fue el rol protagónico que tuvieron los economistas. Mientras en la izquierda la voz cantante la llevaban sociólogos y científicos políticos, en el centro el mayor impacto intelectual corrió por cuenta de economistas. Esto fue así en parte porque, para el centro, la política económica era un tema más contencioso que las convicciones políticas fundamentales. En los años 60, la Democracia Cristiana había adoptado una visión más bien utópica de la economía que se sustentaba en la doctrina socialcristiana y los escritos de Jacques Maritain. Esta visión, llamada a veces «economía comunitaria», planteaba –con

⁶⁹ *Ibíd.*, p. 19. Según Fernández, Valdés Subercaseaux había rechazado una propuesta del ex presidente Frei de volver a Chile y asumir la presidencia de la DC, argumentando que Frei era el líder natural del partido. Dos meses después de la repentina muerte de Frei en enero de 1982, Valdés fue elegido presidente de la DC (21 de marzo de 1991).

cierta vaguedad— modificar las estructuras de propiedad por medio de «empresas autogestionadas» y otras formas de conciliación del conflicto trabajo-capital⁷⁰. Las falencias de esta visión, las radicales reformas económicas introducidas por el régimen militar, más la notable capacidad técnica de los Chicago Boys, presentaron a la Democracia Cristiana un enorme desafío: demostrar que podría manejar la economía con la misma capacidad técnica, pero con mayor equidad. Es decir, necesitaba una nueva perspectiva de la política económica.

Así las cosas, no es de sorprender que CIEPLAN, uno de los grupos intelectuales que más marcó el pensamiento de centro, estuviera compuesto principalmente por economistas. Bajo la dirección de Alejandro Foxley, CIEPLAN propuso al centro político nuevas ideas donde más se necesitaban: en materia económica. Esto permitió a la Democracia Cristiana transformar su «Revolución en libertad» en una pragmática conjunción de libre mercado, inversión en recursos humanos y responsabilidad macroeconómica, y de paso, en respuesta a la capacidad técnica de los Chicago Boys, ofrecer una tecnocracia de centro⁷¹. Aunque su rol en cambiar convicciones y estrategias políticas fue menos importante que el jugado en la izquierda por la FLACSO, SUR y otros centros de investigación, CIEPLAN daba garantías en el sentido de que, si el centro político volvía al poder, la economía sería gestionada según principios técnicos modernos.

Con todo, el papel de CIEPLAN fue más puramente intelectual que el de otros importantes entes de centro. CIEPLAN era por sobre todo un centro de investigación creado y dirigido por académicos, no por líderes políticos. Carente de vínculos formales con la DC, su ascendiente sobre las posturas partidarias provenía principalmente de la calidad de su labor y de la militancia de algunos de sus integrantes. Y pese a que se planteaba expresamente llegar a los actores sociales y promover el debate más allá de la comunidad académica, el énfasis en estas actividades era menor que el puesto por el CED, el Grupo de los 24 u otras instancias. La principal función de CIEPLAN fue crear ideas.

⁷⁰ Véanse Foxley, *Para una democracia estable*, pp. 71-74; y Óscar Muñoz, «Antecedentes y causas de la crisis de la democracia en Chile», *Apuntes CIEPLAN* 93 (Santiago: Apuntes CIEPLAN, 1990).

⁷¹ Silva, en «Technocrats and Politics in Chile», desarrolla esta idea con considerable detalle.

Más allá de los aspectos técnico-económicos, CIEPLAN también incorporaba a su labor un componente de economía política. En CIEPLAN siempre trabajaron politólogos y sociólogos, de modo que había conciencia institucional de la dimensión política y social del comportamiento económico. Por ejemplo, el especial interés de Foxley en temas de pensamiento político y política social lo llevó a hacer una crítica demoledora de la conducta de la intelectualidad –y de la Democracia Cristiana– en los años 60. Foxley elaboró, además, una sólida propuesta transversal de gobernabilidad democrática para los años 90. Ignacio Walker, otro investigador de CIEPLAN, hizo el quizás más exhaustivo relato del complejo proceso de renovación del pensamiento de izquierda después del golpe. En suma, CIEPLAN habitualmente salió de lo puramente tecnocrático para abordar los grandes temas intelectuales⁷².

Los esfuerzos de CIEPLAN en cuanto a replantear la política económica y hacer una crítica más amplia del pensamiento político de centro, se vieron complementados primero por el Grupo de los 24 y el ICHEH, y luego por el CED y CERC. Los centros de investigación tomaron las riendas de un ejercicio de carácter fundamentalmente intelectual que estuvo marcado por una profunda reflexión sobre visiones e ideologías. Con investigación, debate, conferencias y publicaciones llamaron a los líderes políticos a analizar el quiebre democrático y a hacer la crítica de la política tradicional. Pese a que la intelectualidad de centro tuvo un menor ascendiente crítico que sus pares de la izquierda, el rol que le cupo en la reformulación del pensamiento político no fue menos importante. Apareció así un nuevo arco de valores y principios en que la ideología y la utopía abrían paso a la democracia, base fundamental del entendimiento político.

El eventual resultado fue una transformación comparable a los cambios producidos en la izquierda, si bien menos dramática. Comenzó a perfilarse una «nueva cultura intelectual socialcristiana»⁷³. El *ethos* doctrinario que dominó el pensamiento democratacristiano durante los años 60 daba paulatinamente paso a actitudes más transigentes. Se revalorizaron conceptos desacreditados, como concesión,

⁷² Sobre la crítica, véase Foxley, *Para una democracia estable* y «Reflexiones». Sobre la propuesta de gobernabilidad, véase Alejandro Foxley, *Chile y su futuro: Un país posible* (Santiago: CIEPLAN, 1987). Walker, *Socialismo y democracia*.

⁷³ Brunner, «La intelligentsia», p. 189.

alianza, pragmatismo, pluralismo, moderación y ambigüedad. El énfasis transitó desde la ideología y las utopías hacia la diversidad y la democracia. Poco a poco, el centro político volvía a ser flexible.

La intelectualización de la política

En la década que siguió al golpe de estado la intelectualidad, a través de su red de centros de investigación, logró no solo preservar el pensamiento opositor, sino además transformarlo por medio de la crítica sistemática de las creencias y actuaciones políticas. Esto le dio influencia política e intelectual e hizo que la diferencia entre liderazgo intelectual y político comenzara a desaparecer. Como señaló un observador: «Las élites políticas empezaron a confundirse completamente con las intelectuales. La intelectualidad pasó a ser la portadora de la política, y la política se hizo a través de la actividad intelectual y académica»⁷⁴. En suma, la política se había intelectualizado.

Sin embargo, los roles políticos habían cambiado. Habían dejado de tener el carácter de «reafirmadores de ideologías» u «hombres de fe» que Foxley y Moulián diagnosticaban como común a la intelectualidad de antes del golpe⁷⁵, y se habían convertido en críticos, analistas e innovadores; en suma, en zorros, más que en puercoespines. Con la política fuera de la ley y la sociedad civil en estado de fragmentación, la intelectualidad dominaba una de las pocas instancias donde los líderes opositores podían reunirse a tratar temas políticos. Por eso, además de ser fuente importante de información y análisis, la intelectualidad ayudó a los políticos a entender las causas del quiebre democrático, introdujo nuevas ideas en el debate y jugó un rol fundamental en el proceso que permitió la democratización de la izquierda y la flexibilización del centro. En lugar de limitarse a cumplir sus mandatos, la intelectualidad empezó a accionar sobre el sistema político.

Fueron estos, logros importantes. Sin una izquierda explícitamente democrática y un centro flexible, quizás no se habría forjado la alianza que derrotó a Pinochet en 1988. Ante el votante se habría presentado la

⁷⁴ Entrevista con Osvaldo Puccio, 17 de enero de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

⁷⁵ Foxley, «Reflexiones», p. 260; Moulián, *Democracia y socialismo en Chile*, pp. 94-99.

misma oposición fragmentada de siempre, imagen que cuadraba con la apocalíptica predicción pinochetista de que, de ganar la oposición, sobrevendrían el caos y el crisis. El plebiscito, que la oposición ganó por un margen del 12%, perfectamente podría haberse perdido.

Aún así, durante este período la intelectualidad funcionó casi exclusivamente en el plano académico. Sus actividades habituales eran las mismas que en cualquier otra parte del mundo: reunir documentación, hacer análisis, escribir y debatir. Pero ahora que su público estaba compuesto por actores políticos, su producción académica tuvo una enorme trascendencia política. Acota un dirigente: «Si se analiza la transición chilena de 1988 a 1990, se entiende poco; básicamente las formalidades del proceso. Pero si se analiza desde 1988 hacia atrás, por lo menos nueve años hasta 1979, en casi todas las fórmulas políticas que circularon en los centros académicos se encuentran... las mismas fórmulas que en 1988 y 1989 se materializaron en la Concertación» (Núñez, 18 de marzo de 1991). El impacto no fue inmediato ni directo. Explica un intelectual: «La intelectualidad adoptó un conjunto de iniciativas... múltiples, pequeñas, descentralizadas, relativamente invisibles, por lo general indirectas pero que ayudaron a constituir una red de comunicación social y cultural entre intelectuales y políticos que solo se tradujo en acción política mucho después de que esa red hubo permeado completamente los partidos, los sindicatos» (Brunner, 28 de febrero de 1991). La incidencia de los intelectuales en la política durante la década posterior al golpe, se produjo casi por entero a nivel de ideas.

En suma, al menos hasta 1980 la política de oposición tomó principalmente la forma de análisis intelectual y los centros privados de investigación fueron prácticamente la única opción. Declarada fuera de la ley, la política se refugió en la academia. Y la academia, provista de nuevos poderes, se expandió para llenar el vacío político. No es que durante la década que siguió al golpe la intelectualidad chilena se hubiese politizado, sino más bien que la política chilena se intelectualizó.

Convergencia y mirada de futuro: 1983-1986

[Teníamos]... una clase política francamente atomizada y desarticulada... claramente atravesada por profundas fracturas, que hasta ese momento había sido completamente incapaz de establecer incluso relaciones simples entre sí. Es decir, el problema no era que el debate se hubiese polarizado; el problema era que simplemente no había relaciones. Había, en un sentido estricto, mundos paralelos que jamás convergían. Entre las figuras de la época, entre un Pablo Baraona o gente vinculada a los equipos económicos o al mundo económico oficialista, los pinochetistas; y por otro lado, demócratacristianos, socialistas, etcétera, simplemente no había relación alguna.

—ÁNGEL FLISFISCH, 17 de enero de 1991

Hay que saber por lo menos qué camino seguir. Incluso si no se puede seguir, hay que saber dónde está el camino... Yo creo que [la intelectualidad] asumió la función de los partidos en cuanto a una conceptualización estratégica, a una visión de la sociedad, una visión del camino. Y eso fue muy útil... Estoy absolutamente convencido de que el tipo de transición que tuvimos —el tipo de gobierno que tenemos— no habría sido para nada iguales si no hubiesen existido los centros privados de investigación.

—SERGIO BITAR, 16 de enero de 1991

Hacia 1983, el régimen militar del general Augusto Pinochet había transformado totalmente la economía y la sociedad chilenas. La economía se había reestructurado bajo principios neoliberales y libremercaderistas y se había traspasado el rol social del Estado al mercado y el sector privado. Tras un plebiscito de dudosa legalidad, el régimen había impuesto una Constitución que le otorgaba legitimidad formal y fijaba un cronograma para un retorno a una democracia protegida. El régimen siguió siendo represivo y la democracia que prometía era

acotada, a muchos años plazo y sujeta a estricto control militar, pero se había completado la etapa fundacional y empezaba a encaminarse, aunque con parsimonia y pocas ganas, hacia un gobierno civil¹.

Entre 1983 y 1986, la oposición volvió a renacer y a mirar al futuro. Los partidos volvieron cautelosamente a la palestra con actividades que, aunque todavía ilegales, esporádicamente se toleraban, y abrieron un debate estratégico sobre cómo enfrentar a la dictadura. La sociedad civil volvió por sus fueros a medida que los grupos ciudadanos, colegios profesionales y organizaciones estudiantiles intensificaban su actividad. La intelectualidad y los profesionales disidentes volvieron a aparecer ocasionalmente en la prensa. Se respiraba una sensación de cambio, incluso de optimismo.

Estas expectativas surgían de la monumental crisis de la banca que en 1982 hundió a la economía en la recesión y desencadenó protestas masivas contra el régimen militar. Estos acontecimientos electrizaron a la oposición: por primera vez en casi una década, Pinochet parecía vulnerable. Los líderes políticos y sociales volvieron a la actividad pública exigiendo su renuncia, el establecimiento de un gobierno provisional, la reformulación de la Constitución y la realización de elecciones libres. Pero el optimismo duró poco. El régimen respondió a la fuerza con más fuerza y hábilmente condujo a la oposición a tratativas que finalmente resultaron ser estériles. Luego, tras descubrirse una masiva internación de armas y de un fallido intento de la extrema izquierda por asesinar a Pinochet, el régimen declaró el estado de sitio, redobló la represión y se refugió en sus cuarteles. Las protestas decayeron y la frustración y el desaliento invadieron a la oposición. Los esfuerzos por defenestrar al régimen habían fracasado.²

En este período, la intelectualidad opositora empezó a tener un impacto político más directo. Siguió haciendo trabajo primordialmente académico pero variando el acento del pensamiento a la estrategia política, y aprovechó su credibilidad y capacidad técnica para participar directamente en el incipiente debate político. Con ello hizo grandes aportes en dos ámbitos: restablecer la confianza y entendimiento

¹ Un proyecto semejante a la «democracia limitada» o «democradura» descrita por O'Donnell y Schmitter en *Transitions from Authoritarian Rule*, p. 9.

² Patricia Verdugo y Carmen Hertz, *Operación Siglo XX* (Santiago: Ediciones del Ornitorrinco, 1990), hacen un detallado relato periodístico de estos acontecimientos.

mutuos que habían estado ausentes de la política chilena durante veinte años, y dar una visión y análisis político-estratégico a los renacientes partidos políticos. Hacia fines de 1986, la intelectualidad disidente había proyectado su rol académico mucho más allá de lo que históricamente se asocia con la torre de marfil. De hecho, muy pronto diversos actores intelectuales empezaban a trascender estos roles para convertirse directamente en actores políticos.

Principios de los 80: crisis y contexto

Hacia principios de los años 80, el régimen había logrado imponer una serie de drásticas reformas económicas y sociales que, con la conducción del equipo económico neoliberal conocido como los Chicago Boys, reestructuraron completamente la economía. Se eliminó el grueso de los subsidios estatales, se bajaron los aranceles y las restricciones a la importación, se abrió prácticamente toda la actividad económica a la libre competencia, se limitó fuertemente la función del Estado y se amplió la del sector privado.

Según algunos indicadores, estas medidas fueron todo un éxito. El PIB y el ingreso real crecieron durante cinco años seguidos; se redujo drásticamente la inflación y se eliminó el déficit fiscal; la inversión extranjera tomó fuerza y las exportaciones no tradicionales se triplicaron respecto de mediados de los 70. Los aspectos negativos –fuerte cesantía, déficit comercial, mayor deuda externa y menor inversión interna, distribución del ingreso cada vez más desigual– eran en general desestimados. El régimen hablaba del «milagro chileno» y decía confiado que hoy íbamos bien, mañana mejor.

El régimen impuso también una nueva Constitución que, además de prestarle la legitimidad política de que carecía, fijó el procedimiento y un cronograma para la vuelta a una democracia protegida. Se había cumplido también un ciclo de «modernizaciones» que tradujeron las ideas neoliberales en reformas radicales. Fue un período triunfal: el régimen parecía más fuerte que nunca y el país, decían muchos, iba camino al desarrollo³.

³ Cavallo, Salazar y Sepúlveda, *La historia oculta del régimen militar*, p. 273.

La intelectualidad opositora también tenía grandes logros que mostrar. Había sobrevivido y, además, creado una extensa y pujante red de instituciones alternativas que le ofrecían trabajo estable, intercambios profesionales y una fuerte presencia pública. Era productiva y eficiente y trabajaba en estrecho contacto con sus pares de Europa y Estados Unidos. Superando los fracasos del pasado, muchos intelectuales habían estructurado un pensamiento político de nuevo tipo. Se habían hecho más especializados, empíricos y tecnocráticos. El immoderado ideologismo que los había caracterizado en los años 60 había dado paso a las inquietudes instrumentales y las políticas públicas.

Las nuevas visiones políticas que surgieron en la intelectualidad opositora fueron producto de múltiples factores. En parte porque su financiamiento provenía del extranjero, los centros de investigación mantenían fuertes lazos con centros de América Latina, Canadá, Estados Unidos y Europa. Sus colaboradores mantenían contacto regular con sus pares extranjeros y participaban ocasionalmente en proyectos conjuntos de investigación. Asistían a congresos internacionales y conocían el *thatcherismo*, el *glasnost*, la *perestroika* y demás transformaciones ideológicas que se operaban en el mundo. Muchos partieron becados a hacer posgrados en Europa o Norteamérica.

Los intelectuales exiliados habían estado expuestos a estímulos incluso mayores. Hasta por lo menos 1984, la mayoría de los dirigentes políticos y muchos intelectuales de izquierda vivieron exiliados en países como Suecia, Francia, Holanda, Italia, Venezuela y México. Otros optaron por la Unión Soviética, Alemania Oriental o Rumania, países del bloque comunista que mantenían lazos históricos con la izquierda chilena. Más tarde, algunos volverían a Europa Occidental⁴. Durante casi diez años conocieron de primera mano las democracias capitalistas de Europa Occidental y el «socialismo real» de Europa Oriental y de la URSS, fenómeno que pocas veces antes había ocurrido. Vivieron el debate sobre el eurocomunismo, leyeron a Gramsci y desarrollaron

⁴ Por ejemplo, el dirigente e intelectual socialista Jorge Arrate vivió primero en Roma, luego en Alemania Oriental y por último en Holanda, donde estableció el Instituto para el Nuevo Chile y tuvo un rol protagónico en los debates sobre el pensamiento político de la izquierda. Aportan interesantes detalles sobre el exilio chileno Alan Angell y Susan Carstairs, en «The Exile Question in Chilean Politics», *Third World Quarterly* 9 (1987) y Angell, en «International Support for the Chilean Opposition».

relaciones directas con la socialdemocracia europea. También conocieron de primera fuente la represión política y el estancamiento económico que caracterizó a los países del bloque comunista, y luego su decadencia. Muchos que habían mirado a la socialdemocracia europea con recelo empezaron a tomarla más en serio; otros, impactados por las condiciones en Europa Oriental, empezaron a buscar una nueva visión.

En suma, la experiencia del exilio impactó fuertemente a los intelectuales opositores, al punto de generar un profundo debate sobre principios políticos que más tarde los llevaría a adscribir a la socialdemocracia de corte europeo y a suscribir muchos aspectos básicos del capitalismo de libre mercado. Gran parte de ese debate se desarrolló en las páginas de la revista *Chile-América* que José Antonio Viera-Gallo editaba en Roma y que a fines de los 70 y principios de los 80 fue el principal foro del socialismo chileno. Este debate tuvo un gran impacto. «Roma es lo que más me marca», recuerda el intelectual socialista Jorge Arrate. «Es el gran impacto en nosotros, tal como antes lo fuera la revolución cubana y, más tarde, el gobierno de Allende»⁵. A principios de los 80, cuando a los exiliados se les empezó a permitir el retorno a Chile, traían consigo una nueva valoración de la democracia y una nueva perspectiva sobre el desarrollo económico.

Tanto dentro como fuera de Chile, la intelectualidad había entrado en contacto con los grandes cambios que sacudían al mundo. Estaba mucho más conectada con sus pares del extranjero y al tanto de los avances y los acontecimientos, y en respuesta, reinterpretó su propio pensamiento. Los intelectuales disidentes se integraron a una comunidad de académicos europeos y norteamericanos, y su pensamiento se internacionalizó.

No obstante, el país, y especialmente el sistema político, arrastraban una pesada carga de conflicto y represión que fomentaba la división y constreñía el debate. Los conflictos de los treinta años anteriores –entre católicos y no católicos, revolucionarios y reformistas, pinochetistas y oposición– tenían, como señaló un observador, «un peso simbólico enorme» que hizo que en los años 70 fuera «impensable» forjar

⁵ Jorge Arrate, citado en Walker, *Socialismo y democracia*, p. 183. Walker documenta con elocuencia la incidencia del exilio europeo en los pensadores socialistas; véase especialmente pp. 181-188.

coaliciones (Martínez, 6 de marzo de 1991). Como agrega Brunner, la división tenía raíces no solo ideológicas, sino también en los dramáticos acontecimientos del pasado reciente: «Hay que recordar que el gobierno de la Unidad Popular había sido derrocado en parte por la movilización demócratacristiana, y que el gobierno de Allende y los partidos de la Unidad Popular habían sido completamente intolerantes respecto de la Democracia Cristiana, generando encono político y un enorme cinismo» (28 de febrero de 1991).

Estas diferencias empezaron a descomprimirse a medida que la democracia y el pluralismo pasaban a dominar la agenda partidaria de los 80, pero seguían existiendo enormes barreras psicológicas e interpersonales y la política chilena continuaba en estado de fragmentación. Los políticos de diferentes bandos no se tenían confianza ni estaban acostumbrados a trabajar juntos. De hecho, en general, no tenían contacto alguno, dado que se movían en subculturas políticas que casi no coincidían. De allí los «mundos paralelos» a que Flisfisch hacía referencia en el epígrafe al presente capítulo.

Además, en abierto contraste con el gobierno militar, la oposición carecía de una agenda de futuro. Aún no se iniciaba el debate estratégico y solo había acuerdo sobre un difuso concepto de democracia⁶. La única perspectiva real de transición a la democracia era la establecida en la Constitución de 1980, pero esta decía que, si Pinochet ganaba el plebiscito programado para 1989, seguiría en el poder hasta 1997, presidiendo una democracia protegida que ofrecía espacios mínimos de participación. Pocos en la oposición creían que el plebiscito fuera a ser limpio o, incluso si lo fuese, que se pudiera derrotar a Pinochet. Más aún, por consagrar un concepto autoritario de democracia y haber sido impuesta en un plebiscito de dudosa legalidad, la oposición había repudiado sistemáticamente la Constitución de 1980 y la transición que disponía. Así, aunque en la oposición el rechazo a la transición democrática propuesta por el régimen era abrumador, no había una estrategia propia que anteponer.

La situación política dio un giro trascendental con la crisis económica que empezó en 1982. Las primeras señales se percibieron el

⁶ Garretón, en «La oposición política partidaria», pp. 415-417; y «Political Opposition and the Party System», pp. 216-227, analiza las falencias del debate opositor sobre estrategia política.

4 de abril de ese año, luego de que *El Mercurio* publicara un editorial criticando la política económica. Semejante crítica, inaudita para la época, le valió al director del periódico, Arturo Fontaine Aldunate, una invitación a aceptar la embajada en Argentina. *El Mercurio* era defensor acérrimo del régimen y con frecuencia se le llamaba, con total seriedad, el principal partido de la derecha. Su crítica, por tanto, daba cuenta de serios problemas.

En el segundo semestre de 1982, entró en crisis la banca chilena como consecuencia de una mala política macroeconómica y peor fiscalización del sistema. A principios de 1983 la banca cayó en la insolvencia y el gobierno debió intervenir la mayor parte de los bancos. El resultado fue un terremoto financiero. Se desplomó el mercado de valores, quebraron los fondos mutuos, se perdió parte importante de la riqueza nacional y la economía entró en recesión. El desempleo subió a más del 30% (49% solo en el rubro construcción en Santiago) mientras el PIB caía en un 21,3%. Tras años de buenos resultados, la economía pinochetista súbitamente parecía un fracaso total⁷.

La importancia política de estos acontecimientos radicaba en revelar, por primera vez desde el golpe militar, que el régimen era vulnerable; de hecho, le restaron una cuota importante de apoyo. La recesión golpeó a todos los niveles socioeconómicos, desde acaudalados empresarios y ex altos funcionarios del régimen hasta ciudadanos de a pie que perdieron todos sus ahorros. A la crítica, el régimen acostumbraba oponer tres factores: 1) El triste recuerdo del conflicto y el caos que precedieron al golpe; 2) El miedo a la represión; y 3) Una economía sana y en expansión. La crisis económica eliminó uno de esos tres pilares de apoyo y dejó al régimen tambaleándose sobre los otros dos.

La reacción no tardó en llegar. El 11 de mayo de 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), el mayor órgano sindical del país, realizó una «protesta simbólica» contra el régimen. El movimiento, pensado en principio como un paro nacional y reducido después a protesta, fue llamado por Rodolfo Seguel, recién elegido presidente del Comando Nacional de Trabajadores (CNT) e ilustre desconocido en

⁷ Véase Joseph Ramos, *Neoconservative Economies in the Southern Cone of Latin America, 1973-1983* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984); y Silvia T. Borzutzky, «The Pinochet Regime: Crisis and Consolidation», en Malloy y Seligson, *Authoritarians and Democrats*, pp. 71-79.

política⁸. Realizada pese al escepticismo de algunos dirigentes sindicales y de muchos líderes políticos, la protesta tuvo un éxito tan rotundo como sorprendente.

El día empezó en relativa calma, con bajo ausentismo laboral y pocos incidentes. Hasta media tarde no había señales de una respuesta pública significativa. A las 20 hrs., sin embargo, comenzó en todo Santiago un cacerolazo masivo. La gente salió en caravana por las calles, tocando la bocina. En toda la ciudad, incluso en sectores de clase media y alta donde predominaban los partidarios del régimen, estalló una protesta pública sin precedentes. Chile perdía el miedo a la represión y empezaba a hacer oír su voz.

Días después el gobierno clausuró Radio Cooperativa, la principal emisora de oposición, e inició allanamientos y detenciones masivas en las poblaciones. Un iracundo Pinochet acusó a «los señores políticos» de usar los sindicatos para crear conflicto, pero el juez Rafael Retamal, recién elegido presidente de la Corte Suprema, estimó que la protesta había sido legal. Seguel raudamente anunció otra protesta para el 14 de junio, iniciándose así un ciclo de paros y protestas mensuales que se prolongaría por más de tres años⁹.

Los hechos tomaron por sorpresa tanto al régimen como a la oposición. El llamado a protesta había sido recibido por la dirigencia opositora con serias dudas que muchos líderes sindicales también compartían. Pocos habían previsto que las organizaciones sociales fueran a ser capaces de movilizarse por sí solas, sin orientación de los partidos. Ciertamente, subestimaron la «resurrección de la sociedad civil» que se estaba produciendo¹⁰. Adelantándose al liderazgo político, las múltiples instituciones que constituían la sociedad civil chilena –sindicatos, organismos de base, colegios profesionales, sectores estudiantiles– se

⁸ Véase Cavallo, Salazar y Sepúlveda, *La historia oculta del régimen militar*, pp. 396-398.

⁹ Entre los análisis de mayor interés sobre las protestas se destacan Genaro Arriagada, «Negociación política y movilización social: la crítica a las protestas», *Materiales para discusión del CED 162* (Santiago: CED, 1987), y Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, *La explosión de las mayorías: Protesta nacional, 1983-1984* (Santiago: Educación y Comunicaciones, 1985).

¹⁰ Aplican este concepto al caso chileno O'Donnell y Schmitter, en *Transitions from Authoritarian Rule*, pp. 48-56; e Ignacio Walker, en «La dinámica régimen-oposición bajo la dictadura militar chilena (1973-1988)», *Debat 12* (1988): pp. 33-47.

convirtieron en el primer y fundamental cauce por el cual el extendido descontento devino en protesta focalizada y sistemática.

Nacía una nueva época y se cruzaba una barrera psicológica. Las protestas que brotaron el 11 de mayo de 1983 desencadenaron una ola de abierta resistencia que transformó a la oposición y al régimen por igual¹¹. La experiencia de perder el miedo y resistir públicamente fue para muchos una suerte de declaración de independencia tras la cual se escondía la profunda indignación e impotencia acumuladas durante casi diez años. Para muchos la caída del régimen era inminente, quizás cuestión de semanas; el cántico *Y va a caer* estaba en boca de todos. Tras una década de represión y humillaciones, la oposición esperaba fervientemente que esa esperanza se hiciera realidad.

La estrategia opositora: movilización social

El espectacular éxito de las primeras protestas tomó desprevenida a la oposición, la que no se esperaba esta «irrupción de la política en el espacio público» y no estaba en condiciones de sacarle partido¹². Hasta ahora su labor se había centrado en sobrevivir, entender los fracasos del pasado y criticar al régimen de Pinochet; ahora, sin previo aviso, se le aparecía una oportunidad totalmente inesperada. Por primera vez desde el golpe, la oposición empezó a pensar seriamente en una estrategia de transición.

Su respuesta no se hizo esperar. Antes de dos meses, y pese a la prohibición que afectaba a la actividad política, la Democracia Cristiana había asumido públicamente la conducción de las protestas. En agosto, dirigentes de centro y centroizquierda encabezados por Gabriel Valdés, presidente de la DC, conformaron la Alianza Democrática (AD), exigiendo la renuncia de Pinochet, un gobierno provisional y una asamblea constituyente¹³. Dos años más tarde, dirigentes de once

¹¹ Huneus, en «La política de la apertura», hace lo que es quizás el mejor análisis de esta transformación.

¹² Garretón, «La oposición política partidaria», p. 413.

¹³ La conformación de la Alianza Democrática fue posible debido al quiebre entre izquierda democrática y ortodoxa, producto del proceso de renovación por el que pasaron los distintos partidos socialistas después del golpe. Dicho quiebre adquiriría aún mayor relevancia en años posteriores.

partidos de oposición, encabezados por Sergio Molina, ex ministro de hacienda de Frei Montalva; Fernando Léniz, ex ministro de hacienda de Pinochet, y José Zabala, empresario demócratacristiano, suscribirían el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia (AN), llamando a elecciones abiertas y a buscar acuerdo en temas de fondo. Este histórico acuerdo fue el primer acercamiento entre socialistas y demócratacristianos en más de veinte años, y el primer pacto opositor formal en incluir a ex partidarios de Pinochet. Lo que había empezado como una reacción del sindicalismo ante el desastre económico se convirtió en un llamado de los partidos políticos: «Democracia ahora».

De estos acontecimientos surgió la estrategia rupturista que, en lo medular, se mantendría hasta principios de 1988. Esta postura rechazaba el mecanismo de transición fijado en la Constitución y exigía la entrega inmediata del poder a través de un gobierno provisional o de elecciones directas. Advertía al régimen que sería presionado a través de «la movilización social» –definida en general como multitudinarias manifestaciones pacíficas capaces de desestabilizarlo– hasta que cediera¹⁴.

Pero según Walker, la postura opositora fue desde sus inicios una «estrategia doble y contradictoria»¹⁵. La Alianza Democrática visualizaba un proceso en que se realizarían multitudinarias manifestaciones pacíficas para convencer a las fuerzas armadas de retirarle su apoyo a Pinochet y negociar una transición a la democracia. La izquierda ortodoxa, consternada ante la moderación de esa postura, rápidamente tomó un rumbo diferente. En septiembre de 1983, tres grandes conglomerados de izquierda –el Partido Comunista, el PS Almeyda y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)– conformaron el Movimiento Democrático Popular (MDP), instancia que adoptó una postura explícitamente insurreccional, oponiéndose a toda forma de diálogo con el régimen y reivindicando la legitimidad de «todas las

¹⁴ Véase Genaro Arriagada, *Pinochet: The Politics of Power* (London: Unwin Hyman, 1988), pp. 70-74. Pese a que las protestas organizadas terminaron en julio de 1986, la oposición mantuvo su postura rupturista hasta principios de febrero de 1988, cuando decidió participar en el plebiscito.

¹⁵ Entrevista con Ignacio Walker, 7 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

formas de lucha» contra la dictadura. El MDP apoyaba las acciones armadas que realizaba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) para provocar una «insurrección nacional de masas». A diferencia de la estrategia explícitamente política y reformista de la Alianza Democrática, la opción del MDP fue claramente militar y revolucionaria¹⁶.

Para ambos sectores, el énfasis en la movilización social se sustentaba en un conjunto de supuestos respecto del régimen: que carecía de apoyo popular, que el modelo neoliberal fracasaría porque discriminaba cruelmente a los más pobres y que el descontento era tan amplio y profundo que sería capaz de sustentar movilizaciones masivas y prolongadas contra el régimen¹⁷. La oposición creía, agrega Brunner, que el modelo «estaba condenado al fracaso porque discriminaba socialmente, porque su base de sustentación era un alto endeudamiento externo, porque dividía brutalmente al país entre una minoría pudiente y una mayoría pobre, porque no tenía dinámica propia, etcétera... La crítica económica planteaba, en esencia, ‘seguir empujando la movilización, porque en este país hay tanta pobreza y tanta miseria que el modelo económico está condenado al fracaso, así que aunque nos demoremos, no podemos perder’» (28 de febrero de 1991). Es decir, parecía que la represión era lo único que mantenía al régimen en el poder.

En primera instancia, hubo poco debate en torno a los elementos y supuestos básicos de la estrategia de movilización. Intelectuales y políticos por igual creían que la movilización social era la única forma de enfrentar al régimen, idea que puede haber nacido de la extraordinaria importancia psicológica que tenía la protesta pública para una oposición que había sufrido tanto y por tantos años. La idea de sacar a Pinochet del poder era irresistible, y protestar se convirtió en una suerte de catarsis colectiva.

También puede haber sido, como añade el dirigente socialista Ricardo Núñez, que el origen espontáneo y de base de las primeras protestas generó una dinámica que la dirigencia política sintió que debía

¹⁶ Documentan y analizan esta división Huneeus, en «La política de la apertura»; de la Maza y Garcés, en *La explosión de las mayorías*; Javier Martínez, en «Miedo al estado, miedo a la sociedad», *Proposiciones 12* (1986): pp. 32-42; y Arriagada, en «Negociación política y movilización social».

¹⁷ Walker, en «La dinámica régimen-oposición», hace un interesante análisis de la estrategia de movilización social y sus falencias.

seguir: «El estallido de las protestas produjo un cambio cualitativo... en que la influencia pasó de la dirigencia política profesional y académica a las organizaciones sociales y la militancia partidaria; el proceso 'se masificó'» (18 de marzo de 1991). Esta observación, sin embargo, también se puede interpretar en términos de un ardoroso resurgimiento de la actividad partidaria después de años de parálisis y represión. Durante casi diez años, mientras la política se convertía en un quehacer fundamentalmente intelectual, la militancia había quedado relegada a segundo plano. Así, las protestas representaron una inesperada oportunidad de volver a actuar que aprovechó de inmediato, prescindiendo de la intelectualidad y hasta de las cúpulas partidarias. Siguiendo sus instintos y supuestos políticos históricos, saltaron a la palestra los activistas de nivel medio y los dirigentes de base. Un artículo publicado a principios de 1986 en *APSI*, una de las principales revistas de oposición, da cuenta del fervor que atravesaba al pensamiento opositor: «Este año es clave, el obstáculo a un proceso de democratización es Pinochet, y para vencer ese obstáculo solo cabe movilizarse»¹⁸. En materia de política de oposición, los partidos nuevamente llevaban la batuta.

Como haya sido, en principio pocos criticaron la estrategia de movilización. En 1984 un personaje de la talla de Patricio Aylwin propuso en un seminario del ICHEH dejar de lado las reservas sobre la legitimidad de la Constitución y ver formas de trabajar dentro de ese marco, llamado que prácticamente no tuvo efecto sobre la estrategia opositora¹⁹. Un observador recuerda que la idea fue «enormemente criticada al interior de la DC y, obviamente, en el resto de la oposición»²⁰. Aylwin no volvió a insistir y se avino a la política de movilización; el tiempo se encargaría de demostrar que había tenido razón.

El supuesto de que el régimen era impopular y estaba desgastado llevó a la dirigencia opositora a convencerse de que podría generar un nivel suficiente de protesta social como para hacer al país ingobernable y obligar a las fuerzas armadas a negociar una inmediata transición a la democracia. En palabras de Gabriel Valdés Subercaseaux, entonces

¹⁸ *APSI* 171 (1986): p. 4.

¹⁹ Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), ed., *Una salida político-constitucional para Chile* (Santiago: ICHEH, 1985), pp. 145-154.

²⁰ Entrevista con Andrés Sanfuentes, 1 de marzo de 1991. El incidente se describe en Cavallo, *Los hombres de la transición*, pp. 38-39.

presidente del Partido Demócrata Cristiano, «Vimos que el proceso crecía y le creaba dificultades a Pinochet, lo que reforzó nuestra convicción de que iba a tener que entrar en conversaciones. Antes o después de cada protesta le hacíamos ver a él y a las fuerzas armadas que éramos democráticos y que queríamos dialogar». La oposición apoyó así una larga serie de protestas que se mantuvieron hasta fines de 1986 con masivas manifestaciones, paros nacionales y cacerolazos a horas preestablecidas de la noche. También presentó a las fuerzas armadas una serie de propuestas en que habitualmente se pedía la renuncia de Pinochet, un gobierno provisional y una asamblea constituyente, y se hacía explícito el rechazo a la Constitución de 1980²¹. La estrategia opositora, en suma, fue coherentemente rupturista: perseguía alterar los mecanismos y el cronograma que el régimen había fijado para la transición a un gobierno civil.

Enfrentado a una creciente ola de protestas, el régimen trató de ganar tiempo dejando entrever que podría estar dispuesto a ceder sobre la transición a un gobierno civil. En agosto de 1983, Pinochet designó en la cartera de Interior a Sergio Onofre Jarpa, respetado ex dirigente del Partido Nacional, y lo autorizó a negociar con la Alianza Democrática. También tomó audaces medidas para resolver la crisis económica, nombrando en Hacienda al joven tecnócrata Hernán Büchi. Sin embargo, y dado que ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder, a poco andar las conversaciones con la oposición quedaron en punto muerto. Para ese entonces el régimen se había reagrupado y endurecido sus posiciones. El 6 de noviembre de 1984, Pinochet repuso el estado de sitio y redobló la represión. Se había llegado a un *impasse* y la violencia nuevamente azotaba la frágil escena política chilena.

En los años siguientes, Chile fue un campo de batalla en que régimen y oposición se enfrentaron a través de protestas, detenciones, secuestros, tortura y atentados explosivos. A las protestas, que se hicieron prácticamente cada mes hasta 1986, el régimen respondió con una brutal represión que dejó cientos de muertos y miles de detenidos. Las zonas populares eran constantemente allanadas por efectivos militares y se relegaba a los dirigentes de la izquierda a remotas localidades.

²¹ Entrevista con Gabriel Valdés Subercaseaux, 1º de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha. Véase descripción en Walker, «La dinámica régimen-oposición», pp. 35-39.

Mientras la oposición se mantenía firme en su postura de que solo con masivas manifestaciones se obligaría al régimen a transigir, Pinochet y las fuerzas armadas se negaron sistemáticamente a dar pie atrás, decididos a evitar represalias como las impuestas a sus homólogos argentinos después de 1983, tras el retorno a un gobierno civil, dejando en claro que estaban dispuestos a utilizar toda la fuerza que fuera necesaria para mantener el orden. También se hicieron más comunes los hechos de violencia aislada: tres militantes comunistas fueron degollados; terroristas de izquierda asesinaron a oficiales de ejército; en una manifestación realizada en 1986, una patrulla militar roció a dos jóvenes con combustible y los quemó vivos.

El uso desatado de la represión logró lo que se proponía. En lugar de recrudecer y extenderse a todo el país, a fines de 1983 las protestas y manifestaciones tocaron techo y empezaron a disminuir. Describe el proceso el sociólogo Javier Martínez: «A partir de septiembre de 1983 el carácter de las protestas empezó a definirse en términos de los sectores sociales que protestaban. Se impusieron los sectores marginales urbanos, y las capas medias empezaron a desaparecer de la movilización. Eso claramente marcó el fracaso de la estrategia como estrategia nacional de construcción democrática». Si bien la gente seguía saliendo a protestar (a fines de 1985 la Alianza Democrática hizo una manifestación pacífica a la que asistieron cientos de miles de personas) y la violencia seguía aumentando, pocos estaban dispuestos a avanzar hacia una insurrección o guerra civil. Así, según Martínez, para al menos algunos sectores de la oposición, las protestas pasaron de oportunidad a una pesada carga: «Ya en 1984 la gente no hablaba de *llamar* a una protesta sino de *pasar* la protesta... la gran discusión en la dirigencia era si la habíamos pasado bien o no. Era como pasar un examen. En lugar de ser un emplazamiento al régimen, empezaron a ser casi un emplazamiento a la oposición; ver si seríamos capaces de hacer una protesta o no» (6 de marzo de 1991).

Hacia principios de 1986, con las protestas en retirada y el Acuerdo Nacional en veremos, la oposición conformó la Asamblea de la Civi-
lidad, una coalición de colegios profesionales y organizaciones cívicas tendiente a resaltar el carácter amplio y de base del apoyo para una inmediata transición a la democracia. Sin embargo, la «Demanda de Chile» que planteó la Asamblea no tenía mayor diferencia con las posturas del Acuerdo Nacional, lo que llevó al régimen a responder con

más represión. La oposición moderada empezó a derivar paulatinamente hacia la violencia, acompañada por elementos de ultraizquierda que entendían mucho más de agitación y protestas. Dice Arriagada: «La oposición democrática quedó atrapada entre la represión de Pinochet y la locura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Partido Comunista» (8 de marzo de 1991).

La oposición, desconcertada e incapaz de remover al régimen, estaba preocupada por la respuesta violenta que podía estarse gestando en la izquierda. Recuerda Ignacio Walker: «A fines del 86 nos sumimos en la depresión total. Todo había fracasado: la estrategia comunista y la no comunista» (7 de marzo de 1991). Gabriel Valdés Subercaseaux, presidente del Partido Demócrata Cristiano, expresó la inquietud que sentían muchos dirigentes opositores: «Pensábamos que la Alianza Democrática, que había sido conformada por gente absolutamente democrática, iba a ser sobrepasada por el MDP y los comunistas, que siempre nos habían atacado violentamente. Luego vino el atentado contra Pinochet, lo que causó una gran conmoción y nos hizo ver que podíamos estar yendo hacia una guerra civil o a una situación totalmente descontrolada» (1 de marzo de 1991). La oposición democrática había exigido «democracia ahora», pero en lugar de ello enfrentaba un violento conflicto entre fuerzas armadas y ultraizquierda²².

La principal falla opositora fue no haber calibrado bien la situación: «Se subestimó la fuerza del régimen y se sobreestimó la propia». Como señala Garretón, la oposición basó su análisis en un «modelo insurreccional clásico» que suponía la fuerza necesaria para hacer al país ingobernable, doblegar al régimen y negociar la entrega del poder²³. Este análisis se sustentaba en tres supuestos: 1) Que el régimen era conservador en el sentido de proteger el poder y los privilegios de la élite tradicional frente a las demandas populares; 2) Que se mantenía en el poder solamente gracias a la represión; y 3) Que la política económica era ampliamente impopular y estaba condenada al fracaso. Un

²² Según Cavallo en *Los hombres de la transición*, p. 41, la dirigencia DC quedó impactada por la revelación hecha por el funcionario del Pentágono Néstor Sánchez durante un encuentro en la embajada de Estados Unidos, en cuanto a que las armas estaban embalsadas para un largo tiempo y que eran para usarse tanto contra el régimen militar como contra el gobierno democrático que lo sucediera.

²³ Walker, «La dinámica régimen-oposición», p. 37. Garretón, «La oposición política partidaria», pp. 415-417.

régimen así era de suyo vulnerable, y la crisis económica había inclinado la balanza hacia el colapso. Lamentablemente, la mayoría de estos supuestos demostraron ser falsos.

Es más, la oposición nunca consensuó objetivos ni estrategias. Lo que hubo fue una incómoda alianza tácita entre una coalición de centro compuesta por sectores medios que querían llegar a una democracia pluralista por medios no violentos y una coalición de izquierda tradicional centrada en sectores populares urbanos y dispuesta a recurrir a la violencia para llegar a la revolución socialista. El primer grupo, representado por la Alianza Democrática, proponía negociar con el régimen y rechazaba la violencia; el segundo, representado por el Movimiento Democrático Popular, se negaba a negociar y estaba dispuesto al enfrentamiento armado. Por cierto, estas posturas eran incompatibles entre sí, y poco a poco la oposición moderada empezó a sentirse aprisionada entre las medidas represivas de Pinochet y la violencia revolucionaria de la extrema izquierda.

La oposición tampoco supo dimensionar el nivel de compromiso del régimen con la «nueva institucionalidad» ni la cohesión de las fuerzas armadas y su lealtad hacia Pinochet. Al exigir en los hechos una rendición incondicional y esperar a que la movilización social obligara al régimen a negociar, la oposición hizo una apuesta que no tenía cómo ganar. La renuncia de Pinochet, un gobierno provisional y una asamblea constituyente eran demandas inaceptables para las fuerzas armadas, y tampoco generaron una movilización lo suficientemente amplia como para obligar a las fuerzas armadas a cambiar de parecer²⁴. El régimen rechazó de plano incluso las moderadas demandas que el Acuerdo Nacional presentó a fines de 1985. Esta estrategia pudo haber sido hasta contraproducente, según Walker, dado que, al presentir una amenaza que les afectaba en su conjunto, las fuerzas armadas cerraron filas en torno a Pinochet²⁵ y se retiraron a sus cuarteles mientras los manifestantes se desgastaban solos.

Por cierto, la estrategia de movilización tuvo algunos logros. Al perderle el miedo al régimen, la oposición rompió una barrera psicológica, lo que fue fundamental para el éxito de las confrontaciones

²⁴ Debido a estas inconsistencias, Garretón afirma que la estrategia fue más de oposición que de transición (8 de marzo de 1991).

²⁵ Walker, «La dinámica régimen-oposición», p. 37.

que vendrían después. En términos de expresión pública y actividad política, instaló nuevas zonas de autonomía que el régimen no pudo revertir completamente. Permitió, además, dar inicio al proceso de conversaciones interpartidarias que culminaría en la Concertación de 1988 y reactivar las fuerzas sociales y políticas que habían estado latentes durante casi diez años, motivándolas a cuestionar la legitimidad del régimen y elevar el costo de aferrarse al poder. Estos fueron logros importantes que concuerdan con las prescripciones de Stepan para las oposiciones democráticas en regímenes autoritarios²⁶.

Pero siguiendo con Stepan, la oposición chilena no logró crear una alternativa democrática confiable. Prácticamente ninguna transición democrática de la historia reciente había seguido el camino implícito en la estrategia chilena de movilización opositora. Había cuestiones fundamentales sin resolver, entre ellas el carácter del régimen, la división opositora y el tipo de proceso democrático a seguir. Las fuerzas armadas no estaban dispuestas a rendirse. Muchos elementos de la izquierda, particularmente del Partido Comunista, no tenían intención de negociar y preferían la estrategia insurreccional, aunque significara una guerra civil²⁷. En términos de Stepan, no había acuerdo sobre «la fórmula para conducir la contienda democrática»²⁸.

Nace el intelectual político

Al ceder la represión y aparecer más espacios políticos, la intelectualidad opositora empezó a asumir conscientemente un papel más político. Sus actividades –investigación, docencia, publicación y debate– siguieron siendo fundamentalmente académicas, pero el acento pasó desde el pasado al presente y al futuro, y desde el pensamiento político a nuevas cuestiones de estrategia política. La intelectualidad adoptó, además, medidas sistemáticas para abordar problemas políticos concretos –como la unidad de la oposición y las realidades de

²⁶ Alfred Stepan, «On the Tasks of a Democratic Opposition», *Journal of Democracy* 1 (1990): pp. 44-47.

²⁷ Loveman, en «Private Development Organizations», p. 53, refiere los obstáculos para la unidad de un movimiento opositor.

²⁸ Stepan, «Tasks of a Democratic Opposition», p. 47.

una política de transición y post-transición– que las dificultades del régimen y su propio cronograma de transición habían puesto sobre el tapete. También empezó a salir del mundo académico para accionar sobre la clase política; es decir, los actores políticos, sociales y profesionales. Con ello el mundo intelectual dejó de lado el papel clásico de productor de conocimiento para convertirse en articulador entre el mundo de las ideas y la sociedad civil.

En gran parte esto fue producto de la debilidad, división y dispersión de los demás componentes de la sociedad civil, en especial los partidos, los que tras diez años de una precaria existencia clandestina no estaban en condiciones de cumplir con su función histórica de contender y representar. Seguían fuera de la ley y no se podían reunir, elegir directivas ni deliberar abiertamente; muchos eran poco más que cúpulas de militantes históricos sin base comprobable y limitado contacto con sus supuestos representados. Algunos dirigentes, de hecho, recién volvían del exilio²⁹, lo que ponía en duda –por decir lo menos– su capacidad para aquilatar el estado de ánimo ciudadano, definir estrategias o movilizar apoyos.

La izquierda en general seguía en proceso de recuperarse de la represión sufrida a manos de la dictadura. Muchos dirigentes habían salido al exilio; otros habían sido asesinados. El trauma de la derrota había generado, además, un duro debate sobre principios y organización que recién empezaba a converger en nuevos nucleamientos. El PS renovado, por ejemplo, se había fundado en octubre de 1983 y había elegido a su primer presidente, Carlos Briones, en 1984. Hacía poco que, tras la muerte de Eduardo Frei, Gabriel Valdés había sido elegido –de forma clandestina– como nuevo presidente de la DC. Los partidos de derecha, autodisueltos tras el golpe, empezaban recién a reorganizarse. Describe la situación Ricardo Núñez, después presidente del PS renovado: «En general, los partidos fueron diezmados. No había estructuras partidarias claramente definidas. Todos los partidos eran

²⁹ Arriagada, en *Pinochet*, p. 68, relata, por ejemplo, que al estallar las protestas, tres de cuatro ex-presidentes de la DC estaban en el exilio. Asimismo, Huneeus, en «La política de la apertura», p. 61, señala que un sondeo hecho en 1985 a miembros de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana reveló que el 37% había sido detenido, torturado, relegado o exiliado; el 20% había sido exonerado y el 16% había recibido amenazas anónimas.

pequeñas cúpulas o grupos dirigentes que trataban de marcar presencia, pero con poca transcendencia nacional. Ni el Partido Comunista, ni el dividido Partido Socialista, ni ningún otro sector de izquierda –ni siquiera la DC, que tenía un presidente formal, Gabriel Valdés– podían decir que tuvieran la capacidad de conducir los grandes procesos que Chile estaba viviendo» (18 de marzo de 1991).

El gobierno, tras fragmentar sistemáticamente al movimiento sindical, se oponía tenazmente a todo esfuerzo por conformar confederaciones obreras³⁰. La gran excepción, por cierto, la aportaba la Iglesia, la que pese al nombramiento de un arzobispo conservador siguió oponiéndose firmemente al régimen. Aunque había recuperado algo de fuerza, la sociedad civil seguía en general atomizada, desorganizada y proscrita.

Otras instituciones que tradicionalmente servían de puente entre la política y la sociedad civil seguían sujetas a fuertes controles. Las universidades continuaban bajo intervención directa o indirecta; la televisión estaba totalmente controlada por el régimen y los demás medios (radios, diarios, revistas) estaban sujetos a límites y sanciones. Ricardo Lagos, uno de los más destacados intelectuales-políticos de la izquierda, describe los obstáculos a la libre expresión que subsistían después de diez años de dictadura: «Recuerdo que en 1983, por ejemplo, fue la primera vez que el canal estatal me entrevistó sobre la Alianza Democrática. Yo dije ‘No voy a hacer declaraciones al canal estatal porque usted va a editar lo que yo diga y no sé cómo va a salir’. El periodista dijo: ‘Ud. entiende, señor, que en el canal estatal nadie puede hablar por más de treinta segundos. Tengo que editar lo que Ud. diga’. Y yo le dije: ‘En ese caso, hágame una pregunta y yo se la respondo en treinta segundos, pero lo que diga sale al aire’. Lo consultó con sus superiores y respondió: ‘Acepto, pero con dos condiciones: no puede usar la palabra «dictadura» y no se puede referir al Presidente de la República en términos inadecuados’.

³⁰ Analizan el deterioro del movimiento sindical chileno en dictadura Guillermo Campero y René Cortázar, en «Lógicas de acción sindical en Chile», *Colección CIEPLAN 18* (1985); y Alan Angell, en «Unions and Workers in Chile during the 1980s», en Drake y Jaksic, *The Struggle for Democracy in Chile*.

Acepté, no utilicé la palabra «dictadura» y me referí a Pinochet como el general Pinochet»³¹.

En contraste, la intelectualidad opositora tenía legitimidad formal, instituciones fuertes, financiamiento seguro, amplia experiencia analítica y una credibilidad ganada en casi diez años de trabajo productivo. Y a diferencia de la mayoría de la clase política, que seguía profundamente dividida por los conflictos del pasado, los intelectuales mantenían contacto regular. Tenían en común una base conceptual, una literatura, un lenguaje técnico y un compromiso con la ciencia. Además de encontrarse en seminarios y conferencias, los años de trabajo en temas similares habían forjado una red profesional que, según Tironi, «ejercía influencia simultáneamente en la Democracia Cristiana a través de Boeninger, por ejemplo, o de Foxley, y en el Partido Socialista a través de un Lagos, un Arrate, un Núñez o un Vodanovic». Frente a las pugnas partidarias, los intelectuales tenían la capacidad de trabajar con todos los colores políticos; de entenderse y de trabajar en conjunto. Constituyeron, según Tironi, «la antesala de la concertación» que la oposición acordaría años después (20 de marzo de 1991).

La intelectualidad disidente tenía además otra ventaja. Diez años de represión habían limitado fuertemente el diálogo entre los sectores de oposición y fragmentado las relaciones sociales, lo que hizo, según Foxley, que los centros de investigación adquirieran un poder poco común. «La dictadura atomizó la vida social... Por muchos años no hubo dónde reunirse, e intercambiar experiencias importantes era muy difícil. Por eso, cualquier lugar donde uno se pudiera reunir era muy valorado. Los centros de investigación se convirtieron en lugares de encuentro, casi como en un club social. Y como los que invitaban éramos los intelectuales, eso nos dio un mayor poder de convocatoria de lo que habríamos tenido bajo condiciones normales»³².

³¹ Entrevista con Ricardo Lagos, 13 de marzo de 1991; otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha. Sobre los medios, un decreto ley promulgado en 1984 tras el inicio de las protestas restringía fuertemente la cobertura de temas políticos; véase Cavallo, Salazar y Sepúlveda, *La historia oculta del régimen militar*, p. 439. Pese a que a principios de los años 80 aparecieron varios semanarios de oposición, los diarios no se permitieron hasta marzo de 1987, cuando se inició la publicación de *La Época*.

³² Entrevista con Alejandro Foxley, 14 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

Ricardo Núñez, por su parte, estima que las dirigencias partidarias –presionadas, con poca capacidad de incidir de forma relevante y haciéndose constantes exámenes de conciencia– «concedieron a los centros académicos un papel de privilegio en la discusión y el intercambio entre sí y con otros sectores, incluso los vinculados a la dictadura». Tanto así, según Núñez, que «prácticamente todas las reuniones importantes de los partidos se hacían en directa relación con instituciones vinculadas a la Iglesia, la Academia de Humanismo Cristiano, la FLACSO, el CED, etcétera; todas porque los centros querían tener un vínculo activo con los dirigentes políticos, porque muchos trabajaban directamente en los centros y porque eran partidos cuyos intelectuales habían rechazado durante mucho tiempo la opción del cambio violento y la lucha armada» (18 de marzo de 1991).

Difícil es saber exactamente cuántas veces y qué partidos se reunieron en los centros académicos, pero lo que sí queda claro es que el límite entre política y academia se hizo cada vez más difuso y que existió una clara tendencia a traspasarlo. Así, los centros académicos empezaron a cumplir funciones que, en época normal, habrían estado a cargo de instituciones de carácter más político. Con esto la intelectualidad opositora seguía superando su función tradicional de productora de conocimientos para asumir, además, la tarea de tender puentes entre los actores políticos y el mundo de las ideas.

Las principales actividades que se realizaban consistían en seminarios, conferencias, talleres, debates y discusiones sobre transición y consolidación democrática. Estos eventos los organizaban casi exclusivamente los centros en respuesta a la mayor libertad que iban dando las crecientes dificultades del régimen y a la repentina demanda por mayor información. La mayoría eran ejercicios de planificación que convocaban a dirigentes de la oposición democrática, y a veces a partidarios del régimen, a discutir temas de transición y políticas públicas en un sistema democrático. También asistían representantes de organismos no políticos, tales como colegios profesionales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y grupos ciudadanos. Su impacto fue extraordinario y abarcó mucho más allá de la estrategia y las políticas públicas; en efecto, al congregarse a actores políticos que de otro modo prácticamente no se juntaban, se empezaron a recuperar la confianza y el entendimiento que habían estado ausentes de la política chilena por más de veinte años.

Estas actividades –seminarios, conferencias, cursillos, debates oficiosos– eran por lo general de carácter académico y se organizaban en torno a ponencias y presentaciones de investigadores que conjugaban ideas teóricas y datos empíricos para analizar temáticas específicas. Los temas que abordaban iban desde la teoría democrática a la reforma municipal, y dieron lugar a una extensa colección de documentos y publicaciones. De esta forma no se transgredía la prohibición de hacer actividad política.

Claro está que estas actividades tenían invariablemente un trasfondo político, dado que se presentaban propuestas programáticas y se invitaba a los participantes a debatirlas. A falta de un Congreso u otras instituciones democráticas, estas ocasiones eran prácticamente la única instancia donde se podían discutir sistemáticamente temas políticos y de política social. En tanto que punto de encuentro de la oposición democrática chilena, estos eventos eran uno de los pocos lugares donde opositores y oficialistas podían intercambiar ideas de forma sistemática e informal. Como señala Brunner, estas actividades «permitieron a intelectuales y políticos empezar a generar una conversación común, un marco analítico común y un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo, y permitieron a la intelectualidad transmitir de forma mucho más directa y rápida todo lo que había estado acumulando y escribiendo» (28 de febrero de 1991).

En los siguientes tres años, la discusión de los temas de la transición democrática estuvo a la orden del día. Prácticamente cada centro académico organizaba encuentros y participaba en los que organizaban los demás. Algunos, como el CERC y la FLACSO, se orientaban mayormente al mundo académico, convocando a profesores universitarios y alumnos de los últimos años a tratar temáticas que en la universidad no se podían discutir fácilmente. Otros, como VECTOR, convocaban a dirigentes de instituciones no académicas tales como partidos políticos, colegios profesionales, sindicatos y grupos ciudadanos. En 1986 la Universidad Católica hizo una notable conferencia sobre gobernabilidad democrática que reunió a expertos internacionales y a políticos y académicos chilenos. Otras instituciones, como el PIIE, el GIA, CIDE y el PET, abordaban políticas sectoriales específicas, invitando a profesionales de la salud, educadores y otros a discutir los temas que tendrían que abordarse al retorno de la democracia. Otros se dedicaban a temas más sensibles, tales como relaciones laborales, el papel de

las fuerzas armadas y los derechos humanos. Todos buscaban aplicar los recursos de la academia a promover y viabilizar la transición a la democracia, en una labor cuyos efectos se sentirían en muchos y muy distintos niveles en los años que vendrían.

Los centros más influyentes: FLACSO, CIEPLAN, CEP y CED

Sobresalen en este cuadro la labor y el impacto de ciertas instituciones. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), una de las más puramente académicas, fue lejos una de las más influyentes. En la década posterior al golpe, sus principales colaboradores –José Joaquín Brunner, Ángel Flisfisch, Manuel Antonio Garretón, Norbert Lechner, Tomás Moulián– ayudaron a convertir a la FLACSO en líder regional en materia de teoría política y política comparada. A fines de los 70 y principios de los 80, fue además la institución académica que más influyó en la renovación del pensamiento de izquierda en Chile. Muchos de sus colaboradores eran dirigentes de la Convergencia Socialista, que propuso y logró la aparición de un socialismo democrático dentro de la izquierda chilena. La FLACSO fue una presencia intelectual de primer orden a nivel de la izquierda chilena.

A mediados de los 80, la FLACSO comenzó a salir más sistemáticamente de los claustros académicos a tratar temas relativos a la transición democrática. En 1984, por ejemplo, organizó un taller permanente de investigación sobre fuerzas armadas y democracia. En conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), organizó un ciclo de talleres de coyuntura para estudiantes y dirigentes sindicales. En colaboración con otros centros, auspició talleres en regiones sobre reforma agraria, evaluación de proyectos sociales y evolución del Estado. La FLACSO reunió periódicamente a jóvenes historiadores interesados en la historia social y política de las clases populares chilenas y ofreció un diplomado de dos años del que egresaron unos sesenta investigadores jóvenes, muchos de los cuales después pasarían a ocupar distintos cargos en el gobierno democrático. Organizó un ciclo de cursos especializados en técnicas de encuestaje e investigación, en el preciso momento en que irrumpían en la escena nacional los estudios de opinión política. En una época en que los científicos sociales –especialmente los jóvenes y los que funcionaban en las

universidades– seguían sujetos a serias restricciones, la FLACSO aportó al tratamiento de temas sociales y políticos emergentes un importante impulso y el marco necesario.

Pero el impacto político de la FLACSO abarcó mucho más allá de lo formal. En efecto, entre sus colaboradores estaban algunos de los más destacados teóricos políticos de centroizquierda del país. Sus publicaciones eran citadas por dirigentes políticos y analizadas en la prensa. Y según se fueron abriendo espacios, aumentó la demanda por entrevistas y artículos de opinión, incluso en los medios oficialistas. La FLACSO era participante habitual y destacada en las actividades que otros centros orientaban más directamente a los actores políticos, e intervenía de lleno en el debate sobre estrategia de transición. De la plana mayor, Flisfisch y Garretón integraban el Comité Central del Partido Socialista y varios otros eran cercanos a sus dirigentes. La mayoría participaba directamente en la interna partidaria o asesoraba informalmente a sus participantes. Muchos colaboradores de la FLACSO fueron el prototipo del intelectual político que se movía con desenvoltura entre ambos mundos.

Otra institución que en este período tuvo un rol protagónico fue la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN). A mediados de los 80, CIEPLAN vislumbró el problema que podía representar el enfoque rígido y verticalista que en materia de política económica el régimen había impuesto en Chile. Este estilo, justificado en una suerte de racionalidad superior intolerante al desacuerdo, era claramente incompatible con la gobernabilidad democrática. Esto hizo temer a CIEPLAN que, al volver la democracia, el resentimiento hiciera difícil estructurar e implementar una política económica responsable. En un documento de la época, CIEPLAN explicaba: «El aislamiento y silencio de los principales actores sociales –sometidos a cambios radicales en las relaciones económicas y sociales– convierten a la sociedad en una suerte de ‘caja negra’ cuyos cambios y situaciones no se conocen de forma adecuada, lo que hace especialmente difícil prever su conducta futura». La intelectualidad, planteaba CIEPLAN, tenía una especial responsabilidad: «Es de todos conocida la propensión del mundo intelectual chileno a proponer esquemas voluntaristas respecto de lo que es deseable y racional para la sociedad, sin considerar lo que los actores sociales concretos piensan y quieren. Esto hace necesario un esfuerzo más sistemático para detectar lo que ha ocurrido con esos actores y

entrar en sintonía con la agenda de problemas reales que visualizan y priorizan». CIEPLAN proponía «una forma distinta de hacer política pública» que denominó «desarrollo concertado» y que privilegiaba consensuar los temas de fondo con los actores sociales y económicos³³.

Con este fin CIEPLAN impulsó un novedoso proyecto de «diálogos ciudadanos» orientados a poner a economistas en contacto directo con importantes sectores de la ciudadanía. La idea era sensibilizarlos a las prioridades y puntos de vista de un amplio abanico de actores sociales, y transmitir a esos actores información y argumentos que potenciaran su comprensión de la economía moderna. Así, en una serie de visitas a regiones, los economistas de CIEPLAN se reunieron con gobiernos locales, empresarios, dirigentes políticos, grupos ciudadanos, organismos sindicales, periodistas, y alumnos y profesores universitarios; conocieron los problemas e impactos locales de la política económica nacional, y presentaron sus puntos de vista.

Este ciclo de diálogos dio especial atención a las centrales sindicales del país. Previendo una posible conflictividad laboral al retornar la democracia, CIEPLAN se propuso colaborar con dirigentes sindicales en la definición de posturas de negociación colectiva que respondieran a sus necesidades, pero sin arriesgar el crecimiento. Bajo la dirección de René Cortázar, economista formado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), CIEPLAN hizo cursillos, seminarios y discusiones informales sobre política económica general para sindicatos de todo el país. CIEPLAN empezó, además, a asesorar periódicamente a la principal central sindical y promovió el contacto directo entre empresarios y trabajadores, con resultados más bien discretos. Años después, en calidad de ministro del trabajo de la democracia, Cortázar negoció con ambas partes una importante reforma a la legislación laboral.

Como parte del proyecto, CIEPLAN hizo cursillos de economía para periodistas, alumnos y profesores universitarios y lanzó, además de sus habituales materiales de investigación, la *Revista de CIEPLAN*, publicación dirigida a un público amplio con interés en las políticas públicas. La *Revista*, que presentaba los puntos de vista de CIEPLAN sobre la actualidad social y política, se distribuía a dirigentes sociales y políticos de todo el país.

³³ CIEPLAN, «Informe a la Fundación Ford», diciembre de 1986.

Estas actividades aportaron a CIEPLAN un vasto caudal de información veraz y al día sobre lo que ocurría en Chile y sobre cómo veían las cosas un amplio abanico de actores sociales. El salir de sus oficinas permitió a los economistas establecer lazos directos con los sectores afectados por la política económica y complementar los modelos teóricos y los datos estadísticos con información cualitativa sobre los cambios que se operaban en el país. Hablaron con la gente y la gente habló con ellos; fue, según un participante, «una forma de conectarnos con el mundo real» (Óscar Muñoz, 27 de agosto de 1991).

Esto permitió a CIEPLAN empezar a esbozar un proyecto económico que contara con una amplia legitimidad y, además, asegurara el crecimiento en democracia. En seminarios, talleres y discusiones informales realizados a lo largo de varios años, CIEPLAN llevó sus propuestas a una amplia gama de actores sociales y generó un debate serio en torno a ellas. Este proceso le permitió afinar su percepción de cada sector, calibrar mejor las posibilidades de consenso y desarrollar y perfeccionar planes ajustados a la realidad. Esta experiencia mejoró la calidad de las propuestas y fortaleció su credibilidad respecto de otras instancias del ámbito de las políticas públicas. Para una institución que luego sería el pilar del equipo económico de la democracia, fue una experiencia fundamental.

Alrededor de 1984 se alzó una ola de debates sobre temas de la transición que también envolvió a parte de la derecha política, si bien de forma mucho menos activa. Gran parte seguía apoyando al régimen de Pinochet y no veía necesidad de planificar otra cosa que no fuera una pausada transición a la democracia protegida prevista en la Constitución. Y dado que la mayoría de la intelectualidad de derecha se había mantenido en las universidades, prácticamente no existían centros de investigación de esa tendencia.

Una notable excepción fue el Centro de Estudios Públicos (CEP), en la práctica el único centro de pensamiento derechista que surgió en los años 80. El CEP fue fundado en 1980 por economistas y empresarios que buscaban legitimar el pensamiento político y económico neoconservador, pero marcando distancia con el régimen. Emprendimiento intelectual serio, independiente del gobierno y financiado por grupos empresariales chilenos y donantes extranjeros, el CEP convocaba a destacados académicos y gente del ámbito de las políticas públicas a debatir temas políticos, económicos y sociales. *Estudios Públicos*, su

revista trimestral, se convirtió en el principal portavoz del pensamiento social conservador y neoconservador, publicando en traducción a figuras como Michael Novack, Friedrich Hayek, Samuel Huntington y Milton Friedman, junto con artículos de filosofía política y política social escritos por connotados académicos nacionales. A partir de 1986, el CEP pasó a ser un respetado generador de sondeos de opinión política que aportaba datos importantes a las dirigencias políticas. Esta conjunción de intelecto, principios neoconservadores y enfoque interdisciplinario, fue novedad en la escena académica; una manifestación de que en Chile surgía una derecha moderna.

El CEP, dirigido por Arturo Fontaine Talavera, organizó seminarios y conferencias sobre temas que abarcaban desde la transición española hasta el rol de la empresa privada en democracia. El CEP hacía charlas con destacados invitados extranjeros y trabajaba en equipo con sus pares de CIEPLAN, FLACSO y otros centros identificados con la oposición. Su especial importancia radicó en ofrecer una de las pocas oportunidades que tuvo la intelectualidad disidente de exponer sus puntos de vista directamente ante dirigentes de derecha. Entre los invitados a exponer en 1984 y 1985, estuvieron Ángel Flisfisch (FLACSO), Patricio Meller (CIEPLAN), Eugenio Tironi (SUR) y Francisco Cumplido (luego ministro de justicia en el gobierno de Aylwin). Asimismo, los colaboradores y gente asociada al CEP participaban habitualmente en las actividades organizadas en Santiago por otros centros académicos. El CEP contribuyó a dar identidad y legitimidad a una derecha democrática y a generar un diálogo con los intelectuales de centro e izquierda.

Quizás si la institución que más eficaz y activamente trabajó los temas de la transición democrática en este período fue el Centro de Estudios del Desarrollo (CED). Fundado en 1980 por el ex-canciller Gabriel Valdés Subercaseaux, el CED fue pensado como una instancia abierta y pluralista abocada a estudiar propuestas alternativas para el desarrollo de Chile. El CED formó parte de la tendencia a adoptar propuestas intelectuales más empíricas y orientadas a las políticas públicas, superando las ideologías globalizantes de los años 60. Es muy probable que la idea primigenia detrás de su fundación haya sido la decisión, acordada por la dirigencia demócratacristiana a fines de los 70, de superar la postura del partido único y volver a la política de los acuerdos. Valdés reunió a un equipo de intelectuales y profesionales

identificados con la DC –pero sin cargos partidarios– y consiguió financiamiento de distintos gobiernos y fundaciones europeas.

Pese a que el mandato del CED era la investigación, las políticas públicas eran su principal inquietud. La idea de que Pinochet estaba por caer se había hecho común, por lo que al CED le interesaba tener preparada una propuesta integral de políticas públicas para la democracia que vendría. En los años siguientes, bajo la dirección primero de Valdés y luego del economista Ernesto Tironi, la labor del CED adquirió un fuerte sesgo desarrollista, especialmente en materia de gobierno local, combate a la pobreza y promoción industrial. Sus objetivos nunca fueron solo académicos; desde un principio se propuso promover el contacto personal a través del análisis y el consenso en materia social y económica a través del debate. El compromiso original de Valdés Subercaseaux con el pluralismo rindió frutos. Pese a sus orígenes demócratacristianos, el CED fue visto como una instancia abierta a todo el espectro democrático chileno.

En 1985 asumió la dirección Edgardo Boeninger, economista y rector de la Universidad de Chile al momento del golpe. Aunque Boeninger se desempeñaba a media jornada en el CED desde su fundación, su nombramiento en la dirección marcó un giro institucional. Pese a identificarse desde siempre con la DC, Boeninger nunca había militado, lo que lo desligaba del rígido e intransigente pasado partidario y le facilitaba entenderse con actores políticos de todas las corrientes. Y a pesar de estar claramente identificado con el mundo de las ideas, especialmente en su calidad de ex-autoridad académica, Boeninger no había intervenido en los grandes debates ideológicos de los años 60. A ojos de muchos observadores, su punto fuerte, más que crear ideas, era articularlas. Dice Garretón: «Su gran ventaja es que es una página en blanco, así que si tú y yo tenemos una discrepancia, vamos a hablar con él. En esta página en blanco, tú escribes la letra A y yo escribo la letra B. Después él decide de qué forma A encaja con B y lo que la página quiere decir» (8 de marzo de 1991). A Boeninger se le consideraba un ingeniero político con una notable capacidad para articular ideas y personas.

Pero Boeninger aportó, además, un énfasis diferente. Dudaba de que el régimen fuera a caer con protestas, por lo que no veía la misma urgencia en definir políticas públicas para una inminente democracia. Lo que sí tenía claro era que uno de los problemas políticos de fondo

era la falta de confianza entre los actores sociales y políticos, y que recuperarla era requisito previo para restablecer la democracia. Por tanto, su prioridad fue «restablecer la confianza entre la gente, grupos organizados, partidos políticos y actores sociales» a través de «coexistencia, diálogo y encuentro». A Boeninger le parecía urgente «reconstruir el tejido social y político» desgastado por años de polarización, conflicto y represión³⁴.

Al asumir Boeninger, el CED ya había empezado a transitar hacia el diálogo político. Aunque en un principio atrajo mayormente a profesionales y académicos independientes de sensibilidad democratacristiana o centroizquierdista, pronto se sumaron socialistas moderados y democratacristianos de línea, seguidos por gente con ideas liberales y de centroderecha. Aunque no era fácil interesar a partidarios del régimen, el CED lo logró en mayor medida que otras instancias opositoras de centro, convirtiéndose así en el mayor –y más pluralista– foro de debate de políticas públicas del país.

La decisión de privilegiar el diálogo por sobre las políticas públicas fue gravitante. La sociedad chilena estaba atomizada; la división ideológica de los años 60 y 70 se había exacerbado por los asesinatos, desapariciones, tortura, exilio, detenciones, despidos y el cúmulo de otros abusos cometidos por el régimen de Pinochet. Los militantes de distintos bandos políticos no solo disentían sino que prácticamente no tenían contacto entre sí, y había quienes ni siquiera toleraban coincidir en un mismo lugar. Y dado que la actividad política seguía siendo ilegal, había contadas ocasiones para superar diferencias. Chile, como decían Constable y Valenzuela, seguía siendo «un país de enemigos»³⁵.

Bajo la conducción de Boeninger, el CED evolucionó de proveedor de un programa alternativo de gobierno a lugar de encuentro e intercambio de ideas para líderes de distintos sectores sociales y políticos. Al trasladar el acento desde el diseño de políticas a las relaciones interpersonales, el proceso de reunirse y reconstruir confianzas se hizo más importante que los resultados en materia de definición de políticas. Esto no quiere decir que se hayan descuidado los temas de fondo; de hecho, a los encuentros asistían intelectuales de renombre y el debate se centraba fuertemente en el análisis cuidadoso y los datos

³⁴ Castillo, *La fuerza del diálogo*, pp. 31-32, 34.

³⁵ Constable y Valenzuela, *A Nation of Enemies*.

empíricos. Fueron precisamente los temas de fondo los que aportaron la ocasión para que los sectores sociales acometieran el diálogo amplio que Chile necesitaba.

La piedra angular del proyecto fue «Concertación política, proyecto nacional y democracia», programa que partió en 1984 y operó durante casi tres años con el apoyo económico de una serie de donantes extranjeros. Como señala Boeninger, fomentar el diálogo y la confianza era más prioritario que lograr determinados resultados en materia de políticas: «Si llegábamos a conclusiones que fueran relevantes en sí mismas, estupendo; pero lo fundamental era reconstruir el tejido político»³⁶. Los cuatro subproyectos del programa –economía, política, concertación y dirigentes jóvenes– ejemplifican la variedad y creatividad de los métodos que utilizó la intelectualidad entre 1983 y 1986.

El subproyecto de economía, el primero y quizás más importante, demostraba muy bien una reveladora característica de la metodología del CED: reunir a personas de bandos opuestos a intercambiar puntos de vista en un ambiente informal y distendido. En lugar de hacer una crítica de la normativa vigente o tratar de gestar alternativas, el CED encargó ponencias en materia económica a tres corrientes de pensamiento tradicionalmente incompatibles: demócratacristianos, izquierda y derecha. Los participantes se reunían periódicamente a presentar y discutir sus puntos de vista en debates en que pudieron comprobar por sí mismos, en un entorno académico relajado, cuál era la verdadera posición de cada cual. El proyecto posteriormente sumó otros temas específicos, tales como propiedad privada, distribución del ingreso y política económica.

El segundo subproyecto, «Condiciones políticas para una democracia estable», abordaba de lleno la temática política. Su propósito era convocar a académicos y actores sociales a discutir temas centrales para la reconstrucción de una democracia estable. Para evitar reproches de favoritismo político, el CED conformó un comité ejecutivo integrado por el propio Boeninger (centro), Ángel Flisfisch (FLACSO, politólogo de izquierda) y Juan Yrarrázaval (politólogo y abogado de centroderecha).

³⁶ Castillo, *La fuerza del diálogo*, p. 58.

El comité escogió diez temas que constituían dilemas reales y generalmente polémicos de la transición chilena a la democracia³⁷. Cada uno fue desarrollado por grupos de especialistas académicos en rigurosas ponencias construidas en base a teoría y datos empíricos. Estas ponencias se presentaron en un ciclo de talleres que reunieron a importantes líderes políticos –jefes de partido, otras personalidades– de todas las tendencias. La intención fue que los participantes ampliaran y profundizaran su concepción de la gobernabilidad democrática, confiaran y se entendieran mutuamente, y buscaran puntos de acuerdo en torno a un futuro sistema democrático.

Los diálogos políticos y económicos generaron una serie de otras actividades. El CED organizó un ciclo de «ejercicios de concertación» que reunió a dirigentes sindicales opositores a tratar el tema general de la transición democrática, seguido por temáticas más específicas, tales como relación con la empresa, el rol de los sindicatos y legislación laboral. Un elemento novedoso fue la integración de las experiencias de otros países: el CED trajo a Chile a expertos europeos en legislación laboral y llevó a un grupo de dirigentes sindicales, empresarios y especialistas académicos a una gira de dos semanas por Europa. La iniciativa más compleja fue reunir a empresarios y dirigentes sindicales a hablar de legislación laboral. Estos encuentros duraron un año y medio y produjeron pocos avances sustantivos, pero en palabras de Boeninger, «rompieron el hielo» (60).

El CED también hizo un esfuerzo concertado por acercarse a las fuerzas armadas, el actor más renuente y más decisivo para la reconstrucción del tejido social. Empezó invitando a oficiales en retiro a talleres de democracia política. El avance fue lento, pero eventualmente se logró integrar a dieciséis ex generales, almirantes y otros uniformados. Esta iniciativa luego se amplió a un proyecto que hacia 1989 reunía regularmente a políticos y uniformados en servicio activo a hablar de relaciones cívico-militares.

³⁷ 1) Movilización social y negociación política; 2) Opciones para una coalición política; 3) Rol de las FF.AA. en un Chile democrático; 4) Papel del Partido Comunista; 5) Derechos humanos, administración de justicia, orden público y violencia política; 6) Gobernabilidad y competencia política; 7) Partidos políticos y democracia; 8) Estados Unidos y democracia chilena; 9) Opciones de régimen político; y 10) Escenarios y estrategias de transición. Véase *ibíd.*, pp. 36-37.

Por último, el CED dirigió su atención a los dirigentes jóvenes que surgían en los partidos y las federaciones estudiantiles, recurriendo a temas y expositores trasplantados de otros talleres para abrir un debate entre jóvenes de distintas corrientes y sus homólogos de mayor edad. Esta iniciativa partió más tarde y no tuvo el mismo éxito, fundamentalmente porque a esas alturas el mundo político estaba más interesado en el plebiscito que en asistir a seminarios.

Este conjunto de actividades hizo del CED el gran articulador entre los actores políticos y el mundo de las ideas. Fue, dice Brunner, «el motor más importante para sintetizar toda la labor de los años anteriores; una síntesis que era intelectual pero a la vez político-intelectual, con participación de políticos e intelectuales... Aunque otros centros también aportaron a esa tarea, claramente el rol más importante lo tuvo el CED» (28 de febrero de 1991). Equilibrio político, apertura y disposición a acoger distintos puntos de vista permitieron al CED conectar con extraordinario éxito a intelectuales y actores sociales y tender puentes hacia el fragmentado mundo político chileno.

El impacto de los centros académicos

¿Qué trascendencia tuvieron estas actividades? Después de todo, visibilidad y actividad no garantizan influencia. La intelectualidad salió de su tradicional función de productora de conocimientos para convertirse en articuladora entre los actores políticos y el mundo de las ideas. ¿Qué logró con ello? Hubo múltiples seminarios, conferencias, publicaciones, talleres, debates y discusiones. ¿Se logró con ello impulsar o facilitar la transición a la democracia? Dar respuesta definitiva a este tipo de preguntas es siempre problemático. Las relaciones causa-efecto son rara vez claras y precisas, y cuando de conectar ideas y conducta política se trata, son especialmente intrincadas. No obstante, de los hechos y la propia apreciación de los protagonistas se desprende que la intelectualidad tuvo mucha incidencia en dos grandes áreas: primero, ayudar a las nacientes fuerzas opositoras a superar profundas divisiones, y segundo, darles una visión estratégica.

Cabe agregar que uno de los mayores aportes de la intelectualidad en este período fue psicológico, no intelectual. Más allá de su impacto en términos sustantivos, los centenares de seminarios y talleres sobre la

transición aportaron a recuperar la confianza y el entendimiento mutuos que hacía tanto tiempo se habían perdido en la política chilena. Estas actividades permitieron reunir periódicamente, en un ambiente informal, a académicos y actores sociales de distintas tendencias. En estas sesiones, algunas de carácter reservado, se anteponía la comprensión científica a la pugna política. Se reunía a personas que prácticamente no mantenían contacto entre sí y se les invitaba a expresar sus puntos de vista, frente a frente, sobre temas que de otra forma no habrían discutido.

«Concertación política, proyecto nacional y democracia», programa organizado por el CED, es especialmente ilustrativo de la forma en que la intelectualidad contribuyó a promover las relaciones interpersonales en todo el espectro político chileno. Para Ángel Flisfisch, quien ayudó a coordinar el programa, el principal resultado fue crear un «clima de sociabilidad» en que «la gente empezó a servir de puente entre sus respectivos mundos, a conectarse con los mediadores de otros mundos... Todas las personalidades públicas de relevancia pasaron por los talleres del CED», agrega, «desde Jaime Guzmán y Sergio Fernández hasta Patricio Hales del Partido Comunista. Había un diálogo encuadrado en términos de relaciones civilizadas sobre temas decisivos de la transición... Lo principal fue establecer las relaciones de sociabilidad que eran una suerte de prerrequisito para cualquier entendimiento posterior»³⁸. Los participantes llegaron a entenderse, e incluso a confiar unos en otros; es decir, desarrollaron relaciones personales.

Otro destacado político, Hernán Vodanovic, destaca los contactos personales entre dirigentes políticos, especialmente socialistas, que el programa del CED facilitó: «Fue una instancia muy pluralista que buscó integrar a demócratacristianos y socialistas, cuya colaboración era vital para estructurar una oposición unida... Los seminarios y demás iniciativas que organizó la intelectualidad permitieron al mundo socialista conocerse mejor, acercarse más, porque el conflicto interno era muy fuerte... y la única forma de que gente de distintas fracciones hablara era al calor de un seminario... [En otras partes] lo único que hacían era polemizar y descalificarse»³⁹.

³⁸ Entrevista con Ángel Flisfisch, 17 de enero de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

³⁹ Entrevista con Hernán Vodanovic, 15 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

Otro participante, Heraldo Muñoz, estima que los seminarios y talleres fueron un gran aporte a los acuerdos posteriores sobre reglas de procedimiento democrático: «Estos diálogos, que primero fueron fundamentalmente intelectuales, gradualmente fueron adquiriendo ribetes de reconciliación política. Me refiero, por ejemplo, al taller de análisis político que hizo el CED con la conducción del también intelectual Edgardo Boeninger, con participantes escogidos desde las distintas corrientes políticas que venían a título personal, aunque todos sabían que eran la genuina expresión de sus respectivos partidos. El diálogo intelectual –incluso se hicieron documentos– fue un ciclo de reflexiones en torno a las ciencias políticas, pero siempre enfocado en Chile y en las posibilidades de una futura vuelta a la democracia. Creo que eso ayudó a allanar el camino para que, en base a esas discusiones, o de manera colateral a ellas, las dirigencias partidarias llegaran a acuerdo sobre normas básicas» (19 de abril de 1991).

Al fomentar el contacto personal en entornos distendidos, estos eventos lograron que «los mundos paralelos» de la política chilena empezaran a convergir. En efecto, se logró juntar a los actores políticos de una forma que no había ocurrido en años y atraer, según Sergio Molina, «a articuladores de pensamiento» que «se reunieron, se conocieron y conversaron». «Estos debates fueron muy importantes», agrega, «porque derribaron mitos y prejuicios»⁴⁰. Recordando el programa del CED, Manuel Antonio Garretón ofreció un comentario algo más cáustico: «Hizo que los demócratacristianos se dieran cuenta de que los socialistas, al menos a nivel técnico, no eran unos brutos, y que la izquierda se diera cuenta de que los demócratacristianos no eran unos fascistas» (8 de marzo de 1991).

Considerando las encarnizadas disputas y la división que habían marcado a la política chilena durante más de veinte años, esto fue un logro de marca mayor. Se cerraron brechas tan sustantivas como psicológicas y se empezaron a reconstruir relaciones de confianza y entendimiento mutuo que se habían roto en los años 60 y 70 y que eran fundamentales para la gobernabilidad democrática. Al crear un «clima de sociabilidad», los centros de investigación contribuyeron a «reconstruir el tejido social y político», lo que fue decisivo para

⁴⁰ Entrevista con Sergio Molina, 13 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

conformar la Concertación a principios de 1988 y más tarde ganar el plebiscito.

Además de reconstruir la confianza entre fuerzas políticas que volvían por sus fueros, la intelectualidad también aportó a darles una visión estratégica. Entre 1984 y 1987, el mundo intelectual de oposición jugó un papel fundamental en proporcionar a la clase política –es decir, políticos, actores sociales, profesionales– información, análisis y crítica. La intelectualidad dominaba el debate sobre política social y económica y era un factor importante en la discusión de la estrategia política. Su labor, en palabras de Alejandro Foxley, «marcó de forma decisiva a la élite partidaria, empresarial y sindical, una élite muy reducida en número pero que influyó mucho en las decisiones que se tomaron en el período inmediatamente anterior al plebiscito» (14 de marzo de 1991).

El aporte de la intelectualidad derivó directamente de su tradicional condición de analista e intérprete de los acontecimientos; la gran diferencia estuvo en el efecto que tuvo en los actores sociales. Con los partidos dispersos y proscritos y sin un debate estratégico, las protestas de 1983 habían tomado a la oposición por sorpresa. Carente de una visión común sobre un programa para el Chile post-dictadura, necesitaba información y análisis. La intelectualidad respondió abriéndose a políticos y actores sociales y dando inicio a un largo proceso de diálogo y aprendizaje que logró proyectar análisis e interpretaciones ordinarias de formas que fueron extraordinarias. Del mundo intelectual las dirigencias políticas recibieron visión estratégica en cuatro grandes áreas: 1) Entender cómo había cambiado la sociedad bajo el régimen militar; 2) Repensar la transición y la gobernabilidad democrática; 3) Criticar la estrategia de movilización social; y 4) Consensuar un programa para el Chile post-dictadura.

El significado de las transformaciones

Uno de los primeros grandes resultados de la labor intelectual fue ayudar a la oposición a entender el régimen militar y los cambios operados en la sociedad chilena. Como era de esperar, intelectuales y políticos partían desde posiciones abiertamente críticas. Gran parte de la oposición tildaba al régimen de conservador, incluso de fascista,

comprometido con la defensa de los intereses de la élite económica tradicional e incapaz de mantenerse en el poder sin el uso de la fuerza. Durante años lo condenaron como un régimen altamente impopular, autoritario en lo político y reaccionario en lo económico.

Esta valoración comenzó a evolucionar y a hacerse algo más matizada luego de una serie de estudios empíricos sobre las características distintivas del régimen militar y sus efectos en la sociedad chilena. Estos estudios, realizados a lo largo de más de diez años por distintos centros de investigación, abarcaron desde la ideología y los partidarios del régimen hasta sus efectos en la productividad agrícola, la educación, la política fiscal, la estratificación social, el comercio exterior, la salud y la reforma administrativa. Su carácter científico daba fuerza a la crítica opositora, pero también interpeló con fuerza sus prejuicios y errores de interpretación. Hacia mediados de los años 80, estos estudios habían creado un corpus actualizado de análisis empírico que transformó el pensamiento político opositor⁴¹.

Un resultado fue la constatación de que el régimen difería radicalmente del estereotipo de gobierno militar latinoamericano; en especial que no era conservador en el sentido tradicional, sino que perseguía «una profunda y revolucionaria transformación de la sociedad chilena» (Brunner, 28 de febrero de 1991). Los análisis acumulativos demostraron, por ejemplo, que la liberalización económica afectaba a sectores de la misma oligarquía que presuntamente constituía la base del régimen militar. También demostraron que este no se mantenía en el poder solo por la fuerza, sino que movilizaba importantes niveles de apoyo en sectores muy diversos de la sociedad. Y, además, que dichos apoyos no provenían de los sectores que habría sido dable suponer con arreglo a las ideologías políticas tradicionales. En suma, los estudios

⁴¹ Estos estudios los hicieron CIEPLAN, FLACSO, PET, CERC, GIA, GEA, PIIE, SUR, ILADES, ILET y CIDE. Entre los más ilustrativos se destacan Manuel Antonio Garretón, *El proceso político chileno* (Santiago: FLACSO, 1983); Vergara, *Auge y caída*; E. Tironi, ed., *Marginalidad, movimientos, sociales y democracia*, N° 14 (agosto 1987); Martínez y Tironi, *Las clases sociales en Chile*; José Joaquín Brunner, «Ideología, legitimación y disciplinamiento: nueve argumentos», en *Autoritarismo y alternativas populares en América Latina* (San José de Costa Rica: FLACSO, 1982), pp. 71-103; Rodrigo Baño, *Lo social y lo político* (Santiago: FLACSO, 1985); Jorge Ruiz-Tagle, *El sindicalismo chileno después del Plan Laboral* (Santiago: PET, 1985); y Guillermo Campero y J. A. Valenzuela, *El movimiento sindical en el régimen militar chileno* (Santiago: ILET, 1984).

parecían indicar que había que abandonar muchos de los supuestos y categorías establecidas y que el régimen de Pinochet había creado un nuevo conjunto de condiciones objetivas.

Brunner describe así el papel que jugaron estos estudios: «Todas las primeras publicaciones de gente como Garretón, Tironi, Lechner, yo, sobre el hecho de que el régimen no era un régimen militar puramente represivo, de carácter fascista, conservador y oligárquico, sino que era un régimen fundacional y modernizador, con capacidad de movilizar a otros sectores además de los que favorecían la violencia... son documentos que, vistos hoy, parecen sumamente primitivos... Pero abrieron una temática totalmente nueva... Demostraron que al régimen, de hecho, había que analizarlo de forma distinta a lo que habíamos pensado en los primeros años después del 73; que no podíamos entenderlo simplemente como un régimen fascista» (28 de febrero de 1991).

Por ejemplo, un extenso estudio de los sociólogos de SUR Javier Martínez y Eugenio Tironi cuestionó abiertamente la creencia, suscrita por muchos activistas políticos y sociales, de que los pobladores de Santiago estaban dispuestos a derribar al régimen a través de grandes manifestaciones. El estudio postulaba que las reformas económicas y la represión política habían inducido grandes cambios –los trabajadores manuales y asalariados eran una proporción mucho menor de la fuerza laboral; la sindicalización había caído fuertemente– que habían desdibujado el sentido de clase de la movilización social. Los sectores populares urbanos, divididos en segmentos que se relacionaban de distintas formas con la sociedad, estaban demasiado fragmentados como para conformar un movimiento social fuerte, especialmente si las consecuencias eran la violencia y la posible pérdida del puesto de trabajo⁴².

El estudio comprobó, además, que estos sectores tenían más interés en participar del gobierno que en reemplazarlo por otro radicalmente diferente. Rechazaban la violencia callejera y preferían el orden social y el diálogo pacífico con el gobierno. Es decir, las condiciones

⁴² Véase Martínez y Tironi, *Las clases sociales en Chile*; Alfredo Rodríguez y Eugenio Tironi, «El otro Santiago: Resumen de la Encuesta Sur 1985», *Proposiciones 13* (1987): pp. 12-21; y Eugenio Tironi, «Pobladores e integración social», *Proposiciones 14* (1987): pp. 63-83. Estos temas también se abordan en detalle en los volúmenes 14 y 15 de *Proposiciones*, la revista de SUR.

objetivas para un levantamiento contra el orden establecido simplemente no existían. «Las lógicas revolucionaria y comunitaria que han dominado el movimiento de pobladores», concluía Tironi, «están totalmente ‘fuera de sintonía’ con la visión que predomina en el común de los pobladores y que ha limitado seriamente a dicho movimiento»⁴³.

El trabajo de Tironi y Martínez constituyó una fuerte crítica a lo que comúnmente se percibía sobre el potencial político de los pobladores de Santiago. Este análisis, opina Brunner, «influyó mucho en mostrar que, hacia 1985, enfrentábamos un nuevo tipo de sociedad, y que en consecuencia, se necesitaban un pensamiento y una estrategia política de nuevo tipo y que había que repensar las categorías que utilizábamos para criticar la economía y las políticas del régimen militar» (28 de febrero de 1991).

Aunque se trataba de estudios académicos, sus resultados e implicancias no pasaron desapercibidos para los políticos y los actores sociales, y de hecho, aportaron material para nuevos ciclos de seminarios y talleres. Incluso, recibieron bastante cobertura en la prensa escrita, en especial cuando las conclusiones tenían implicancias políticas importantes. Y, por cierto, algunos de los autores de estos estudios también participaban, directa o indirectamente, en las internas partidarias⁴⁴. Según Ricardo Solari, dirigente del socialismo ortodoxo a la época, «sin ese debate habríamos entrado a ciegas en todo lo que vino después... Así que teníamos la opción de enfrentar el nuevo cuadro en base a los prejuicios o el instinto, o bien de tratar de entender lo que estaba pasando»⁴⁵.

Brunner aporta una vez más a aclarar lo que fue una dinámica extraordinariamente compleja: «Bueno, hubo siete años de gente leyendo... no creo que tantos hayan leído, pero estas cosas se mencionaban en seminarios, se hacían comentarios, alguien que había leído decía, en un grupo donde había varios políticos, ‘Pero estos intelectuales están diciendo esta otra cosa’, o ‘Garretón dice que el régimen

⁴³ Tironi, «Pobladores e integración social», p. 78.

⁴⁴ Por ejemplo, la crítica de la estrategia de movilización social que Genaro Arriagada hizo en 1987, y que influyó a muchos dirigentes demócratacristianos, se sustentaba en gran parte en estos estudios. Ver Arriagada, «Negociación política y movilización social», especialmente pp. 16-18.

⁴⁵ Entrevista con Ricardo Solari, 8 de marzo de 1991.

es fundacional, y esas cosas se discutían, aunque casi nadie hubiese leído el estudio. Con que una persona lo hubiese leído bastaba para que quince de la dirección política de la Democracia Cristiana empezaran a comentar estas cosas». Pero no siempre era así. Sigue Brunner: «Recuerdo, por ejemplo, a un Gabriel Valdés [entonces presidente de la Democracia Cristiana] absolutamente indignado con nosotros por lo que estábamos publicando, diciendo que los académicos de este país definitivamente no entendíamos nada, que la política tenía que ser la movilización social, que aquí no había modernizaciones, que nos enfrentábamos a una dictadura represiva y reaccionaria, etcétera»⁴⁶.

Pero, incluso, las respuestas indignadas demostraban que a los actores políticos les estaba llegando el mensaje. Al documentar la conciencia los cambios que se operaban en el país, la intelectualidad estableció una importante base empírica para la política opositora. Produjo hallazgos antitéticos pero convincentes, que aportaron a contrarrestar el aislamiento y las percepciones erróneas de los actores políticos. Gradualmente, y a veces afrontando fuerte resistencia, sentó las bases para una crítica mayor de la estrategia de transición. Este análisis demostraría su excepcional importancia años después, cuando la clase política debió debatir cómo enfrentar al régimen en las urnas.

Repensando la transición y gobernabilidad democráticas

La oleada de encuentros y seminarios realizados a mediados de los 80 también indagó explícitamente en temas relativos a la transición y la consolidación democrática. Estos encuentros fueron organizados por distintos centros de investigación, en especial FLACSO, CIEPLAN, SUR y el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Algunos se propusieron arrojar luz sobre la problemática chilena en el marco de un debate académico mayor sobre democratización; otros invitaron a representantes de países con experiencia reciente en el tránsito de dictadura a democracia, como Perú, Argentina y Brasil. Con ello pusieron a la clase política en contacto sistemático con lo que se pensaba

⁴⁶ Entrevista con José Joaquín Brunner, 29 de agosto de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

en las ciencias sociales contemporáneas en materia de establecer un Estado democrático.

El claro líder en esta empresa fue el CED, demostrando especial eficacia en cuanto a mantener a los actores políticos al corriente de la teoría y la experiencia en transición democrática y a generar un debate inteligente a partir de ello. A través de ponencias y debates estructurados, los participantes conocieron los trabajos de O'Donnell, Schmitter, Stepan, Dahl y otros autores, así como la experiencia de Brasil, Argentina, Grecia, España, Portugal e Italia en materia de creación y consolidación democrática. Se debatieron enfoques alternativos sobre la competencia política, los méritos de los distintos regímenes constitucionales y la importancia de los procedimientos democráticos, desarrollándose un marco comparativo amplio dentro del cual entender los problemas de Chile. Los temas sensibles se sacaron del marco de conflicto e ideología que los había rodeado por décadas y se replantearon en términos científicos, haciéndolos más fáciles de debatir.

Por cierto, no es fácil determinar de qué forma esta información incidió en los participantes. Boeninger estima que «Escenarios y estrategias de transición», taller que reunió a académicos y líderes partidarios a debatir formas de transitar a la democracia, tuvo un especial impacto. Fue fundamental para convencer a los participantes de que la transición solo se produciría a través de elecciones y que, en consecuencia, había que desechar la idea de obligar a Pinochet a renunciar a través de la protesta social y aprovechar el plebiscito que ofrecía la Constitución de 1980. «Esta conclusión a la que llegamos en el CED», dice Boeninger, «influyó en las decisiones que adoptaron los partidos»⁴⁷. Esta estrategia, que entre 1980 y 1987 se consideró herejía política, la hizo suya la Concertación a principios de 1988 y la condujo a la victoria en el plebiscito.

Ángel Flisfisch, uno de los coordinadores del programa, estima que los efectos del taller fueron menos directos y que simplemente se limitó a poner ideas y opciones en el tapete: «Desde antes de 1986 que tú encuentras trabajos y ponencias de seminarios y actividades que dicen que estas dos opciones existen y que llevan a dos escenarios de transición radicalmente distintos. La gran mayoría de las ponencias

⁴⁷ Castillo, *La fuerza del diálogo*, pp. 51-52, 57.

tendían a favorecer o poner el acento en el segundo escenario, en la salida negociada y no confrontacional. Esto era por influencia de O'Donnell, de Schmitter, de toda la literatura de transición que se producía en Estados Unidos. Eso lo decían todos, pero yo creo que lo único que hicieron las ponencias fue poner las ideas sobre la mesa. No es que haya habido un impacto en la dirigencia política, que los hayamos convencido de cuál era el camino. No creo que haya sido así; yo creo que siempre mantuvieron un cierto escepticismo respecto de este análisis. La visión del mundo político fue que, perfecto, ese es el análisis, pero la vida es más compleja y va por otro carril... No es que se hayan convencido, sino que las ideas estaban ahí como un elemento que se podía usar si los acontecimientos los llevaban a pronunciarse por una salida política pactada, negociada, sin violencia ni movilización social... Fue una labor de conceptualización» (17 de enero de 1991).

Ambas lecturas –persuasión y conceptualización– son plausibles. En política, la relación causa-efecto es compleja, y a veces ni siquiera el propio mundo político sabe con exactitud qué le lleva a escoger una opción y no otra. Exponer ante un actor político las bases de una determinada opción ciertamente no es lo mismo que convencerlo, aunque ambas cosas son importantes. La presentación sistemática de la lógica y las implicancias de opciones alternativas, permiten tomar mejores decisiones, enriquecen la comprensión de los hechos y entregan una base sólida para las decisiones que se decidan adoptar. Con ello, es perfectamente posible que las personas se inclinen por una opción que de otra forma no habrían contemplado, o bien contemplado mucho después. Información y comprensión marcan una diferencia.

Haya sido el resultado persuasión o conceptualización, los talleres del CED presentaron información detallada sobre las instituciones y los procesos democráticos de forma sistemática y durante un lapso relevante. Los participantes prestaron atención, y muchos de ellos aprendieron. En palabras de Mario Papi, vicepresidente del Partido Socialdemócrata, «Tuvimos un largo período de aprendizaje. Creo –y nos reíamos de esto– que nunca teorizamos tanto sobre democracia y transición que en dictadura». Y esas discusiones, agrega, se informaban ampliamente por la prensa. «Los periodistas llegaban a oír los debates e informaban lo que se decía... Eso era inédito... Estas no eran realmente asambleas políticas; se trataba de analizar todo desde una perspectiva académica... [La intelectualidad] nunca había tenido tanta

prensa –los diarios publicaban esto, la radio grababa esto otro y luego hacían especiales de prensa explicando cómo funcionaba una coalición de partidos, el papel de la oposición en democracia, los regímenes presidenciales, los regímenes parlamentarios... Y esas cosas se transmitían igual como hoy se transmite un debate político» (7 de marzo de 1991). Al no haber actividad política normal, las ciencias sociales pasaron a ser noticia.

Crítica de la estrategia de movilización social

En este período, los intelectuales tuvieron además un rol protagónico como críticos directos de la estrategia política de la oposición, función cuyo mayor impacto se sintió en el debate sobre la estrategia de movilización. En mayo de 1983, los líderes políticos y sociales habían recibido con júbilo el estallido de protestas sistemáticas contra el régimen y su evolución hacia una estrategia esencialmente rupturista sustentada en la movilización social. Tras años de represión, forzar la renuncia de Pinochet era una idea irresistible y la protesta popular se sintió como una bocanada de aire fresco. La mayoría consideraba que la dictadura era indiscutiblemente ilegítima y que podía ser derrotada.

Al referirse a esta época, Edgardo Boeninger recuerda la visión que predominaba en la oposición: «El cántico popular –*Y va a caer*– reflejaba la actitud del centro de que caería en la siguiente protesta, o en la que vendría inmediatamente después... y si no caía al mes siguiente, ahí veríamos lo que habría que hacer. Era todo muy simple, como en una película de vaqueros: el jovencito le daba duro al malo» (29 de enero de 1991). Mucha gente, especialmente en la izquierda, no aceptaba siquiera la idea de negociar la entrega del poder, lo que generó una postura maximalista que exigía una suerte de rendición del régimen y confiaba en la movilización de masas como medio para obtenerla; visión con la que muchos intelectuales coincidían. La percepción de Alejandro Foxley era común entre la intelectualidad de oposición: «Yo estaba por la protesta y la movilización social y contra el cronograma de Pinochet... La discusión sobre tácticas para derrotarlo no tenía nada que ver con que uno fuera renovado o no» (14 de marzo de 1991).

Más aún, para muchos participar en el referéndum era una opción inaceptable que equivalía a legitimar en los hechos la Constitución del

80. Se dudaba, además, de la limpieza de un acto electoral controlado por el régimen. La experiencia del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, hecho en 1980 sin las garantías que tradicionalmente acompañaron las elecciones libres, había dejado profunda huella. Muchos consideraban que la decisión opositora de disputar esa elección había sido un error táctico que, de alguna forma, había contribuido a legitimar un acto viciado. Esta experiencia había marcado a los políticos de oposición y los hacía renuentes a volver a participar en actos eleccionarios organizados y controlados por el régimen; de allí la insistencia en «democracia ahora».

Por desgracia, la estrategia opositora –movilización social más un llamado a las fuerzas armadas a negociar una transición distinta a la fijada en la Constitución– no estaba dando resultados. Las apuestas opositoras –Alianza Democrática en agosto de 1983, Acuerdo Nacional en agosto de 1985, Demanda de Chile en abril de 1986– habían quedado en nada. El régimen había llamado a negociar para ganar tiempo, retractándose después. La expresión más categórica de su postura refractaria se produjo cuando el arzobispo Juan Francisco Fresno intentó discutir el Acuerdo Nacional con Pinochet durante un encuentro de veinte minutos realizado la noche de Navidad de 1985 («No, no, mejor demos vuelta la página»)⁴⁸. Ni el tira de la movilización social ni el afloje de la oferta opositora de negociar, juntos o por separado, bastaron para llevar a las fuerzas armadas a tratativas serias.

Por añadidura, las protestas venían en baja. El entusiasmo con que habían brotado en mayo de 1983 comenzó a decrecer, especialmente tras la masiva y sistemática represión desatada por el régimen. «Más que una decisión de ponerles término, fue un proceso de extinción», dice Javier Martínez. «Diría casi que la mayor protesta fue la de septiembre de 1983 y, sin embargo, continuaron hasta octubre de 1985... Esa inercia, que continuó con protestas cada vez menos intensas, demostró que no había en ese momento una estrategia alternativa; que esta cosa siguió porque, si se quiere, así era como se hacía oposición» (6 de marzo de 1991). En junio de 1983, después de que el régimen exonerara a casi 2.000 trabajadores del cobre en huelga, importantes sectores del movimiento sindical retiraron su participación formal.

⁴⁸ Véase Cavallo, Salazar y Sepúlveda, *La historia oculta del régimen militar*, p. 488.

Otro tanto hicieron poco después los sectores medios en respuesta a la violencia que acompañaba a las protestas, a la creciente importancia dentro del movimiento sindical del izquierdista Movimiento Democrático Popular (MDP), o simplemente porque no creían que las protestas fuesen a dar resultado⁴⁹.

Al retirarse las capas medias, asumieron el control sectores urbanos marginales y elementos extremistas y violentistas dominados por estudiantes, jóvenes pobladores y grupos de cesantes urbanos. De forma gradual y casi imperceptible para la dirigencia política, las protestas perdieron su carácter amplio y de base, dejando al régimen la vía expedita para concentrar la represión en las zonas populares.

Para colmo, la dirigencia estaba dividida en cuanto a métodos y objetivos. La Alianza Democrática veía las protestas como una forma de presión social para llevar al régimen a la mesa de negociaciones, pero el MDP las consideraba como el camino hacia la insurrección de masas y el derrocamiento sin negociación del régimen. Como dice Arriagada, se impulsó la movilización social sin reconocer la diferencia entre la que practicó Gandhi en la India y la que practicaron Trotsky y Lenin en Rusia en 1917 (4).

A principios de 1984, la dirigencia opositora, aunque todavía en privado, parece haber empezado a tener serias dudas sobre la estrategia de movilización social. Señala Martínez: «Recuerdo conversaciones en que [Gabriel] Valdés dio a entender que el resultado más probable sería participar en el plebiscito, pero que la movilización social era fundamental porque ayudaría a forjar una mayoría para el plebiscito, si se llegaba a ese punto». El mundo político era extremadamente reacio a criticar la movilización. Habían asumido la responsabilidad de organizar y promover las protestas, y eran ellos quienes durante años rechazaron, de plano y con vehemencia, la única alternativa: la Constitución de 1980 y el escenario de transición que establecía. Tenían un compromiso profundo y público con obligar al régimen a cambiar de planes. Agrega Martínez: «Habría sido muy descarado que luego de decir todo eso, la dirigencia opositora dijera ‘Ahora vamos a participar en el plebiscito’» (6 de marzo de 1991). La oposición estaba metida en un atolladero.

⁴⁹ En «Negociación política y movilización social», p. 2, Arriagada estima que la participación de los estratos medios y altos empezó a decrecer hacia la cuarta protesta, en agosto de 1983.

Genaro Arriagada, a la época director de Radio Cooperativa, la principal emisora de oposición, relata una anécdota que ilustra lo sorprendente y difícil de aceptar qué fue la baja en el apoyo popular para las protestas: «En la radio hacíamos ‘El computador de Cooperativa’, un microprograma en que se encuestaba a una muestra de 200 personas para saber qué pensaban sobre salud, desempleo, etcétera. Pues bien, alrededor de 1985, cuando el régimen levantó el estado de sitio, encargamos un sondeo sobre el tema. En esa época, el programa tenía dos partes. Primero, una periodista recogía opiniones en la calle, y luego presentábamos los resultados del sondeo de la semana anterior... Esa vez me topé con la periodista la mañana del programa y me dijo: ‘Qué mala pata, me tocaron puros fachos a favor del estado de sitio.’ Luego llegaron los resultados del sondeo, que mostraban que la mayoría del país, especialmente los sectores populares, estaban a favor del estado de sitio... Concluimos que el país estaba harto de protestas y de que sus barrios fueran escenario de enfrentamientos entre la policía y jóvenes que quemaban neumáticos, y que lo que querían era que alguien pusiera orden» (8 de marzo de 1991)⁵⁰.

Aún así, la oposición persistió en mantener su postura rupturista hasta bien entrado el año 1987. En enero de 1986, por ejemplo, el dirigente DC Claudio Huepe reafirmó que la estrategia fundamental de la Alianza Democrática era «ejercer el máximo de presión posible a fin de llegar a una negociación con las fuerzas armadas»⁵¹. Ese mismo mes, Sergio Molina se vio obligado a declarar al Acuerdo Nacional en receso, principalmente porque los grandes partidos de centro e izquierda no estuvieron de acuerdo con una propuesta de la centroderecha de suspender la movilización social por noventa días para tratar de iniciar conversaciones con el régimen⁵². En mayo, el socialista Ricardo Lagos declaró que no había «incompatibilidad entre una solución política y la movilización social»⁵³. La mayoría de la dirigencia opositora insistía, al menos en público, en que el objetivo era sacar a las fuerzas armadas del poder, y el instrumento, la movilización social.

⁵⁰ El sondeo de Cooperativa mostró que estaban a favor del estado de sitio el 18% de los encuestados de estratos altos y el 63% de los encuestados de estratos bajos. Véase *ibíd.*, p. 23.

⁵¹ *Cauce* 57 (1986), p. 11.

⁵² *APSI* 107 (1986), pp. 4-6.

⁵³ *Cauce* 72 (1986), p. 26.

Pero en 1986 surgió una crítica pública, especialmente desde la intelectualidad. Dice Arriagada: «Desde el mundo intelectual se planteó una crítica muy interesante de las protestas. Hubo artículos, documentos partidarios internos –de Boeninger, míos, de Brunner– que analizaban las protestas... y hacia 1986 hubo una afirmación fundamental de que no estaban dando resultado» (8 de marzo de 1991). Brunner destaca la labor de intelectuales que eran militantes de partido: «En realidad fueron socialistas como Flisfisch, Vodanovic, Garretón y otros, quienes al inicio, en 1985 y 1986, dijeron que la estrategia estaba absolutamente condenada al fracaso... Fueron los primeros en decir: ‘Esta sociedad no es totalmente represiva y el modelo no es un fracaso total... Vean las modernas plantaciones de uva de exportación en el norte’. En esa época, al que dijera algo así lo miraban como si estuviera totalmente loco» (28 de febrero de 1991).

La crítica intelectual de la estrategia opositora adoptó múltiples formas. En un principio, fue de bajo perfil y tras bambalinas; los intelectuales siguieron prácticamente monopolizando los seminarios y conferencias de la oposición. La sensación generalizada de que el cambio era inminente intensificó la demanda por información y análisis por parte de los actores políticos. «Escenarios y estrategias de transición», taller para líderes opositores ofrecido por el CED en 1986, presentó sistemáticamente las experiencias de otros países y el pensamiento académico sobre transición democrática. Otros centros hicieron talleres con académicos y políticos de países que habían transitado de dictadura a democracia (uno de los mejores y más concurridos lo organizó la Universidad Católica en 1986). Muchos intelectuales debatían estrategia con dirigentes partidarios en un plano informal; otros participaban más formalmente en debates partidarios internos. A través de entrevistas y artículos breves, unos pocos lograron llevar los temas de la transición a la prensa. En un plano sereno y académico, gradualmente se abrió entre el mundo intelectual y el político un debate en torno a la estrategia de transición que se manifestaba crecientemente crítico de la movilización social.

El 26 de septiembre de 1986, poco después del hallazgo de armas en el norte y del atentado contra Pinochet, el papel de la intelectualidad cambió radicalmente. José Joaquín Brunner, uno de los más distinguidos sociólogos del país, filtró a *La Segunda*, importante rotativo gobiernista, una minuta de seis páginas en que criticaba la estrategia opositora y llamaba a formular una nueva visión. La minuta, que la

semana anterior había circulado entre la dirigencia opositora, fustigaba la estrategia de movilización social, proponía cortar lazos con el izquierdista MDP, pasar del conflicto a la negociación y reconocer las condiciones para la transición establecidas en la Constitución del 80.

La minuta de Brunner fue un bombazo político. La derecha lo aplaudió por adoptar una posición con la cual comulgaba, pero una oposición consternada repudió su postura en público y le hizo ácidas críticas en privado. La dirigencia socialista estimó que no correspondía haber ventilado públicamente materias que se estaban tratando al interior de los partidos. Dos colegas cercanos, Ángel Flisfisch y Manuel Antonio Garretón, aparecieron en el mismo diario respaldando el derecho de Brunner a opinar, pero manifestando su desacuerdo con varias de sus conclusiones. En toda la oposición hubo indignación, pero según recuerda Eugenio Tironi, las reacciones fueron de un «sospechoso dramatismo». Brunner fue criticado, primero, como un intelectual que se atrevía a opinar públicamente sobre un tema primordialmente político («Los intelectuales a lo suyo y nosotros a lo nuestro»); y segundo, agrega Tironi, porque su acción era «una especie de traición a los caídos en las protestas» (20 de marzo de 1991). Sin embargo, ninguna de las críticas contenía un buen contraargumento. Brunner actuó, en opinión de un intelectual opositor, como «una suerte de Llanero Solitario en este cuento»⁵⁴.

No obstante, las cosas habían cambiado. La crítica de Brunner desató un sostenido debate, incluso a través de la prensa, sobre la pertinencia de la postura opositora de movilización social. Pronto se sumaron otros intelectuales, especialmente Garretón y Flisfisch. Un mes después, Edgardo Boeninger envió a la mesa demócratacristiana una carta de veinticuatro páginas, planteando muchos de los mismos argumentos presentados por Brunner y recomendando un nuevo enfoque. Los dirigentes socialistas –especialmente el secretario general, Ricardo Núñez– comenzaron a distanciarse explícitamente de la postura de «todas las formas de lucha» reivindicada por el MDP y a poner el acento en una «solución política»⁵⁵. Hacia principios de 1987, el

⁵⁴ Entrevista con Juan Gabriel Valdés, 29 de mayo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

⁵⁵ Véase «Carta abierta a los dirigentes y militantes de la izquierda chilena», *APSI* 29 (diciembre de 1986).

propio MDP empezó a rechazar la violencia y a llamar a la reconciliación nacional. La estrategia de movilización social había quedado total y públicamente desacreditada.

La minuta de Brunner fue el punto más álgido de una extensa crítica intelectual que marcó significativamente la estrategia política. A través de actividades en general académicas –recopilación de datos, análisis, debate y publicación–, la intelectualidad fue articulando una convicción que los políticos habían empezado a percibir pero que se les hacía difícil aceptar. Explica Brunner: «Yo creo que en un principio el mundo intelectual ayudó a mostrarle al mundo político chileno que iba por un camino político difícil... que estaba jugando un juego –el derrocamiento por la fuerza– para el que no tenía experiencia, tradición, conocimiento ni medios... Y le mostró que había otro juego que sí sabía jugar –el de la negociación, de movilizar símbolos políticos, de criticar públicamente al régimen, de unir esfuerzos, de formar coaliciones» (28 de marzo de 1991). En palabras de Juan Gabriel Valdés, los intelectuales actuaron como «francotiradores» que lograron abatir posiciones enconadas con unas cuantas ideas bien escogidas (29 de mayo de 1991).

Analizando el papel de la intelectualidad en este período, Boeninger estima que «puso en entredicho la tesis de que la movilización social acabaría con la dictadura» y agregó «otras reflexiones más teóricas que decían básicamente ‘Mire, si usted quiere democracia, ¿cuál es [históricamente] el escenario que conduce hacia allá?... que la guerrilla pocas veces ha conducido a la democracia, que lo que lleva a la democracia son los procesos electorales’. A partir de allí el problema fue cómo diseñar un escenario electoral. Y fue entonces que los dirigentes sociales y políticos empezaron a darse cuenta de que se acercaba el plebiscito establecido en la Constitución y a mirar mucho más de cerca las implicancias. Luego, desde los centros académicos surgió la visión de que esto creaba una oportunidad de que era posible construir un escenario... que nos diera una chance, y que de otra forma no teníamos chance alguna» (29 de enero de 1991).

El socialdemócrata Mario Papi concuerda en que la intelectualidad hizo que la clase política advirtiera «que la política tenía una cierta lógica y que teníamos que volver a hacer política en términos clásicos, que no era inteligente tirarnos de cabeza contra la dictadura porque esa era *su* forma de actuar. Los intelectuales iluminaron a una

clase política que estaba tremendamente desorientada» (7 de marzo de 1991). La intelectualidad contribuyó a convencer al mundo político de optar por las urnas en lugar de las barricadas.

La decisión de Brunner de ventilar sus inquietudes en público fue cualitativamente distinta a cualquier otra acción realizada por un intelectual. Representó, según Foxley, un «quiebre con lo establecido», de importancia quizás más simbólica que analítica que escandalizó a la dirigencia opositora, pero «generó un mayor espacio de libertad». «Más que legitimar una idea, legitimó una actitud» consistente en «ver toda la gama de posibles alternativas y decir lo que uno pensaba» (14 de marzo de 1991). Para la política chilena, donde el discurso estaba tradicionalmente delimitado por códigos rígidos y predeterminados y donde nadie se arriesgaba a salir de lo preestablecido, era un cambio paradigmático que mostraba que el pasado no tenía por qué pesar tan fuertemente sobre el presente; que los moldes se podían romper. A juicio de un dirigente socialista, Brunner había expresado «lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir abiertamente»⁵⁶.

Más política que intelectual, la acción de Brunner fue un giro deliberado desde el análisis académico a la propuesta política. Tipificó, además, el cambio mayor que se estaba gestando en cuanto al rol del intelectual disidente que empezaba a dejar atrás la academia y a asumir funciones más directamente políticas. De hecho, varios trataban temas políticos públicamente y participaban directamente en materias partidarias; unos cuantos incluso postularon a cargos de dirección. En suma, el mundo intelectual empezó a trascender la academia y a operar más decididamente en el ámbito político, tendencia que en los siguientes dos años se haría mucho más pronunciada.

Se empieza a consensuar una política post-dictadura

En este período, la intelectualidad también desempeñó papeles más estrictamente tecnocráticos. Según se asentaba la convicción de que venía la democracia, la atención se volcó a definir políticas para una transición democrática. La mayoría de los centros académicos tenían

⁵⁶ Entrevista con Jaime Gazmuri, 7 de marzo de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

claros enfoques temáticos –educación, salud, desarrollo rural, etcétera– y llevaban años haciendo investigación en sus respectivos ámbitos. El CED, fundado en 1980, era el único creado con el expreso propósito de desarrollar una propuesta integral de políticas públicas para un futuro gobierno democrático. Así, alrededor de 1984, los centros académicos se empezaron a centrar más a conciencia en las implicancias de su labor para las futuras políticas públicas. A través de seminarios y talleres, la intelectualidad aportó a que dirigentes sociales y políticos abrieran un debate amplio sobre las políticas sociales y económicas que habría que adoptar post-dictadura.

Emprendieron este tipo de actividades múltiples centros. El PIIIE y el CIDE estudiaban y analizaban el sector educación y sistemáticamente elaboraron recomendaciones. ILADES y el PET se dedicaban a la política social en general, con énfasis en sus efectos en los sectores populares; el GIA y el GEA estudiaban el sector agrario; PROSPEL, la FLACSO y (después de 1986) el CLEPI trabajaban en política exterior, en tanto la Academia de Humanismo Cristiano, la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión Chilena de Derechos Humanos abordaron el tratamiento que debía darse al delicado tema de las violaciones a los derechos humanos en un régimen democrático. Empezó así un amplio proceso de discusión multipartidaria que permitió generar confianzas y consensos y cuyos resultados no solo comenzaron a figurar en seminarios, debates y publicaciones, sino que formaron parte importante de, por ejemplo, los talleres que organizó el CED como parte del programa «Concertación política, proyecto nacional y democracia». Los centros académicos fueron después la base de los equipos técnicos multipartidarios que elaboraron el programa de gobierno para la campaña presidencial de Patricio Aylwin, y muchos de sus integrantes asumirían altos cargos en el gobierno democrático.

El tema clave: la política económica

En este período, los intelectuales condujeron prácticamente la totalidad del debate opositor en materia de políticas públicas, pero no hubo otro ámbito en que su papel fuera más complejo o decisivo que en cuanto a la economía, esfera en que los desacuerdos históricos entre las fuerzas políticas chilenas eran especialmente agudos y conflictivos. En

efecto, parte de la áspera división política de los años 60 se remontaba a visiones divergentes sobre la propiedad privada, la inversión extranjera, los mercados y el papel del Estado en la economía⁵⁷, ámbitos en que el régimen militar, a instancias de los Chicago Boys y sus políticas neoliberales, había hecho los cambios más profundos y radicales. La economía era el espacio donde la línea que siguiera la oposición sería determinante para su grado de apoyo y éxito una vez recuperada la democracia. Dentro de los temas de política social, la economía era uno de los más políticos.

Sin embargo, las reformas estructurales de los Chicago Boys habían cambiado drásticamente las cosas y un manejo económico en base a consideraciones puramente políticas ya no era factible. La economía chilena era más dinámica, estaba más integrada con el mundo y requería de mayor capacidad técnica. El acento que el régimen de Pinochet había puesto en una economía de punta «hizo conciencia en los dirigentes políticos de que había que escuchar a los técnicos»⁵⁸. La clase política ya no estaba en condiciones de hacer promesas fáciles; la economía, más que nunca antes, se había convertido en terreno de expertos⁵⁹. De todos los temas que enfrentaba la oposición, la gestión económica no solo era uno de los más políticos, sino uno de los más técnicos.

Esta conjunción de demandas políticas y técnicas dio a la intelectualidad disidente una gran oportunidad de participar en el diseño de políticas. Prácticamente, todos los economistas técnicos de oposición trabajaban en centros académicos; muy pocos estaban en política o en el sector privado y, por cierto, ninguno en el gobierno. Los centros, en consecuencia, aportaron la mayor parte de la tecnocracia económica de oposición. Sin embargo, el que la política económica fuera un tema

⁵⁷ Diferencias que se mantuvieron hasta fines de los 80. Por ejemplo, en un seminario del CEP realizado a fines de 1986, los destacados economistas socialistas Gonzalo D. Martner y Eduardo García desataron una polémica al llamar al Estado a retomar el control de importantes sectores de la economía y limitar las actividades del capital privado. Véase *El Mercurio*, 28 de diciembre de 1986, pp. B1-B2.

⁵⁸ Entrevista con Ricardo Ffrench-Davis, 3 de febrero de 1992. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

⁵⁹ Patricio Silva, en «Intellectuals, Technocrats, and Social Change», hace un detallado recuento del papel de los tecnócratas en la política económica. Véase también Montecinos, «Economics and Power».

tan polémico, e incluso conflictivo, les obligó a mantener un precario equilibrio entre aspectos políticos y técnicos.

Al mismo tiempo, en la dirigencia opositora se gestaba una nueva forma de ver la economía. Mientras la gestión económica del gobierno de Allende había sido un fracaso dramático e indiscutible, los éxitos de la política neoliberal eran cada día más evidentes. Asimismo, la experiencia del exilio les había dado a muchos dirigentes de izquierda la oportunidad de contrastar las realidades de Europa oriental y occidental. La visión tradicional de la economía estaba cuestionada desde múltiples frentes y se precisaba una nueva doctrina.

Así, no es de extrañar que el impacto de la intelectualidad en la política económica opositora fuera un tema complicado. Por una parte, el mundo intelectual se había visto obligado a criticar. Las reformas estructurales de los Chicago Boys no solo habían constituido un quiebre radical con el pasado, sino que eran de un signo ideológico opuesto a las posturas históricas de la izquierda y de gran parte del centro. Se habían impuesto a un alto costo social, afectando a los más pobres y beneficiando a los más ricos. Es más, dado que hasta mediados de los 80 la oposición solo podía criticar públicamente al régimen en el ámbito técnico, la crítica económica se había convertido en la principal forma de crítica política. Al juzgar la política económica de la dictadura, el papel de los economistas de oposición no fue solo técnico, sino también político. «Reemplazaron a una clase política que estaba impedida de actuar y lucharon contra una dictadura cruel y represiva que estaba causando una enorme miseria en los sectores más vulnerables de la población» (Foxley, 14 de marzo de 1991). Es decir, la crítica económica tomó el lugar de otros tipos de crítica que estaban prohibidos.

Por otra parte, cuando en 1985 la economía salió de la crisis y retomó la senda del crecimiento, la intelectualidad opositora debió asumir la posibilidad de que una política económica post-dictadura podría no ser muy diferente a la impulsada por los Chicago Boys. Muchas de las reformas estructurales estaban funcionando y gozaban de creciente aceptación pública. La economía iba en alza, el desempleo en baja y Chile se estaba convirtiendo en un referente económico, en contraste con el marasmo o la contracción en que se debatía el resto de América Latina. A medida de que la posibilidad de acceder al poder se hacía cada vez más real, la oposición se dio cuenta de que el éxito dependería en gran medida del manejo económico, definido en términos no solo

de una distribución más equitativa del ingreso, sino también de estabilidad macroeconómica, crecimiento y baja inflación. La oposición ya no podía limitarse a criticar la política económica del régimen; tenía que desarrollar una propuesta propia.

En este período, los intelectuales tuvieron un rol protagónico en lograr que la oposición pasara de repudiar la política económica del régimen a diseñar una visión propia, aceptable en lo político e idónea en lo técnico. Fue un proceso prolongado que exigió múltiples reuniones, seminarios y talleres y que se extendió hasta poco antes de los comicios presidenciales de 1989. Exigió desechar muchos de los principios –proteccionismo, fuerte rol estatal en la producción, control de precios– que durante largo tiempo habían sido básicos para la izquierda y gran parte del centro, y aceptar la mayoría de las reformas estructurales instauradas por el régimen. Y exigió, además, buscar un ajuste entre la opción histórica por la justicia social y los más pobres y la nueva ortodoxia económica, de una forma que no dividiera a la oposición. En todas las etapas, hubo participación de los actores políticos, pero en términos generales, la especial conjunción de credibilidad política y capacidad técnica que aportó la intelectualidad de los centros académicos terminó entregándole la conducción del proceso.

Este proceso había comenzado a fines de la década de los 70 con un círculo de estudios económicos organizado por la Academia de Humanismo Cristiano. Esta actividad reunía periódicamente a una cincuenta de economistas y actores políticos de oposición, en una época en que la comunicación estaba muy restringida y las fuertes diferencias de opinión, especialmente en materia económica, aún caracterizaban las relaciones entre los partidos de oposición. El círculo no produjo una propuesta nueva, pero «tuvo un rol comunicacional protagónico cuando eso era muy difícil» y permitió a economistas de oposición establecer un conjunto de relaciones que perdurarían durante los siguientes diez años (Ffrench-Davis, 3 de febrero de 1992).

CIEPLAN

Uno de los primeros y más importantes protagonistas fue CIEPLAN, la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica, institución reconocida por su nivel académico, capacidad técnica

y opción preferencial por las políticas públicas. Sus principales colaboradores, todos doctorados en las mejores universidades de Estados Unidos, publicaban regularmente libros y artículos académicos y mantenían relaciones de trabajo con reconocidos economistas de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina.

En un nivel, CIEPLAN –institución académica seria, con credenciales intachables y a la que no se podía acusar de aprovechamiento político– fue un baluarte de capacidad técnica opositora. Después de haber estudiado la economía chilena por más de diez años, CIEPLAN conocía bien los fracasos del pasado y las radicales transformaciones del presente. Si adoptaba una posición, esa posición era sólida. No solo estaba en condiciones de enfrentar a los Chicago Boys en su propio terreno, sino además de aportar la capacidad técnica que a diario exigían los dirigentes opositores y el público en general.

En otro nivel, su crítica inalterable de la política económica del régimen le había otorgado un papel político. Como recuerda el economista socialista Carlos Ominami, CIEPLAN fue «un gran crítico del régimen militar»⁶⁰. Su crítica, tan fuerte como técnica, en una época en que hacer juicios de otro tipo era imposible, le dio en los hechos trascendencia política, y su disposición a asumir ese papel, especialmente antes de 1983, le había granjeado un alto grado de credibilidad en la dirigencia política.

Esa credibilidad se extendía más allá del centro, e incluso del ámbito político. Pese a que la mayoría de sus colaboradores se identificaban con la Democracia Cristiana y muchos militaban en ese partido, CIEPLAN era claramente independiente del aparato partidario. Foxley, presidente de CIEPLAN, había escrito extensamente sobre la necesidad de construir un consenso político estable y criticado duramente la rigidez de la postura demócratacristiana en los años 60. Además, el programa de diálogos ciudadanos le había dado a CIEPLAN su propia red de contactos con actores sociales de todo el país. En CIEPLAN, trabajaba gente de izquierda y a sus actividades habitualmente acudían académicos y actores políticos de esa tendencia. Como recuerda un colaborador de izquierda, CIEPLAN estaba compuesto por «gente que lleva dentro la idea del cambio... de estar del lado de los más pobres,

⁶⁰ Entrevista con Carlos Ominami, 14 de enero de 1992. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

no de los partidos políticos»⁶¹. No era una institución particularmente partidista ni buscaba convertir a la gente de izquierda a sus posiciones.

Es decir, CIEPLAN operaba simultáneamente a nivel político y técnico. Su solidez técnica le daba una contundente presencia política, y su presencia política convencía al mundo político de escuchar su mensaje técnico. De hecho, lo que mayor ascendiente le dio fue precisamente su especial capacidad para conciliar funciones técnicas y políticas. En este sentido, es muy reveladora la apreciación de Foxley sobre cómo el activismo político derivó en influencia técnica: «Nuestra capacidad de influir en la campaña, y después en el gobierno, aumentó considerablemente no porque nuestras ideas fuesen ‘renovadas’ y supuestamente atractivas; lo importante fue que los políticos tradicionales nos vieron enfrentándonos a la dictadura junto con ellos, en su propio terreno. Eso nos generó credibilidad y un cierto grado de confianza recíproca y respetabilidad política en sectores tradicionales» (14 de marzo de 1991). Es decir, CIEPLAN logró que sus roles políticos y técnicos fueran mutuamente sustentables.

Tras el estallido de las protestas en 1983, CIEPLAN empezó a transitar de la crítica a la propuesta. Recuerda Óscar Muñoz: «El modelo estaba en crisis y la gente había perdido el miedo y empezaba a salir a la calle. El escenario era de fin del régimen, y eso generó en nosotros un sentido de urgencia» (27 de agosto de 1991). En CIEPLAN, decidieron que era hora de desarrollar propuestas serias. En tan solo cinco meses, y tras un extenso debate con actores políticos y económicos, publicaron *Reconstrucción económica para la democracia*, el primero de una serie de trabajos orientados a sentar las bases de una nueva política económica⁶². En los siguientes cinco años, a medida que CIEPLAN fue asumiendo otras temáticas y afinando ideas en debates internos y externos, se fueron sumando más libros, documentos de trabajo, seminarios y artículos de prensa.

Los aportes de CIEPLAN al debate económico partían de la actividad académica tradicional, pero no se detenían allí. Así, por ejemplo, se comparó la gestión macroeconómica en Perú, Brasil y Argentina durante las transiciones a la democracia, extrayendo enseñanzas para

⁶¹ Entrevista con Manuel Marfán, 7 de enero de 1992. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

⁶² *Reconstrucción económica para la democracia* (Santiago: CIEPLAN, 1983).

Chile. Se analizó la legislación laboral de Europa y Estados Unidos y su relevancia para los conflictos que Chile podría enfrentar al retorno de la democracia. Durante años se trabajó con dirigentes de las principales centrales sindicales del país para definir una política de relaciones laborales en democracia⁶³. Como parte del programa de diálogos ciudadanos, gente de CIEPLAN recorrió el país discutiendo propuestas de políticas públicas con empresarios, municipios y grupos ciudadanos, lo que permitió no solo difundir las ideas de CIEPLAN, sino además conocer las inquietudes reales de la gente⁶⁴. Se publicó una revista mensual orientada a un público general y que se hacía llegar a un selecto grupo de dirigentes sociales y políticos del país. Se organizó un ciclo de seminarios de política económica para periodistas. Foxley publicó tres libros sobre las bases políticas y económicas de un Chile democrático, y varios colaboradores de CIEPLAN hicieron un importante aporte a la parte económica de *Proyecto Alternativo*, un conjunto de propuestas de políticas públicas elaboradas a mediados de los 80 por un equipo de la DC dirigido por Sergio Molina. Otros dos integrantes de CIEPLAN participaron en la Comisión Económica que creó en 1985 el reorganizado Partido Socialista para redefinir su postura en este ámbito.

Alrededor de 1987, una serie de factores intelectuales y políticos llevaron a CIEPLAN a adoptar una visión más conciliadora sobre las reformas económicas del régimen de Pinochet. Según Óscar Muñoz, la realidad práctica de estarse viviendo avances positivos en materia económica llevó a CIEPLAN –y a muchos otros opositores al régimen– a un cambio de postura: «Quizás habíamos estado demasiado convencidos de ciertos enfoques y habíamos desarrollado en gran detalle los argumentos para defenderlos. Cuando vimos que de hecho las cosas funcionaban bien bajo una perspectiva distinta, empezamos a prestar más atención a otros argumentos, a verlos más desapasionadamente y a conciliar mejor los distintos tipos de argumentos, y en definitiva concluimos que no había una sola verdad». Después de años de criticar

⁶³ René Cortázar, director del programa, sería luego ministro del trabajo en el régimen democrático.

⁶⁴ Como reflejo de la experiencia de los diálogos ciudadanos, señala Manuel Marfán: «Tener que explicar tus ideas ante un grupo de dirigentes sindicales o de empresarios o de agricultores era una dura prueba. A veces te dabas cuenta de que tus ideas eran tontas... a veces la gente te hacía preguntas que tú nunca te habías planteado, pero que resultaban ser muy importantes para ellos» (7 de enero de 1992).

la política económica del régimen, reconocerlo no fue fácil. Muñoz recuerda haber constatado, con cierta incomodidad, que de estar a cargo de la política industrial probablemente no implementaría muchas de las reformas que en sus escritos había catalogado de indispensables. «Al principio no me atrevía a decirle a nadie... Pero en un momento, un poco tímidamente, se lo comenté a alguien con quien tenía confianza. Para sorpresa mía, él pensaba lo mismo... Y empezamos a intercambiar información sobre lo que pensaban los otros en CIEPLAN... Me imagino que la mayoría pasamos por ese proceso personal. Poco después estábamos todos transmitiendo un discurso que tenía mucho más de continuidad que de cambio» (27 de agosto de 1991).

Foxley, por su parte, subraya que la postura de CIEPLAN también se vio afectada por consideraciones políticas de carácter más general. Primero –acota–, después de 1983 volvió a ser posible la protesta política, lo que permitió que parte de la crítica pasara de los economistas a otros actores sociales. Segundo, la economía había repuntado, la mayoría de los costos de las reformas se habían pagado, y los beneficios se estaban empezando a ver. «Había que ser muy tozudo y cabeza dura para no aceptar las cosas como eran», puntualiza. Tercero, las condiciones políticas ameritaban un gesto deliberado. «Estábamos racionalmente convencidos de que este país tenía que aprender a convivir, y habíamos estudiado la teoría del juego y la cooperación... Así, iniciamos [a propósito] un juego cooperativo en que reconocíamos aspectos positivos, incluso más allá de lo que realmente creíamos. En CIEPLAN elaboramos y publicamos ‘El consenso económico-social democrático es posible’, documento que era una reafirmación de lo que era posible. Y lo hicimos en términos tales que del otro lado pudieran decir ‘estos tipos reconocen nuestros aspectos positivos, ahora tenemos que entendernos con ellos’» (14 de marzo de 1991). Es decir, el cambio fue impulsado no solo por el reconocimiento de que algunas cosas funcionaban bien, sino también por el deseo de reivindicar una ética de armonía política más concordante con el régimen democrático que venía.

Por cierto, en CIEPLAN nadie estuvo nunca íntegramente de acuerdo con las reformas impuestas por el régimen de Pinochet, las que consideraban innecesariamente drásticas, de gran crueldad por su impacto sobre los más pobres, y plagadas de dádivas indefendibles para los más ricos. El documento conciliador, por su parte, no apareció sino

hasta septiembre de 1988, casi encima del plebiscito⁶⁵. Pero mucha de la crítica inicial de CIEPLAN estaba quedando desfasada. Ya se había pagado el exorbitante costo de los intentos del gobierno por reducir la inflación, liberalizar el sector financiero y controlar la crisis de la deuda⁶⁶. CIEPLAN, como otros en la oposición, reconoció que las condiciones habían cambiado, que había avances y que las antiguas tesis estaban quedando caducas.

Pero si algo distinguía a CIEPLAN era su capacidad para conciliar la neo-ortodoxia económica con las realidades de ser oposición. Según Ricardo Ffrench-Davis, miembro de la plana mayor, CIEPLAN demostró «que se podía tener una economía de mercado más justa y equitativa, que diera espacio a la gente... Eso ayudó a rebatir la idea de que todas las economías de mercado tenían que ser muy concentradas, muy desiguales, muy desnacionalizadas, etcétera» (3 de febrero de 1992). Esto constituyó una garantía de que la oposición podía manejar la economía no solo con seriedad y rigor, sino además con mayor equidad. En el contexto opositor chileno, nadie más que CIEPLAN poseía la capacidad técnica y la credibilidad política necesarias para conciliar libre mercado y justicia social.

Los socialistas

En la izquierda, la intelectualidad tuvo quizás más peso que en el centro en materia de renovación de los paradigmas económicos. Los partidos y dirigentes estaban en posición más desmedrada y su doctrina económica en mayor entredicho, lo que creó mayores oportunidades para que la intelectualidad de ese sector ejerciera influencia. En este caso, y mucho más que en el centro, según el economista socialista Carlos Ominami, «Fue muy difícil establecer una clara distinción entre liderazgo político e intelectual». Y agrega: «Las ideas que surgían con gran fuerza en la discusión intelectual se trasladaban rápidamente al mundo de la dirigencia política, porque era más o menos la misma

⁶⁵ Este documento circuló oficiosamente en septiembre de 1986 y apareció en noviembre de 1988 en *Revista CIEPLAN 14*: pp. 36-44.

⁶⁶ Debo a Joe Ramos hacerme notar la importancia de este factor en la visión económica de la oposición.

gente» (14 de enero de 1992). Más aún, un gran número de intelectuales de izquierda, entre ellos economistas, habían vivido en el exilio, donde conocieron de primera mano las economías de Europa y América del Norte. Muchos, además, habían hecho estudios de posgrado en el extranjero y habían conocido propuestas más modernas de pensamiento económico.

La izquierda, sin embargo, tenía una dinámica propia en la que CIEPLAN influyó de manera solo tangencial. Como explica Ominami, el impulso para la renovación del pensamiento económico tuvo raíces más tempranas: «El caso de la izquierda tiene mucho que ver con la mayor apertura que produjo la experiencia en el exterior; con el hecho de que muchos de nosotros fuimos obligados a salir al exilio, donde desarrollamos puntos de vista más universales y menos provincianos. El hecho de la derrota en el período 1970-1973 fue un aliciente muy importante para repensar muchas cosas. Haber sido derrotado te obliga a buscar explicaciones sobre por qué las cosas fueron así, y ciertamente, a tener una visión que trate de evitar la repetición de los mismos errores».

En efecto, el trauma del fracaso y posterior exilio parece haber transformado el pensamiento de izquierda en materia política y económica. El fracaso económico del gobierno de la UP, más el contacto directo con las democracias capitalistas de Europa Occidental y el socialismo de Europa Oriental, generaron un fuerte debate sobre política económica. Políticos intelectuales como Jorge Arrate, quien había hecho un posgrado en economía en la Universidad de Harvard, se convirtieron en protagonistas de un debate que cruzó varios continentes a fines de los 70 y principios de los 80. Es destacable que Ominami, Lagos, Arrate, Estévez y Bitar, cinco de los economistas de izquierda técnicamente más calificados, fueran también actores políticos, y que cuatro de ellos hayan vivido en el exilio casi diez años. Es decir, en la dirigencia de izquierda la visión de la economía había empezado a cambiar en el exterior, mucho antes del debate nacional sobre política económica de mediados de los 80.

En el interior, el principal centro de operaciones de los economistas de izquierda antes de 1985 fue el PET, fundado tras el golpe por Humberto Vega, ex director de presupuesto de Allende, y que operaba al alero de la Academia de Humanismo Cristiano. Pese a ser en esencia un centro de investigación, el PET contaba con un sólido programa de extensión que asesoraba directamente a «organizaciones económicas

de los pobres». Además de hacer investigación en temas de pobreza y economía del trabajo, el PET había desarrollado la capacidad de comentar temas económicos generales, y desde 1983 había capacitado en materia económica a más de un centenar de líderes sindicales. Pero pese a ser un reservorio de análisis económico para la izquierda y de haber elaborado un conjunto de recomendaciones en materia de relaciones laborales, el PET no parece haber ejercido un rol de liderazgo en reformular la visión económica de la izquierda.

Otra institución, VECTOR, tuvo un papel más central. Pequeño centro de investigación creado en 1978 principalmente para dar al socialismo una instancia de discusión con la Democracia Cristiana, el fuerte de VECTOR era el diálogo y su principal énfasis estaba en la economía. Durante años presidió su directorio Ricardo Lagos, economista de la Universidad de Duke, ex profesor universitario que emergía como una de las principales voces de la izquierda y durante cuya gestión se potenció el rol de la organización como centro para el debate de políticas públicas. VECTOR hacía un taller económico mensual que reunía habitualmente a economistas y políticos socialistas y a algunos demócratacristianos, y publicaba, además, un informe económico mensual.

Pero quizás si la instancia de mayor relieve en el desarrollo de una nueva línea de izquierda en materia de economía fue la Comisión Económica del Partido Socialista renovado, formada a mediados de los 80 tras el resurgimiento del PS como fuerza cohesionada bajo una dirigencia moderada. La dirigió Carlos Ominami, ex militante del ultraizquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien durante el exilio se doctoró en economía en la Universidad de París. La Comisión sesionó periódicamente durante varios años y fue el eje central del debate económico en el seno de la izquierda.

Dominada por intelectuales formados en el extranjero, para formular sus recomendaciones la Comisión se apoyaba principalmente en materiales académicos. Uno de sus miembros, Manuel Marfán, recuerda que le llamó la atención el que a la Comisión llegara gran número de académicos que de otra forma no tenían contacto entre sí: «Fue muy curioso, porque en esas reuniones de la Comisión éramos todos doctorados en la Universidad de París, en Berkeley, Harvard, yo en Yale, otro en Sussex... Pese al hecho de que muchos de nosotros éramos menos militantes, más tecnócratas, menos políticos, de pronto estábamos ahí sentados, hablando con gente que no habíamos visto en

años... Nos empezábamos a juntar» (7 de enero de 1992). Ominami, quien sería ministro de economía en democracia, agrega que la relación entre los roles académicos y políticos era muy directa: «Yo había participado como intelectual en el debate económico, pero cuando se recompusieron los partidos, fui el primero a cargo de la Comisión Económica del Partido Socialista. Entonces lo que hice... fue tratar de armar la cosa en torno a las ideas básicas que provenían de mi trabajo puramente intelectual» (14 de enero de 1992).

El resultado fue una visión económica firmemente asentada en la teoría moderna y que difería radicalmente de las tradicionales posiciones de la izquierda chilena. Esta visión enfatizaba la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, aceptaba la validez del libre mercado y la propiedad privada, rechazaba un papel estatal fuerte en la producción y propugnaba la plena integración al sistema económico mundial. Pero no era una aceptación del modelo económico de los Chicago Boys. Según Ricardo Lagos, fue más bien «un profundo debate sobre el tipo de economía que nos llevaría a una sociedad más justa e igualitaria» (13 de marzo de 1991)⁶⁷. Y esto fue principalmente mérito de un grupo de intelectuales, la mayoría formados en el extranjero, que logró convencer a los políticos. Agrega Ominami: «Yo creo que hemos avanzado sustancialmente en convencer a un sector de la izquierda de que abrirse es progresista, que cuando los mecanismos de mercado funcionan son progresistas, más que el proteccionismo que practicábamos. Pero ha sido una batalla. Estas no son ideas que uno pueda decretar, de un día para otro, que van a ser las nuevas ideas de un partido político. Son ideas por las que hay que luchar, y por las que yo creo que todavía estamos luchando» (14 de enero de 1992).

Los diálogos económicos del CED

Otro actor fundamental en la construcción del consenso económico post-dictadura fue el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), responsable por lo que fue, con creces, la iniciativa de mayor alcance y

⁶⁷ El economista Humberto Vega afirma que la izquierda optó por el modelo del Banco Mundial por sobre el de los Chicago Boys. «Anne Krueger», dice, «no era lo mismo que Milton Friedman». Entrevista con Humberto Vega, 13 de enero de 1992.

trascendencia que haya impulsado la intelectualidad. En 1985 el CED encomendó a Edgardo Boeninger, hombre reconocido por su ecuanimidad política, la dirección de un taller con algunos de los más destacados economistas y figuras del ámbito de las políticas públicas de izquierda, centro y derecha. Participaron, entre otros, Fernando Léniz, ex ministro de hacienda de Pinochet; Sergio Bitar, ex ministro de minería de Allende; Carlos Ominami, economista proveniente del MIR y que luego sería ministro de economía de Aylwin, y Sergio Molina, ministro de hacienda de Frei Montalva y luego ministro de planificación de Aylwin. En el taller se debatieron documentos de trabajo⁶⁸ en que gente de todas las tendencias económicas abordaba temáticas específicas, entre ellas propiedad privada –tema tradicionalmente conflictivo en la política chilena–, distribución de la riqueza y mecanismos de planificación económica. Como extensión del taller, y con la idea de aclarar y morigerar diferencias, el CED organizó además seminarios sectoriales con líderes empresariales de distintos ámbitos.

Un resultado sorprendente, según Boeninger, fue que los participantes comprobaron que, al menos en materia económica, estaban mucho más cerca de lo que creían; de hecho, a más de uno el debate le cambió las ideas. Esta interacción «aceleró el proceso de convergencia y les cambió la forma de pensar a través de una reflexión continua y de referencias a la literatura internacional»⁶⁹. El economista de CIEPLAN Patricio Meller hace una evaluación igualmente positiva: «El CED hizo que los economistas de derecha se dieran cuenta de que podían hablar con los de izquierda y de que lo que estos proponían no era un disparate; también hizo que la izquierda viera que al otro lado había gente preocupada de problemas distributivos con la que se podía hablar. Fue muy importante, en un mundo tan polarizado como lo era Chile, que se juntara gente que estaba en bandos opuestos»⁷⁰. El notable nivel de consenso que surgió del taller –el primer intercambio sistemático de opiniones sobre política económica entre izquierda, centro y derecha

⁶⁸ Publicados después en un solo volumen. Véase Centro de Estudios del Desarrollo (CED), ed., *Orden económico y democracia* (Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo [CED], 1985).

⁶⁹ Castillo, *La fuerza del diálogo*, p. 55.

⁷⁰ Entrevista con Patricio Meller, 28 de enero de 1991.

en muchos años– fue una clara señal de que una vuelta a la democracia no tendría por qué retrotraer a Chile a los conflictos del pasado.

El programa propició, además, la articulación y visibilización de una nueva postura económica de centroderecha. En efecto, producto del taller, Felipe Larraín, respetado economista de la Universidad Católica, publicó en 1987 un libro sobre desarrollo económico en democracia en que, suscribiendo la mayoría de los elementos del modelo, criticaba su falta de solidaridad en materia de bienestar social, planteando además que el pleno restablecimiento de las libertades políticas era básico para el éxito del modelo⁷¹. El libro de Larraín se discutió profusamente en la prensa. Recibió fuertes críticas de la derecha dura, pero demostró que en la centroderecha podía haber una postura económica democrática.

Los talleres del CED fueron fundamentales para articular las distintas corrientes de pensamiento económico que surgían en el espectro político. Cuando el retorno a la democracia parecía posible pero subsistían serias dudas sobre si un Chile democrático sería capaz de coincidir en materia económica, el CED ayudó al mundo político a despejarlas. El CED jugó, además, un papel especialmente importante como facilitador del contacto entre oposición y derecha, «juntando a socialistas y demócratacristianos con aquellos que después fundarían Renovación Nacional, y luego con líderes empresariales» (Ffrench-Davis, 3 de febrero de 1992). Además, creó condiciones para un consenso democrático en materia económica. Dice Ominami: «Se empezó a evidenciar algo que hoy ha cristalizado en la sociedad chilena; es decir, la existencia de grandes puntos de convergencia entre derecha, centro e izquierda en materia económica. Hoy uno de los puntos importantes de la situación chilena es el alto grado de consenso sobre aspectos básicos de estrategia económica... Un antecedente importante fue todo lo que se hizo en el marco del trabajo que se llevó a cabo principalmente en el CED» (14 de enero de 1992).

⁷¹ Felipe Larraín B., ed., *Desarrollo económico en democracia: Propositiones para una sociedad libre y solidaria*, 2ª ed. (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1987).

De productores de conocimiento a articuladores

De las múltiples y muy variadas actividades que organizaron los centros académicos, surgieron los rudimentos de una visión común post-dictadura. La intelectualidad abrió un debate que luego se amplió a la clase política y continuó por años. Convocados a tratar materias específicas, los líderes opositores abordaron problemas, prioridades, diferencias y acuerdos, descubriendo puntos de encuentro en muchos ámbitos, si es que no en todos. Empezaron a convencerse de que, pese a sus diferencias históricas, podrían trabajar juntos en el desarrollo de políticas sociales y económicas viables.

De hecho, fue el mundo intelectual el originador de los acuerdos que constituyeron el programa opositor para las presidenciales de 1989. En palabras de Alejandro Foxley: «La *ideología* concertacionista, si se le puede llamar así, la elaboró en un largo proceso la intelectualidad de los centros de investigación. En ese sentido, la Concertación fue el triunfo ideológico –y la reivindicación– del valor de las ideas en un proceso político-histórico tan decisivo como el que Chile vivía... La Concertación fue la primera expresión de la política post-dictadura. Posteriormente, la política del régimen democrático ha estado fuertemente marcada por esa nueva forma de abordar los problemas que surgió principalmente del mundo intelectual» (14 de marzo de 1991).

Fue así que creció el perfil político de los intelectuales chilenos después de que las protestas empezaran a perder fuerza en 1984. A través de seminarios, entrevistas y publicaciones, como convocantes o asesores informales, lograron una mayor presencia política. Poco a poco empezaron a plantear temas políticos, y poco a poco la gente empezó a escuchar. Se convirtieron en articuladores entre el mundo de las ideas y los actores políticos. Un intelectual-político, Sergio Bitar, recuerda la inusitada relevancia política que la intelectualidad parecía tener a su retorno del exilio a mediados de los 80: «Me impactó esa gente sin vocación política, que no eran dirigentes y ni siquiera militantes de partido, pero que a través de su actividad intelectual, de sus propuestas estratégicas –estoy hablando de la FLACSO y otros– empezaba a tener un liderazgo político más marcado» (16 de enero de 1991).

El dirigente socialista Ricardo Núñez resalta el fuerte ascendiente de los centros académicos sobre el mundo político en ese período: «Fue más en torno a sectores vinculados a liderazgos [partidarios] formales

[pero] centrados en los centros académicos o de investigación –lugares para una reflexión más sistemática y profesional sobre asuntos políticos, sociales y económicos–, donde estuvo la mayor influencia en el proceso de desarrollar la lucha política en el país. De allí la fuerza de organizaciones como CIEPLAN, VECTOR, la FLACSO, la Academia de Humanismo Cristiano, etcétera. Por tanto, no fue coincidencia que, junto con la genuina incapacidad operativa de los partidos, surgiera una genuina capacidad operativa y una enorme capacidad de trabajo y reflexión en centros vinculados directamente o indirectamente, formal o informalmente, a las fuerzas políticas de oposición» (18 de marzo de 1991).

La modernización de la política: 1987-1988

Y en toda esta renovación de la política chilena –su carácter más pragmático, su evolución hacia una actividad política más accesible a la ciudadanía, el uso de la tecnología, el uso de las ciencias sociales– nada de eso habría sido posible si hubiesen predominado los políticos tradicionales. Esto fue solo posible a raíz de estos nuevos saberes, de estos nuevos conceptos que los intelectuales introdujeron en política.

– ENRIQUE CORREA, 8 de marzo de 1991

La estrategia que siguió la Campaña del No se basó en un diagnóstico de la sociedad chilena elaborado durante años por el mundo de las ciencias sociales. El triunfo de esta opción en el plebiscito mostró que su interpretación era correcta.

– EUGENIO TIRONI, *La invisible victoria*

Para las fuerzas opuestas al régimen militar, los dos años posteriores al hallazgo de armas en el norte y al atentado contra Pinochet empezaron en profunda depresión y terminaron en victoria. La oposición entró a este período dominada por el desánimo y el desconcierto: todos los intentos por defenestrar al régimen, pacíficos y no pacíficos, habían fracasado. El Acuerdo Nacional, su mecanismo de unificación, estaba en receso por discrepancias internas; se había reinstaurado el estado de sitio, la economía seguía creciendo y se aproximaba el oprobioso plebiscito al que había llamado el régimen. Nada hacía presagiar que dos años después estarían celebrando la derrota de Pinochet.

El año 1987 fue un momento de grandes cambios internos y pocos avances visibles. La oposición había finalmente abandonado sus intentos por derrotar al régimen a través de la protesta social, pero se negaba

a aceptar el plebiscito de Pinochet. Intentaba, en cambio, convencer al régimen de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas y competitivas en lugar de un plebiscito, y seguía dividida y teniendo ásperas discusiones sobre la estrategia de transición.

El régimen militar, en tanto, seguía avanzando en el cumplimiento del cronograma establecido en la Constitución del 80. Adoptó una por una las medidas necesarias para preparar el plebiscito, en especial las llamadas «leyes políticas» sobre inscripción de votantes, recomposición de partidos y mecanismos electorales, y fijó el método para escoger a su candidato. Rechazó resueltamente todos los llamados de la oposición a modificar el escenario de transición y declaró reiteradamente que se respetaría la Constitución y el proceso de transición allí previsto.

Se estaban produciendo simultáneamente varios procesos decisivos. En la oposición la estrategia de transición había empezado a evolucionar, pero se mantenía aún sin grandes cambios. Los planes de transición del régimen no habían cambiado en absoluto, pero estaban generando una dinámica que se empezaba a escapar del control de Pinochet. Venía el plebiscito y la oposición debía decidir cómo enfrentar la inminente transición.

Sin embargo, el marco institucional había cambiado y la acción había vuelto de los centros de investigación al ámbito político. A los políticos con trayectoria académica que dependieron por años de los centros para su discurso e incluso su sustento, se les abrían nuevas oportunidades, en tanto que los intelectuales con vocación política se movilizaban para impulsar la transición democrática. El análisis académico abría paso al político y el eje se trasladaba a los problemas inmediatos que planteaba la coyuntura. La intelectualidad seguía apoyándose en su formación académica, pero la empezaba a aplicar en actividades muy distintas a las tradicionalmente asociadas con la academia.

Fue en este período en que el mundo intelectual alcanzó su máximo grado de expansión hacia el medio político, y de hecho, varios emigraron del primero al segundo. Otros operaban al límite de su rol académico, formulando la estrategia de transición, vendiéndosela a los líderes políticos, e incluso vigilando su correcta implementación. Su impacto en la política pasó a ser deliberado y directo: la intelectualidad le mostró a la oposición cómo utilizar las reglas del propio Pinochet para derrotarlo, modernizó la política y elaboró la campaña que llevó

al triunfo en el plebiscito. El esfuerzo y la lucha de varias décadas se conjugaron para permitir la derrota de la dictadura. Durante un breve período, la intelectualidad influiría directa y fundamentalmente en los acontecimientos políticos. Su papel más importante en la política chilena lo jugaría en 1987 y 1988.

La nueva propuesta de transición

Hacia fines de 1986, la oposición tenía claro que los intentos por estructurar una transición a la democracia no estaban dando resultados. Durante casi cuatro años se había negado a aceptar el mecanismo previsto en la Constitución, apelando a la movilización social para obligar al régimen a entregar el poder cuanto antes. Pero pese a haber tenido a su favor el peor momento económico desde la Gran Depresión de 1929, no había logrado generar suficiente descontento como para deponer al régimen. La amplia y sostenida ola de protesta ciudadana que necesitaba para obligar a Pinochet a cambiar su itinerario no se había materializado, desacreditando gradualmente la estrategia de movilización social (solo el Partido Comunista se aferró a ella, hasta entrado el año 1988). La oposición se fue dando cuenta de que la única forma de desalojar al régimen sería a través de un proceso político. Y dado que el único proceso político en curso era el fijado por el régimen, empezó a tomarse en serio a la Constitución de 1980¹.

La oposición, sin embargo, seguía renuente a participar en el plebiscito. Fresco aún en la memoria el recuerdo del antidemocrático referéndum en que se había aprobado la Constitución, daba por hecho que no habría diferencia y que el plebiscito no era más que un ardid para legitimar al régimen por ocho años más. Participar, por ende, era no solo inútil, sino que equivalía a avalar la continuación de Pinochet en el poder. La movilización social como estrategia iba de salida, pero el plebiscito aún no hacía su entrada.

Efectivamente, a fines de 1986 seguía habiendo muchas razones para estar pesimista. No existían condiciones básicas para una votación limpia: los partidos seguían fuera de la ley y no habían disposiciones

¹ Al respecto, véase Garretón, «La oposición política partidaria», p. 426; y «Political Opposition and the Party System», pp. 226-227.

que normaran la inscripción en el registro electoral, el procedimiento de votación o la fiscalización del proceso electoral. La oposición no tenía garantías en cuanto a libertad de expresión, especialmente acceso a la televisión, sin lo cual no podría hacer campaña. Pero, incluso, si estas condiciones se cumplían, la oposición daba por descontado que los dados estarían cargados en su contra. Recuerda el dirigente socialista Jaime Gazmuri: «Nunca pensamos que las fuerzas armadas fueran a estar dispuestas a perder una elección» (7 de marzo de 1991).

Así las cosas, la oposición decidió llamar a elecciones libres, estrategia que optaba por el proceso electoral por sobre la protesta callejera, pero sin llegar a suscribir el plebiscito². Así, en enero de 1987 los demócratacristianos Edgardo Boeninger y Gabriel Valdés Subercaseaux, junto con Germán Correa, dirigente del Movimiento Democrático Popular, hicieron un llamado conjunto a elecciones libres. En marzo se dio formal inicio a una amplia campaña orientada a convencer al régimen de modificar la Constitución, sustituyendo el plebiscito por elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas. Hacia junio ya estaban en funciones comités partidarios encargados de promover la idea. En agosto, tras reemplazar a Gabriel Valdés en la presidencia de la Democracia Cristiana, se sumó al llamado Patricio Aylwin.

Para la oposición se trató de un giro sustantivo que suponía una aceptación tácita de la Constitución de 1980 y no exigía la entrega del poder a un gobierno provisional previo al acto eleccionario. La estrategia comprendía, además, un llamado a la ciudadanía a inscribirse en los registros electorales, con lo que validaba el proceso de inscripción de votantes establecido por el régimen a principios de 1987. Más aún, el primer Comité por las Elecciones Libres (CEL), compuesto por catorce destacadas figuras de oposición, se atribuyó el mandato de fiscalizar el proceso de inscripción y se comprometió a establecer un mecanismo independiente de vigilancia de procesos electorales, entre

² Como otras iniciativas de la oposición, esta se basó en parte en la experiencia de otros países. Recuerda un dirigente socialista: «Al principio imitábamos un poco a los brasileños en su lucha por las elecciones libres» (Enrique Correa, 8 de marzo de 1991). Agrega un líder demócratacristiano: «El fracaso de Marcos y el triunfo de la fórmula de la no violencia que adoptaron monjas, sacerdotes ...todos... fueron muy decisivos. Varias personas... viajaron allá y trajeron la idea de las elecciones libres como forma de organizar la lucha» (Gabriel Valdés, 1 de marzo de 1991).

ellos el plebiscito³. Recuerda Sergio Molina, coordinador del CEL: «Nosotros calculamos que un ingrediente fundamental era contar con una organización capaz de enfrentar lo que pudiese venir en términos de plebiscito, elecciones o alguna otra estructura, incluso aunque no fuera lo que a nosotros nos hubiese gustado» (13 de marzo de 1991). Gran parte de la oposición coincidió con esa inquietud, de modo que la campaña rápidamente adquirió un importante subtexto: obtener garantías de que el plebiscito, de hacerse, fuera limpio.

Hay quienes dicen que la campaña por las elecciones libres fue más maniobra que objetivo real, y que lo que la oposición buscaba era no comprometerse al plebiscito hasta no contar con condiciones mínimamente aceptables. «La consigna fue elecciones libres», recuerda un dirigente opositor, «pero nunca a nadie le cupo en la cabeza que fuera viable» (Vodanovic, 15 de marzo de 1991). Agrega otro: «El movimiento por las elecciones libres fue importante como forma de presión para emparejar medianamente la cancha» (Boeninger, 29 de enero de 1991). Es decir, la campaña por las elecciones libres intentó no solo modificar el proceso constitucional, sino también reposicionar a la oposición en caso de que el plebiscito fuera imparabile⁴.

La estrategia, sin embargo, «no podía ser sino un paso para otras fórmulas»⁵. Seguía teniendo carácter rupturista, en tanto pretendía alterar el mecanismo y cronograma de transición a un gobierno civil. El régimen, convencido de no tener necesidad alguna de cambiar de planes, invariablemente rechazaba tales propuestas. La oposición, en tanto, tenía serias dificultades para dar credibilidad a su estrategia. Quizás mirando hacia las parlamentarias que debían seguir al plebiscito, los partidos se mostraban renuentes a unirse, prefiriendo conformar cada uno su propio comité por las elecciones libres. El de centro fue encabezado por Gabriel Valdés, presidente de la Democracia Cristiana (sucedido por Patricio Aylwin en agosto de 1987), en tanto Ricardo Lagos dirigió el del socialismo moderado. Los partidos seguían,

³ Parte de la importancia del CEL radicó en convocar a connotadas figuras de la derecha tales como Óscar Godoy, profesor de ciencias políticas de la Universidad Católica.

⁴ En rigor, y dado que la Constitución disponía la realización de presidenciales y parlamentarias abiertas si la mayoría votaba No, hacerlo era votar por elecciones libres. Así lo expresó públicamente Ricardo Lagos en entrevista realizada en septiembre de 1987. Véase *La Época*, 11 de septiembre de 1987.

⁵ Garretón, «Political Opposition and the Party System», p. 226.

además, sin llegar a acuerdo sobre unirse en torno a un candidato y programa únicos ante una eventual elección. Lagos propuso formar el «Partido por la Democracia», agrupación instrumental cuyo único rol sería unir coyunturalmente a la oposición, idea que fue rechazada por una Democracia Cristiana más preocupada de mantener su imagen como partido.

El resultado fue una obstinada y pertinaz disputa que se asemejaba mucho al caos vaticinado por Pinochet si no se respetaba a cabalidad la transición hacia la democracia protegida prevista por el régimen. Las rencillas personales e ideológicas que durante años habían dividido a la oposición seguían siendo una fuerza gravitante que permeaba el debate sobre la selección, en caso de elecciones, de candidato y programa únicos. Las diferencias también llevaron a los partidos a considerar, en la discusión sobre la unidad contra Pinochet, las implicancias de las elecciones parlamentarias que vendrían tras el plebiscito, ganara quien ganara. La posibilidad de recuperar el poder político, por pequeña que fuera, retrotrajo a la oposición al sectarismo de antaño⁶.

El desorden fue tal que generó llamados a la unidad desde la base. En julio, once juventudes de partido exigieron a las dirigencias «juntarse a dialogar». El Movimiento Mujeres por la Vida, donde convergían todos los sectores de la oposición, llamó a una cumbre de partidos para elaborar una propuesta común para poner fin a la dictadura. Las revistas criticaban la «incapacidad de la oposición de conversar y ponerse de acuerdo»⁷. En diciembre, uno de los principales organismos de derechos humanos envió a la dirigencia opositora una carta amenazando con una huelga de hambre si no se unían⁸. Comentando los eventos de fines de 1987, anotaban dos experimentados observadores: «En lugar de actuar como líderes y de unirse para sacar a Pinochet, sus oponentes siguen entrampados en viejas querellas y demasiado preocupados de perder votos como para aliarse con quienes podrían ser sus posibles contendores en un país post-dictadura. Chile corre el

⁶ El potencial disgregador del tema de las elecciones libres fue tal que varios analistas estiman que, de haberse realizado, Pinochet las habría ganado fácilmente. En este análisis, los partidos mayores no habrían podido resistir el impulso de llevar cada uno su propio candidato presidencial.

⁷ *APSI 210* (1987), p. 4; y *Análisis* 185 (1987), p. 20.

⁸ Senén Conejeros, *Chile: De la dictadura a la democracia* (Santiago de Chile: Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT, 1990), p. 15.

riesgo de reinstalar la polarización que llevó al derrumbe del gobierno de Allende»⁹.

Los preparativos para el plebiscito, en tanto, seguían avanzando. En octubre de 1986 se promulgó una Ley de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral que disponía la maquinaria necesaria para la inscripción de votantes y la realización de elecciones. La inscripción se abrió el 25 de febrero de 1987 y el primero en inscribirse fue el presidente Pinochet. Dos semanas más tarde se dictó una Ley de Partidos Políticos que permitía la organización y funcionamiento de partidos no marxistas. El 19 de abril se promulgó la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios que reglaba el proceso electoral y la participación de apoderados de los partidos legalmente inscritos. Durante todo este período, el régimen siguió reiterando que la transición continuaría avanzando hasta llegar al plebiscito y que no haría modificaciones al sistema previsto en la Constitución¹⁰.

Las medidas que sistemáticamente adoptó el régimen para instalar reglas plebiscitarias claras y relativamente democráticas tomaron por sorpresa a buena parte de la oposición. Las votaciones anteriores (el plebiscito constitucional de 1980 y la «consulta» de 1978) habían estado marcadas por una dudosa legalidad y una total falta de probidad. Dado que el régimen era tristemente célebre por violar de forma grosera los derechos humanos y las normas del juego democrático, la oposición

⁹ Arturo Valenzuela y Pamela Constable, «Plebiscite in Chile: End of the Pinochet Era?», *Current History* 87 (1988): p. 32. Una evaluación del Grupo Sawyer/Miller hecha en enero de 1988 decía: «Si se nos preguntara hoy, en base a nuestra investigación, si acaso la oposición podría participar en el plebiscito en su actual estado de preparación, nuestra respuesta tendría que ser no. No están listos; no están organizados; no están unidos; no tienen un mensaje único; no tienen una estrategia única... Lo que muestra la evidencia es que la oposición democrática en Chile está siendo superada por un general de 72 años de edad». Grupo Sawyer/Miller, «Chile: Year of the Plebiscite» (1988, roneo), pp. 2-3.

¹⁰ El plebiscito constitucional de 1980 no utilizó el padrón electoral, destruido en julio de 1974. Americas Watch, en *Chile: Human Rights and the Plebiscite* (New York: Americas Watch Committee, 1988), aborda en detalle la mayoría de las «leyes políticas» promulgadas en el período. Véase también National Democratic Institute for International Affairs, *Chile's Transition to Democracy: The 1988 Presidential Plebiscite* (Washington, D.C.: National Democratic Institute, 1988). La Ley de Votaciones y Escrutinios luego se enmendó para permitir a grupos independientes designar observadores, sujeto a la presentación de 20.000 firmas ante el Servicio Electoral con cinco días de antelación al plebiscito.

daba por descontado que de una forma u otra iba a desnaturalizar el proceso para hacerse con la victoria. Como decía Gazmuri, nadie esperaba que las fuerzas armadas fueran a permitir un triunfo opositor.

Esta vez, sin embargo, operó una conjunción de factores que generaron condiciones diferentes¹¹. Las pretensiones de legitimidad del régimen se fundaban en la Constitución creada en 1980, la que estipulaba el plebiscito como parte de un proceso de transición mayor. Las fuerzas armadas habían reafirmado reiteradamente su compromiso con esa Constitución; habitualmente se escudaban en ella para justificar su rechazo a las demandas opositoras, y no cambiarían de opinión. Violar la Constitución arriesgaba deslegitimar al propio régimen.

El régimen, por su parte, anhelaba que la participación opositora fuese voluntaria. Un boicot por falta de garantías habría entorpecido la gobernabilidad hasta las elecciones de 1997. El régimen confiaba además en ganar, atendidos los plebiscitos anteriores, sus recursos institucionales, el dinamismo de la economía y la persistente división opositora. Así, no solo estuvo dispuesto a ceñirse a la Constitución, sino además a conceder demandas que legalmente podría haber denegado. Así, de forma unilateral postergó el plebiscito hasta que se inscribiera un cierto número de votantes, levantó todos los estados de emergencia por primera vez en quince años, puso fin al exilio y concedió a la oposición un acceso mínimo a la televisión¹². Lo central era que el plebiscito que renovara su mandato fuese manifiestamente legítimo.

¹¹ Muchos de los aspectos aquí abordados se inspiran en el informe de la comisión observadora de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Véase Latin American Studies Association, «The Chilean Plebiscite: A First Step toward Redemocratization» (1989, roneo).

¹² Sobre estas materias, no parecen haber existido negociaciones directas entre régimen y oposición. Según Boeninger, «no hubo negociación con las fuerzas armadas. Hubo presión, hubo un escenario que se desarrolló, medidas que se adoptaron, pero no nos sentamos a acordar explícitamente las reglas del juego» (29 de enero de 1991). Esto parece contradecir lo que afirma Cavarozzi en el sentido de que en la transición chilena la apertura y limpieza del plebiscito habrían sido acordadas por las élites oficialistas y opositoras. Véase Cavarozzi, «Patterns of Elite Negotiation», p. 224. Las motivaciones del régimen no están claras y existe poca información fidedigna sobre los debates internos de la Junta Militar. En informes de prensa se habla de diferencias sobre varios de estos temas y se apunta a los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea (general Fernando Matthei) y de Carabineros (general Rodolfo Stange) como partidarios de conceder mayores garantías democráticas.

Otro de los temas era la imagen exterior. El mundo iba a estar pendiente del plebiscito, al que llegarían miles de periodistas y observadores extranjeros. Tras quince años de aislamiento, el régimen ansiaba limpiar su imagen y estaba plenamente consciente, como observaba un informe de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, de que las elecciones fraudulentas habían desestabilizado regímenes autoritarios en Filipinas y otros países¹³. Un plebiscito fraudulento arriesgaría de múltiples maneras casi diez años de esfuerzos por lograr algún nivel de legitimación política.

Mientras tanto, la Constitución de 1980 empezaba a adquirir una dinámica propia. Pese a sus muchos aspectos antidemocráticos, el estado de derecho que estableció empezó a cumplir un papel autónomo en la transición, imponiendo condiciones que el régimen no había contemplado. El plebiscito mismo parece haber sido una fórmula de compromiso, acordada en 1980 durante la redacción de la Constitución, entre la propuesta del Consejo de Estado de una transición de cinco años con elecciones presidenciales y parlamentarias en 1986, y la transición de dieciséis años que posteriormente propuso la Junta. Según se dice, Pinochet zanjó este debate proponiendo un plebiscito ratificatorio al octavo año de transición. Si el resultado era positivo, el régimen se mantendría por ocho años más, acompañado por un Congreso en su mayoría designado y con facultades limitadas. De lo contrario habría transición plena un año después, con presidenciales y parlamentarias abiertas. Esta concesión, que con toda seguridad Pinochet no habría hecho de no haber sido por la presión de sus partidarios civiles, sería finalmente decisiva¹⁴.

Es más, al parecer la Junta nunca tuvo la intención de que el plebiscito se realizara bajo las normas y garantías electorales de la Constitución. Estas disposiciones, según un artículo transitorio, debían entrar en vigencia para las elecciones parlamentarias a realizar después del plebiscito, pero el Tribunal Constitucional opinó de otra forma. En septiembre de 1985 el Tribunal, compuesto por juristas adictos al régimen pero que no estaban bajo su control directo, falló 4-3 que el plebiscito debía estarse a la normativa electoral de la Constitución del 80¹⁵.

¹³ Véase Asociación de Estudios Latinoamericanos, «The Chilean Plebiscite», p. 3.

¹⁴ Véase Cavallo, Salazar y Sepúlveda, *La historia oculta del régimen militar*, pp. 310-332; y Ascanio Cavallo, *Los hombres de la transición*, pp. 15-16.

¹⁵ Véase Cavallo, Salazar y Sepúlveda, *La historia oculta del régimen militar*, pp. 554-557.

El fallo, adoptado con la oposición de Hugo Rosende, ministro de justicia de Pinochet, traería grandes consecuencias. En efecto, supeditó el plebiscito a la norma constitucional en lugar del capricho de la Junta e implicó que el Tribunal Calificador de Elecciones dispuesto en la Constitución debía estar en funciones para el plebiscito. Significó también que habría que legalizar a los partidos políticos, abrir los registros electorales (solo los inscritos podían votar) y crear el Servicio Electoral. Además, se permitía a los partidos inscritos designar apoderados, dificultando el fraude electoral. Las restricciones arbitrarias al proceso plebiscitario se redujeron considerablemente y se les reemplazó por garantías constitucionales. El resultado fue un escenario muy distinto al originalmente previsto por el gobierno militar¹⁶. El sistema establecido por Pinochet para legitimar su régimen comenzaba a escapársele de las manos¹⁷.

Tanto los preparativos del gobierno como las deliberaciones de la oposición empezaron finalmente a cristalizar hacia fines de 1987. El régimen había dejado en claro que el plebiscito se realizaría conforme a lo previsto, y con al menos algunas garantías. La oposición llamaba a los votantes a inscribirse en los registros electorales y avanzaba en el debate sobre fórmulas de unidad. El Partido Humanista y la Democracia Cristiana iniciaron el trámite de legalización conforme a la ley de partidos políticos, y unos cuantos dirigentes empezaron a tantear públicamente la idea de participar en el plebiscito. La demanda por elecciones libres iba gradualmente cediendo terreno ante la realidad de un régimen resuelto a concretar el escenario dispuesto en la Constitución.

En diciembre, Ricardo Lagos y un grupo de socialistas moderados fundaron el Partido por la Democracia (PPD) como instrumento para enfrentar al régimen en actos eleccionarios. En enero, el presidente de la DC Patricio Aylwin anunció que su partido había decidido participar en el plebiscito y que estaba dispuesto a colaborar con todos los sectores, incluso la izquierda ortodoxa, que estuvieran por votar «No

¹⁶ El Tribunal Constitucional seguiría conduciéndose con cierta independencia de la Junta Militar. En agosto de 1987, por ejemplo, encontró veinticuatro inconstitucionalidades a un proyecto de ley sobre partidos políticos, obligando al régimen a eliminar diversas restricciones. Véase *ibíd.*

¹⁷ La ironía de estos acontecimientos llevó a un periodista a titular su libro *El plebiscito de Pinochet: (Cazado) en su propia trampa*. Véase Abraham Santibáñez (Santiago: Editorial Atena, 1988).

a Pinochet». A principios de febrero la mayoría de los partidos opositores suscribieron un llamado a votar No «para derrotar a Pinochet y su régimen». Después de cinco años de vanos esfuerzos por obligar al régimen a adelantar el calendario de transición, la oposición finalmente tiró la esponja y aceptó. La campaña por las elecciones libres se convirtió en la campaña del No y nació la Concertación, alianza que más tarde se ampliaría a dieciséis partidos y que ocho meses después derrotaría a Pinochet con más del 54% del voto popular.

El rol de la intelectualidad: la modernización de la política

Fue en este período que el impacto de la intelectualidad alcanzó su máxima expresión. La relación simbiótica desarrollada con el mundo político a raíz de la represión le dio un extraordinario nivel de acceso y credibilidad en el proceso de definiciones políticas. La oposición se caracterizó, quizás como nunca antes en la historia del país, por una clase política con un pie en la academia y un mundo intelectual con un pie en la política. Fue, en términos hirschmanianos, un momento cúlmine de «cruce de fronteras»¹⁸.

Estos cruces e interdependencias crearon un cuadro de gran complejidad en que el mundo intelectual empezó a accionar en política a más niveles que antes. Académicos como Ricardo Lagos y Jorge Arrate devinieron en dirigentes políticos; otros, como Alejandro Foxley, Edgardo Boeninger y Carlos Ominami, iniciaban igual proceso. Otros más, como Ángel Flisfisch, Carlos Huneeus, José Joaquín Brunner y Manuel Antonio Garretón, se mantenían en la academia, pero eran importantes voces políticas en los medios informativos o en los debates partidarios internos. Un pequeño grupo, en especial Juan Gabriel Valdés, Eugenio Tironi, Javier Martínez y Carlos Vergara, volcó su capacidad académica a la modernización de las técnicas de campaña.

De hecho, la modernización de la política fue la impronta de la influencia intelectual en este período. Operando a partir de capacidades y conocimientos adquiridos en la academia y apoyándose en su alto grado de credibilidad, la intelectualidad sistemáticamente introdujo en

¹⁸ Albert Hirschman, *Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).

la política métodos modernos de campaña. Así, la intelectualización de la política producida a fines de los años 70 condujo a mediados de los 80, en palabras de Edgardo Boeninger, «a la modernización de la política» (29 de enero de 1991)¹⁹.

Este concepto –la introducción de la política moderna por parte de la intelectualidad– se escuchó reiteradamente en las entrevistas. En general, consistió en reemplazar ideología por pragmatismo e intuición por ciencia. Alejandro Foxley, por ejemplo, se refirió a la aparición de una «política moderna» que «es menos ideológica, más flexible, entiende mejor el mundo moderno y es por tanto más adaptable, más inclinada al acuerdo, valora más la economía y los equilibrios macroeconómicos, etcétera» (14 de marzo de 1991). Ricardo Lagos estimó que la intelectualidad «introdujo elementos de razón» en la política. En concreto, esto generalmente significó importar nuevas técnicas políticas desde el extranjero. Sigue Lagos: «Fueron los intelectuales los primeros en usar técnicas de encuestaje, fueron los intelectuales los primeros en usar técnicas de imagen, fueron los intelectuales los que hicieron análisis de contenidos, fueron los intelectuales los que convencieron a los políticos de la importancia de las entrevistas colectivas focalizadas... Había todas estas técnicas modernas que los intelectuales usaban a diario y que los políticos solo después se dieron cuenta de que eran importantes» (14 de marzo de 1991). El mundo intelectual empezaba a convencer a la clase política de que había que abandonar las formas caducas de hacer política y adoptar otras nuevas²⁰.

Uno de los primeros grandes aportes que la intelectualidad hizo en 1987 fue lograr que la clase política percibiera que existían condiciones para derrotar el régimen en el plebiscito y que la gente en general se mostraba abierta a esta estrategia²¹. Los líderes opositores habían empezado el año desalentados por no haber podido deponer al régimen a través de la movilización social y muy pesimistas en cuanto

¹⁹ Boeninger expresa algo similar en Castillo, *La fuerza del diálogo*, pp. 62-63.

²⁰ Tironi profundiza sobre la modernización de la política chilena en CIS (CED-ILET-SUR), *La Campaña del No vista por sus creadores* (Santiago: Ediciones Melquiádes, 1989), pp. 3-4.

²¹ No hay mucho escrito sobre el papel de la intelectualidad de oposición en este período. La excepción la constituye el perfil de Patricio Aylwin que hace Cavallo, en que menciona el influjo de los científicos sociales en su pensamiento. Véase Cavallo, *Los hombres de la transición*, pp. 46-47.

a las posibilidades de ganar una votación efectuada en el marco de los mecanismos de transición del régimen. No veían alternativa real a seguir oponiéndose pero tampoco tenían grandes expectativas de ganar, lo que condicionó el debate serio sobre participación en el plebiscito. El acento estuvo más bien puesto en seguir exigiendo elecciones libres para alterar los planes del régimen y en definir si, de lograrlo, debían unirse tras un candidato y programa único.

Pero el régimen seguía preparando el plebiscito, y sus preparativos obligaban a la oposición a definirse. Había que decidir si llamar a inscribirse en los registros electorales para estar en condiciones de afrontar un escenario electoral, cualquiera que este fuera. Los partidos, por su parte, debían decidir si legalizarse bajo las leyes políticas dictadas por el régimen y recuperar el derecho a hacer actividad política normal. Y en caso de que fracasara el llamado a elecciones libres, había que decidir si prepararse para participar en el plebiscito. En cada caso, optar por la afirmativa tenía ventajas, pero también entrañaba el riesgo de legitimar un escenario de transición con graves vicios de parcialidad.

En la oposición, este proceso se vio entorpecido por la falta de acceso a las bases que decían representar. Los partidos seguían fuera de la ley y seguían prohibidas las actividades partidarias normales. Desde 1973 a la fecha, habían sido contadas las elecciones de cualquier tipo que se habían podido hacer²². Organizar reuniones y asambleas era un peligro. La prensa seguía sujeta a fuertes restricciones y los mecanismos que normalmente conectan a los dirigentes con las bases habían dejado de funcionar hacía quince años. Describe la situación Carlos Vergara, sociólogo de SUR: «Todo el tejido social y político que conectaba a los partidos con su base social había sido bombardeado... Durante años había sido difícil realizar cualquier actividad política y más aún operar como antes, porque no estaba la gente, no existían las estructuras y había enormes problemas de infraestructura y recursos. La dirigencia política se fue distanciando de la mayoría de los ciudadanos en un momento en que en la sociedad chilena se producían profundas

²² La elección de Gabriel Valdés Subercaseaux como presidente del PDC tras la muerte de Eduardo Frei en 1982, por ejemplo, se realizó de forma clandestina. Según Cavallo, *ibíd.*, p. 192, solo votaron 124 militantes.

transformaciones»²³. Sin información fidedigna sobre el real sentir de la gente, al debate estratégico la mayoría de la clase política solo podía aportar intuición e ideología.

En este contexto de pesimismo e incertidumbre, el mundo intelectual, según recuerda un político, aportó «justificación y racionalidad» a las decisiones de la oposición (Gazmuri, 7 de marzo de 1991). Además, informó el debate con la experiencia de otros países; por ejemplo, que la transición uruguaya se había hecho en base a un plebiscito, que la oposición en Filipinas había triunfado con menos garantías de las que se podían esperar en Chile, y que en España la oposición había tenido que morigerar sensiblemente sus demandas. También analizó los preparativos del régimen y estimó su impacto en las posibilidades de la oposición; estudió el carácter de la gobernabilidad democrática, haciendo notar que esta se basa en el consenso y la transacción, y demostró, con rigurosos estudios de actitudes políticas, que la mayoría del electorado prefería el plebiscito a una campaña por elecciones libres.

Sergio Molina, jefe de la campaña por las elecciones libres, describe el rol de la intelectualidad en este período: «La dictación de las leyes políticas generó un fuerte debate interno en que el mundo intelectual logró convencer a los partidos de aceptar el marco impuesto por la dictadura pese a quedar en desventaja, porque nos daba visibilidad, voz, organización. Eso para los partidos fue muy difícil de aceptar, y al principio hubo mucha resistencia... En eso el mundo intelectual marcó mucho a los partidos» (13 de marzo de 1991).

Agrega Brunner: «los intelectuales tuvieron un papel muy importante, mostrando que este era el mejor camino, que era el único viable, que era un camino moralmente aceptable, que era un camino que llevaría a la victoria; aportando antecedentes históricos que mostraban, por ejemplo, que ciertos tipos de transiciones empiezan solo cuando la oposición está dispuesta a jugar el juego, a bailar con la dictadura; ...y trayendo a intelectuales y políticos españoles que decían lo mismo... En ese preciso momento su papel fue muy importante en cuanto a la cuestión fundamental de inscribirse o no, de aceptar la Constitución o no, de participar en el plebiscito o no» (28 de febrero de 1991).

²³ Entrevista con Carlos Vergara, 28 de enero de 1991. Otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha.

Así, el conjunto de decisiones que la dirigencia opositora adoptó a partir de marzo de 1987 y que culminó en febrero de 1988 con el advenimiento de la Concertación, la alianza que disputaría el plebiscito, se basó no en una capitulación ante el inexorable cronograma impuesto por el régimen, sino en un cálculo cuidadoso. La oposición entró al plebiscito de manera proactiva, con una lógica clara, objetivos factibles y una sólida estrategia. La perspectiva de enfrentar a Pinochet en el plebiscito, en lugar de amilanarla, la dinamizó. Esto, según Núñez, se debió en gran parte a la extensa interrelación entre políticos e intelectuales: «Detrás del llamado a inscribirse, detrás del llamado a votar, hubo reflexión; no solo intuición política, no solo una alternativa escogida porque no quedaba otra, sino que detrás hubo una reflexión sobre el tipo de democracia que queríamos construir, con la idea de que estábamos en una etapa del proceso sociopolítico chileno y en un mundo en que el consenso primaba sobre el disenso, en que los acuerdos primaban sobre los desacuerdos, en que los actores sociales debían buscar forma de unirse tras esfuerzos y objetivos comunes en lugar de provocar grandes rupturas... Durante unos diez años hubo un interesante entrecruce creativo» (18 de marzo de 1991).

CERC y FLACSO, precursores de las nuevas técnicas

La primera clara manifestación de la nueva política fue la aparición entre 1986 y 1988 de las encuestas y entrevistas colectivas focalizadas como herramientas de la competencia política. Estos instrumentos surgieron enteramente a iniciativa de la intelectualidad de los centros académicos de Santiago y no respondían a una demanda del mundo político. Todo había empezado en 1984, luego de que investigadores del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) consiguieran financiamiento en el extranjero para hacer estudios prospectivos con fines únicamente académicos²⁴. Hacia fines de 1988, estos centros habían cambiado la forma de hacer política en Chile.

²⁴ Guillermo Sunkel, en «Las encuestas de opinión pública: Entre el saber y el poder», *Documento de Trabajo N° 439* (Santiago: FLACSO-Chile, 1989), y en «Usos políticos de las encuestas de opinión pública», *Documento de Trabajo N° 18 – Serie Educación y*

Los sondeos de opinión política tenían una sólida base histórica y académica que se remontaba a los años 60 y al establecimiento en Chile de la «sociología científica», disciplina que abrió las puertas a trabajos de investigación de gran calidad. De hecho, los programas académicos de la FLACSO y de las universidades de Chile y Católica pusieron desde sus inicios un fuerte acento en la sociología empírica. El precursor había sido Eduardo Hamuy, quien en 1958 hizo en la Universidad de Chile los primeros estudios sistemáticos de opinión política, pronosticando con notable acierto el resultado de las elecciones presidenciales de 1958, 1964 y 1970²⁵.

Sin embargo, los sondeos de Hamuy no habían formado parte del arsenal de herramientas utilizadas por los partidos para definir sus estrategias, y después de 1973, las prohibiciones del régimen y el efecto inhibitorio del miedo generalizado hicieron prácticamente imposible seguirlos haciendo. Durante la primera década del régimen militar, solo hubo empresas privadas haciendo uno que otro estudio de mercado. Aunque el propio gobierno periódicamente encargaba a Gallup de Chile encuestas –de discutible calidad– sobre su índice de aprobación, rara vez difundía los resultados.

Estas condiciones cambiaron con la libertad política que abrieron las protestas de 1983 y que hizo posible volver a realizar sondeos de opinión pública. El primer estudio lo hizo ese año Diagnos, empresa que había nacido como estrategia de sobrevivencia económica de cinco científicos sociales. Diagnos describía su quehacer como «periodismo sociológico» que intentaba indagar lo que había ocurrido en el país después de tantos años de dictadura. Diagnos encuestaba a jóvenes, mujeres y otros grupos específicos sobre temas de salud, cultura, economía, religión y tipos de gobierno, casi siempre por encargo de radios o revistas²⁶. Pese a que sus fundadores tenían formación académica, Diagnos no abordaba temas de corte académico o teórico. Fue, sin

Cultura (Santiago: FLACSO, 1992), traza en detalle la aparición, entre 1983 y 1988, de la encuesta de opinión pública como instrumento político de los partidos de oposición chilenos. Gran parte de esta sección se basa en el análisis de Sunkel.

²⁵ Sunkel señala que entre 1957 y 1973 Hamuy realizó cuarenta y cinco sondeos de actitud política. Véase Sunkel, «Las encuestas de opinión pública», p. 20.

²⁶ Diagnos lo conformaban cuatro sociólogos y un psicólogo. Véase *ibíd.*, pp. 6-7. Diagnos realizaba, entre otras, las encuestas de Radio Cooperativa que se mencionan en el capítulo anterior.

embargo, una de las primeras en demostrar que, pese al autoritarismo reinante, se podían hacer sondeos fidedignos sobre temas que fueran más allá de los estrechos límites del tradicional estudio de mercado.

Pronto surgieron iniciativas más directamente académicas. Uno de los precursores fue el CERC, centro de investigación que operaba al alero de la Academia de Humanismo Cristiano. Las conclusiones de un seminario sobre transición democrática realizado en 1984 motivaron al CERC a organizar, con la colaboración de Enrique Baloyra, científico político de la Universidad de Miami, un taller sobre la posibilidad de hacer estudios de opinión pública en Chile. Este taller derivó en un pequeño estudio de actitudes hacia la transición democrática y en otro taller para discutir los resultados que se realizó en 1985.

El segundo taller convocó a diversos expertos extranjeros en transición democrática, entre ellos a Juan Linz, de la Universidad de Yale, autor de importantes encuestas y estudios sobre la transición española. Este taller, a su vez, dio pábulo a una breve encuesta sobre actitudes políticas en universitarios, realizada a fines de 1985 con la idea de abrir camino a estudios de más largo aliento. Una vez que se constató que la encuesta arrojaba resultados fidedignos, el CERC procedió en 1986 a hacer un estudio de mayor alcance sobre actitudes políticas entre vecinos de Santiago y, en 1987, la primera encuesta de actitudes políticas de carácter nacional hecha desde el golpe²⁷.

Según señala una importante colaboradora, estos primeros estudios fueron «todos académicos, absolutamente todos, y fueron básicamente los procesos políticos lo que nos motivó a incluir las preguntas políticas que después se difundieron, más para uso de los partidos o para la opinión pública en general o para los medios». Como explicó después el director del CERC, Carlos Huneeus, estas encuestas se proponían «estudiar los cambios subjetivos» que habían acompañado las grandes transformaciones objetivas realizadas por el régimen militar durante más de diez años²⁸.

²⁷ La mayoría de los primeros sondeos de actitud política del CERC los financió la Fundación Ford, la que en ese entonces estudiaba opciones para desarrollar un programa de gobernabilidad en Chile.

²⁸ Entrevista con Marta Lagos, 9 de enero de 1991; otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha. Huneeus, *Los chilenos y la política*, p. 21.

La potencial relevancia política de las encuestas atrajo interés desde un comienzo. En las condiciones de autoritarismo político imperantes en Chile, los sondeos adquirirían especial atractivo y trascendencia. Refiriéndose a la encuesta de universitarios, Huneus escribió en 1986 que «los actores políticos pueden afirmar que saben lo que los chilenos piensan y quieren en política, pero mientras esas opiniones no se expresen a través del sufragio libre, secreto e informado, estas afirmaciones carecen de la base necesaria. Eso no es solo útil por razones académicas, sino también necesario por razones políticas, saber lo que los chilenos opinan en política»²⁹. Pero faltando dos años para el plebiscito y con la oposición totalmente en contra de participar, no estaba muy clara la utilidad de los sondeos. El impulso inicial fue ciertamente más académico que político.

De hecho, la principal motivación del CERC fue desarrollar, en base a la obra de Hamuy, series de tiempo confiables que permitieran comparar las actitudes políticas de los chilenos a lo largo de casi treinta años. Anotaba Huneus: «Esta comparación de datos tiene gran relevancia para las ciencias sociales. En ningún otro país se han comparado datos encuestales de un período democrático con sondeos realizados bajo el autoritarismo». Estos estudios fueron claramente tributarios de Hamuy, quien puso sus datos y su capacidad metodológica al servicio del CERC. Lo que se proponían era, entre otras cosas, «retomar una tradición de sociología empírica que Hamuy había iniciado en los años '50 y que había sido interrumpida por el Golpe Militar»³⁰.

Los estudios del CERC fueron rápidamente reconocidos por su calidad y seriedad. Sus resultados atrajeron una importante cobertura de prensa y tuvieron un rol protagónico en dirigir la atención –primero de la intelectualidad y luego de los dirigentes políticos y del público en general– hacia la medición de la opinión pública sobre temas políticos con métodos independientemente verificables. Poco tiempo después el CERC consiguió financiamiento del gobierno italiano y de la Comunidad Económica Europea para una serie periódica de sondeos. Así, en 1988 el CERC devino en la principal fuente de información encuestal de la Concertación.

²⁹ Carlos Huneus, «Lo que piensan los universitarios», *Hoy* 456 (1986): p. 11.

³⁰ Huneus, citado en Sunkel, «Las encuestas de opinión pública», pp. 20, 21.

La FLACSO, centro de investigación en ciencias sociales, iniciaba más o menos al mismo tiempo sus propios estudios de opinión política. Al igual que el CERC, la motivación inicial fue académica. Una breve encuesta sobre descentralización hecha por el CED en 1984 había motivado a investigadores de la FLACSO a determinar si ese tipo de sondeos podría servir para medir actitudes más explícitamente políticas. Poco después, como parte de los planes de conmemoración del quinto centenario del viaje de Colón a América, el gobierno español encargó a la FLACSO un sondeo sobre la imagen de España en Chile. Al cuestionario elaborado en España los investigadores de la FLACSO agregaron, a modo de prueba, dos preguntas sobre temas políticos. Y como cuenta Ángel Flisfisch, «Funcionó. Y la siguiente pregunta fue: ¿por qué no hacer un sondeo más político? Pero no había aún una intención política. Fue una cosa más bien académica; estar haciendo encuestas en un contexto autoritario era apasionante» (17 de enero de 1991).

A fines de 1985, con apoyo del gobierno español, la FLACSO realizó entre residentes de la ciudad de Santiago el primer sondeo expresamente pensado para medir actitudes políticas. El éxito de esa encuesta derivó en una línea de trabajo que generó un importante nivel de financiamiento exterior. En los años siguientes la FLACSO, generalmente en colaboración con el CED y el CEP, se convirtió en uno de los principales productores de sondeos de actitud política en Chile. El financiamiento provino mayormente del Fondo Nacional para la Democracia de EE.UU., la Fundación Ford y el gobierno español³¹.

Los primeros estudios de la FLACSO y el CERC pusieron en entredicho las premisas opositoras sobre la opinión pública. En primer lugar, demostraron reiteradamente que la actitud política de las mayorías no era radical sino moderada, y que solo un pequeño segmento apoyaba la violencia política o el derrocamiento del régimen por la fuerza. Pese a que la mayoría quería el cambio político, lo condicionaban a que fuese sin caos social. En una época en que la movilización

³¹ Véase, por ejemplo, Ángel Flisfisch, «Consenso democrático en el Chile autoritario», *Documento de Trabajo N° 330* (Santiago: FLACSO, 1987); y «Determinantes de la hostilidad al multipartidismo en el público masivo chileno», *Documento de Trabajo N° 334* (Santiago: FLACSO, 1987).

social dominaba la estrategia opositora, los sondeos indicaban que la mayoría no estaba de acuerdo³².

Segundo, los estudios indicaban que por lo menos un tercio de la población apoyaba al régimen y que otro tercio se manifestaba neutral o indeciso. Es decir, no era rotundamente impopular, sino que tenía un nivel minoritario pero relevante de apoyo, incluso en sectores populares. El arraigo de Pinochet no se limitaba a minorías acaudaladas que defendían sus intereses económicos. La oposición enfrentaba a un régimen cuya derrota, incluso en elecciones libres, no podía darse por descontada. La contienda debía darse con sumo cuidado.

Tercero, los sondeos mostraron una «tremenda continuidad en los valores democráticos» de la población (Marta Lagos, 9 de enero de 1991). La gente seguía alineada en un esquema izquierda-derecha, identificaba correctamente la posición de cada partido y se mostraba abrumadoramente a favor de las instituciones y procesos democráticos³³. Pese a casi veinte años de conflicto y represión, la admirable cultura democrática chilena seguía intacta y los esfuerzos por devolver al país a la democracia podrían contar con ella.

Los intelectuales a cargo de las encuestas no tardaron en advertir las implicancias políticas. Que la mayoría de la población, pese a estar en contra de Pinochet, tuviera una posición política moderada, rechazara la violencia y estuviera claramente por resolver el conflicto político a través de procedimientos democráticos, cuestionaba la idea de sacar al régimen de su escenario de transición por medio de la movilización social y favorecía la tesis de disputar el plebiscito. Edgardo Boeninger, según Flisfisch, fue uno de los primeros «en reconocer el potencial impacto político de los sondeos»³⁴. Boeninger y otros se dieron plena cuenta de que eran un potente argumento a favor de introducir cambios fundamentales en la estrategia opositora.

³² Véase, por ejemplo, Huneeus, *Los chilenos y la política*, pp. 154-170; y Arturo Fontaine Talavera, «Sobre el pecado original de la transformación capitalista chilena», en Barry B. Levine, ed., *El desafío neoliberal: El fin del tercermundismo en América Latina* (Bogotá: Editorial Norma, 1992), p. 127.

³³ Véase, por ejemplo, Huneeus, *Los chilenos y la política*, pp. 54-66; Brunner, «Notas sobre la situación política chilena a la luz de los resultados preliminares de una encuesta», *Material de discusión N° 80* (Santiago: FLACSO-Chile, 1986); y Flisfisch, «Determinantes de la hostilidad al multipartidismo».

³⁴ Citado en Sunkel, «Las encuestas de opinión pública», p. 15.

Así, lo que empezó como un ejercicio de corte esencialmente académico, rápidamente adquirió ribetes políticos. La intelectualidad, consciente de la importancia estratégica de los resultados de las encuestas, se propuso presentárselos a los políticos. Recuerda Flisfisch: «Y así lo hicimos. Pero al hacerlo, de pronto empezamos a ver que esto tenía efectos políticos, y eso nos llevó a tratar de encantar a las dirigencias –las élites políticas– con la idea de que aquí encontramos algo; esto hay que pensarlo» (17 de enero de 1991). A través de conversaciones informales, notas periodísticas, seminarios, talleres y conferencias, la intelectualidad presentó sus conclusiones a los dirigentes políticos. «Hubo», recuerda Guillermo Sunkel, «una suerte de estrategia de seducción por parte de estos intelectuales que trabajaban en política; de encantar a los políticos para que vieran que este instrumento era realmente útil, que podría ser eficaz en la lucha»³⁵. En ese momento, la principal motivación de los estudios se trasladó de lo académico a lo político.

Las dudas de los dirigentes hicieron que el proceso fuera lento. La iniciativa venía enteramente del mundo intelectual; ninguno de los estudios había sido encargado o financiado por los partidos. Según recuerda una importante colaboradora del CERC, «El proceso fue extremadamente lento porque la gente, especialmente en la izquierda, dijo, ‘No, esto no puede ser. Esto es una encuesta, un resultado, una teoría, una interpretación’, en suma, ‘No hay evidencia suficiente para decir esto es lo que la población realmente quiere’» (Marta Lagos, 9 de enero de 1991).

Pero los seminarios y conferencias que se hicieron durante los siguientes dos años empezaron a surtir efecto. Los saberes inicialmente generados por la intelectualidad para fines académicos fueron paulatinamente haciendo presión sobre el pensamiento estratégico opositor. A fin de cuentas, la mayoría de los sondeos los habían hecho académicos de renombre y cumplían con las normas internacionales de

³⁵ Entrevista con Guillermo Sunkel, 18 de diciembre de 1990; otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha. Véase también Sunkel, «Las encuestas de opinión pública», p. 75. Sunkel argumenta de modo convincente que los científicos sociales, tras producir los estudios de actitud política, tomaron la iniciativa para generar una demanda por ellos en el mundo político. Véase Sunkel, «Usos políticos de las encuestas», pp. 35-44.

calidad. Los sondeos posteriores validaron los resultados iniciales, en un momento en que varios de los intelectuales a cargo ya mantenían fuertes relaciones, formales o informales, con la dirigencia política, la que ya no pudo hacer abstracción del resultado de las encuestas. Eventualmente se convencieron, como Sunkel comentó posteriormente, de que los sondeos reflejaban correctamente el estado de la opinión pública y de que este tipo de instrumentos eran necesarios en el diseño de campañas electorales. El CERC y la FLACSO lograron convencer a los dirigentes de que «la comunicación política en una sociedad masificada requiere un conocimiento basado en este tipo de instrumentos y no solo un conocimiento basado en el contacto directo con ‘la gente’»³⁶.

El CIS

Buena parte del ascendiente del mundo intelectual sobre el político en este período discurrió por canales regulares, entre ellos centros de investigación, consultas informales y la prensa. Pero hubo otros mecanismos creados expresamente para influir sobre la estrategia de la oposición. Uno de los principales fue el CIS, proyecto de colaboración formado a mediados de 1987 por tres centros de investigación –CED, ILET y SUR– con el fin de aportar técnicas modernas de campaña, y más en general, de consultoría política. A diferencia del sesgo académico de la FLACSO y del CERC, el CIS tuvo un sentido político desde el inicio. Se trató, en palabras de uno de sus principales integrantes, de ir «más allá de la pura influencia intelectual» y alcanzar influencia política³⁷.

Pero el CIS no fue un simple ejercicio en consultoría política. No respondía a una demanda por asesoría de parte del mundo político; las dirigencias no tuvieron ningún papel en su formación y no habían solicitado sus servicios. El CIS fue más bien una iniciativa del mundo intelectual para asesorar, sin costo alguno, al mundo político. Representó un salto de calidad en los esfuerzos de la intelectualidad por dar a conocer las implicancias de su investigación a las dirigencias políticas³⁸.

³⁶ Sunkel, «Usos políticos de las encuestas», p. 36.

³⁷ Guillermo Campero, citado en *ibíd.*, p. 20.

³⁸ Poco se ha escrito sobre el CIS, pese a que su existencia y sus logros eran públicos y notorios en los círculos políticos e intelectuales chilenos. El compendio de información

La idea partió por la curiosidad académica de Juan Gabriel Valdés, director del ILET y cientista político formado en Princeton. «Por mucho tiempo –quizás desde 1975– yo había estado interesado en la idea de las consultorías políticas, pero no sabía nada al respecto y en Chile no conocía a nadie que supiera» (29 de mayo de 1991)³⁹. A principios de 1987, durante una pasantía de tres meses en la Universidad de Notre Dame, Valdés empezó a hacer averiguaciones y a despachar cartas a diversas consultoras políticas del país. Los únicos que respondieron –el Grupo Sawyer/Miller– posteriormente lo invitaron a Nueva York, tras lo cual ofrecieron hacer una visita sin costo a Chile, recuerda Valdés, siempre que les preparara un itinerario. «Yo actuaba exclusivamente en calidad de académico... Y mientras estaba en Notre Dame, el Departamento de Estado me invitó a Washington para conversar con distintas personas en mi calidad de dirigente socialista. Entonces fui a Washington y después a Nueva York. Justo al mismo tiempo, mi padre [Gabriel Valdés Subercaseaux, entonces presidente de la Democracia Cristiana] fue invitado a Washington por el Departamento de Estado. Cuando fui a ver al Grupo Sawyer/Miller, me mostraron la campaña filipina y lo que estaban haciendo en Ecuador, creo, por un candidato de allá. Bueno, a mí me fascinó la idea y ellos me propusieron una fórmula. Dijeron, ‘Mire, nos gustaría ir a Chile, pero necesitamos un intermediario. No le vamos a cobrar por el viaje. Vamos a ir a Chile y le vamos a explicar en terreno lo que hacemos. Luego le diremos [a su gente] que estamos interesados en hacer un sondeo en Chile y que nos gustaría ver qué otros tipos de estudios sociales tienen’. Así fue que me enteré de la

más completo lo publicó el mismo CIS como actas del seminario donde se analizó la campaña tras el triunfo; véase CIS, *La Campaña del No*. Ver también resumen informativo en Sunkel, «Las encuestas de opinión pública», pp. 23-29; y «Usos políticos de las encuestas», pp. 20-21; y en Castillo, *La fuerza del diálogo*, pp. 42-43. Gran parte de los lineamientos estratégicos que generó el CIS están recogidos por Eugenio Tironi en *La invisible victoria: Campañas electorales y democracia en Chile* (Santiago: Ediciones SUR, 1990).

³⁹ Al igual que muchos intelectuales chilenos, Valdés había militado activamente durante toda su carrera académica. Formó parte de la generación que en 1968 renunció a la DC para formar el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), y en los años 80 participó en el proceso de renovación del Partido Socialista. En 1987 también colaboró en la creación del Partido por la Democracia (PPD).

existencia de las entrevistas focalizadas. Hasta ese momento no sabía nada al respecto»⁴⁰.

Más o menos al mismo tiempo, explica Valdés, surgió la idea de asociarnos con otros centros de investigación para transmitir esta nueva metodología a la oposición chilena. «Cuando volví a Chile de Notre Dame, me encontré con Ernesto Tironi (que es amigo mío) y me dijo: ‘Mira, tú tienes que hablar con mi hermano Eugenio, porque él ha estado pensando algo parecido y yo creo que le interesaría mucho lo que tú tengas que decir’. Así que me reuní con él (yo lo conocía desde el exilio en México), le conté, y de ahí salió la idea, con Eugenio, de asociar a SUR con ILET. SUR eran básicamente Eugenio Tironi, Carlos Vergara y Javier Martínez, y [Guillermo] Campero, Diego Portales y yo organizamos un equipo de gente que se ocuparía de hacer sondeos y de formar algún tipo de equipo para colaborar con el mundo político en el tema del plebiscito. Esto fue en 1987».

Las tres instituciones se complementaron bien, según Valdés: «El CED aportó básicamente sus contactos con el mundo de la política, porque ahí estaba Gabriel Valdés, porque ahí había estado Edgardo Boeninger, porque el CED era cercano a la Democracia Cristiana (mi padre era todavía presidente) ⁴¹. Lo que el ILET aportó fue, para ser franco, mi contacto con el Grupo Sawyer/Miller y la idea de hacer juntos la operación... El tercer componente fue SUR, que tenía tres estupendos científicos sociales, y lo que es mejor, que trabajaban con sectores populares y juveniles a los que también queríamos llegar».

La gente de Sawyer/Miller pasó tres días en discusiones y seminarios en el ILET, con participación de científicos sociales de otros centros de investigación y algunos dirigentes opositores. Como resultado, Sawyer/Miller acordó enviar a una persona que haría una capacitación

⁴⁰ Gabriel Valdés Subercaseaux, padre de Juan Gabriel, acababa de dejar la presidencia de la DC y estaba en busca de nuevas opciones, por lo que es natural preguntarse si le cupo algún papel en la idea de contactar a las consultoras políticas. De los entrevistados, Eugenio Tironi y Mariano Fernández sugieren que así fue, y el propio Valdés Subercaseaux dice en su entrevista que el Grupo Sawyer/Miller le había sido recomendado por el senador Edward Kennedy. Juan Gabriel Valdés, sin embargo, dice que su padre no tuvo ningún papel en esta propuesta («cero»), aunque sí le dio todo su apoyo después de iniciadas las actividades.

⁴¹ Gabriel Valdés, padre de Juan Gabriel, había fundado el CED en 1980 y a la sazón presidía el directorio.

sobre entrevistas colectivas focalizadas, así como hacer una encuesta nacional en conjunto con el CIS y entregar alguna orientación sobre publicidad política.

Quedaba encontrar financiamiento para el proyecto. «Ellos [Sawyer/Miller] me propusieron contactar a alguien que yo no conocía; un tal Soros, de cuya identidad me enteré cuando lo fui a ver. Y fui a ver a George Soros a Nueva York junto con alguien de Sawyer/Miller y Mariano Fernández [a la sazón miembro del CED]. Nos dieron \$30.000 para Sawyer/Miller; nosotros no recibiríamos nada para nuestras instituciones. Todo se hizo a nombre del CIS, sin respaldo político; que por lo demás tampoco teníamos»⁴².

Financiamiento en mano, en agosto de 1987 el CIS y Sawyer/Miller llevaron a cabo la primera entrevista colectiva focalizada hecha en Chile con fines políticos (las entrevistas colectivas focalizadas son un conjunto de entrevistas detalladas, diseñadas para evaluar opiniones y actitudes). Los resultados se presentaron al mes siguiente en la primera reunión del Comité Técnico por las Elecciones Libres, instancia recién creada para asesorar a los partidos de oposición en la campaña para obligar al régimen a realizar elecciones libres. En noviembre el CIS y Sawyer/Miller hicieron una encuesta nacional de opinión política y, en enero de 1988, representantes de Sawyer/Miller volvieron para presentar un completo informe, junto con detalladas recomendaciones de estrategia, a los dirigentes opositores⁴³.

La colaboración de Sawyer/Miller no pasó más allá de enero de 1988, momento a partir del cual el CIS empezó a hacer labores de consultoría política, tal cual las interpretaba, por cuenta propia. Valdés explica este giro: «No se puede sobredimensionar el papel del Grupo Sawyer/Miller. La verdad es que estuvieron presentes, pero ellos mismos nos dijeron en un momento: ‘No tenemos nada más que enseñarles’. Se dieron cuenta de que la gente con que estaban tratando tenía doctorados; que eran doctores en sociología, como Tironi, que sabían hacer encuestas, como Vergara... Una vez que aprendimos la técnica nosotros entendíamos la situación política interna mejor que ellos, así

⁴² En 1987, el Fondo para una Sociedad Abierta, fundado por Soros, hizo al ILET un aporte de \$35.000.

⁴³ Grupo Sawyer/Miller, «Chile». Tironi, en *La invisible victoria*, pp. 151-155, resume e interpreta los resultados de la primera entrevista colectiva focalizada.

que se produjo una situación en que se fueron y no volvieron. Nosotros gastamos el dinero recibido, y adiós. El equipo técnico vino dos veces y hubo una tercera visita de los directores [para presentar conclusiones y recomendaciones]. Así que toda la publicidad que creamos después para la campaña del plebiscito nada tuvo que ver con Sawyer/Miller. Ahora, para nosotros fueron importantes porque nos mostraron el papel que podíamos jugar como asesores del mundo político» (29 de mayo de 1991).

Asimiladas las enseñanzas de Sawyer/Miller, a principios de 1988 el CIS funcionaba por su propia cuenta. Siguió haciendo encuestas y entrevistas focalizadas con aportes del extranjero, consolidó su rol de proveedor informal pero eficaz de estrategia y modernas técnicas de campaña para la oposición democrática, y aportó las ideas centrales que condujeron al triunfo en el plebiscito. El CIS, precursor de una nueva forma de hacer política en Chile, siguió en funciones hasta la elección presidencial de 1989.

El Comité Técnico por las Elecciones Libres

Casi al mismo tiempo, los partidos habían creado el Comité Técnico por las Elecciones Libres, la instancia ante la cual el CIS presentó los resultados de su primera entrevista focalizada. El Comité, otra importante iniciativa en que la intelectualidad tuvo un rol protagónico, se formó en septiembre de 1987 para asesorar a las tres fuerzas que integraban el movimiento por las elecciones libres. Su dirección recayó en el destacado intelectual y dirigente DC Genaro Arriagada. Pese a que en él participaban varios de los miembros del CIS, el Comité se fundó meses después y fue una iniciativa aparte. En marzo de 1988 pasaría a llamarse *Comité Técnico por el No* y a dirigir la campaña opositora⁴⁴.

Los dirigentes que encabezaban la campaña por las elecciones libres crearon el Comité Técnico con la idea de colaborar en el diseño

⁴⁴ Esta campaña tuvo tres distintas instancias: 1) Comité por las Elecciones Libres (CEL), conformado por catorce destacadas personalidades de oposición; 2) Comité Operativo de Partidos para las Elecciones Libres (COPPEL), que representaba al centro político y encabezaba la DC; y 3) Comité de Izquierda por las Elecciones Libres, dirigido por Ricardo Lagos.

y coordinación de estrategias. Aunque formalmente la dirección era política, a nivel técnico estuvo dominado por intelectuales. En efecto, Arriagada invitó a algunos de los científicos sociales más calificados y reconocidos de la oposición, entre ellos Ángel Flisfisch, Ignacio Walker, Carlos Huneeus, Juan Gabriel Valdés, Eugenio Tironi, Manuel Antonio Garretón y Carlos Vergara. En ese momento la oposición estaba totalmente comprometida con las elecciones libres y con consensuar un candidato, un programa y una coalición electoral, conjunto de temas que denominó «la trilogía». La labor del Comité era «generar las ideas generales y la línea estratégica» del movimiento por las elecciones libres⁴⁵.

A fines de septiembre, el Comité realizó un cónclave en Olmué, localidad al norte de Santiago, para desarrollar sus ideas. Lo primero que ocurrió fue que sus integrantes constataron que estaban en total desacuerdo con la estrategia de la oposición: en lugar de una campaña para forzar al régimen a realizar elecciones libres, estaban por participar en el plebiscito. En lugar de desgastarse en pactar un candidato y programa común, estaban por acordar solo una cosa: decir no a Pinochet. En lugar de insistir en los desafueros del régimen, estaban por poner el acento en las ventajas de volver a una democracia plena⁴⁶.

Recuerda Carlos Vergara: «Estos fueron nuestros primeros desacuerdos con la dirigencia política... Decir que había que participar en el plebiscito» (28 de enero de 1991). Acto seguido, el Comité recomendó reemplazar el objetivo para el que había sido creado –una campaña por las elecciones libres– por una campaña a votar No en el plebiscito.

Las conclusiones del Comité se basaban principalmente en un análisis académico, y especialmente en las encuestas de actitud política y entrevistas colectivas focalizadas que sectores académicos habían empezado a realizar. Estos sondeos venían mostrando desde 1985 que la gente estaba cansada de manifestaciones callejeras y que tenía una relativamente alta valoración del orden público. Agregaban un nuevo elemento las entrevistas focalizadas efectuadas el mes anterior por el CIS y que habían detectado un profundo y generalizado temor en la población. La gente temía el desempleo, el desorden, la represión, la

⁴⁵ Arriagada en prólogo a CIS, *La Campaña del No*, páginas sin numeración.

⁴⁶ Sobre la decisión de propugnar la participación en el plebiscito, véase Cavallo, *Los hombres de la transición*, p. 47.

política y lo que deparaba el futuro. Ese miedo generalizado generaba sentimientos de vulnerabilidad, angustia y debilidad personal. En la interpretación de Eugenio Tironi, figura clave en la realización de las entrevistas, «El miedo hace que las personas actúen contra su voluntad. Las apelaciones lógicas a la conciencia, por lo tanto, son insuficientes y, a veces, hasta contraproducentes»⁴⁷.

El miedo venía junto con sentimientos de frustración, humillación y escepticismo que generaban apatía e inhibición. La gente se mostraba escéptica ante cualquier iniciativa política y muy pesimista ante el futuro. Caracterizando estos resultados, anotaba Tironi: «Un anhelo básico de los chilenos es contar con un medio social en donde volcar sin miedo sus experiencias personales, en donde encontrar un respaldo afectivo, un sentimiento de unidad y trascendencia» (22).

A juicio del Comité, estos resultados planteaban un serio problema. Para una estrategia de cierta complejidad orientada a forzar al régimen a hacer elecciones libres, una población apática y escéptica era mala señal. El ciudadano de a pie no quería más conflicto y dudaba de que una campaña por elecciones libres fuera a mejorar las cosas.

Así, se hizo necesaria una visión política distinta; había que ajustar la estrategia al ánimo de la gente. «Teníamos que crear canales para esto; reconciliar el objetivo político, que era el retorno a la democracia, con la forma en que la población se incorporaba a la vida nacional. Fue una forma muy traumática [de incorporación], con mucho miedo, y que no toleraría más proyectos basados en la idea de derrocar al régimen» (Vergara, 28 de enero de 1991). En lugar de exhortar a la gente a luchar por un nuevo escenario de transición, la oposición debía ofrecerle esperanza y dignidad⁴⁸.

El plebiscito, concluyó el Comité, podía cumplir ese papel. «El plebiscito es un tipo de evento que puede permitir a los chilenos salir del estado en que se encuentran y actuar en función de sus anhelos», dijo Tironi. «Si la actitud ante el próximo plebiscito estuviese marcada por la queja, la denuncia, el escepticismo y la agresividad, entonces se estarían

⁴⁷ Tironi, *La invisible victoria*, p. 19.

⁴⁸ En entrevistas, «dignidad» fue uno de los temas más evocados de las deliberaciones hechas en Olmué, conforme a un documento con ese título elaborado para el encuentro por Eugenio Tironi, el que figura en versión revisada en *Revista Mensaje* N° 367 (1988) y en Tironi, *La invisible victoria*, pp. 22-23.

profundizando la dependencia, la impotencia y el miedo; esto es, los soportes psicosociales de la apatía. Esta era la actitud atávica de los dirigentes y militantes de la oposición, profesionalizada después de tantos años en la denuncia. Tomar el plebiscito como una oportunidad para terminar con la apatía de los chilenos, suponía que esos dirigentes y militantes se convirtieran en los profetas de la esperanza, en los comunicadores de una nueva actitud: el plebiscito es una oportunidad para afirmar la dignidad de los chilenos y para mostrar el poder del pueblo». Esta lectura de la primera entrevista colectiva resultó ser notablemente perdurable en el tiempo, dado que marcó la posición estratégica que la dirigencia opositora aceptó y mantuvo durante toda la campaña del No⁴⁹.

El Comité Técnico también concluyó que la arraigada convicción opositora de que se debían consensuar un candidato, un programa de gobierno y una coalición era un camino equivocado que había que desecharlo. En lugar de ello, recomendó a los partidos hacer un acuerdo informal de trabajar juntos para derrotar a Pinochet en el plebiscito y dejar otros temas para después. Tratar de ponerse de acuerdo en lo demás, a juicio del Comité, generaría conflictos y solo lograría exacerbar la aversión de los votantes al desorden político. «Dijimos», recuerda Arriagada, «que una coalición en torno al No era la única base posible para la unidad, porque no era hora de estar discutiendo programas, mucho menos un candidato presidencial. Esta era la hora del No» (8 de marzo de 1991).

El Comité estimó, además, que la gran descentralización vivida en Chile desde el golpe exigía cambiar la visión de una campaña política. El traspaso de múltiples funciones a los gobiernos locales y de gran parte de la iniciativa económica al sector privado había creado una nueva dinámica política, menos sensible a las tradicionales declaraciones de dirigentes nacionales desde la capital. En lugar de pautas nacionales, lo que hacía falta era una visión adaptada al ámbito local. Recuerda Arriagada: «Los políticos de la vieja guardia estaban sumamente convencidos de que la lucha giraba en torno a las opiniones que vertían en las páginas C2 y C3 de *El Mercurio*, pero vino este grupo de científicos sociales y les dijo que la lucha estaba donde ellos no estaban... Así que recomendamos poner el acento en el nivel local, creando comités de base, etcétera» (8 de marzo de 1991).

⁴⁹ Tironi, *La invisible victoria*, pp. 24-25. Esta lectura atraviesa todo el documento del CIS *La Campaña del No* y aparece en resumen en Grupo Sawyer/Miller, «Chile».

De hecho, en muchos temas estratégicos se apreciaba un fuerte contraste entre las posiciones de dirigentes e intelectuales. Cuenta Arriagada: «En política, los intelectuales normalmente tienden a complicar las cosas, poniendo el acento en programas farragosos y fórmulas difíciles. Aquí, curiosamente, los intelectuales contribuyeron brutalmente a simplificar la política y a acercarla a temas mucho más concretos. Es decir, mientras los políticos creían que el país quería cosas heroicas, los intelectuales decían que lo que el país quería era un poco de felicidad, paz, programas modestos, seguridad y recuperar un mínimo de dignidad. Los políticos creían que podíamos seguir luchando por elecciones libres, un programa de gobierno común, un candidato común –todo muy complejo– mientras los intelectuales decían: ‘No, lo único que hay que pedir es que voten No.’ Ese fue un dato muy interesante».

Los integrantes del Comité volvieron a Santiago decididos a vencer a la dirigencia política de abandonar por entero la idea de las elecciones libres y participar en el plebiscito llamado por Pinochet. «La Democracia Cristiana discutía si legalizarse o no, así que proponer la participación en el plebiscito parecía una suerte de traición... El socialismo estaba pensando formar un Partido por la Democracia. El gran debate era entrar o no en el marco institucional... Nosotros dijimos: ‘Hagámoslo; aquí fracasó todo lo demás, hay un plebiscito, es una oportunidad para superar el miedo’... Éramos seis o siete técnicos; intelectuales de CIEPLAN, de SUR. Nos dijimos que la noche de Año Nuevo había que celebrar con la clase política anunciando la decisión de participar en el plebiscito» (Vergara, 28 de enero de 1991).

El Comité ya había empezado a esbozar los detalles de una campaña del No. Recuerda Vergara: «No solo dijimos que había que participar en el plebiscito, sino que había que hacerlo de cierta forma. Cuando se firmó el acuerdo el 2 de febrero, ya teníamos listo un prototipo. Los pilares centrales de la campaña se basaron en ese diseño» (28 de enero de 1991).

La nueva visión y la clase política

A partir de agosto de 1987, dos grupos convergentes, ambos dominados por la intelectualidad –el CIS y el Comité Técnico por las Elecciones Libres–, emprendieron una campaña sistemática para enseñar

técnicas modernas de campaña a los políticos de oposición y argumentar a favor de participar en el plebiscito. A través de conversaciones informales y un ciclo de reuniones formales, el Comité presentó a las dirigencias políticas los resultados de los sondeos y entrevistas colectivas focalizadas y sus implicancias para la estrategia política.

Una parte de esta labor, entre ellas un sinnúmero de conversaciones con el medio político en ocasiones que aprovechaban encuentros sociales y cenas de camaradería, fue de carácter informal y en base a relaciones personales; es decir, la forma tradicional de abordar la política en Chile. Pero hubo otro tipo de tareas de tono más formal, organizadas por el CIS, que representaron una nueva forma de transferir tecnología desde la academia a la política. Se trató de un Comité de Análisis Político que periódicamente convocó a dirigentes de los principales partidos de oposición a reunirse en el CED, por lo general en torno a un almuerzo, a discutir los conocimientos que producían los científicos sociales. Estas sesiones, explica Sunkel, no eran «instancias de decisión»⁵⁰, sino oportunidades para que los científicos sociales entregaran su mensaje; un intento deliberado por parte de la intelectualidad de convertir los resultados de sus estudios en estrategia política.

Carlos Vergara, integrante del CIS, explica la lógica de este proceso:

En la medida que te propones aportar en la orientación de la campaña, tienes necesariamente que modificar o, más bien, inventar un vínculo entre tu producción de conocimiento y la dirigencia política. Porque en realidad quienes dirigen las campañas políticas son los políticos, no son los tecnócratas. Entonces, el problema de uno es cómo hacerle entrega a la dirigencia política de lo que uno piensa debe ser la cosa. En general, los políticos de la vieja guardia no son gente que tú le pases 150 cuadros, los lean y saquen sus conclusiones. Lo que nosotros hicimos fue considerarnos una especie de 'servicio de utilidad pública', no al servicio de un partido político en particular sino que al servicio de la causa democrática en general. Y lo que nosotros hicimos fue convocar a un grupo de dirigentes políticos... y les explicamos en qué estábamos y qué queríamos hacer. Teníamos reuniones con ellos dos veces al mes, donde paralelamente a los trabajos, íbamos haciendo análisis y recomendaciones

⁵⁰ Sunkel, «Usos políticos de las encuestas», p. 37.

generales de orden estratégico... Esto fue muy bien recibido y efectivamente esa instancia de discusión la mantuvimos hasta el final, incluso después del plebiscito. Porque se generó allí una instancia que en este país no existía: en primer lugar, una instancia de discusión muy horizontal... entre tecnocracia... y dirigencia política. En segundo lugar, era una instancia absolutamente pluralista»⁵¹.

El Comité de Análisis Político se reunía en el CED porque el CED tenía un alto grado de credibilidad entre la dirigencia y porque Gabriel Valdés Subercaseaux, ex presidente de la DC y fundador del CED, era un gran partidario del CIS. El Comité invitó a dirigentes de todos los partidos de oposición, incluyendo democristianos, el PS Almeyda, humanistas, radicales, socialdemócratas y socialistas moderados. Recuerda Eugenio Tironi: «Desde agosto o septiembre de 1987 hasta el plebiscito hicimos en el CED un almuerzo semanal con los principales políticos de oposición, unos quince o veinte dirigentes... para eso preparábamos escritos sobre el tipo de discurso que había que dar, cómo atraer al votante indeciso, etcétera»⁵².

Las reuniones eran sesiones muy técnicas de estrategia y campaña política impartidas por académicos del CIS y del Comité Técnico. Se discutían informes breves, de no más de cuatro o cinco páginas, que resumían el análisis más reciente en un estilo calculado para llegar a dirigentes políticos y sociales. Uno de los primeros informes, por ejemplo, planteaba seis preguntas fundamentales para la oposición, respondiendo cada una y justificando cada respuesta, todo en no más de un par de páginas a doble espacio⁵³. Esto representaba un giro deliberado desde la producción intelectual tradicional. «Teníamos claro desde el inicio que esto era una especie de militancia en una causa

⁵¹ Carlos Vergara, citado en *ibíd.*

⁵² Entrevista con Eugenio Tironi, 19 de diciembre de 1990; otros extractos se identifican en el texto o notas por medio de la fecha. Asistían, entre otros, Ricardo Lagos, Enrique Silva Cimma, Eduardo Loyola, Jorge Arrate, Gabriel Valdés Subercaseaux, Germán Riesco, Mario Papi, Andrés Zaldívar, Germán Correa, René Abeliuk, Eduardo Frei, Eugenio Ortega, Raúl Troncoso, Jaime Gazmuri, Claudio Huepe, Luis Maira, Carlos González Márquez, Ricardo Navarrete y José Tomás Sáenz.

⁵³ Véase CIS, «Preguntas y dilemas de la oposición» (1987, fotocopia). En febrero de 1988, cuando la oposición decidió participar en el plebiscito, el *Comité Técnico por las Elecciones Libres* pasó a llamarse *Comité Técnico por el No*, con prácticamente la misma composición.

mayor, aunque por tiempo limitado. No lo definíamos como trabajo intelectual. Lo definimos como nuestro aporte, como intelectuales, a un determinado proceso político» (Vergara, 28 de enero de 1991).

Esta labor también se extendía a las cúpulas partidarias. Cuenta Gabriel Valdés Subercaseaux: «Recuerdo haber visto a todos los jefes de partido sentados ahí mientras Martínez les hacía clases de política. ¡Clases! Había personas que habían sido senadores, diputados, sentados ahí en clase, todos tomando apuntes. Fue muy notable» (1 de marzo de 1991)⁵⁴. Tironi relata una presentación que hizo ante Patricio Aylwin, entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano: «Recuerdo una reunión en diciembre con Patricio Aylwin –los dos solos toda una mañana– mostrándole los datos de los sondeos y leyéndole la minuta que había redactado para explicar por qué pensaba que teníamos que ir por el No» (19 de diciembre de 1990).

Vergara entrega una idea de la respuesta que tuvieron las sesiones del CIS entre los dirigentes políticos: «Convocamos a un primer almuerzo y lo que pasó, para sorpresa nuestra, es que llegaron todos. Después de ese almuerzo, lo único que querían era que lo repitiéramos. En otras palabras, se generó una demanda inmediata, así que seguimos haciendo encuestas, elaborando informes y socializándolos con este tipo de personas... Hubo una terrible tensión con otros dirigentes que querían asistir, pero por razones de espacio no podíamos hacer más invitaciones. Pero fue un grupo que generó mucha influencia y en ese sentido, fuimos quienes tomaron la iniciativa para generar ese tipo de relación, y eso se definió en esos términos» (28 de enero de 1991).

Las sesiones pusieron el acento en las implicancias para la estrategia política de las encuestas y entrevistas colectivas hechas por el CIS, el CERC y la FLACSO, y de las enseñanzas que había dejado el Grupo Sawyer/Miller. Se recalca el miedo generalizado en la población, la falta de interés en una campaña por elecciones libres y el rechazo al desorden político. También se analizó el apoyo a Pinochet, llegándose a la conclusión de que, en un plebiscito limpio y con una buena campaña, se le podía derrotar. Se empezaron a bosquejar los tipos de argumentos que debían incluirse en la campaña del No.

⁵⁴ Valdés se refiere a Javier Martínez, sociólogo de SUR que tuvo un rol protagónico en el CIS.

Quizás por constituir un elemento completamente nuevo, las entrevistas colectivas focalizadas parecen haber sido especialmente importantes. Recuerda Foxley: «Esto fue totalmente nuevo... Fue un elemento decisivo, decisivo. Fue fascinante. Entender lo que las personas realmente sentían... eso era lo que una entrevista colectiva focalizada te daba, a diferencia de una encuesta. Daba una textura mucho más matizada... De ahí salió, por ejemplo, el tema de la debilidad, un tema central que después permeó toda la campaña. Eso fue fantástico» (14 de marzo de 1991).

Los acuciosos esfuerzos del CIS y del Comité Técnico por convertir las conclusiones de encuestas y entrevistas colectivas en estrategia política no tenían precedente en Chile. La experiencia de Vergara ilustra el alto nivel de análisis que generalmente se utilizaba: «El problema era... cómo expresar políticamente lo que estaba en el subconsciente de la gente. Fue casi un problema de ingeniería política: cómo vincular plebiscito con democracia, porque la oposición había estado vinculando plebiscito con dictadura... ‘Para que hayan elecciones libres, tenemos que ganar el plebiscito’» (28 de enero de 1991).

Para lograr este objetivo había que extraer el sentido político de las impresiones algo confusas y contradictorias que recogían las encuestas. Explica Vergara: «Lo que los intelectuales hicieron, yo creo, fue pasar en limpio lo que muchos quizás tenían en borrador y no sabían muy bien cómo expresar. Y gran parte de la población estaba también en ese estado de borrador. En los niveles de dirigentes medios estaba instalado que aceptar la legitimidad del marco institucional de Pinochet era un acto de traición moral y, lo que es más, llevaría a la derrota, aludiendo al precedente del plebiscito de 1980, donde la oposición perdió y muchos dijeron que Pinochet se había robado los votos y había habido fraude».

La conclusión fue que el plebiscito se podía ganar, siempre que la oposición adaptara su estrategia al ánimo de los votantes. Agrega Vergara: «Pero hubo una apertura. Y esa hazaña de conversión original la logró un grupo de intelectuales que dijo: ‘Tenemos que conectar plebiscito con democracia y no seguir insistiendo en conectar plebiscito con dictadura’. Estábamos locos, porque el plebiscito se iba a hacer de todas maneras, no había forma de pararlo, toda la oposición iba a ser sorprendida sin haberse inscrito para votar, Pinochet iba a ganar y tendríamos dictadura hasta 1997».

A principios de 1988 se hicieron reuniones con la gente del Grupo Sawyer/Miller para escuchar las conclusiones de la encuesta y las entrevistas colectivas focalizadas hechas con el CIS. Recuerda Juan Gabriel Valdés: «Hubo dos reuniones con gente de Sawyer/Miller que fueron realmente espectaculares... Hicimos una presentación conjunta, empecé yo, después siguió Tironi, y luego la gente de Sawyer/Miller dijo: ‘Este país tiene cáncer. Ese cáncer es el miedo, y si ustedes no logran vencer ese miedo, el plebiscito está perdido. Por lo tanto, el objetivo central tiene que ser superar el miedo de la gente, porque ustedes están sacando una conclusión falsa: que si la gente se inscribe en el padrón electoral, va a ir a votar por el No. La gente se podrá inscribir, pero el paso posterior de ir a votar No es algo que requiere de un valor especial, y si ustedes no trabajan ese paso, se van a encontrar con que la gente no va a ir a votar, o va a votar que sí, o se va a abstener’» (29 de mayo de 1991).

Estas presentaciones fueron una novedad en cuanto eran obra de consultores políticos, no de académicos, y encarnaban una forma diferente de comunicar resultados de encuestas. Continúa Juan Gabriel Valdés: «Uno de los académicos de Sawyer/Miller dio una charla que tuvo un tremendo efecto en los políticos presentes... Dijo: ‘Chile es como un estrado donde hay un tipo con un fierro que lleva allí muchos años, y cada vez que alguien del público levanta la cabeza, le da un fierrazo y lo mata. Así que la gente está aterrada... Luego ese tipo dice que va a traer una urna para que puedan expresar su opinión en un pedazo de papel. Si el primero que suba al estrado le quita el fierro y lo empieza a golpear, nadie más se atreverá a subir, porque saben muy bien que el tipo les podría dar de fierrazos a ellos también y hasta ahí llegaría todo. Así que el primero que suba al estrado tiene que darle la mano al tipo del fierro y decirle lo bien que le parece la idea. De esa forma el resto se atreverá a subir’».

Más allá del fondo, el estilo de la presentación de Sawyer/Miller fijó nuevos horizontes para el CIS. Sigue Valdés: «Esa lógica de la no confrontación fue muy importante porque daba ejemplos básicos ...el mundo político empezó a entenderla, y lo más importante, empezó a pasar algo fascinante para nosotros: vimos que estábamos encantando al mundo político». El CIS empezó entender y adoptar el papel de consultor político.

Pero el mundo político no siempre coincidía con las recomendaciones del CIS y del Comité Técnico. Las conclusiones de los sondeos y

las entrevistas focalizadas sorprendían a muchos, y a veces contradecían ideas muy arraigadas sobre el estado de ánimo del país y la correcta estrategia de transición. Recuerda Vergara: «En diciembre de 1987 se hizo un gran Seminario por las Elecciones Libres, con delegados del movimiento por las elecciones libres de todo Chile, en el Círculo Español [salón de eventos en Santiago]. Los oradores éramos nosotros, como Comité Técnico. Se generó una tremenda discusión. Yo diría que más de la mitad de los asistentes, personas de toda la oposición, estaban en contra de ir al plebiscito» (28 de enero de 1991). Recordando un encuentro similar hecho en el CED en la misma época, Fernández describe la reacción de los dirigentes políticos como «un escándalo, porque en esa época significaba entrar en la Constitución de Pinochet, todo eso que habíamos repudiado toda la vida»⁵⁵. La actitud que imperaba en el mundo político a fines de 1987 seguía siendo la de presionar al régimen a cambiar el cronograma de transición y de resistencia a participar en el plebiscito.

Pero el 2 de febrero de 1988 esta perspectiva cambió. Trece partidos de oposición conformaron la «Concertación de Partidos por el No» con el fin explícito de disputar el plebiscito llamado por Pinochet. Acordaron hacer juntos una misma campaña, y pidieron al Comité Técnico que tanto se había esforzado bajo la conducción de Arriagada que elaborase un nuevo marco de campaña. Modificando de manera fundamental su estrategia, la oposición aceptaba la transición dispuesta por el régimen.

El impacto en la estrategia de la oposición

El papel del mundo intelectual en la decisión de cambiar la estrategia de transición fue extraordinario. Ciertamente es que esta decisión estuvo marcada por una multiplicidad de factores muy complejos y que en definitiva no la adoptó la intelectualidad, sino el mundo político. Pero también es cierto que corría el reloj y el plebiscito se iba a hacer, con o sin la oposición. De no haber actuado de forma oportuna, llamando a inscribirse, legalizando los partidos y levantando una campaña unida,

⁵⁵ Mariano Fernández, citado en Sunkel, «Usos políticos de las encuestas», p. 40.

es muy probable que la oposición no habría tenido chance de ganar. El cronograma del régimen la había obligado a definirse.

Pero quien tuvo el papel determinante en informar estas decisiones fue la intelectualidad. Edgardo Boeninger, fácilmente la figura principal en las deliberaciones de la oposición, comentó sobre el intrincado modelo causal que produjo el cambio de perspectiva: «No fue tan simple como decir que había dos sectores, los políticos que creían blanco y los intelectuales que creían negro... y que los intelectuales terminaron por convencer a los políticos de que tenía que ser negro. No. Todo fue evolucionando... La raíz de la posición opositora sobre una estrategia política viable venía de gente que estaba a dos pasos de la acción, y el cambio de estrategia probablemente no habría sido posible si no hubiese existido, dos pasos detrás del quehacer diario, un centro de reflexión al que los políticos podían recurrir en busca de ayuda. Hubo una intercomunicación en que el razonamiento, el análisis, la experiencia diaria, los éxitos y fracasos, fueron cambiando las percepciones y lógicamente generando un consenso». Y continúa: «Las verdaderas decisiones las tomaron en definitiva los políticos. Por ejemplo, la decisión de la DC se tomó en una Junta Nacional cuya dirección, pese a estar infiltrada, como era mi caso, por intelectuales, era un grupo electo por una Junta Nacional de delegados políticos que decidieron un cierto camino. No es que se pueda decir que tal o cual aporte vino de la intelectualidad. Eso sería arrogante» (29 de enero de 1991)⁵⁶.

El acento que pone Boeninger en la complejidad del tema contrasta con el comentario del sociólogo Javier Martínez, quien participó extensamente en las deliberaciones: «Esa vez los intelectuales corrieron con colores propios... La decisión les fue prácticamente impuesta a los políticos por los sociólogos y los científicos políticos de la oposición». Desde su perspectiva, la intelectualidad tuvo un rol decisivo en reconocer la estrategia más viable y en presentar sus argumentos ante el mundo político, marcando así una notable diferencia. «Lo que recuerdo de las primeras reuniones con políticos fue su gran resistencia a la idea de entrar al plebiscito de Pinochet. Su argumento era ‘Eso es lo que Pinochet nos quiere imponer, y hay que evitarlo. Si participamos nos va a derrotar, y no tendremos cómo oponernos después’. La

⁵⁶ El demócratacristiano Adolfo Zaldívar también tuvo un papel importante en llamar a su partido a aceptar la Constitución y participar en el plebiscito.

mayor parte no tenía idea si la gente votaría por el No; eso era terreno completamente difuso. Tampoco sabía a quién llegaba el mensaje de la oposición y a quién no. No sabía cuál era su público... Y entonces quizás el elemento más decisivo fue una avalancha de estudios de opinión pública que aparecieron alrededor de septiembre de 1987, de la FLACSO, SUR, CERC, etcétera» (6 de marzo de 1991)⁵⁷.

Otro participante, Eugenio Tironi, se plantea a medio camino entre Boeninger y Martínez, pero subraya el papel de la intelectualidad: «Concuerdo con Boeninger, pero creo que no enfatiza lo suficiente el rol que jugaron personas como él que fueron el puente entre el mundo intelectual y el mundo político... La decisión de cambiar de estrategia la tomaron los políticos, pero la instigaron, estimularon y motivaron precisamente personas como Boeninger. Y un Boeninger tomaba sus argumentos, su estrategia, principalmente del mundo intelectual» (20 de marzo de 1991).

Pese a reconocer que la decisión final la tomó el mundo político, otros participantes en las deliberaciones también adjudican un rol protagónico al mundo intelectual. Sergio Molina, jefe del primer Comité por las Elecciones Libres, destaca la contribución de intelectuales que aportaron razón y realismo al debate estratégico: «Es en las cuestiones específicas donde tuvieron influencia... Por ejemplo, en entrar en la Constitución [y] legalizar los partidos, específicamente en esas dos expresiones, la influencia de la intelectualidad fue muy importante. Obligó a la gente a razonar, explicar, justificar, hacer estudios y hablar con dirigentes e introdujo... una cierta racionalidad. Yo diría que hubo más realismo en la intelectualidad, mucho más que en la discusión política a nivel partidario o a nivel de las dirigencias partidarias» (13 de marzo de 1991).

El dirigente socialdemócrata Mario Papi destaca el papel de las encuestas en informar a dirigentes que de otra forma no habrían tenido información fidedigna sobre el estado de ánimo de la gente: «El hecho es que, por falta de otros tipos de información –porque actuá-

⁵⁷ Martínez también destaca que los primeros dirigentes en llamar públicamente a participar en el plebiscito –Ricardo Lagos y Gabriel Valdés– no tenían cargo electivo alguno. «No sé hasta qué punto esto fue porque siempre habían pensado así, o si fue una forma de enganchar con los que en ese momento detentaban el poder en sus partidos. ...El hecho es que los altos dirigentes que en ese momento estaban semidesplazados fueron los primeros en asumir la idea del plebiscito» (6 de marzo de 1991).

bamos un poco en las sombras— para nosotros era difícil medir lo que la población sentía. Para un dirigente político, hasta ir a una población era cosa seria. Así que en un momento en que la política andaba a tientas, las encuestas fueron elementos potentes en los cuales sustentar los argumentos... Fueron como una lucecita en la noche, digamos, que ayudaron a fundamentar un debate político que, si no, se habría apoyado en el puro olfato... En ese sentido, fueron un elemento muy, muy importante» (7 de marzo de 1991).

En efecto, la introducción de técnicas modernas de campaña tuvo grandes efectos en la estrategia política. Las encuestas y entrevistas colectivas focalizadas eran herramientas que proyectaban con precisión el estado de ánimo del país y entregaban datos empíricos y fidedignos, como complemento a la suposición y la intuición. Mostraban con pruebas que una estrategia de protestas y lucha era impopular y no era la solución. Las encuestas, recuerda el socialista Ricardo Lagos, hicieron que «uno empezara a darse cuenta de que la estrategia de confrontación y ruptura no era lo más adecuado» (13 de marzo de 1991). Recuerda igualmente Gabriel Valdés: «Se hicieron estudios sobre lo que la gente pensaba y se llegó a la conclusión de que aquí el gran problema era el miedo. Eso fue muy decisivo, porque nunca más volvimos a pensar en términos de protestas» (1 de marzo de 1991).

Estas herramientas también ayudaron a la oposición a ver que, con otra estrategia, el plebiscito se podía ganar. «Los sondeos de opinión», dice Foxley, «tuvieron la virtud de socializar la idea de que se podía derrotar a Pinochet. Eso fue un elemento dinamizador para gente que trataba de decidir en su subconsciente si sumarse o no a la lucha democrática contra Pinochet. El peor enemigo de una lucha antidictatorial es la falta de información; no saber si quienes se oponen al dictador son pocos o muchos. Las encuestas aclararon eso» (14 de marzo de 1991).

Los sondeos y entrevistas colectivas focalizadas, a juicio de Brunner, contribuyeron además a moderar la estrategia de la oposición. «El trabajo que se hizo en los centros a través de los sondeos y de un grupo de esos a los que llamamos intelectuales fue, yo creo, el factor final que convenció a la clase política de que era necesario un cambio de estrategia y de que se podía ganar. El gran factor que estuvo detrás de moderar la transición en toda su etapa inicial fueron las encuestas. Los intelectuales moderaron a la clase política en gran medida a través de las encuestas» (28 de febrero de 1991).

La intelectualidad también tuvo un rol protagónico en lograr que la oposición pensara detenidamente en las formas de colaboración si se decidía participar en el plebiscito. Recuerda Eugenio Tironi: «Un paso fundamental fue generar el concepto de concertación. Históricamente, las coaliciones en Chile se basaban en la idea de unidad; es decir, de compartir principios, ideologías y programas... [Nosotros propusimos] colaborar en torno a un objetivo mínimo: el triunfo del No. Ese sería nuestro único compromiso... Eso sería mejor porque la acción común en torno al No atraería a un espectro más amplio de votantes. La unidad no era funcional a nuestro objetivo» (19 de diciembre de 1990).

El debate fue fuerte. Se discutió si la coalición opositora debía tener un carácter amplio o restringido, o si había que ponerse de acuerdo en «la trilogía» antes del plebiscito. En base a su propio análisis, la intelectualidad impuso el argumento de conformar una coalición amplia en torno a un solo objetivo: derrotar a Pinochet. Continúa Tironi: «Ese fue el gran debate con la Democracia Cristiana, de alguna forma, porque era el sector que decía que antes de ir unidos al No había que consensuar un programa y un candidato. Nosotros dijimos que, desde nuestra posición, la cuestión era exactamente al contrario. Pongámonos de acuerdo exclusivamente en el No y que lo demás quede abierto, porque así podremos sumar a más gente. Mientras más distintos seamos, más votantes se sumarán a este objetivo común. Aunque se me acuse de falsa modestia, o de no tenerla, yo creo que las sesiones de análisis que hicimos entre agosto y diciembre de 1987 influyeron mucho en Genaro [Arriagada], en el Comité Técnico, en [Gabriel] Valdés, en el mismo [Patricio] Aylwin, en Ricardo Lagos».

Para la intelectualidad, traspasar estas nuevas ideas a la clase política se hizo un deber. A través de un complejo proceso de encantamiento que incluyó traer a consultores políticos estadounidenses, hacer almuerzos de trabajo con dirigentes, elaborar documentos especializados y, en general, infiltrar los procesos políticos, logró entablar con una dirigencia algo incrédula un gran debate sobre la estrategia de transición. Nunca hubo una invitación de los partidos a hacer estas actividades; lo que el mundo intelectual hizo fue ofrecer información para la cual, en un principio, no había demanda.

Así, la intelectualidad jugó un papel fundamental en hacer que entre fines de 1986 y principios de 1988 la oposición democrática chilena cambiara de estrategia. Entregó nuevas ideas, información, técnicas y

asesoría, y convenció a la clase política de escuchar lo que tenía que decir. La decisión de pasar de la demanda por elecciones libres a participar en el plebiscito la adoptó el mundo político, pero no es menos cierto que el mundo intelectual tuvo un rol protagónico en proponer, informar, justificar y promover esa decisión.

El diseño de la Campaña del No

La coalición conformada el 2 de febrero de 1988 para disputar el plebiscito llegó en un momento relativamente tardío en el escenario de transición del régimen, lo que dejó poco tiempo para organizar una campaña. Por cierto, desde mediados de 1987 que varios partidos de oposición venían llamando a inscribirse en los registros electorales, y algunos ya habían iniciado el trámite de legalización dispuesto en la ley de partidos políticos. Pero el proceso de acordar una estrategia de campaña y la creación de un comando recién empezaba. Aunque el gobierno aún no fijaba fecha, la Constitución disponía hacer el plebiscito hacia fines de año y le bastaba con dar aviso con sesenta días de antelación. Es decir, la Concertación corría el riesgo de tener que disputar un plebiscito a meses de haberse conformado, lo que obligó a pasar rápidamente de impugnar el plebiscito a prepararse para disputarlo con solvencia.

Para ello, los trece partidos de la Concertación (que después fueron dieciséis) crearon un Comando del No dirigido por representantes de las principales colectividades. Esta dirección transformó al Comité Técnico por las Elecciones Libres, el mismo que había aportado a materializar la decisión de participar, en el Comité Técnico por el No, con una misma composición (connotados cientistas sociales) y coordinador (Genaro Arriagada)⁵⁸.

⁵⁸ El Comando del No estuvo dirigido en un principio por Enrique Silva Cimma (Partido Radical), Ricardo Lagos (Partido por la Democracia), Andrés Zaldívar (Democracia Cristiana) y José Tomás Sáenz (Partido Humanista), con Genaro Arriagada (Democracia Cristiana) como secretario ejecutivo. Sáenz fue después reemplazado por Tomás Hirsch. Luis Maira se incorporó después en representación de una coalición de socialistas ortodoxos cuando estos partidos ingresaron a la Concertación. En una etapa posterior de la campaña, el vocero del Comando fue Patricio Aylwin (Democracia Cristiana).

Tras la decisión opositora de hacer en conjunto una sola campaña, el Comando del No asumió toda la responsabilidad por las decisiones de carácter estratégico. Lo notable es que esa responsabilidad la delegó casi enteramente en el Comité Técnico. En lo formal las decisiones estratégicas finales las tomaba la dirección, pero en los hechos esta aceptó prácticamente todas las recomendaciones que hizo el Comité que dirigía Arriagada. De hecho, en aquellas ocasiones en que algún político cuestionaba las recomendaciones, el Comando del No tendía a resolver a favor del Comité⁵⁹. Así, el Comité Técnico –un equipo encabezado por un intelectual-político y dominado por algunos de los mejores científicos sociales del país– se convirtió en el arquitecto de la campaña del No. Su estrategia fue la estrategia de la Concertación, y sus tácticas fueron las tácticas de la Concertación. La campaña la diseñó un equipo compuesto principalmente por intelectuales.

Los protagonistas no dejan de mencionar el extraordinario ascendiente que el Comité Técnico dio a la intelectualidad. En palabras del socialista Enrique Correa, el Comité «lo componían los mejores científicos sociales chilenos y sus propuestas fueron la base de las decisiones que adoptaron los dirigentes políticos» (8 de marzo de 1991)⁶⁰. El líder socialista Hernán Vodanovic agrega que «las dirigencias delegaron en el Comité la función de resolver toda la operativa política... De allí que la importancia de Arriagada [y] de lo que el Comité hacía superara la importancia de los partidos» (15 de marzo de 1991). Por su parte, Arriagada sostiene que «la Secretaría Ejecutiva básicamente le dio a los intelectuales un papel fundamental; muy, muy fundamental. El manejo de la campaña fue altamente técnico» (8 de marzo de 1991).

Las razones para que los dirigentes políticos entregaran al mundo intelectual tan extraordinario nivel de influencia fueron varias: venían de estar marginados durante casi quince años y tenían una limitada capacidad organizacional; su experiencia en materia de campañas políticas estaba obsoleta y se derivaba de condiciones radicalmente

⁵⁹ Arriagada trata el tema de forma indirecta en su prólogo a CIS, *La Campaña del No*. Entre los ejemplos se destacan el no centrar la campaña en las arbitrariedades del pasado sino en un futuro de felicidad («*La alegría ya viene*»), y la decisión de limitar y controlar las apariciones televisivas de dirigentes políticos.

⁶⁰ Correa, Carlos Figueroa y el socialista ortodoxo Ricardo Solari formaron todos parte de la Secretaría Ejecutiva que dirigía Arriagada.

distintas; desde 1983 en adelante habían fracasado miserablemente en sus repetidos intentos por defenestrar a Pinochet; varios venían de las filas intelectuales y mantenían fuertes lazos con la academia⁶¹ y, por último, estaban en la incertidumbre sobre cómo disputar el plebiscito y dispuestos a recibir asesoría sobre técnicas modernas.

En contraposición, en la década anterior, la intelectualidad había alcanzado un alto grado de credibilidad ante el mundo político. Fue por su iniciativa que se trajeron a Chile técnicas modernas de campaña política, fueron ellos quienes convencieron al mundo político de los méritos de los nuevos métodos, y nadie más que ellos sabían cómo llevarlos a la práctica. La clase política, de hecho, no tenía prácticamente ninguna capacidad para definir y aplicar nuevos métodos de campaña. Fue así como, entre 1986 y 1988, la intelectualidad pasó a tener el monopolio de la nueva política. Había creado una demanda para la cual nadie más tenía la oferta.

Otra razón para el gran ascendiente que la intelectualidad tuvo en la campaña fue el escrupuloso cuidado que tuvieron Arriagada y otros en cuanto a respetar el papel y la autoridad de los políticos. En efecto, los intelectuales del Comité se cuidaron siempre de no representar una amenaza. Recuerda Arriagada: «Yo siempre sostuve que el Comité Técnico tenía que distinguir entre autoridad e influencia. Si aparecíamos en los diarios todos los días, los políticos se iban a espantar. No había que aparecer en los diarios. El Comité Técnico tenía su propia influencia, y nosotros teníamos que respetar los ámbitos. El Comité tenía que ser muy influyente, pero un protagonismo público despertaría celos entre los políticos, y por ende... disminuiría su influencia» (8 de marzo de 1991)⁶². Es decir, el mundo intelectual procuró educar al político en lugar de suplantarlo; colaborar antes que competir.

La campaña del No marcó el surgimiento de una tecnocracia política que puso en la palestra una visión moderna y científica de la política. El grueso de la estrategia de campaña no provino de los políticos, sino de los tecnócratas del Comité Técnico. Según Vergara, la dirección del Comando pasó a ser «un canal de comunicación altamente

⁶¹ Dos de los seis integrantes de la dirección del Comando del No –Ricardo Lagos y Luis Maira– tenían una larga trayectoria en docencia e investigación.

⁶² Arriagada emite un juicio similar en su prólogo a CIS, *La Campaña del No*, páginas sin numeración.

eficiente» entre los dirigentes y los «intelectuales técnicos» del Comité. «Los dirigentes tuvieron la sabiduría de apoyarse en este equipo de gente para dirigir todo el proceso de la campaña de 1988. Y ese equipo, si lo piensas bien, eran en su mayoría intelectuales. Ángel Flisfisch, intelectual; Eugenio Tironi, intelectual; Ignacio Walker, intelectual; Genaro Arriagada, entremedio; Manuel Antonio Garretón, etcétera» (28 de enero de 1991)⁶³.

El resultado fue lo que Arriagada denominó la «tecnificación de la campaña»⁶⁴; es decir, una estrategia política cuyas bases estaban más cerca del pragmatismo y el análisis científico que de la ideología o la intuición, en un proceso que pasó a depender principalmente de un conjunto de científicos sociales y comunicadores especializados que no eran políticos. «Los políticos», dice Correa, «ya no tomaban decisiones únicamente en base a sueños u obsesiones, sino también... a encuestas y datos científicos sobre lo que la gente quería, sentía o tenía. Eso fue muy moderno» (8 de marzo de 1991). Empezaba a echar raíces la función de la consultoría política.

Una manifestación de esta nueva mirada fue la decisión expresa de, en lugar de denunciar las tropelías del régimen militar, impartir a la campaña un tono optimista y positivo. Esa decisión se fundamentaba en entrevistas colectivas focalizadas que mostraban que el temor y la inacción entre la gente era tal, que muchos que se oponían tajantemente a Pinochet podrían no ir a votar en el plebiscito. «La estrategia del No consistió básicamente en formular mensajes y organizar eventos que, en lugar de reforzar las tendencias conflictivas y desintegradoras que habían dominado por años a la sociedad chilena, daban respuesta a un deseo reprimido de reconciliación y cohesión social»⁶⁵.

Esta nueva mirada iba a contrapelo de las presunciones y reflejos condicionados de muchos políticos. Recuerda Vodanovic: «La izquierda y otros sectores tradicionalistas querían una campaña de denuncia. Y muchos, SUR especialmente, dijeron que no; que lo que la gente

⁶³ Al respecto, las mejores fuentes de información son CIS, *La Campaña del No*; Tironi, *La invisible victoria*; y Sunkel, «Usos políticos de las encuestas». Véase también Americas Watch, *Chile*.

⁶⁴ Arriagada en prólogo a CIS, *La Campaña del No*, páginas sin numeración.

⁶⁵ Eugenio Tironi en *ibíd.*, p. 13.

quería era alegría, esperanza, seguridad, pluralismo y reconciliación» (15 de marzo de 1991).⁶⁶ Aunque la mayoría parecía estar por el No, no quedaba claro cuántos estaban dispuestos a votar. «Los chilenos tienen necesidad de un futuro» –concluía Tironi después de las primeras entrevistas colectivas hechas con Sawyer/Miller en 1987–, «pero los angustia la posibilidad de que este reavive los traumas del pasado»⁶⁷.

Así, la campaña resistió el impulso de muchos líderes políticos de poner el acento en conflictos y recriminaciones, optando en su lugar por resaltar lo positivo. El objetivo central fue «vencer una actitud de resignación que nacía del temor y el escepticismo, para que las personas pudieran actuar de acuerdo a sus opiniones»⁶⁸. Se agregaron algunos temas propuestos por los políticos, pero con bajo perfil y en términos que daban cuenta del temor al conflicto que manifestaba el electorado⁶⁹. La campaña buscó principalmente generar en el votante un estado de ánimo optimista, poniendo el acento en la alegría y felicidad que traería una victoria del No. El lema de campaña fue *La alegría ya viene*.

Otra manifestación de esta nueva mirada fue la estrategia de convencer a la masa opositora de inscribirse en los registros electorales. Un sondeo del CIS hecho en abril de 1988 mostró que la inscripción no superaba el 59% de los partidarios del No, frente al 79% de los partidarios del Sí. Es decir, si el plebiscito se hubiese hecho en abril, lo más probable es que habría ganado el Sí. El sondeo mostró, además, que la diferencia la daba fundamentalmente la subinscripción en la juventud urbana. El CIS rápidamente hizo una serie de entrevistas colectivas que revelaron que la juventud urbana se mostraba presa de una profunda resignación que la hacía refugiarse en una especie de «pensamiento mágico» que la predisponía a oponerse al régimen a través de la lucha armada, pero no a través de las urnas. El Comité concluyó que había que hacer un esfuerzo especial para convencer a este grupo de inscribirse e hizo llamados que destacaban la oportunidad histórica de derrotar a Pinochet en el plebiscito y el carácter «heroico» de ello. Esa

⁶⁶ Los colaboradores de SUR tuvieron un rol protagónico en el Comité Técnico.

⁶⁷ Tironi, *La invisible victoria*, p. 24.

⁶⁸ Eugenio Tironi en CIS, *La Campaña del No*, p. 13.

⁶⁹ Este punto se desarrolla en Sunkel, «Usos políticos de las encuestas», pp. 41-44.

labor rindió frutos y la inscripción de la juventud urbana pronto se puso a la par del resto del país⁷⁰.

Las encuestas y entrevistas colectivas también permitieron caracterizar a segmentos específicos del electorado, enfocarse en aquellos cuya intención de voto estaba en duda, y generar un mensaje acorde a cada cual⁷¹. El Comando del No pudo así hacer un seguimiento del nivel de apoyo y concentrar recursos donde hacían falta. Esto demostró ser particularmente importante para ganarse a los indecisos, los que hasta poco antes del plebiscito sumaban un tercio del electorado. El CIS determinó que este grupo estaba mayoritariamente compuesto por mujeres con niveles relativamente bajos de educación formal, pero además que había otros dos subsectores –mujeres de mejor nivel educativo y hombres en general– que tenían mayores probabilidades de votar No y, por ende, ameritaban prioridad. Se determinó también que el principal obstáculo para ganarse a esos subsectores era la imagen de división, inoperancia y sectarismo que se proyectaba. Esto motivó a la oposición a focalizarse en esos subsectores a través de modificar la campaña a nivel simbólico para dar una imagen de unidad, organización y moderación. Estudios posteriores demostraron que el esfuerzo había dado buenos resultados⁷².

Otra expresión más de la nueva mirada fue la campaña televisiva del No, manejada por un comité voluntario compuesto principalmente por científicos sociales y creativos de las agencias de publicidad de Santiago. Pese a que el régimen concedió un acceso muy limitado (una franja de 15 minutos a las 23 hrs. durante el mes previo al plebiscito), la mayor parte de los analistas concuerdan en atribuir a los *spots* televisivos del Comando del No un papel fundamental en la victoria. De hecho, sondeos posteriores calificaron a la franja del No como ampliamente más creíble, entretenida y positiva que la del Sí⁷³.

⁷⁰ Sobre resultados de las encuestas, véase *ibíd.*, pp. 27-28. Este análisis se presentó en un documento interno de campaña. Véase CIS, «Esperanza: Orientaciones ante el problema de la sub-inscripción de la juventud urbana» (1988, fotocopia); resumido posteriormente por Eugenia Weinstein en CIS, *La Campaña del No*, pp. 19-25.

⁷¹ Véase Vergara en CIS, *La Campaña del No*, pp. 15-18; y Tironi, *La invisible victoria*, pp. 32-34.

⁷² Sobre los subgrupos, véase CIS, «La demanda de los indecisos» (1988, fotocopia). Sobre los estudios de seguimiento, véase Martínez en CIS, *La Campaña del No*, pp. 27-34.

⁷³ Véase Tironi, *La invisible victoria*, pp. 37-44; CIS, *La Campaña del No*, pp. 87-132; y Roberto Méndez, Óscar Godoy, Enrique Barros y Arturo Fontaine Talavera, «¿POR QUÉ GANÓ EL NO?» *Estudios Públicos* N° 33 (1989): pp. 83-134.

Los *spots* del No eran simples, creativos y enormemente eficaces. Recurrían a imágenes claras y dinámicas más que a la información verbal; evitaban los mensajes encendidos y agresivos, incluso mientras se recibían fuertes ataques desde la franja del Sí. Optaban por poner énfasis en la dignidad, orden y alegría que vendrían cuando ganara el No. En primera instancia, mostraban solo a gente y escenas de la vida cotidiana, prescindiendo por entero de los políticos. Cuando a mediados de la campaña empezaron a figurar algunos dirigentes, sus apariciones se hicieron de modo tal de contrarrestar los sentimientos negativos que las entrevistas focalizadas demostraban evocar en los votantes⁷⁴. En general, el tono de la campaña reflejó más la cultura televisiva que la cultura política tradicional. Muchos *spots* del No ni siquiera tenían un mensaje político explícito, recurriendo más bien a escenas y símbolos que daban sutilmente cuenta de las inquietudes cuya existencia habían revelado las encuestas del CIS.

Como es de imaginarse, esta forma de hacer las cosas generó malestar en algunos dirigentes. Se dice que Ricardo Lagos, por ejemplo, habría dicho que la franja del No podría ganar un premio en el Festival de Cannes pero perder el plebiscito, mientras otros reclamaban un estilo más agresivo y explícitamente político. Estas inquietudes se resolvieron a través de negociaciones a nivel de la dirección del Comando y de modificaciones puntuales, pero lo medular se mantuvo⁷⁵. Como dice Vergara, la función siguió estando a cargo del mundo intelectual: «El mes de franja televisiva fue muy decisivo, y estuvo manejado por intelectuales de la talla de Eugenio Tironi, Juan Gabriel Valdés y Javier Martínez. Y esto se hizo, para ponerlo en términos algo extremos, a pesar de los partidos políticos. Hubo una pugna entre los partidos por interferir y, muy sabiamente, las cúpulas se mantuvieron firmes en su decisión de depositar su confianza en este grupo de intelectuales» (28 de enero de 1991).

Las nuevas técnicas de campaña rindieron frutos: el 5 de octubre de 1988 la oposición ganó el plebiscito con el 54,7% del voto popular. La victoria dio por tierra con los planes del régimen de quedarse en el poder ocho años más y obligó a realizar las elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas de diciembre de 1989 donde se eligió a

⁷⁴ Tironi, *La invisible victoria*, p. 42.

⁷⁵ Sunkel, «Usos políticos de las encuestas», pp. 43-44.

Patricio Aylwin para encabezar un nuevo gobierno democrático. Además, convenció al régimen de acceder, a principios de 1989, a una serie de reformas que morigeraron parcialmente el carácter autoritario de la democracia prevista en la Constitución del 80. La transición democrática ocurriría de forma más rápida y completa de lo que el régimen jamás imaginó. Además de diseñar una campaña ganadora, el mundo intelectual cambió fundamentalmente la forma de hacer política en Chile.

Reflexionando sobre el rol del mundo intelectual –y político– en esta experiencia, Arriagada destaca el quiebre con los estereotipos tradicionales. En lugar de centrarse en temáticas demasiado complejas o abstractas para el votante promedio –como sería de esperar–, la intelectualidad hizo exactamente lo contrario: redujo la estrategia a sus términos más simples y acercó al mundo político a los problemas concretos de la gente. «Fueron los intelectuales los que más lucharon contra los ideologismos y el voluntarismo». En lugar de tratar de convencer con argumentos lógicos, privilegiaron lo no racional; los sentimientos de temor, apatía y aislamiento que se habían instalado en el votante. «Curiosamente, los papeles se invirtieron. Fueron los políticos quienes mostraron mayor interés en un debate racional, mientras la intelectualidad ponía el acento en factores fundamentalmente motivacionales»⁷⁶.

Fue este un período en que los intelectuales trascendieron su rol meramente académico y empezaron a conducirse como políticos. Pero no de la forma tradicional, sino dando nuevo contenido al rol político, complementando ideología con sicología e intuición con encuestas. Aportaron el impulso y el vehículo para introducir en el país métodos modernos de hacer campaña política. Después de eso, la política chilena no volvería a ser la misma.

⁷⁶ Arriagada en prólogo a CIS, *La Campaña del No*, páginas sin numeración.

Conclusión

Yo soy otro de los que creen que el intelectual tiene que subvertir constantemente, dar testimonio de la miseria del mundo, ser provocador siendo independiente, rebelarse contra todas las presiones y manipulaciones abiertas y encubiertas, ser el mayor escéptico de los sistemas, del poder y su conjuro, ser testigo de su mendacidad. Por esta misma razón, un intelectual no cabe en ningún rol que se le pueda asignar ni se le podrá nunca hacer caber en ninguna de las historias escritas por los vencedores.

– VÁCLAV HAVEL, *Disturbing the Peace*

Nuestra misión no es gobernar o hacer política. [...] Nuestra primera y más importante función, la razón por la que el pueblo nos necesita y sustenta, es la de mantener la pureza de todas las fuentes del saber.

– HERMANN HESSE, *El juego de abalorios*

La importancia del mundo intelectual

Claramente, la intelectualidad está plenamente capacitada para desempeñar papeles importantes en las transiciones democráticas. En Chile, las múltiples actividades que realizó durante casi diecisiete años de gobierno autoritario el mundo intelectual –principalmente científicos sociales que operaban desde una red de centros privados de investigación–, contribuyeron a acelerar notablemente la transición a la democracia. Primero dio acogida al pensamiento opositor y encabezó la enérgica crítica al pensamiento opositor que más tarde produciría una izquierda democrática y un centro más tolerante y flexible. Luego criticó al régimen cuando el mundo político no lo podía hacer, y proporcionó a la clase política la información y el análisis que fueron esenciales para dar forma a una visión más realista de la transición democrática. Cuando la política abierta volvió a ser posible, ayudó a los

distintos bandos opositores a superar sus ásperas divisiones, creando condiciones para formar la coalición que luego derrotaría a Pinochet en el plebiscito. Tomó la iniciativa para proponer cambios estratégicos fundamentales y participó directamente en el proceso de transición, trayendo a Chile nuevos métodos de campaña y convenciendo al mundo político de que había que sacarles partido. Y por último, aprovechó su credibilidad y capacidad de análisis para diseñar la campaña que ganó el plebiscito de 1988. En suma, el mundo intelectual tuvo en Chile un papel más importante que en cualquier otra transición democrática de la historia latinoamericana reciente.

Cierto es que en Chile había una Constitución que fijaba un cronograma de transición a todo evento, si bien despacioso, y a una democracia seriamente restringida. Incluso de haber ganado el plebiscito de 1988, durante los siguientes ocho años Pinochet habría debido compartir al menos una cuota de poder con un Congreso dominado por gente de su confianza. En 1997, las elecciones generales para presidente y la mayoría del Congreso le habrían dado al país un régimen nominalmente democrático, aunque plagado de rasgos autoritarios.

Pero no es menos cierto que, a partir de 1980, el tema en Chile no fue si habría retorno a la democracia, sino cuándo y cómo. El debate giraba en torno a si sería posible obligar a Pinochet a entregar el poder en 1989 o si seguiría gobernando hasta 1997; si se podrían eliminar los rasgos autoritarios de la Constitución; o bien si la oposición, en caso de llegar al poder, sería capaz de gobernar democráticamente y con solvencia. El singular papel de la intelectualidad chilena fue procurar que la democracia volviera más temprano que tarde, transformando el pensamiento y la conducta opositoras de formas que profundizaron su compromiso con una democracia pluralista. Es decir, el mundo intelectual marcó de manera fundamental el tipo de transición que tuvo Chile.

Al hacerlo, la intelectualidad asumió funciones que a otros actores les estaban vedadas o que solo habrían asumido de forma algo más gradual o quizás menos idónea. La Iglesia, por ejemplo, llegaba habitualmente al límite de su capacidad en su oposición a la dictadura, lo que le generaba tensiones internas y ataques externos. El mundo político y los partidos estuvieron proscritos hasta 1988; la poca actividad política que fue posible a partir de 1983 se hacía ateniéndose a las consecuencias. Otros actores de la sociedad civil, como el movimiento

sindical, estaban disueltos y dispersos. Cuesta imaginarse a alguno de estos actores asumiendo un rol de alguna trascendencia, al menos antes de 1988. En Chile se había creado un vacío político. Algo había que hacer, y quien acudió al llamado fue el mundo intelectual.

Estas conclusiones dan cuenta de una temática –el rol de la intelectualidad en las transiciones democráticas– que la literatura académica pocas veces ha abordado. La mayoría de los análisis remiten a regímenes autoritarios que tomaron la iniciativa para instituir transiciones a la democracia, y más en general, al papel de las élites en el tránsito de autoritarismo a democracia. Pero las élites en cuestión son, en su mayoría, militares, políticas o económicas. Las élites intelectuales prácticamente nunca aparecen.

Sin embargo, de nuestro análisis de la experiencia chilena se desprende que la intelectualidad puede jugar un positivo papel en las transiciones democráticas; que no tiene motivos para quedarse en segundo plano, como si por formación u orientación estuviese inhabilitada para la acción política. Su producción no tiene por qué restringirse al análisis abstracto y las fórmulas complejas; puede hacer aportes sólidos y constructivos que aprovechan su fortaleza intelectual para satisfacer las demandas de la vida política. En síntesis, no se justifica el estereotipo del intelectual como un actor irrelevante para el cambio social en los países en desarrollo.

Factores que facilitan el rol político del mundo intelectual

En este libro hemos analizado estos roles y los factores que los hicieron posible. Postulamos que a lo largo de quince años la intelectualidad marcó la transición chilena a muchos y muy distintos niveles, asumiendo en ocasiones papeles muy distintos a los tradicionalmente asociados con la academia. No hay un solo factor que dé cuenta por sí solo de tan extraordinaria conducta; el impacto del mundo intelectual en el caso chileno fue producto de una excepcional conjunción de compromiso, formación, iniciativa y circunstancias. Fue esa suma de factores –no siempre presente en otras realidades, y que muchas veces trasciende el control de la propia intelectualidad– lo que produjo tan extraordinario resultado. Chile probablemente constituye un caso extremo de todo lo que el mundo intelectual puede lograr cuando se

dan las condiciones; un referente contra el cual medir la actuación de la intelectualidad en regímenes autoritarios.

De hecho, una de las conclusiones más claras de este estudio es que la intelectualidad no asume automáticamente estos papeles. Los intelectuales no son, a fin de cuentas, actores políticos naturales. Suyo es el mundo de la crítica y las ideas, no el de la práctica política; históricamente, su relación con el príncipe ha estado marcada, como dice Coser, por «la desconfianza y la incompreensión mutuas»¹. Su impacto en política ha sido más diferido y oblicuo que directo e inmediato, y cuando ha sido directo y mayor, ello ha sido producto de una extraordinaria sumatoria de circunstancias.

En la transición chilena hubo cuando menos tres grandes factores que explican la importancia del papel que le cupo a la intelectualidad: la cultura política, el contexto autoritario, y casi treinta años de inversión en las ciencias sociales académicas.

En efecto, la cultura política chilena sentó las bases para que la intelectualidad asumiera roles trascendentales. Es un hecho histórico que la política en Chile había tenido un carácter más intelectual que en otros países de América Latina. Era común que el mundo político recurriera al intelectual en busca de ideas, y habitual que la intelectualidad abordara los grandes temas políticos del momento. En ocasiones, cada uno buscó la aprobación del otro. Esa relación se había intensificado antes del golpe, época en que la intelectualidad contribuyó a agudizar el debate ideológico entre los distintos bandos políticos. Esto la llevó a sentirse en parte responsable por el quiebre institucional que sobrevino. Cuando después del golpe la intelectualidad sintió la necesidad de abrirse hacia la política, facilitó el proceso la afinidad histórica que mantenía con esta.

La carga ideológica en la política chilena también facilitó el rol del mundo intelectual. El quiebre democrático de 1973 tenía sus orígenes en un conflicto de ideas; en una pugna entre cúpulas partidarias que propiciaban soluciones utópicas e incompatibles entre sí a los problemas sociales. La polarización, radicalización y rigidez ideológica de las élites políticas chilenas estuvieron entre las principales causas del quiebre democrático y fueron uno de los mayores obstáculos

¹ Coser, *Men of Ideas*, p. 136.

al restablecimiento de la democracia. La tarea después del golpe, por ende, tenía un carácter esencialmente intelectual. Dice Foxley: «Lograr que esa clase política y sus intelectuales se miren críticamente a sí mismos en sus roles pasados constituye quizás un paso fundamental para construir un sistema político verdaderamente democrático y perdurable en el tiempo»². Fue esta una labor que la intelectualidad tenía especiales condiciones para afrontar. Si los obstáculos a la transición hubiesen tenido un carácter menos intelectual y más exclusivamente racial, étnico o económico, probablemente el mundo intelectual hubiese tenido dificultades para cumplir un rol más eficaz. Es decir, su capacidad de jugar un rol protagónico en la transición estuvo condicionada por factores culturales.

Un segundo gran factor fue el contexto autoritario. Insospechadamente, las condiciones impuestas por el quiebre democrático y el gobierno autoritario viabilizaron el rol protagónico que el mundo intelectual tuvo en la transición. En efecto, el trauma y la represión que acompañaron al régimen militar abrieron a las élites opositoras hacia la autocrítica y las nuevas ideas, disminuyeron su compromiso con la política convencional y sentaron las bases para posteriores cambios de actitud y conducta. La clase política del país –y en cierta medida también la *intelligentsia*– había fracasado espectacularmente y era blanco de una brutal represión. «Si 1973 hubiese sido menos traumático», anota un observador, «la posterior conducta conciliadora no habría tenido las mismas dimensiones» (Ffrench-Davis, 3 de febrero de 1992). Un mundo intelectual que planteaba cambios había encontrado un público abatido e impresionable.

Más aún, la campaña de erradicación de la política emprendida por el régimen militar creó un vacío que la intelectualidad podía llenar, y que se proscribiera la política pero se tolerara la actividad académica otorgó a la intelectualidad disidente una ventaja comparativa. En el país que probablemente tenía la cultura política más fuerte de América Latina, los centros privados de investigación se convirtieron en el único lugar donde estaba permitido hablar de política. Además, se demandó al mundo intelectual asumir roles más políticos en un momento en que casi no había competencia. Paradójicamente, el afán de

² Foxley, *Para una democracia estable*, pp. 131–132.

un régimen libremercadista por restringir la actividad política terminó por dar a la intelectualidad un monopolio temporal sobre la política de oposición.

Es decir, el contexto autoritario fue un factor importante en cuanto creó las condiciones, escogió a los actores y en parte determinó los roles que podrían jugar. Más aún, al quebrantar el orden político establecido, creó la oportunidad para que el mundo intelectual contribuyera al surgimiento de un nuevo orden (por cierto, en otras realidades este contexto podría operar de forma muy distinta; por ejemplo, limitando el rango de posibilidades o incluso impidiendo totalmente el accionar del mundo intelectual).

El tercer gran factor fueron los más de treinta años de inversión de recursos en la modernización de las ciencias sociales del país. En efecto, fueron los científicos sociales –y no otros intelectuales– quienes tuvieron un papel decisivo en la transición chilena. Prácticamente todos eran sociólogos, economistas o politólogos –virtualmente no hubo artistas, escritores, científicos o filósofos– y casi todos con posgrados recientes en instituciones del extranjero. Es decir, la transición chilena no la forjó un conjunto amplio de la intelectualidad del país, sino un grupo acotado de calificados científicos sociales formados en el extranjero.

Por cierto, las transiciones a la democracia son en sí mismas fenómenos sociales, por lo que naturalmente tienden a atraer a científicos sociales. Es de suponer, por ende, que las cualidades de artistas y científicos sean de menor relevancia para las tareas de una transición democrática. De hecho, la experiencia chilena muestra que los científicos sociales poseen una sumatoria de inquietudes y cualidades que guardan especial correspondencia con los múltiples desafíos que plantea un tránsito del autoritarismo a la democracia. En igualdad de condiciones, no es de extrañar que su impacto sea mayor.

Ahora bien, el caso chileno fue significativo precisamente porque el trato especial que recibieron las ciencias sociales hizo que no hubiera tal igualdad de condiciones. En efecto, desde el año 1960 se habían hecho fuertes inversiones que produjeron lo que bien puede haber sido el mayor colectivo de científicos sociales de la región. En las principales universidades de Chile, se establecieron programas muy bien equipados, se envió a cientos de alumnos a estudiar en el extranjero y, además, se les crearon nuevos puestos de gobierno. Las ciencias sociales fueron

claramente valoradas en un esfuerzo que no solo las modernizó, sino que sin duda atrajo a algunos de los mejores talentos jóvenes del país.

Tras el golpe de 1973, y durante casi veinte años, la cooperación extranjera ayudó a mantener a estos calificados científicos sociales en el país, pese a la represión del régimen militar. La red de centros académicos que surgió durante la dictadura fue fundamentalmente una red de científicos sociales. Fueron los sociólogos, economistas y científicos políticos disidentes –y no así otros sectores intelectuales– quienes recibieron financiamiento del exterior para establecer lo que fue una verdadera academia paralela y autónoma. Fue así como en los años 70 y 80 se protegió –e incluso aumentó– la inversión en ciencias sociales que venía desde los años 60. Ningún otro conjunto de intelectuales opositores se vio tan favorecido por un período tan prolongado (el único que recibió un respaldo comparable, antes y después del golpe, fueron los Chicago Boys, cuya disposición a trabajar con la dictadura les permitió revolucionar la política económica).

Por añadidura, las ciencias sociales chilenas se hicieron notablemente cosmopolitas. Los científicos sociales que más tarde jugaron un papel fundamental en la transición tenían en común una importante experiencia internacional adquirida a través del exilio, de estudios en el extranjero, o de ambas cosas³. Tanto antes como después del golpe, varios cientos de académicos jóvenes fueron becados para hacer estudios de posgrado fuera de Chile, experiencia que les dio acceso a nuevas ideas y perspectivas y contacto directo con otras formas de organización social. Estudiaron política y economía en algunas de las mejores universidades de Europa y Norteamérica; conocieron las ideas contemporáneas sobre democracia, transición democrática y crecimiento económico, y establecieron fuertes relaciones personales y profesionales con sus pares del extranjero. Muchos conocieron de primera mano la socialdemocracia europea y el «socialismo real» de Europa Oriental. En lugar de quedarse fuera, la mayoría prefirió volver a Chile,

³ El recurso al exilio masivo durante más de diez años por parte del régimen de Pinochet permitió a muchos políticos de oposición conocer de cerca las experiencias de otros países y recibir fuerte apoyo de parte de gobiernos y partidos extranjeros. Algunos de ellos, por cierto, eran intelectuales a la vez que políticos. Véase Angell, «International Support for the Chilean Opposition»; y Angell y Carstairs, «The Exile Question».

atraídos en parte por las perspectivas profesionales que les ofrecía esta activa red de centros privados de investigación.

Es decir, a lo largo de casi treinta años, las ciencias sociales académicas en Chile se vieron notablemente potenciadas respecto de otras disciplinas y del mundo político. Sumándose al importante nivel de inversión recibido antes del golpe, luego de este la cooperación extranjera consideró prioritario continuar esa labor. Esto permitió conformar y mantener en funciones a un núcleo autónomo de profesionales modernos, comprometidos y capaces de asumir un rol protagónico en los asuntos del país. Dejaron de ser «los intelectuales pasivos» de que hablaba Moulián, aquellos que se limitaban a adaptar y distribuir el discurso de la clase política. Se hicieron independientes, creativos y críticos y pasaron a dirigir instituciones que dieron refugio, análisis, diálogo y crítica a la oposición y que así intelectualizaron la política. Por ende, no es de sorprender que hayan sido principalmente los científicos sociales, más que la intelectualidad en general, quienes tuvieron un rol protagónico en la transición chilena a la democracia. Después del golpe la política encontró refugio en la academia, en especial en las ciencias sociales.

Así, la cultura política del país, el contexto autoritario y la excepcional fortaleza de las ciencias sociales académicas, fueron todos factores fundamentales para que la balanza del poder se inclinara temporalmente desde el mundo político al intelectual, otorgándole la «reconocida autoridad frente a un sector organizado de la sociedad» que necesitaba para tener un impacto ante el régimen⁴. Igualmente importantes fueron el compromiso, visión e iniciativa de un grupo de destacados científicos sociales. Si esta conjunción de factores hubiese sido diferente, la forma y magnitud de la influencia intelectual probablemente también habrían sido diferentes.

La utilidad política de la perspectiva académica

Estas conclusiones permiten plantear que la intelectualidad no necesita dejar de lado la perspectiva académica tradicional para tener un rol positivo en las transiciones democráticas, o incluso en la política en

⁴ Burton, Gunther y Higley, «Introduction», p. 9.

general. En el caso chileno, hay que destacar la conducta del mundo intelectual durante la primera década después del golpe. Sus actividades eran, en términos generales, totalmente académicas: recopilaban datos, los analizaban, publicaban los resultados y los discutían en seminarios, todo ello empleando las teorías, métodos y cánones de la academia. Fueron pocos los que en este período abandonaron su rol académico para ingresar de lleno a la política.

Ello no obstante, su labor tuvo un gran peso político. En una sociedad que prohibía la crítica y el pensamiento independiente, el mundo intelectual les abrió sus puertas. Tomó la iniciativa para analizar, en conjunto con el medio opositor, «las causas de la derrota», y reconocer su propia responsabilidad en el quiebre democrático. Dio inicio al proceso de aprendizaje que más tarde permitió replantear el pensamiento político opositor, e hizo estudios que ofrecieron una sólida crítica de las políticas del régimen.

Incluso después de las protestas de 1983, cuando se abrieron nuevos espacios para la política y algunos intelectuales dejaron la academia para asumir un rol político más formal, los que se quedaron hicieron algunos de los más importantes aportes políticos. En efecto, contribuyeron a restablecer la confianza y el entendimiento entre los bandos opositores; ayudaron al mundo político a entender el carácter del régimen autoritario y de los grandes cambios que se operaban en el país; mostraron a los actores políticos el camino seguido por otras transiciones democráticas, e hicieron estudios de actitudes políticas que llevarían a la clase política a modificar su forma de actuar.

Estas importantes consecuencias políticas de la actividad académica dependieron en gran parte del hecho de que el mundo intelectual estaba haciendo lo que sabía hacer. El que su actividad estuviera sólidamente arraigada en los intereses y cánones de la academia potenció su credibilidad y la calidad de su labor. Incluso, cuando asumieron el rol de la crítica política, como lo hizo CIEPLAN de manera tan notable a partir de 1978, los intelectuales se presentaron como académicos, no como políticos. Fue su posición en tanto intelectuales –su condición y rol de científicos– lo que les permitió cumplir la función política de criticar al régimen. De haber abandonado su vocación académica, habrían perdido también su eficacia política.

Con todo, entre el mundo intelectual y la política surgió un nuevo tipo de relación. No eran estos intelectuales de torre de marfil, sino

que –usando el término de Boeninger– «se infiltraron» en la política a todo nivel. Algunos se convirtieron en actores; la mayoría se mantuvo «dos pasos detrás del quehacer diario», en roles menos formales y directos (Boeninger, 29 de enero de 1991). Otros, como el propio Boeninger, tuvieron roles intelectuales y políticos a la vez, dificultando la distinción entre uno y otro. Surgió un «vínculo orgánico entre intelectuales y política», caracterizado no solo por «intelectuales que saben, diciéndole lo que saben a los políticos que hacen», sino por una fusión de ambos (Puccio, 17 de enero de 1991). El mundo intelectual se vinculó con el político dándole empleo a algunos, invitando a talleres a otros, transformando su discurso y buscando formas de dar relevancia política a la labor académica. Se convirtieron en intermediarios entre la academia y la política; en transgresores que no vacilaron en cruzar la frontera para hacer un aporte en terreno hasta entonces desconocido.

La experiencia chilena da a entender que el mundo intelectual hace su mayor aporte a la transición democrática, y a la política en general, cuando se sustenta firmemente en su rol académico. Una cierta independencia puede ser decisiva para que una actuación en política sea productiva. Dicho de otra forma, lo que distingue al intelectual del político –su perspectiva académica– puede ser un factor primordial a la hora de promover la democratización. De ser así, entonces lo que importa es la calidad de la relación entre intelectuales y políticos, no una decisión del mundo intelectual de renunciar a la academia para pasarse a la política.

En Chile, tras el golpe de 1973, se aplicaron a la política los procedimientos y cánones de la ciencia, y no a la inversa. No se politizó la academia, sino que se intelectualizó la política. Ese giro en 180 grados trajo a la política nuevas ideas y la sometió a criterios diferentes. Un tema que subyace a la experiencia chilena es el paso de una acción política centrada en la emoción, la ideología, el populismo y el carisma a una acción centrada más en la razón, el análisis, el pluralismo y el juicio informado, valores todos que tienen sólidas raíces en la academia moderna. Los intelectuales impulsaron ese tránsito no a través de desplazar a la clase política, sino más bien de infiltrarla, educarla y convencerla. Lo decisivo no fue que el mundo intelectual abandonara la academia, sino las relaciones constructivas que desarrolló con el mundo político.

La diversidad de roles posibles

De estas conclusiones también se desprende que la intelectualidad dispone de un abanico notablemente amplio de opciones de relación con el mundo político. Algunas son puramente académicas; otras combinan funciones académicas y políticas de formas poco convencionales, y unas cuantas son predominantemente políticas. Las posibilidades varían según las circunstancias, la iniciativa y la disposición del mundo intelectual a adaptarse. Lo que es claro es que la relación entre política y academia no siempre es dicotómica. No es obligatorio optar, al menos durante períodos de transición democrática, entre ser actor intelectual o actor político. Quienes circulan a ambos lados de la frontera pueden perfectamente ser quienes hagan el mayor aporte.

Los roles que jugó la intelectualidad en la transición chilena fueron evolucionando en el tiempo: productores de conocimiento, asesores de los actores políticos, articuladores entre el mundo político y la sociedad, acción política directa. Evolucionaron, además, desde funciones de reflexión y crítica general (el rol del pensador autónomo) a la entrega de conocimientos especializados en materias acotadas (el rol del tecnócrata). Algunos de estos roles, como ayudar a la oposición a repensar la política, tuvieron un carácter fundamentalmente intelectual y apelaban a capacidades académicas tradicionales. Otros, como la certera crítica del régimen que hizo CIEPLAN a fines de los 70, dependieron de circunstancias autoritarias que dieron al mundo intelectual una ventaja comparativa. Otros más, como unificar a los bandos opositores e introducir métodos modernos de hacer campaña política, fueron producto de la visión de determinadas personas.

Algunos intelectuales tuvieron múltiples papeles; otros solo uno o dos. En la mayoría de los casos, la incursión en el terreno político fue temporal; un cruce de fronteras que ciertas circunstancias extraordinarias hicieron necesario y hasta facilitaron. Ángel Flisfisch estima que la época de principios del año 1987 puede haber marcado un punto de inflexión tras el cual la incidencia de la intelectualidad empezó a retroceder a medida que el mundo político recobraba la capacidad de actuar (17 de enero de 1991). Para otros el tránsito fue permanente, fuera en respuesta a la creciente demanda por tecnócratas en política, o bien por una decisión consciente de convertirse en profesionales de la política.

La tónica de la experiencia chilena fue la capacidad del mundo intelectual de adaptar su conducta a circunstancias en constante evolución. La intelectualidad de izquierda, conforme con la mayor necesidad de su sector de redefinir su relación con la democracia, se centró en el pensamiento político. La intelectualidad de centro tuvo más importancia en la reformulación de la política económica y otros temas tecnocráticos. Cuando los políticos no podían criticar el régimen, la intelectualidad dio un paso al frente y asumió ese rol. Cuando la movilización social empezó a perder impulso, entregó contundentes luces sobre sus falencias y ofreció una alternativa pragmática. Cuando llegó la hora de la campaña del No, los intelectuales se convirtieron en operadores políticos⁵.

En este sentido, es esclarecedor comparar la experiencia chilena con las categorías que elaboró Coser décadas atrás. Al analizar la relación entre «los hombres de poder y los hombres de ideas», Coser planteó cinco modalidades fundamentales: los que detentan el poder, los que lo asesoran, los que lo legitiman, los que lo critican, y los que ensalzan las estructuras de poder de otros países en desmedro de las propias. Coser desarrolló cada una de estas relaciones en una serie de estudios de casos históricos⁶.

Lo que cabe destacar en el caso chileno es que ninguna de estas relaciones logra por sí sola caracterizar adecuadamente el papel del mundo intelectual en la transición: en Chile se dieron todas, y de forma notable. En efecto, algunos intelectuales detentaron el poder en cargos políticos formales, primero al interior de los partidos, luego en el régimen democrático. Otros fueron influyentes asesores políticos. A los intelectuales socialistas les cupo un rol protagónico en legitimar tanto el socialismo democrático al interior de la izquierda chilena como la participación en el plebiscito. Los intelectuales fueron críticos de primer orden, tanto del régimen militar como de las estrategias de transición de la oposición, y exaltaron incansablemente las virtudes de las democracias extranjeras en contraste con las violaciones que cometía

⁵ La adaptabilidad de la intelectualidad chilena abarca todo el espectro político. Tras el retorno a la democracia en 1989 la centroderecha imitó a sus adversarios, conformando una serie de centros académicos para enfrentarse al gobierno democrático con alternativas políticas intelectualizadas.

⁶ Coser, *Men of Ideas*, pp. 135–243.

la dictadura militar. Es decir, cada una de las relaciones clásicas que describe Coser fue importante.

Pero el mundo intelectual chileno tuvo como mínimo otros dos roles a los que Coser no hace referencia. Primero, fue el custodio de la política opositora durante los peores años de la represión. Los centros académicos fueron una suerte de refugio donde la oposición se podía reunir, reconocer y aceptar sus falencias, y repensar la política. Fueron de los pocos «espacios de libertad» que existieron y, durante casi diez años, fueron el único espacio para la crítica y el pensamiento independiente. Esta función de custodia fue trascendental en un país donde la política estaba proscrita y los políticos sumidos en la derrota y la desmoralización. Fue posible porque la intelectualidad tuvo mayor capacidad para adaptarse a las condiciones autoritarias y porque le tendió la mano al mundo político, con lo que la política se convirtió temporalmente en una actividad intelectual.

Segundo, al convocar a bandos políticos separados por profundas divisiones, la intelectualidad operó además a nivel psicológico, cumpliendo un papel que fue en parte meditado y en parte el resultado accidental de cientos de seminarios y talleres. Al reunir periódicamente a actores políticos muy diversos en el terreno neutral del análisis académico, el mundo intelectual creó condiciones para que una oposición tradicionalmente dividida pudiera unirse. Ofreció encuentros sociales que levantaron barreras psicológicas junto con las ideológicas; permitió a una clase política atomizada establecer relaciones personales y recuperar la confianza y el entendimiento que habían estado por largos años ausentes de la política chilena, y sin los cuales la coalición de diecisiete partidos que derrotó a Pinochet no habría sido posible. La función de tender puentes, poco habitual para el mundo intelectual, tuvo especial trascendencia debido al encono y la división que habían caracterizado a la política chilena por más de veinte años. Esta función se pudo cumplir principalmente porque la intelectualidad adquirió –temporalmente– el poder de convocar a los bandos en pugna y porque unos cuantos extraordinarios intelectuales se dieron a la tarea de «reconstruir el tejido social y político».

Los períodos de cambios sociales fundamentales pueden dar al mundo intelectual una especial oportunidad para influir en el curso de los acontecimientos. Cuando cambian las capacidades y relaciones normales y se crean nuevas necesidades, se abre la puerta para que

la intelectualidad asuma todo tipo de funciones extraordinarias. Su potencial impacto, sea en su papel tradicional o traspasando fronteras hacia otros roles, se puede ampliar notablemente, aunque sea de manera temporal. En suma, en un proceso de transición democrática, la intelectualidad puede estar particularmente capacitada para asumir una serie de roles tan alternativos como positivos.

El potencial de cambio de las redes académicas autónomas

Estas conclusiones, por último, ponen de relieve el positivo papel que una red de académicos modernos y talentosos puede jugar en la vida nacional, así como la importancia de contar con ellas incluso cuando su real impacto no se pueda dimensionar con anticipación. La transición chilena a la democracia estuvo marcada no por intelectuales, sino por un colectivo intelectual. Los científicos sociales que transformaron la cultura política y modernizaron la tecnocracia política del país, se conocían entre sí y trabajaban juntos. Este colectivo se articuló gradualmente, producto de una comunidad profesional fuerte y autónoma que le aportó formación, instituciones, normas, colegas, debate y contactos internacionales. Esa comunidad, a su vez, se desarrolló a lo largo de treinta años con el sostenido respaldo de donantes nacionales y extranjeros.

Este dinámico colectivo chileno de ciencias sociales fue creado sin ideas preconcebidas en cuanto a su impacto en la transición democrática o su capacidad general de influir en política. Fue una labor que inició el gobierno chileno a fines de los años 50 con el fin de institucionalizar la investigación científica en las principales universidades del país, y que luego atrajo la atención de donantes extranjeros interesados en crear un reservorio de recursos humanos de alto nivel que se hicieran cargo de la política social y económica del país. Ambas partes -gobierno y donantes- privilegiaban no la política, sino las políticas públicas.

Después del golpe, la cooperación extranjera apoyó a los centros de investigación en ciencias sociales como forma de mantener vivo el pensamiento crítico e independiente en un entorno represivo y de tener a mano a tecnócratas calificados para tareas de Estado de alto nivel al retorno de la democracia. Por cierto, no faltaron a quienes también

motivaba su aversión al carácter represivo del régimen de Pinochet, o los que apostaron a que apoyar a cientistas sociales disidentes y sus centros de investigación aportaría a ejercer presión sobre el régimen. Aún así, lo que se financió fue casi exclusivamente investigación académica y análisis de políticas públicas.

Pero una vez establecido, el colectivo chileno de ciencias sociales adquirió un potencial que trascendió sus objetivos originales, convirtiéndose en una suerte de recurso nacional multipropósito capaz de asumir múltiples funciones que dependieron solo de las circunstancias, del financiamiento y de sus propias inclinaciones. Cuando se presentó la oportunidad de apoyar el proceso de democratización, la red de cientistas sociales, que ya tenía la envergadura, la autonomía y la visión necesarias para operar de forma sostenida y gravitante, estuvo a la altura de las circunstancias. En los años 60 y 70, pocos habrían podido imaginar que diez o veinte años después la inversión en el colectivo chileno de ciencias sociales rendiría frutos tan trascendentales para la transición democrática.

Sin duda, el potencial de cambio de las redes académicas autónomas es un tema que amerita mayor atención de los estudiosos de las transiciones democráticas y de la asistencia extranjera interesada en promoverlas. Una inversión sostenida en la creación de un reservorio de cientistas sociales de talento puede cambiar cualitativamente la cultura y tecnocracia políticas de un país. Mantener una masa crítica de intelectuales de alto nivel *in situ* y activa en épocas de gran incertidumbre y peligro puede constituir un importante contrapeso a las fuerzas de la represión y el autoritarismo. Una intelectualidad calificada y con buenos contactos internacionales puede tener un rol protagónico como proveedora de los conocimientos y técnicas que son fundamentales para una oposición democrática a la hora de facilitar una transición. Como queda demostrado en la experiencia chilena, la intelectualidad ofrece una capacidad de creación y liderazgo que puede llegar a ser un recurso formidable cuando se necesita transitar de una dictadura a una democracia.

Índice onomástico

- Abeliuk, René 194
Abugattás, Luis A. 6
Academia de Humanismo Cristiano
 xxiii, 50, 61, 67, 72, 155, 161, 179
 círculo de estudios económicos 149
 como convocante de la oposición 92,
 117
 conformación de 61, 64
 y derechos humanos 146
Acuerdo Nacional para la Transición a la
 Plena Democracia 58, 106, 110, 112,
 139, 141, 163
Adenauer
 Véase Fundación Konrad Adenauer
Agencia de los Estados Unidos para el
 Desarrollo Internacional (USAID) 16
 financiamiento de programas de
 economía 21
 financiamiento de programas univer-
 sitarios 25
Agencia Sueca de Cooperación para la
 Investigación en Países en Desarrollo
 (SAREC) 72
Alessandri, Jorge
 margen de victoria en 1958 37
 tecnócratas en el gobierno 27
Alianza Democrática 58, 105, 106, 109,
 110, 111, 112, 115, 139, 141
 contraste con el MDP 107, 140
Alianza para el Progreso 16, 20
Allanamientos 104
Allende, Salvador 23, 45, 67
 demanda por cientistas sociales en su
 gobierno 27, 36
 falta de apoyo para 46
 gobierna sin negociar 38
 margen de victoria en 1970 37
 y la democracia 43
 y la educación superior 18
Altamirano, Carlos 85
Americas Watch 169, 206
Análisis económico como pretexto para
 el debate político 81, 148, 150
Angell, Alan xxi, 12, 71, 100, 115, 217
Arellano, José Pablo 58
Arrate, Jorge 82, 86, 87, 100, 101, 155
 debate sobre política económica 155
 en Comité de Análisis Político 194
 entra en política 173
 influencia del exilio en 101
Arriagada, Genaro xxi, 11, 38, 44, 49,
 56, 57, 75, 134, 141, 189, 191, 192,
 204, 205, 206, 210
 como intelectual 11, 206
 efectos de la asistencia extranjera 74
 el primer samizdat chileno 56
 en Comité Técnico por el No 198,
 202, 203, 204
 la intelectualidad después del golpe
 54
 los dos Chiles 47
 represión contra la Democracia Cris-
 tiana 114
 sobre estrategia de movilización social
 104, 106, 107, 111, 140, 142
 sobre la Constitución de 1925 37, 38
 sobre las universidades 54

- Asamblea de la Civilidad 110
- Asistencia extranjera a Chile 13, 18, 61, 65, 71, 73, 74, 217, 224, 225
- Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) 170, 171
- Atria, Raúl 57
- Aylwin, Patricio xvii, 2, 57, 58, 63, 146, 174, 195
- candidato presidencial 210
- Comité de Análisis Político 202
- en Comando del No 203
- en Grupo de los 24 59
- en movimiento por las elecciones libres 166, 167
- sobre Constitución de 1980 108
- sobre el plebiscito 172
- Balbontín, Ignacio 57
- Baloyra, Enrique 179
- Banco Mundial 71, 157
- Baño, Rodrigo 132
- Baraona, Pablo 48, 97
- Barrios, Alicia
- sobre centros privados de investigación 61
- sobre intelectuales progresistas 26
- sobre los sociólogos 28, 32
- Barros, Enrique 74, 208
- Barros, Robert 7
- Berlin, Isaiah 28
- Bitar, Sergio xxi, 97
- sobre centros privados de investigación 67
- sobre renovación socialista 88
- y la política económica 155, 158
- y los intelectuales políticos 11, 160
- Boeninger, Edgardo 32, 33, 63, 130, 174
- como político 173
- diálogo político 126
- director del CED 124, 125, 136, 158, 186
- el análisis técnico como crítica política 82
- en Academia de Humanismo Cristiano 61, 63
- encuestas de actitud política 182
- en movimiento por las elecciones libres 166
- en talleres económicos del CED 158
- estrategia de movilización social 138, 142, 143
- Grupo de los 24 59
- incidencia de la intelectualidad en la estrategia opositora 199
- la política y la intelectualidad 1, 220
- modernización de la política 174
- movimiento por las elecciones libres 167
- negociación con las fuerzas armadas 170
- repensando la transición 136
- sobre renovación socialista 87
- Borzutzky, Silvia T. 103
- Botero, Rodrigo
- relación con CIEPLAN 66
- Briones, Carlos
- primer presidente del PS renovado 114
- Bruneau, Thomas 6
- Brunner, José Joaquín xxi, 12, 15, 22, 31, 119, 132
- define al intelectual 12
- división opositora 102
- efectos del financiamiento extranjero 73
- entrevistas colectivas focalizadas
- impacto de las encuestas 201
- impacto de Tironi y Martínez 134
- importancia del CED 128
- incidencia de los intelectuales 176
- la ideología y la política 30, 96
- la ideología y los intelectuales 7, 27
- la sociología en Chile 23
- renovación del pensamiento de centro 94
- sobre centros privados de investigación 61, 66, 67, 68, 76
- sobre el análisis técnico como crítica política 81
- sobre el intelectual revolucionario 36
- sobre el régimen militar 132, 135
- sobre estrategia de movilización social 107, 142, 144
- sobre fuerzas armadas e ideología 57
- sobre la educación superior 18, 19, 54

- sobre la política 173
sobre la renovación socialista 78
sobre los intelectuales y los políticos 34, 78, 86, 87, 118, 134
sobre los sociólogos 28, 31
- Büchi, Hernán 109
Burton, Michael 4, 218
- Campaña del No 7, 163, 173, 185, 191, 192, 195, 198, 203, 204, 205
Campero, Guillermo 115, 132, 184, 186
Camp, Roderick A. 7
Canitrot, Adolfo 6, 33
Carlos Briones
 primer presidente del PS renovado 86
Carstairs, Susan 100, 217
Castillo, Francisco 91, 125, 126, 136, 158, 174, 185
Castillo Velasco, Jaime 91
Cavallo, Ascanio 8, 52, 99, 104, 108, 111, 116, 139, 171, 174, 175, 189
Cavarozzi, Marcelo 6, 41, 170
Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) xxiii, 40, 64, 72, 94, 132, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 195
 como ente convocante 118
 introducción de encuestas de opinión política 177, 179, 200
Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) 54
Centro de Estudios del Desarrollo (CED) xxiii, 82, 91, 123, 158
 como convocante 66, 130
 como integrante del CIS 187, 193, 194
 conformación de 91, 146
 diálogos económicos 157, 159
 nexos con partidos políticos 117
 repensando la transición 136, 137, 146
Centro de Estudios de Planificación Nacional (CEPLAN) 25, 65
Centro de Estudios Económicos y Sociales (VECTOR) xxiii, 66, 80, 156, 161
 como ente convocante 118
 y la política económica 156
- Centro de Estudios Públicos (CEP) xxiii, 119, 122, 123, 147, 181
Centro de Estudios Sociales y Educación (SUR)
 como integrante del CIS 186
 en Comité Técnico por las Elecciones Libres 192
 relaciones con otros centros 92
 repensando la transición 135, 200
 rol en la renovación socialista 87
Centro de Estudios Socioeconómicos (CESO) 54
Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISEC) xxiii, 57, 59
Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC) 72
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) xxiii, 55, 56, 64, 118, 132, 146
Centro de Planeamiento (CEPLA) 25
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 55
Centro Latinoamericano de Economía y Política Internacional (CLEPI) xxiii, 146
Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina (DESAL) 23
Centro para las Relaciones Interamericanas (CIAR) 70, 92
Centro político 89, 95
Centros de pensamiento 69
Centros privados de investigación xvi
 crecimiento después del golpe 55, 76
 impacto de 79, 95, 128
Chaparro, Patricio 40
Chicago Boys 27, 48, 51, 93, 147, 148, 150, 157, 217
 orígenes 24
 papel después del golpe 50
 reformas económicas estructurales 93, 99, 147, 148
Chonchol, Jacques 27
Ciencias políticas
 disciplina de 24
 represión contra 54

- Ciencias sociales
 inicios en Chile 19, 26
 inversión en 13, 216, 218
 represión contra 53
 resurgimiento tras el golpe 55, 75
 trascendencia política de 215, 218
- Cientistas sociales
 en Chile después del golpe xvii, 10, 13
 en Comando del No 204
 extranjeros 25
 primeras generaciones 22
- CIS (CED-ILET-SUR) 184, 185, 187, 188, 189, 192, 194, 195, 197, 207, 208
- Comando del No 203, 204, 205, 208
- Comando Nacional de Trabajadores (CNT) 103
- Comisión Chilena de Derechos Humanos 64, 146
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 24, 26, 74
- Comité de Análisis Político 193, 194
- Comité de Izquierda por las Elecciones Libres 188
- Comité Operativo de Partidos para las Elecciones Libres (COPPEL) 188
- Comité por las Elecciones Libres 166, 188, 200
- Comité Técnico por el No 8, 188, 194, 203, 204
- Comité Técnico por las Elecciones Libres 187, 188, 192, 194, 203
- Comunidad Económica Europea 72, 180
- Comunitarismo 45
- Comunitarismo cristiano 45
- Concertación de Partidos por la Democracia 8
 como primera expresión política post-dictadura 160
 conformación de 173, 198
- Conejeros, Senén 168
- Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) 103
- Consejo de Estado 171
- Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) xxiii, 69
- Constable, Pamela 7, 169
 sobre polarización política 125
- Constitución de 1980 37, 52, 108, 122, 136, 140, 165, 210, 212
 características de xvi, 8, 9, 49, 52, 97, 99, 102, 203, 212
 implantación de 164, 169, 171, 172
 la oposición decide aceptarla 166, 176
 rechazo opositor de 106, 109, 139, 143, 165, 200
- Consultoría política 184, 185, 186, 187, 197, 202, 206
- Contexto autoritario 181, 214, 215, 216, 218
- Convergencia Socialista 85, 86, 87, 119
- Corbalán, Salomón 43
- Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) xxiii, 64, 120, 149
 como convocante de la oposición 92
 conformación de 65
 crítica política 81, 219, 221
 en Comité Técnico por las Elecciones Libres 192
 influencia sobre el centro político 93, 94
 propuestas de política económica 122, 150, 154, 161
 relaciones con la derecha política 123
 repensando la transición 135
 y diálogos ciudadanos 121
- Corporación de Promoción Universitaria (CPU) xxiii, 56
- Correa, Enrique 1, 80, 163
 sobre Comité Técnico por el No 204
 sobre la intelectualidad democratacristiana 90
 sobre la renovación socialista 86
 sobre modernización de la política 166, 206
- Correa, Germán 1, 63, 194
 en movimiento por las elecciones libres 166
- Cortázar, René 1, 58, 115, 121, 152
- Coser, Lewis xvi, 1, 9, 214, 222
- Cotler, Julio 6
- Crisis de la banca xv, 98
- Cruce de fronteras intelectuales 173, 220, 221, 224

- Cultura política 4, 6, 35, 209, 214, 215, 218, 224
- Cumplido, Francisco 1, 58, 123
- Dahl, Robert 4, 136
- De la Maza, Gonzalo 104
- Delich, Francisco 4
- Demanda de Chile 110, 139
- Democracia
- Véase también* Izquierda política
- continuidad de valores democráticos 182
- quiebre de, en Chile 15, 46
- visión instrumental de 44, 85
- y derechos humanos 84
- Derechos humanos 47
- repercusiones sobre el pensamiento político de la izquierda 84
- D'Etigny, Enrique 61
- Diagnos 178
- Diamond, Larry 3, 4, 6, 36
- Dietz, Henry 6
- Doctrina de la seguridad nacional 57
- Downey, Ramón 56
- Drake, Paul W. 7, 43, 77, 115
- Ebert
- Véase* Fundación Friedrich Ebert
- Economía
- disciplina de 24, 25
- represión contra 54
- El Mercurio 47, 147, 191
- crítica la política económica 103
- dimensión intelectual de 33
- Encuestas de opinión pública 178
- efectos en el Comité Técnico por las Elecciones Libres 189
- efectos sobre las dirigencias políticas 195, 200, 202
- orígenes 177, 181
- por el Grupo Sawyer/Miller 187
- Entrevistas colectivas focalizadas 174, 177, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 196, 197, 198, 201, 206, 208, 209
- Véase también* Encuestas de opinión pública
- Escobar, Luis 24
- Escuela de Estudios Económicos Latinoamericanos para Graduados (ESCOLATINA) 24
- Escuela Latinoamericana de Sociología (ELAS) 22
- Estévez, Jaime 87, 155
- Estrategia de movilización social 2, 105, 112
- Véase también* Polarización política
- actitudes públicas hacia 182
- crítica de 138, 144
- Europa Oriental, transición democrática en 4, 5
- Exilio, intelectuales en 100, 101, 148, 155, 217
- Eximbank 16
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) xxii, 1
- como convocante 92, 117, 118, 119, 120
- como productora de políticas públicas 146, 160
- conformación de 22, 26
- papel después del golpe 55
- relaciones con la derecha política 123
- rol en la renovación socialista 87
- sobre estudios de opinión política 177, 181, 184
- Falcoff, Mark 16, 40
- Faletto, Enzo 57, 88
- Farrell, Joseph 17
- Faúndez, Julio 43
- Fernández, Mariano 90, 91, 92, 186, 187, 198
- Fernández, Sergio 129
- Ffrench-Davis, Ricardo
- sobre CIEPLAN y la política económica 154
- sobre círculo de estudios económicos 149
- sobre contexto autoritario 215
- sobre la importancia de los técnicos económicos 147
- sobre talleres del CED 159
- Figueroa, Carlos 204
- Fleet, Michael 33

- Flisfisch, Ángel xxi, 80, 86, 97, 119, 123, 129, 173
como intelectual 206
en Comité Técnico por las Elecciones Libres 189
en el CED 126, 129, 136
en política 11, 87, 221
sobre encuestas de opinión política 181, 182, 183
sobre estrategia de movilización social 142, 143
sobre mundos paralelos 102
- Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 26
- Fondo Nacional para la Democracia 181
- Fondo para una Sociedad Abierta 187
- Fontaine Aldunate, Arturo 51, 103
- Fontaine Talavera, Arturo 123, 182, 208
- Formas democráticas
Véase también Democracia
- Foxley, Alejandro xxi, 1, 36, 41, 58, 65, 67, 80, 93, 94, 116, 160
activismo político 151
como político 173
evolución de su postura en materia económica 153
sobre estrategia de movilización social 138
sobre ideologización 40, 93, 215
sobre incidencia de la intelectualidad en la clase política 131, 145
sobre incidencia de técnicas políticas modernas 174, 196, 201
sobre los intelectuales y la política 30, 32, 35
sobre pensamiento político y política social 94, 150, 152
sobre ventajas comparativas de los centros de investigación 116
- Frei Montalva, Eduardo 16, 27, 37, 38, 45, 57, 90, 91, 92, 106, 114, 158, 175
demanda por científicos sociales en su gobierno 26, 35
giro hacia la conformación de alianzas 90
- Frei Ruiz-Tagle, Eduardo 194
- Frenkel, Roberto 6
- Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) 107, 111
- Fresno Larraín, Cardenal Juan Francisco 62, 139
- Friedman, Milton 123, 157
- Friedmann, John 3
- Frühling, Hugo 58
- Fuenzalida, Edmundo xxi, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
- Fuerzas armadas chilenas xv, xvi, xvii, 2, 8, 47, 50, 52, 56, 57, 84, 89, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 127, 139, 141, 166, 170
- Fundación Ford, financiamiento de Academia de Humanismo Cristiano 63, 72
centros privados de investigación 66, 121
encuestas de actitud política 179, 181
la sociología 23
programas de economía 25
programas universitarios 18, 72
- Fundación Friedrich Ebert 72
- Fundación Friedrich Naumann 72
- Fundación Interamericana 72
- Fundación Konrad Adenauer 57, 72, 74
- Fundación Rockefeller, financiamiento de programas de economía 25
programas universitarios 20, 21, 23, 25
- Fundación Tinker 72
- Gallup de Chile 178
- Garcés, Mario 104, 107
- García, Álvaro 88
- García, Eduardo 147
- Garretón, Manuel Antonio xxi, 41, 63, 80, 86, 89, 119
como intelectual 206
en Comité Técnico por las Elecciones Libres 189
en Grupo de los 24 59, 91
sobre Boeninger 124
sobre el impacto de seminarios y talleres 130
sobre el régimen de Pinochet 54, 132
sobre estrategia de la oposición 77, 78, 102, 111, 165, 167

- sobre estrategia de movilización social 105, 142, 143
sobre la política 173
sobre la renovación socialista 84, 87
sobre los demócratacristianos 89
sobre polarización partidista 40
- Garrett, Roger M. 18
- Garton Ash, Timothy 5
- Gazmuri, Jaime 194
influencia de la intelectualidad en la oposición 145, 176
sobre elecciones libres 166, 170
- Gerth, Hans 9
- Gobierno de la Unidad Popular 11, 18, 26, 36, 46, 48, 67, 89, 102, 148
colapso de 78, 84, 102, 155, 169
elude la negociación legislativa 38
- Gobierno de Pinochet 8
características 2, 48, 52
cronograma de transición 8, 164, 168
resistencia al cambio 104, 105, 109, 112
respuesta ante la crisis de la banca de 1983 109
transformaciones sociales y políticas 97, 99
- Gobierno español 181
- Gobierno italiano 180
- Godoy, Óscar xxi, 48, 167, 208
sobre el régimen militar 48
- Godoy Urzúa, Hernán 22
- Gómez Millas, Juan 19, 20, 22
- Góngora, Mario 39
- González, Eugenio 42
- González Márquez, Carlos 194
- Goodwin, Lawrence 5
- Gouldner, Alvin W. 9, 10
- Gramsci, Antonio 9, 100
- Grunwald, Joseph 24
- Grupo de Estudios Agrorregionales (GEA) xxiii, 64, 132, 146
- Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) xxiii, 64, 80, 118, 132, 146
- Grupo de los 24 58, 59, 65, 91, 93, 94
- Grupo Sawyer/Miller 169, 185, 186, 187, 188, 191, 195, 197, 207
- Gunther, Richard 3, 4, 6, 218
- Guzmán, Jaime 50, 129
- Hales, Patricio 129
- Hamuy, Eduardo 22, 178, 180
estudios de actitud política 178, 180
introduce la sociología científica en Chile 22
- Haraszti, Miklós 5
- Hartlyn, Jonathan 6
- Hasbún, Pbro. Raúl 61
- Havel, Václav 4, 211
- Hayek, Friedrich A. 52, 123
- Heintz, Peter 22
- Hellman, Ronald G. 24, 25
- Hertz, Carmen 98
- Higley, John 3, 4, 6, 218
- Hirschberg, Eric 85
- Hirschman, Albert xxi, 15, 41, 173
- Hirsch, Tomás
en Comando del No 203
- Hudson, M. C. 17
- Huepe, Claudio 141, 194
- Huneeus, Carlos xxi
en Comité Técnico por las Elecciones Libres 189
sobre el régimen de Pinochet 48
sobre estudios de actitud política 40, 179, 180
sobre la política 173
sobre precariedad del PDC 114
sobre protestas de 1983 107, 180
- Huntington, Samuel P. 3, 123
- Ideología
cede el paso a la democracia 94
y la intelectualidad chilena 27, 30, 35, 73
y la política chilena 214
- Iglesia Católica chilena xviii, 23, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 69, 80, 115, 117
- Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH) xxiii, 40, 47, 56, 57, 59, 94, 108
seminario de 1984 108
- Instituto de Ciencias Políticas, Universidad Católica 23
repensando la transición 135, 142

- Instituto de Estudios Políticos (IDEP) xxiii, 56
- Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad de Chile
conformación de 22
- Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES) xxii, xxiii, 56, 132, 146
- Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET) xxiii, 64, 132, 174, 185, 187
como integrante del CIS 186
proyección hacia el medio 92
- Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) 26
- Instituto para el Nuevo Chile 82, 87, 100
- Insulza, José Miguel 87
- Intelectuales
Véase también Intelectuales políticos
características de, en Chile 36
como facilitadores de acuerdos 161
definición de 13
en Campaña del No 210
en el gobierno democrático 1, 3
en la transición chilena xvi, 9, 225
en otras transiciones democráticas xvi, 3, 7
reconstrucción de relaciones con el mundo político 131, 219, 224
ventajas comparativas de 83, 221
y el pensamiento opositor 95
y la centroderecha 122, 208
y la clase política 176, 183, 198, 224
y la estrategia de transición 203
y la política xvi, 9, 36, 173, 221
y la política económica 159
y su situación después del golpe 54, 59, 73
- Intelectualización de la política 83, 95, 96, 174, 218, 220
- Intelectual político, el 79, 113, 115, 120, 155, 160, 204
- Internación de armas 2, 98, 111, 142, 163
- Investigación científica 18, 19, 20, 21, 73, 224
- Izquierda Cristiana (IC) 58
- Izquierda política
acercamiento con Democracia Cristiana 63
ambigüedad sobre la democracia 41, 83, 85
democratización de 83
- Jaksić, Iván 7, 33, 77, 115
- Jarpa, Sergio Onofre 109
- Jordán, Ricardo 63
- Karl, Terry Lynn xxi, 3
- Kennedy, Edward 186
- Konrád, György 4, 5
- Laba, Roman 5
- Lagos, Marta
sobre continuidad de valores democráticos 182
sobre influencia en la clase política 179
- Lagos, Ricardo 1, 80, 81, 86, 87, 116, 200, 202, 203, 209
efecto de las encuestas de opinión política 201
el análisis económico como pretexto para el debate político 81
en Comando del No 205
en Comité de Análisis Político 194
en movimiento por las elecciones libres 167, 188
funda Partido por la Democracia (PPD) 172, 173
sobre estrategia de movilización social 141
sobre la intelectualidad y la modernización de la política 174
sobre política económica 155, 156, 157
sobre restricciones a la libertad de expresión 115
- La Mounier, Bolívar 6
- Landi, Óscar 6
- Larraín, Felipe 62, 159
- La Segunda 142
- Lechner, Norbert xxi, 119
sobre condiciones de la ciencia política en Chile 24

- sobre el efecto del golpe 74
sobre la renovación socialista 88
sobre la revolución 29
sobre las ciencias sociales y la política 31, 68, 69, 74
- Léniz, Fernando
en Alianza Democrática 106
en taller de economía del CED 158
- Levy, Daniel C. xxi, 18, 61
- Linz, Juan 3, 4, 6, 36, 40, 179
- Lipset, Seymour Martin 3, 4, 6, 9, 10, 36
- Livingston, Duncan 61, 62, 63
- Lladser, María Teresa xxi, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 78
- Loveman, Brian 51, 52, 70, 113
- Lowenthal, Abraham F. xxi, 16
- Loyola, Eduardo
en Comité de Análisis Político 194
- Maira, Luis 87, 194
en Comando del No 203, 205
- Malloy, James M. 6, 103
- Marfán, Manuel
sobre intelectuales de izquierda y política económica 151, 152, 156
- Maritain, Jacques 92
- Martínez, Javier xxi, 34, 35, 67, 186, 195
en Campaña del No 209
en Comité de Análisis Político 195
sobre divisiones en la oposición 102
sobre estrategia de movilización social 107, 110, 133, 134, 139, 140
sobre la Democracia Cristiana 44
sobre la política 173
sobre la renovación socialista 87, 88
sobre los intelectuales y la política 34, 199
- Martins, Luciano 6
- Martner, Gonzalo 88, 147
- Marxismo-leninismo 7, 29, 43, 44, 45, 89
- Matthei, Fernando 170
- McClintock, Cynthia 6
- McPherson, Michael S. 41, 45
- Medina Echavarría, José 22
- Meller, Patricio xxi, 123, 158
- Méndez, Roberto 208
- Merton, Robert K. 10
- Michels, Robert 10
- Michnik, Adam 4
- Mills, C. Wright 9
- Mitterrand, gobierno de 72
- Modernización de la política 173, 174
- Molina, Sergio 130
en Acuerdo Nacional 141
en Alianza Democrática 106
en Proyecto Alternativo 152
en taller de economía del CED 158
sobre impacto de seminarios y talleres 130
sobre incidencia de los intelectuales 176, 200
sobre movimiento por las elecciones libres 167
- Monckeberg, Fernando 61
- Montecinos, Verónica 12, 147
- Moulián, Tomás 37, 57, 63, 67, 119
sobre ambigüedad de la izquierda
sobre la democracia 41, 42
sobre la democracia chilena 32
sobre la intelectualidad 7, 29, 30, 95
sobre la renovación socialista 84, 87
sobre radicalización de las élites políticas 39
- Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) 53, 58, 63, 67, 68, 80, 82, 185
- Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 1, 43, 88, 106, 156
- Movimiento Democrático Popular (MDP) 106, 112, 166
estrategia de movilización social de 140, 143
- Movimiento por las elecciones libres 10, 167, 188, 189, 198
- Muñoz, Heraldó 82
impacto de seminarios y talleres 130
incidencia de la intelectualidad en la izquierda 86, 87, 88
sobre asistencia estadounidense a Chile 16
sobre la renovación socialista 83
- Muñoz, Óscar xxi, 93, 152
sobre desarrollo de propuestas de políticas públicas 151

- sobre el análisis económico como debate político 81
- sobre evolución de la postura económica 153
- sobre programa de diálogos ciudadanos 122
- Mutchler, David 23
- Naciones Unidas
- financiamiento de programas universitarios 21
- National Democratic Institute for International Affairs 169
- Naumann
- Véase* Fundación Friedrich Naumann
- Navarrete, Ricardo 194
- Novack, Michael 123
- Núñez, Ricardo 80, 86
- sobre centros académicos y transición a la democracia 96, 160, 177
- sobre estrategia de movilización social 143
- sobre fortaleza comparativa de los centros académicos 80, 117
- sobre precariedad de los partidos de oposición 114
- sobre respuesta a las protestas de 1983 107
- O'Donnell, Guillermo xxi, 3, 4, 6, 41, 45, 51, 98, 104, 136, 137
- Ominami, Carlos 1, 88, 150, 156, 158, 173
- como político 155
- sobre cieplan 150
- sobre los intelectuales y los políticos 154
- sobre pensamiento económico de la izquierda 155, 157
- sobre talleres del CED 159
- Organización de Estados Americanos (OEA) 23, 25, 87
- Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 22, 23, 26
- Orrego, Claudio 56, 57, 63, 91
- Orrego, Francisco 57
- Ortega, Eugenio 194
- Pactos de élites 3
- Palma, Eduardo 63
- Papi, Mario
- efectos de las encuestas de opinión en la dirigencia política 200
- en Comité de Análisis Político 194
- sobre la clase política 144
- sobre la revolución 29
- sobre talleres del CED 137
- Partido Comunista (PC) 40, 53, 111, 115, 127, 129
- estrategia insurreccional de 113, 165
- forma el mdp 106
- influencia de la intelectualidad en 33
- proscrito 77
- vía pacífica 42
- Partido Demócrata Cristiano (PDC)
- acercamiento con la izquierda 63, 106, 129, 168
- conflicto con la izquierda 102
- debate sobre estrategia de transición 192
- en Grupo de los 24 58
- estrategia del partido único 38, 44, 45, 123
- evolución del pensamiento político de 78, 89, 92
- influencia de la intelectualidad en 33, 199
- precariedad de 114
- represión contra 53, 77
- respuesta ante las protestas de 1983 105
- Partido por la Democracia (PPD) 80, 88, 168, 185, 192, 203
- conformación de 172
- Partido Socialdemócrata chileno 28, 137
- Partido Socialista (PS) 11, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 63, 66, 80, 85, 87, 88, 106, 114, 116, 152, 156, 185, 194
- Véase también* Izquierda política
- acercamiento con Democracia Cristiana 106, 125, 129
- debate sobre estrategia de transición 192
- influencia de la intelectualidad en 33, 83, 86, 120

- prácticamente diezmado 53
 precariedad de 115
 sobre política económica 154, 157
 visión instrumental de la democracia 42
- Partidos políticos 194
 desacuerdos sobre estrategia 112, 168, 209
 falta de reglamentación de 38
 precariedad de 114, 165, 175, 201, 212
 proscritos 49, 50, 53, 77
 resurgimiento de 98
- Pastor, Robert A. 6
- Pinochet, Augusto xv, 2, 36, 97
 apoyo popular 182, 195
 propone plebiscito 171
 rechaza el Acuerdo Nacional 139
 se inscribe en Registro Electoral 169
- Pinto, Aníbal 88
- Pinto-Duschinsky, Michael 72
- Piñera, José 52
- Plebiscito de 1980 8, 139, 169, 196
- Plebiscito de 1988 3, 59, 95, 212
 oposición acuerdo participar 177, 192, 198, 203
 orígenes 171
- Poblete, Renato 63
- Polarización de la política chilena 29, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 92, 214
- Política económica
 del gobierno de Allende 155
 después del golpe 51, 52
 rol de CIEPLAN en 121, 150
 rol del CED en 158, 159
 rol de los socialistas en 154
 trascendencia para el centro político 92, 149
- Pollack, Benny 12
- Portales, Carlos 88
 sobre asistencia estadounidense a Chile 16
- Portales, Diego 186
- Posgrados en el extranjero 13, 25, 53, 66, 83, 155
 economistas de izquierda con 156
 trascendencia de 217
- Programa de Economía del Trabajo (PET) xxiii, 64, 67, 80, 118, 132, 146, 155, 156
- Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) 26, 66
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 66
- Programa de Seguimiento de las Políticas Exteriores Latinoamericanas (PROSPEL) xxiii, 64, 82
- Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) xxiii, 18, 64, 72, 80, 118, 132, 146
- Protestas del año 1983 131, 178, 219
- Prothro, James 40
- Przeworski, Adam 3, 32
- Puccio, Osvaldo 95, 220
- Radio Cooperativa 47, 104, 141, 178
- Ramos, Joseph xxi, 103, 154
- Régimen militar
Véase también Gobierno de Pinochet
 características de, en América Latina xvi, xvii
 características de, en Chile 48, 52, 169
- Relaciones cívico-militares
 proyecto del CED sobre 127
- Renovación socialista 85, 87, 88, 105, 185
- Retamal, Rafael 104
- Revista Análisis 51
- Revista APSI 108, 141, 143, 168
- Revista Cauce 141
- Revista Chile-América 87, 101
- Revista Mensaje 50, 190
- Revolución cubana 29, 42
- Riesco, Germán
 en Comité de Análisis Político 194
- Rodríguez, Aniceto 45
- Rosende, Hugo 172
- Rustow, Dankwart A. 3
- Sáenz, José Tomás 194, 203
 en Comando del No 203
- Salazar, Manuel 52, 99, 104, 116, 139, 171

- Sánchez, Néstor 111
Sanfuentes, Andrés 58, 108
Sanhueza, Manuel 57
Santibáñez, Abraham 172
Schieffelbein, Ernesto 17
Schmitter, Philippe C. 3, 4, 6, 51, 98, 104, 136, 137
Scully, Timothy R. 33, 37, 39, 44, 90
Seguel, Rodolfo 103, 104
Seligson, Mitchell A. 6, 103
Sepúlveda, Óscar 52, 99, 104, 116, 139, 171
Serrano, Sol 7
Servicio Electoral 169, 172
Shils, Edward 9
Siete modernizaciones del régimen, las 51
Sigmund, Paul E. 16, 38
Silva Cimma, Enrique 203
 en Comité de Análisis Político 194
Silva Henríquez, Cardenal Raúl 61, 62, 64
Silva, Julio 87
Silva, Patricio 27
 sobre la intelectualidad 30
 sobre los tecnócratas 12, 48, 93, 147
Silvert, Kalman 91
Sistema educativo chileno 15, 16
Smith, Brian H. 50
Smith, James A. 10
Socialdemocracia 41, 43, 83, 88, 101, 119, 217, 222
Sociología
 disciplina de 22, 23
 represión contra 54
Sociología científica 22, 178
Solari, Ricardo 80, 134, 204
Soros, George 187
Stange, Rodolfo 170
Stepan, Alfred xxi, 40, 113, 136
Sunkel, Guillermo
 sobre el intelectual político 183, 193
 sobre encuestas de opinión pública 177, 178, 182
Sutton, Francis X. 21
Szelényi, Ivan 5
Taller de Cooperación al Desarrollo 63, 71
Taylor, C. L. 17
Tecnócratas 11, 12, 27, 30, 48, 51, 81, 89, 147, 156, 193, 205, 221, 224
Tironi, Ernesto 124, 186
Tironi, Eugenio xxi, 34, 86, 87, 123, 133, 163, 186, 190, 194, 206, 207
 como intelectual 206
 en Campaña del No 209
 en Comité de Análisis Político 194
 en Comité Técnico por las Elecciones Libres 189
 en Grupo de los 24 59, 91
 sobre el CIS 185
 sobre el miedo 190, 207
 sobre la Democracia Cristiana 44
 sobre la movilización social 133, 134, 143
 sobre la política 173
 sobre los intelectuales y los políticos 33, 116, 200, 202
 sobre modernización de la política 174
Touraine, Alain 91
Transición democrática 68, 102, 113, 118, 119, 127, 136, 142, 145, 151, 164, 179, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 224, 225
Transiciones a la democracia 5, 6
 en Chile xv, xvii
 literatura sobre 3, 4, 213
 repensando las 135, 137, 164, 173, 176
Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) 172
Tribunal Constitucional 171, 172
Troncoso, Raúl 90, 194
Tulchin, Joseph S. 8
Universidad de Chicago
 relación de Departamento de Economía con Universidad Católica 24
Universidades chilenas 78
Universidades extranjeras 70
Vacío político 53, 96, 213

- Valdés, Juan Gabriel 41, 87, 143, 186, 197
 en Comité Técnico por las Elecciones Libres 189, 197, 209
 sobre autismo partidista 40
 sobre conformación del CIS 186, 187
 sobre consultoras políticas 185
 sobre Escuela de Economía de Chicago 24, 51
 sobre estrategia de movilización social 144
 sobre la política 173
- Valdés Subercaseaux, Gabriel 82, 105, 115, 123, 185, 186, 195
 en Comité de Análisis Político 194
 en movimiento por las elecciones libres 166, 167
 funda el CED 66, 91
 sobre el Comité de Análisis Político 194, 202
 sobre el impacto de las encuestas de opinión política 201
 sobre estrategia de movilización social 108, 111, 140
- Valenzuela, Arturo 7
 sobre democracia chilena 36
 sobre fracaso del Gobierno de la Unidad Popular 46
 sobre polarización política 40, 125, 169
- Valenzuela, J. A. 132
- Valenzuela, J. Samuel 42
- Varas, Augusto 8
- Vega, Humberto 63, 67, 155, 157
- Vekemans Van Cauwelaert, Roger 23
- Verdugo, Patricia 98
- Vergara, Carlos 176, 186, 189, 193, 194
 en Comité Técnico por las Elecciones Libres 173
 en el CIS 195, 196
 sobre Comité Técnico por el No 205, 209
 sobre precariedad de los partidos políticos 175
- Vergara, Pilar 48, 49, 51, 132
- Vial, Gonzalo 37, 39, 45
- Vía pacífica 42
- Vicaría de la Solidaridad 50, 65, 146
- Viera-Gallo, José Antonio 1, 28, 87, 101
 en Revista Chile-América 87
 sobre los fines y los medios 31
 sobre refundación de la sociedad 28
- Vodanovic, Hernán
 en Comité Técnico por el No 204, 206
 sobre aporte del CED 129
 sobre movimiento por las elecciones libres 167
- Waisman, Carlos 6
- Walker, Ignacio xxi, 106
 como intelectual 206
 en Comité Técnico por las Elecciones Libres 189
 sobre estrategia de movilización social 104, 106, 111, 112
 sobre impacto de la Democracia Cristiana en la izquierda 45
 sobre izquierda y democracia 32, 41, 43, 78, 83, 84, 94
 sobre la renovación socialista 88
- Weber, Max 9, 10
- Weinstein, Eugenia 208
- Whitehead, Laurence 3, 6, 51, 71
- Yrarrázaval, Juan 126
- Zabala, José 106
- Zahler, Roberto 58
- Zaldívar, Adolfo 199
- Zaldívar, Andrés 91, 194
 en Comando del No 203
- Zañartu, Mario 56, 57

